

Euskal Herria y el socialismo

Eloy Val del Olmo

Fundación Federico Engels
Madrid

Euskal Herria y el socialismo. La cuestión nacional y el marxismo
COLECCIÓN CRÍTICA MARXISTA

Primera edición: noviembre de 2005

© 2005, Fundación Federico Engels

ISBN: 84-96276-10-4
Depósito Legal: M-
Impreso en España - Printed in Spain

Publicado y distribuido por la Fundación Federico Engels
C/ Hermanos del Moral 33, bajo
28019 Madrid
Teléfono: 914 283 870 • Fax: 914 283 871
E-mail: fundacion_federico@engels.org • Web: www.engels.org

Si desea ponerse en contacto con los autores para cualquier comentario o sugerencia, hágalo por medio de la Fundación Federico Engels.

ÍNDICE

EUSKAL HERRIA Y EL SOCIALISMO

Eloy Val del Olmo

Prólogo	109
El carácter de la época	111
Crisis del capitalismo y cuestión nacional	113
I. El origen de la cuestión nacional en el Estado español	
Un conglomerado de repúblicas mal regidas	117
El surgimiento del nacionalismo gallego	120
La burguesía catalana	122
El nacionalismo vasco	125
El carácter reaccionario de la burguesía nacionalista	130
II. Los años treinta	
La cuestión nacional en la Segunda República	131
La reacción, el Bienio Negro y los nacionalistas burgueses	134
La burguesía vasca durante la Guerra Civil	140
El papel de la burguesía catalana	152
Las organizaciones obreras y la cuestión nacional	153
III. La dictadura y el surgimiento de ETA	
La dictadura de Franco	159
El surgimiento de ETA	162
ETA define sus principios políticos	166
El reflejo de la lucha de clases en ETA	173
La represión aumenta el apoyo a ETA	179
La intervención de ETA en los conflictos obreros	181
ETApm: de Robin Hood de los obreros a la desaparición	187
IV. La Transición	
El papel de la cuestión nacional en la caída de la dictadura	191
Los últimos fusilamientos de Franco	193
Recrudescimiento de la lucha	195
El resurgir de la cuestión nacional	197

Euskal Herria, la opción independentista cobra fuerza	201
La Constitución y los estatutos de autonomía	204
La 'Alternativa KAS'	208
Crece la espiral acción-represión-acción	212
El cierre de la central nuclear de Lemóniz	214
El golpe de Estado del 23-F	218
El 23-F en Euskal Herria	224
V. El reformismo y la cuestión nacional	
El triunfo del PSOE: una oportunidad frustrada	229
Los gobiernos de Felipe González y la cuestión nacional vasca ...	230
La huelga general del 14-D	235
Las conversaciones de Argel	237
Los efectos de la desintegración del Este europeo	242
La crisis azota Euskal Herria	244
Más polarización	246
Los GAL, una trama de terrorismo de Estado	248
VI. La política reaccionaria del Partido Popular	
La derecha llega al gobierno	251
ETA vuelve a escena, la represión aumenta	252
La declaración de la tregua y el Pacto de Lizarra-Garazi	256
La experiencia de Irlanda	258
El programa de la izquierda abertzale	260
Efectos políticos de la tregua	262
La ruptura de la tregua	265
El PP logra la mayoría absoluta	266
La izquierda abertzale trata de tomar la iniciativa	268
Las elecciones autonómicas de 2001	272
VII. El papel de la clase obrera	
La clase obrera vuelve a entrar en escena	275
El PP acentúa su política represiva	276
Los atentados del 11-S en EE.UU.	278
La crisis de la izquierda	280
La Ley de Partidos	283
Hacia la huelga general	285
Ilegalización de Batasuna	286
El 'Plan Ibarretxe'	288
Una campaña para criminalizar todo lo vasco	289
La lucha de masas se extiende	291
El gobierno acusa el desgaste	295
Los efectos electorales de la ilegalización	296

VIII. La ruptura PP-PNV

El Plan Ibarretxe: ni soberanista ni independentista	299
La iniciativa de Bergara y la táctica de la izquierda abertzale	302
¿Hasta dónde pueden llegar las tensiones entre el Estado y el PNV?	303
La derecha promueve la polarización en torno a la cuestión nacional	305
La movilización de las masas derrota al PP	307
'Zapatero, no nos falles'	309
Por una política de independencia de clase	311
Autonómicas de 2005: los planes del PNV saltan en pedazos	314
Cambios en la Constitución y los estatutos de autonomía	318
IX. Preparando la negociación	321
Epílogo	325
Apéndice	
EL DERECHO DE LAS NACIONES A LA AUTODETERMINACIÓN	
<i>V. I. Lenin</i>	
I. ¿Qué es la autodeterminación de las naciones?	331
II. Planteamiento histórico concreto de la cuestión	335
III. Las peculiaridades concretas del problema nacional en Rusia y la transformación democrática burguesa de ésta	338
IV. El 'practicismo' en el problema nacional	341
V. La burguesía liberal y los oportunistas socialistas en el problema nacional	345
VI. La separación de Noruega de Suecia	353
VII. El Acuerdo del Congreso Internacional de Londres celebrado en 1896	358
VIII. Carlos Marx, el utopista, y Rosa Luxemburgo, la práctica	361
IX. El programa de 1903 y sus liquidadores	367
X. Conclusión	373
Índice onomástico	377

1. Trotsky, L., *Entre el imperialismo y la revolución*, Barcelona, Ed. R. Torres, 1976, pág. 131.

2. Trotsky, L., *Historia de la Revolución Rusa*, París, Ruedo Ibérico Ed., 1972, III tomo, pág. 157.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

AAA: Alianza Anticomunista Argentina, Triple A.	EH: Euskal Herritarrok
AEK: Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización	EHAK-PCTV: Euskal Herrialdeetako Albedi Komunista-Partido Komunista de las Tierras Vascas
AG: Aukera Guztiak	ELA-STV: Eusko Langile Alkartasuna. Solidaridad de Trabajadores Vascos
ANV: Acción Nacionalista Vasca	EM: Ezker Marxista
AP: Alianza Popular	EMK-MCE: Euskadiko Mugimendi Komunista-Movimiento Comunista de Euskadi
ATE: Antiterrorismo ETA	EPK: Partido Comunista de Euskadi
AuB: Autodeterminaziorako Bilgunea	ERC: Esquerra Republicana de Catalunya
AVT: Asociación de Víctimas del Terrorismo	ES: Eusko Sozialistak
BM: Banco Mundial	ESB: Euskal Sozialista Biltzarrea o Convergencia Socialista Vasca
BNG: Bloque Nacionalista Galego	ESEI: Euskal Sozialistak Elkartzeko Indarra
BVE: Batallón Vasco Español	ETA: Euskadi Ta Askatasuna
CAV: Comunidad Autónoma Vasca	ETT: Empresa de Trabajo Temporal
CC.AA.: Comunidades Autónomas	EuiA: Esquerra Unida i Alternativa
CC: Coalición Canaria	FAI: Federación Anarquista Ibérica
CC.OO.: Comisiones Obreras	FMI: Fondo Monetario Internacional
CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas	FRAP: Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico
CEOE: Confederación Española de Organizaciones Empresariales	GAL: Grupos Antiterroristas de Liberación
CES: Confederación Europea de Sindicatos	GRAPO: Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre
CIA: Agencia Central de Inteligencia estadounidense	HASI: Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea
CIG: Confederación Intersindical Galega	HB: Herri Batasuna
CiU: Convergència i Unió	HZ: Herritarren Zerrenda
CNT: Confederación Nacional del Trabajo	IA: Ikasle Abertzaleak
EA: Eusko Alkartasuna	ICV: Iniciativa per Catalunya
EB: Ezker Batua	IRA: Ejército Republicano Irlandés
EE: Euskadiko Ezkerra	
EE.UU.: Estados Unidos	

IU: Izquierda Unida
JJ.CC.: Juventudes Comunistas
JJ.SS.: Juventudes Socialistas
LAB: Langile Abertzalen Batzordeak
LAIA: Langile Abertzale Iraultzaileen Alder-
dia
LCR: Liga Comunista Revolucionaria
LKI: Liga Komunista Iraultzailea. Sección
vasca de la LCR
MLNV: Movimiento de Liberación Nacional
Vasco
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OTAN: Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte
PA: Partido Andalucista
PCE: Partido Comunista de España
PEJ: Plan de Empleo Juvenil.
PIB: Producto Interior Bruto
PNV: Partido Nacionalista Vasco
PP: Partido Popular
PSC: Partido Socialista de Cataluña
PSE-EE: Partido Socialista de Euskadi-Eus-
kadiko Ezkerra
PSOE: Partido Socialista Obrero Español
PTE: Partido del Trabajo de España
SA: Sozialista Abertzaleak
SE: Sindicato de Estudiantes
SU: Sindicato Unitario
SUGC: Sindicato Unificado de la Guardia
Civil
SUP: Sindicato Unificado de Policía
UCD: Unión de Centro Democrático
UE: Unión Europea
UGT: Unión General de Trabajadores
UMD: Unión Militar Democrática
UPN: Unión del Pueblo Navarro
URSS: Unión de las Repúblicas Socialistas
Soviéticas

PRÓLOGO

*¡Ningún privilegio para ninguna nación!,
¡ningún privilegio para ninguna lengua!,
¡ninguna opresión, ninguna injusticia
hacia la minoría nacional!
He aquí el principio de la democracia obrera.*
Lenin

La cuestión nacional representa un problema endémico para la burguesía española, que ha sido y es incapaz de satisfacer el ansia de libertad de importantes sectores de la intelectualidad, las capas medias, la clase trabajadora y la juventud de las nacionalidades históricas que componen el Estado español.

La clase dominante española, a través de los medios de comunicación, ha dado a conocer a la opinión pública en otros lugares del mundo una imagen distorsionada de la lucha del pueblo vasco por su liberación, reduciéndola a un movimiento donde los únicos protagonistas son las bombas y atentados. Por el contrario siempre han ocultado la acción de la clase obrera y la juventud, que fue y sigue siendo la principal fuerza motriz en la lucha por la defensa de los derechos democráticos.

Como Euskal Herria, están Galicia y Catalunya. La burguesía, la derecha política y algunos sectores de la izquierda rechazan la existencia de naciones dentro del Estado español y descalifican la defensa del derecho de autodeterminación para las mismas. Pero la cuestión nacional en el Estado español ha tenido un desarrollo histórico hasta nuestros días, expresándose de mil maneras en la vida cotidiana y en la lucha de un sector importante de la clase trabajadora y la juventud, que han demostrado estar dispuestos a defender, incluso con su vida, su derecho a existir como pueblo y como nación. En el caso concreto de Euskal Herria, centenares de militantes de ETA y de la izquierda abertzale llenan las cárceles de los Estados español y francés por luchar por la independencia. Se esté o no de acuerdo con ellos y

con los métodos que han empleado, esta lucha aún perdura y forma parte de una realidad compleja que es necesario reconocer para poderla transformar.

Este libro ve la luz en un momento que algunos han calificado de histórico. Con esta convicción, la izquierda abertzale hizo la propuesta de Anoeta, que contempla la formación de una mesa de negociación entre todos los partidos políticos vascos sin exclusiones y otra entre ETA y el Gobierno español para hablar exclusivamente de armas, presos y víctimas del conflicto. El gobierno del PSOE ha recogido el guante, trasladando al Parlamento español las condiciones para iniciar dichas conversaciones. Tal negociación, aunque cuenta con la oposición férrea de la derecha española, es considerada positiva por el 65% de la población del Estado. Salvo el PP, que insiste en profundizar la represión mediante detenciones e ilegalizaciones hasta acabar con ETA y su sustrato social, la gran mayoría opina que en estos momentos la política debe sustituir a las armas.

En el otro extremo, ETA ha expulsado de la organización a varios dirigentes históricos presos por reclamar el abandono de la lucha armada y su sustitución por la lucha política y de masas. Sin duda, la voz y el futuro de los presos políticos vascos serán fundamentales y se harán escuchar; y con medidas organizativas difícilmente se pueden resolver diferencias políticas. El proceso no ha hecho más que empezar y probablemente sea largo pero, en cualquier caso, el interés por comprender dónde estamos y adónde vamos es cada vez mayor. Muchas familias vascas que durante décadas lo han dado todo demandan claridad, al igual que muchos jóvenes que sienten la necesidad de respuestas claras: con quién vamos y en qué dirección.

También en el resto del Estado es necesario combatir con argumentos el veneno del chovinismo españolista, que ha sido introducido en grandes dosis durante los últimos veinte años entre la clase trabajadora no sólo por la derecha, sino también por sectores de la izquierda reformista que han claudicado ante el nacionalismo español.

Este libro trata de aportar un enfoque que prácticamente ha estado ausente del debate político: el enfoque de clase. Se trata de intentar cubrir la necesidad de analizar la cuestión nacional desde el punto de vista de la clase obrera, que para el marxismo es la protagonista del cambio social. Y aunque a veces la crítica sea dura, esperamos que estas reflexiones ayuden al menos a tener una visión de conjunto, con la intención de avanzar, lejos de la descalificación y del ánimo de dar lecciones a quienes con tremendos sacrificios hacen de la lucha por la libertad y el socialismo la causa de su existencia.

Este libro está escrito desde una perspectiva marxista. Ante todo, el marxismo es un método de análisis de la realidad y de sus desarrollos históricos. Dicho método —el materialismo dialéctico— estudia los procesos sociales en su devenir como producto de la lucha de clases. Por eso es necesario remontarnos desde los orígenes de la cuestión nacional a la actualidad y comprender el carácter de la época en que se libra esta lucha.

EL CARÁCTER DE LA ÉPOCA

Lenin dijo que la cuestión nacional es, en última instancia, una cuestión de pan. El desarrollo del capitalismo concentra la riqueza en unas pocas manos a costa del sufrimiento de la gran mayoría. En 2002, los activos de las siete personas más ricas del mundo valían más que el PIB de los 49 países menos desarrollados, en los que viven 650 millones de personas. Esta exuberante riqueza tiene otra cara. El Banco Mundial publicó en 2004 algunas cifras que revelan la miseria que sufre la mayoría de la población mundial: 2.800 millones de personas viven con menos de dos dólares diarios y 800 millones pasan hambre diariamente. Estas cifras demuestran claramente qué significa el capitalismo para la Humanidad.

Se ha calculado que proporcionar a la población mundial servicios básicos, acceso a agua potable y una educación decente costaría aproximadamente 80.000 millones de dólares anuales durante diez años, una gota de agua en el mar de riqueza de las 500 personas más adineradas del mundo.

El capitalismo ha convertido en un infierno las vidas de la mayoría de los seres humanos. Si consideramos a las personas que en los países “ricos” y “desarrollados” viven en la miseria, están desempleadas, cobran el salario mínimo, necesitan ayudas para sobrevivir, etc., está claro que el capitalismo no funciona para la aplastante mayoría de la población mundial. El actual sistema económico es muy bueno, pero solamente para los que están arriba. Nunca antes había existido un abismo tan grande entre ricos y pobres. El capitalismo hace ya mucho tiempo que perdió su carácter progresista y su capacidad de desarrollar las fuerzas productivas de una forma significativa.

La crisis del sistema también afecta a la clase obrera de los países avanzados. EE.UU. tiene cuarenta millones de pobres y niveles récord de endeudamiento y déficit. La muerte de miles de hombres y mujeres, de niños y ancianos pobres y en su mayoría afroamericanos de los Estados sureños tras el paso del huracán *Katrina*, ha puesto de manifiesto la fractura social del país y el sistema criminal de la libre empresa. El gobierno Bush ha dejado morir cruelmente a miles de sus compatriotas por el único hecho de ser pobres. La barbarie se ha revelado de la forma más cruda en la primera superpotencia del planeta.

La situación económica es igualmente alarmante en Japón, que lleva estancado más de una década, y en Europa, afectada por una grave crisis económica y política.

Esta realidad está teniendo su reverso en una contestación social que crece y se extiende. Toda Europa es escenario, por una parte, de la crisis creciente de una izquierda que aplica una política de derechas, del reformismo sin reformas de Blair o Schröder, y, de otra, de la irrupción en la escena política del movimiento obrero, que en los últimos años ha protagonizado huelgas generales y movilizaciones de masas en Italia, Grecia, Portugal, Francia, Suecia, Austria, Dinamarca y el Estado español.

El 55% alcanzado por el *no* en el referéndum francés sobre la Constitución Europea fue seguido por el 61% de Holanda. La profundidad de este movimiento de rechazo es tal, que el pánico ante un efecto dominó llevó al “aplazamiento” de los referendos en Dinamarca, Irlanda, Portugal, Suecia, Finlandia, República Checa y Gran Bretaña, a lo que hay que sumar que países como Alemania ni siquiera se atrevieron a convocarlo, decidiendo la aprobación en su parlamento nacional.

Europa va en la misma dirección, aunque por detrás, de los procesos gigantescos que se están desarrollando en América Latina, que desde Río Bravo a Tierra del Fuego está sacudida por la efervescencia de la lucha de masas y el fantasma de la revolución: desde el año 2000, toda América del Sur ha vivido movimientos revolucionarios. En todos ellos, el contenido socialista del proceso, el papel de vanguardia de la clase obrera y la necesidad de un partido revolucionario vuelven a manifestarse con fuerza. Venezuela es el mejor ejemplo.

El Estado español es una potencia de tercera categoría, con una burguesía históricamente débil y atrasada. La inestabilidad se ve aquí coronada por la presencia de fuertes nacionalismos históricos en Euskal Herria, Galicia y Catalunya y por un mosaico de fuerzas regionales que salpican el resto del Estado. Las grandes organizaciones políticas experimentan en su seno dichos particularismos, desde las múltiples fuerzas de carácter regional que dividen a la derecha, al poder de los barones territoriales que periódicamente sacuden con sus declaraciones al PSOE. Incluso IU se ve afectada cada vez más por las tendencias centrifugas y los particularismos. Dichos conflictos podrían agudizarse en el próximo período en la medida que la crisis orgánica del capitalismo se haga más aguda y evidente y la lucha de clases más agria y resuelta si la clase trabajadora no logra triunfar en su lucha por transformar la sociedad. Para lograr la victoria del socialismo la clase obrera necesita saber orientarse correctamente ante este complejo problema y evitar caer en las garras de la clase dominante, que utiliza la cuestión nacional como coartada para recortar los derechos democráticos, dividirnos y enfrentarnos.

En el Estado español también hemos asistido a movilizaciones que han sacudido de arriba a abajo la sociedad y que han tenido enormes consecuencias políticas. Desde 2001, millones de trabajadores y trabajadoras hemos mostrado en la calle nuestra oposición a la política reaccionaria del PP en una oleada de movilizaciones sólo equiparable a las grandes luchas de los años setenta: las huelgas estudiantiles contra la LOU y la LOCE, las manifestaciones masivas contra el Plan Hidrológico, las movilizaciones de los jornaleros andaluces y extremeños, la huelga general del 20 de junio de 2002, el movimiento ciudadano contra el desastre del *Prestige* y, sobre todo, el movimiento de masas contra la guerra imperialista de Iraq, que durante meses sacó a la calle a millones de personas. También ha sido un período de ataques a los derechos democráticos, respondido con movilizaciones en Euskal Herria y en todo el Estado. Un proceso que cristalizó en los días posteriores al atentado integrista del 11-M, que acabó con la vida de 192 trabajadores, mujeres y jóvenes de Madrid y que sería utilizado vergonzosamente por el PP

en una campaña de mentiras y demagogia obscena. La derrota electoral de la derecha en las elecciones generales de marzo de 2004, celebradas tres días después del atentado, fue también la concreción de este movimiento masivo de oposición que surgió desde abajo y, en no pocos casos, a pesar de la política de los dirigentes reformistas de la izquierda.

Pero el cambio de gobierno y la elección de Zapatero no significan que la experiencia acumulada en estos años se haya evaporado sin más. Los dirigentes del PSOE saben que su gobierno está condicionado precisamente por esa experiencia de lucha y movilización que ha hecho crecer la confianza de la clase obrera en sus propias fuerzas. Si de nuevo se repite la política de gobernar a favor de los grandes empresarios y banqueros del país, de cambiar la legislación laboral a gusto de la patronal, de aceptar una política de ajuste y recorte en los gastos sociales para que los trabajadores y sus familias paguemos la crisis económica, será inevitable que el gobierno del PSOE entre en conflicto con el movimiento obrero. La perspectiva de paz social es, más que nada, un deseo que emana de los despachos ministeriales y de las cúpulas sindicales pero que entra en contradicción con la política de la socialdemocracia y el marco general de crisis del sistema capitalista.

CRISIS DEL CAPITALISMO Y CUESTIÓN NACIONAL

Tras la caída del bloque soviético, la burguesía habló de una perspectiva de crecimiento, paz, democracia y estabilidad mundial. No ha hecho falta esperar mucho para descubrir la verdad. En el siglo XXI, los problemas derivados de la cuestión nacional en lugar de minimizarse se hacen cada día más complejos como consecuencia de la creciente globalización y de la formación de grandes bloques comerciales, políticos y militares. Las tendencias centrífugas en la sociedad se acrecientan, incluso donde el problema nacional parecía definitivamente resuelto. Que la desintegración del bloque soviético diese un enorme impulso a la formación de nuevas fronteras nacionales, que el imperialismo norteamericano, tras la ocupación militar de Iraq, esté creando divisiones que amenazan con balcanizar todo el área y que la burguesía de la región boliviana de Santa Cruz, la más rica del país, abandere la secesión para descarrilar la revolución socialista expresan que no asistimos al nacimiento de un nuevo mundo de más igualdad entre los pueblos y naciones, sino todo lo contrario. Vivimos en una época de inestabilidad creciente en las relaciones internacionales: inestabilidad económica, política, militar y diplomática, donde las grandes potencias imperialistas tratan de imponer sus intereses a los más débiles a cualquier precio y donde cada burguesía nacional libra una guerra no declarada contra la clase obrera de su propio país.

Esta caracterización no la hacemos sólo los marxistas, particularmente intere-

* *Junkers*: nobles propietarios agrarios prusianos. (NOTA DE LOS EDITORES.- NE)

sados en denunciar los problemas del capitalismo para impulsar la transformación de la sociedad. Desde hace tiempo, especialistas de todo tipo advierten a los líderes del sistema capitalista de los peligros desencadenados en esta época histórica. Hace ya algunos años, el experto en relaciones internacionales Immanuel Wallerstein anticipaba así el futuro: “Sea cual sea el esquema que prevalezca, la mayoría del Sur —en el sentido económico— no podrá emular al Norte en prosperidad. Se producirá un aumento considerable del bache socioeconómico y demográfico entre Norte y Sur. Continuará el enorme flujo migratorio hacia el trío de cabeza, a pesar de todas las leyes que se adopten para frenarlo. Existirá entonces en Occidente una enorme población sin derechos económicos ni sociales y en una mala posición económica. Asistiremos, pues, a la reproducción de la situación económica que conocieron los países industriales a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Creo probable que, ante esta situación, los países liberales se hundirán y vivirán en una especie de guerra civil. Ya no hará falta defender los derechos humanos en Somalia, sino que será necesario defenderlos en Francia y en EE.UU. Los próximos treinta años serán caóticos. Tras el caos vendrá el orden, y es imposible prever su naturaleza” (*El País*, 10/2/1994).

Si en sus momentos de auge el sistema capitalista se dotó del amplio colchón social de las capas medias, en sus momentos de crisis también ataca y proletariza a este sector que fue la base de su estabilidad. En las últimas elecciones presidenciales en EE.UU. se observó una polarización social desconocida desde los años treinta del siglo pasado. Gran número de artistas irrumpieron en la escena política para oponerse a la guerra de Iraq y al recorte de las libertades. En un manifiesto, algunos intelectuales denuncian que el 11-S está sirviendo de excusa para “una amplia ofensiva a escala mundial contra las garantías y los derechos de los ciudadanos. So pretexto de la lucha contra el terrorismo (...) se pretende establecer un nuevo orden que limita el Estado de derecho y acentúa la crisis de la democracia”. Es sólo un principio del giro a la izquierda del péndulo social, después de décadas de neoliberalismo salvaje.

Las fechas fatídicas se acumulan en un calendario infernal de los países ricos: el 11-S de Estados Unidos, el 11-M de Madrid, el 7-J y el 21-J de Londres. En países como Iraq, Afganistán, Palestina, en continentes enteros como África, Latinoamérica... esta pesadilla y otras aún peores se sufren a diario. Es una expresión de la crisis orgánica del capitalismo, que es incapaz de usar la ciencia y la técnica para satisfacer las necesidades sociales del género humano.

La clase obrera mundial está pagando un precio muy alto por esta larga agonía del capitalismo. La experiencia histórica ha demostrado que no hay nada peor que un sistema que sobrevive después de haber agotado su capacidad de desarrollar las fuerzas productivas. En última instancia, el capitalismo sólo puede continuar existiendo mediante la cíclica destrucción de las fuerzas productivas, la represión y la guerra.

Hoy más que nunca es necesaria una mayor participación política y sindical. La

lucha de clases y las convulsiones nacionales han entrado en una espiral ascendente cuyo origen es común: la crisis del capitalismo. El sistema está atrapado entre sus dos contradicciones fundamentales: la contradicción entre el desarrollo armónico de las fuerzas productivas y la propiedad privada de los medios de producción, y la contradicción entre ese mismo desarrollo y las fronteras nacionales.

En los momentos de grandes crisis, como las guerras y las revoluciones, las contradicciones se condensan de forma extraordinaria, sacando a la luz cada problema fundamental y poniendo a prueba individuos, organizaciones e ideas. León Trotsky dedicó una atención especial a la revolución española y comprendió la importancia de la cuestión nacional, dirigiéndose en estos términos a sus partidarios de la Izquierda Comunista en Catalunya: “La burguesía española, imperialista, débil, atrasada y corrupta, aliada con los propietarios latifundistas, viejos burócratas y generales, y vinculada estrechamente a los restos del feudalismo, los terratenientes y la Iglesia, pretendía el aplastamiento de catalanes, vascos y demás nacionalidades. En dichas circunstancias, el nacionalismo de las masas catalanas y vascas, que reflejaba antes que nada el descontento de éstas, es un factor revolucionario progresista, mientras que el nacionalismo español es un factor imperialista reaccionario”. Al mismo tiempo, Trotsky insistió en la necesidad de que las organizaciones obreras aplicasen una política de independencia de clase respecto a la cuestión nacional para luchar contra la reacción y arrancar de la influencia de la burguesía nacionalista a las masas de obreros y campesinos en Catalunya y el País Vasco: “Las tendencias separatistas proponen a la revolución la tarea democrática de la libre autodeterminación nacional. Estas tendencias se acentuaron y extendieron durante el período de la dictadura [de Primo de Rivera]. Pero mientras que el separatismo de la burguesía catalana no es otra cosa que un instrumento en su pugna con el Gobierno de Madrid, dirigido contra el pueblo catalán y español, el separatismo de los obreros y los campesinos es la expresión de su indignación social. Es preciso hacer una distinción rigurosa entre esos dos tipos de separatismo. Para separar de su burguesía a los obreros y campesinos que sufren la opresión nacional, la vanguardia proletaria debe asumir, en la cuestión de la libre autodeterminación nacional, la posición más audaz y sincera. Los obreros defenderán hasta el fin el derecho de los catalanes y los vascos a organizar independientemente su vida nacional, siempre que la mayoría de esos pueblos se pronuncie por una separación completa. Sin embargo, eso no quiere decir que los obreros avanzados impulsen a los catalanes y a los vascos a la independencia. Por el contrario, la unidad económica del país con una amplia autonomía de las regiones nacionales ofrecería grandes ventajas para obreros y campesinos desde el punto de vista económico y cultural”¹.

Casi setenta años después de que se escribiesen estas líneas, el problema nacional sigue sin resolverse. Los estatutos de autonomía catalán, vasco y gallego, aprobados tras el impulso de las grandes luchas que acabaron con la dictadura de Franco, se están renegociando sin contemplar el derecho de autodeterminación.

El presente libro va dirigido a quienes deseen profundizar en el complejo tema de la cuestión nacional desde el punto de vista marxista. Centrándose fundamentalmente en la lucha por los derechos democráticos en Euskal Herria, hace referencia a las otras dos nacionalidades históricas del Estado español —Catalunya y Galicia— porque, si bien sus desarrollos históricos son diferentes, tienen una causa común y por lo tanto una misma alternativa.

Los problemas más acuciantes crecen y requieren respuestas. Muchas de estas respuestas están dadas en épocas históricas y es necesario recuperarlas para que vuelvan a formar parte de la memoria colectiva. La experiencia histórica es acumulativa, nada se pierde, todo sirve, aunque sea a costa de terribles sacrificios.

I. El origen de la cuestión nacional en el Estado español

UN CONGLOMERADO DE REPÚBLICAS MAL REGIDAS CON UN SOBERANO NOMINAL AL FRENTE

La debilidad de la burguesía española, que hoy día se refleja en una enorme atomización de la derecha —con un importante elenco de partidos regionalistas por toda la geografía española, junto a la existencia de fuertes nacionalismos en Euskal Herria, Catalunya y Galicia— tiene sus orígenes históricos en el peculiar desarrollo del capitalismo en el Estado español.

La fortaleza colonial de la monarquía española se convirtió en un obstáculo objetivo para el desarrollo de las relaciones de producción capitalista, alimentando las tendencias parasitarias de la oligarquía nobiliaria y la monarquía. De esta manera, la explotación de los recursos de América cubrió durante todo un período histórico las necesidades de la monarquía, la nobleza, la Iglesia y la burocracia feudal y actuó como un elemento retardatorio en el triunfo de las relaciones burguesas, especialmente en la tierra, donde la explotación extensiva y la utilización de mano de obra semiservil se prolongó durante siglos.

La clase dominante española, producto de la época dorada del feudalismo, se resistió con fuerza a los cambios sociales. La concurrencia de las potencias capitalistas modernas, especialmente Holanda y Gran Bretaña, con un desarrollo muy superior de las fuerzas productivas y con la capacidad económica necesaria para sustituir a la corona española en el dominio del mundo, trajo consigo la pérdida del imperio colonial.

Como en otros Estados donde la burguesía, por motivos del desarrollo histórico, fue incapaz de librar una lucha decidida contra la monarquía feudal y la aristocracia, el triunfo del capitalismo se realizó de una forma desigual, integrando formas económicas heredadas del viejo régimen feudal. En este contexto, el problema nacional recorre la historia del Estado español desde la unidad dinástica de los reinos de Castilla y Aragón en el siglo XV.

El Estado español nunca vivió una revolución burguesa como la francesa, la holandesa o la inglesa. El desarrollo capitalista en suelo ibérico ofrece muchas más

similitudes con el de Rusia que con el de Francia, su vecino del norte. Al igual que la burguesía rusa, la burguesía española era débil políticamente (nunca manifestó grandes signos de audacia y arrojo en su lucha contra la aristocracia feudal) y económicamente dependiente, en primer lugar, de la aristocracia terrateniente, con la que compartía intereses y aspiraciones. En la práctica, la burguesía española, enriquecida por el comercio colonial, era compradora de tierra y practicaba el parasitismo rentista latifundista (rasgo que también compartía con la rusa) pero se resistía a introducir las técnicas de explotación capitalistas. En este sentido, los intereses de la burguesía y de la nobleza terrateniente se combinaban de tal forma que las mismas rentas del suelo financiaban luego operaciones comerciales o bancarias. Aquí está el rasgo distintivo de una clase dominante capitalista que resultó de la integración y la fusión entre la burguesía comercial y las viejas clases del régimen feudal.

La penuria económica que siguió a la pérdida del imperio colonial durante los siglos XVII y XVIII no tuvo otro efecto que el de potenciar las tendencias centrífugas en todo el Estado. La merma de la vida comercial e industrial de las ciudades provocó una disminución de los intercambios internos y de las relaciones entre los habitantes de las distintas provincias, los medios de comunicación se fueron descuidando y los caminos reales, abandonando; todo ello acentuó los particularismos locales. Por ello, tras la pérdida de las colonias, la oligarquía española, predominantemente agraria, intentó por todos los medios continuar su explotación parasitaria de las zonas más ricas e industrializadas del Estado: el País Vasco y Catalunya. La posibilidad de saquear y oprimir a otros pueblos fue una de las causas del estancamiento económico de España. Los gigantescos beneficios extraídos del robo y la expoliación de las colonias, lejos de ser una ventaja a la hora de hacer del Estado español una potencia industrial, fueron un inconveniente. Si bien es cierto que la unidad del Estado español se alcanzó pronto, siguió siendo, como lo definió Marx, “una aglomeración de repúblicas mal administradas con un soberano nominal a su cabeza”².

Esta situación acentuó las tendencias localistas y los particularismos regionales, minando los intercambios económicos y culturales y fortaleciendo el sentimiento nacional en diferentes partes del territorio del Estado. Estas reminiscencias se tradujeron en privilegios que sobrevivieron debido, entre otros factores, a la debilidad política y económica de la monarquía para imponer su control. Con los fueros en el País Vasco o las concesiones institucionales limitadas en Catalunya, la monarquía (tanto Austrias como Borbones) intentó mantener unido el territorio y apuntalar el viejo régimen. Sin embargo, cuando la presión social creció expresándose en exigencias regionales, la oligarquía feudal no dudó en recurrir a la violencia militar para imponer la unidad.

La burguesía española fue incapaz de dirigir a las masas oprimidas contra el atraso feudal. La oleada revolucionaria que recorrió Europa tras la Revolución Francesa de 1789 pilló a la débil burguesía española con el paso cambiado. Asustada por la irrupción revolucionaria de las masas, la burguesía liberal española lle-

gó a apostar por la intervención de los ejércitos napoleónicos. Algunos sectores de las clases privilegiadas consideraban a Napoleón el “regenerador providencial de España”; otros, “el único baluarte posible contra la revolución”. Las clases dominantes de la época no creían en la posibilidad de una resistencia nacional y adoptaron una actitud pasiva o de colaboración con el invasor. Las masas se vieron así liberadas de su liderazgo, pudiendo hacer brillar toda su iniciativa para combatir la invasión extranjera y la tiranía napoleónica. Es una paradoja histórica que, para lograr la independencia nacional, el pueblo español hubiese de combatir los símbolos de la Revolución Francesa. La intervención de las masas organizadas en juntas provinciales, que en muchos casos actuaron como órganos revolucionarios, acentuó aún más, si cabe, los particularismos locales.

Cada vez que lo intentó (1812, 1820, 1843, 1854 y 1868), la burguesía española fue incapaz de llevar a cabo sus tareas históricas. Por temor a la acción independiente de las masas y por los estrechos lazos que la ligaban a los nobles y los terratenientes, una y otra vez acabó echándose en brazos de la reacción. El enfrentamiento entre la vieja sociedad feudal y la nueva sociedad burguesa adquirió la forma de luchas dinásticas. Las guerras civiles que en el siglo XIX enfrentaron a carlistas y liberales formaban parte del largo conflicto por el derrocamiento del absolutismo y la consolidación de un Estado burgués. Estas guerras se libraron de modo intermitente durante más de cuarenta años. Se contraponía la pasada unidad católica de España a una futura unificación capitalista del mercado nacional; se contraponía una monarquía católica tradicional a una monarquía constitucional.

La explicación a esta actitud hay que buscarla en el miedo visceral de la burguesía a las masas. “Cuando las clases medias emprenden la batalla contra el despotismo, entran en escena los obreros, producto de la moderna organización del trabajo, y entran dispuestos a reclamar la parte que les corresponde de los frutos de la victoria. Asustadas por las consecuencias de una alianza que se le ha venido encima, de este modo, contra su deseo, las clases medias retroceden para ponerse, de nuevo, bajo la protección de las baterías del odiado despotismo”³.

En cada situación revolucionaria, la burguesía optó por estrechar lazos con la nobleza y los terratenientes frente a las masas. Al finalizar el siglo XIX, España era un país prototipo de, en la expresión de Trotsky, “un desarrollo desigual y combinado”. Habiendo perdido sus colonias, se vio ella misma “colonizada” por el capital extranjero. Sin haber dejado de ser un Estado predominantemente atrasado y agrario, experimentó un rápido desarrollo, en su litoral, de una floreciente industria moderna. En vez de un país, España era más bien una serie de países y regiones señalados por su desigual desarrollo histórico, coexistiendo zonas con medios de producción arcaicos y escasos medios de comunicación, con zonas que podían estar a la vanguardia del desarrollo capitalista, de grandes industrias que incorporaban la tecnología más moderna de la época, e importantes núcleos de concentración obrera.

EL SURGIMIENTO DEL NACIONALISMO GALLEGO

A diferencia de otras zonas del territorio ibérico, en Galicia el feudalismo se estableció sobre un territorio escasamente romanizado y con una fuerte pervivencia de las comunidades de aldea y la práctica inexistencia del latifundismo y el esclavismo.

La Iglesia, que tuvo un papel destacado en la feudalización, se convirtió en el principal propietario de tierras. La ocupación y explotación de estas tierras eclesiásticas, a diferencia de otras zonas del Estado español, no se realizó a través de las instituciones del vasallaje y la servidumbre, sino de la colonización (el establecimiento de arrendatarios que, a cambio de una renta anual —el foro—, recibían los derechos de explotación). Esta forma peculiar de propiedad de la tierra tendrá importantes consecuencias. Por un lado, el arrendamiento de las tierras eclesiásticas favorece la pequeña explotación familiar autosuficiente, origen del minifundismo gallego. Por otro, el colono no está sujeto a un señor feudal que actúa, como señaló Engels, de “organizador del proceso productivo”, que dirige los aspectos colectivos de la producción agraria (molinos, caminos, puentes, etc.).

Al mismo tiempo, esta estructura de explotación de la tierra provocaría una escasa circulación monetaria. En la época en que el capital comercial creció en otras zonas del Estado, el desarrollo del comercio y la acumulación primitiva fue muy limitado en Galicia. Por ejemplo, el primer comercio a gran escala (de bienes de lujo) no encontró mercado en las posesiones eclesiásticas.

Estos factores provocaron un escaso crecimiento de la artesanía y del trabajo no agrícola. El debilitamiento del feudalismo gallego por las revueltas *irmandiñas*, que contaron con una amplia participación urbana, y por la derrota de la débil nobleza gallega en su enfrentamiento con la monarquía absoluta, junto con el crecimiento de la población, favoreció la fragmentación de los arrendamientos.

En los siglos XVII y XVIII crecieron los subarrendamientos: los antiguos colonos se convirtieron en rentistas y, en muchos casos, se trasladaron a villas y ciudades. Este fenómeno provocó la reducción del tamaño de las explotaciones, limitando en muchos casos la utilización de trabajo asalariado (jornaleros). Un gran número de explotaciones practicaban una agricultura de subsistencia que sólo producía para el mercado lo imprescindible para pagar la renta de la tierra y las cargas fiscales, e incluso en muchos casos era insuficiente y los arrendados tenían que recurrir a su ocupación complementaria como jornaleros en los campos de Castilla.

En el siglo XIX se produjeron cambios importantes en la propiedad de la tierra. Con la desamortización de Mendizábal, los titulares de los derechos originales de arrendamiento (ya convertidos en rentistas) se convirtieron en propietarios legales, lo que agravó aún más la miseria campesina.

Este cambio legal impidió la formación de un mercado capitalista de tierras cultivables, ya que, junto a la propiedad comunal de la tierra, persistió el sistema de

arrendamiento —el foro—, que no desapareció hasta ya entrado el siglo XX. Por tanto, no se produjeron los factores que en otros países europeos favorecieron la incorporación de la producción agraria al capitalismo naciente: bien por la ocupación de las tierras comunales y la expulsión de la población campesina para proceder a la explotación directamente capitalista (como en Inglaterra), bien por la conversión del latifundismo tradicional a una agricultura comercial (como fue el caso de Rusia), o bien porque la pequeña propiedad familiar disponía de capacidad suficiente para el empleo generalizado de trabajo asalariado y la producción estaba orientada a la comercialización y el mercado urbano (como en Francia o Catalunya).

Galicia quedó al margen del desarrollo capitalista que se inició en otras zonas del Estado español. Incluso se dio la paradoja de que las medidas proteccionistas que favorecieron a otras nacionalidades, en Galicia constituyeron un obstáculo, como en el caso de la importación de maíz, que dificultó el desarrollo de la ganadería. La poca industrialización que hubo se debió a capital foráneo (catalán, en la industria conservera) o a la inversión inglesa (astilleros). El atraso económico hizo más dependiente a los sectores no capitalistas de los monopolios exteriores, por ejemplo en el sector lechero.

Paralelamente, los propietarios de tierras utilizaron su dominio sobre sus arrendados para constituir un sistema político caciquil que, aunque debilitado, todavía pervive en la actualidad. Igual que en otros países, la emigración a América de miles de campesinos se convirtió en la válvula para escapar de la miseria y el atraso.

En este contexto, a finales del siglo XIX aparecen los primeros gérmenes del nacionalismo gallego, impulsado por la pequeña burguesía. Un nacionalismo que tiene dos ejes principales: la protesta contra la miseria campesina y la reivindicación de la lengua y cultura gallegas, despreciadas por la escasa burguesía y por la burocracia estatal radicada en Galicia.

El movimiento nacionalista se vio inspirado y alentado por las luchas campesinas contra los foros, fuertemente reprimidas por la Guardia Civil, que alcanzarán su máxima expresión a principios del siglo XX (en 1907-12 y 1917-23). En aquel momento, las acciones de los campesinos se canalizaban a través de dos organizaciones: Solidaridad Gallega, más moderada, que defendía la redención de los foros mediante la compra de los derechos a un precio fijado por norma legal (equivalente a una indemnización) y la Unión Campesina, partidaria de la eliminación de los foros sin ningún tipo de compensación. También el clero tuvo influencia en este movimiento.

El movimiento campesino logró en la práctica que el foro cayese en desuso —muy pocos rentistas se atrevían a exigir el pago en las aldeas— y finalmente, en 1926, la dictadura de Primo de Rivera confirmó la redención definitiva.

En el terreno político, el nacionalismo gallego se expresó en los años treinta del pasado siglo a través de dos organizaciones republicanas y de raíz pequeñoburguesa: ORGA (Organización Republicana Gallega Autónoma) y el Partido Galeguista (Castelao es el referente natural del galleguismo progresista).

Los nacionalistas de ORGA obtuvieron quince diputados en las elecciones de 1931, dentro de la conjunción republicano-socialista, y participaron en el gobierno central. Sin embargo, como ocurrirá en el resto del Estado, la política del gobierno de coalición fue incapaz de llevar a cabo las tareas de la revolución democrático-burguesa (la industrialización de Galicia y el desarrollo del campo exigía la expropiación de los capitalistas españoles y gallegos). De hecho, la lucha de los trabajadores y campesinos se incrementó en toda Galicia: en 1932, durante la huelga general de Ourense, la represión gubernamental se saldó con siete muertos. Tras esta experiencia y el consiguiente desengaño entre los trabajadores y campesinos gallegos, la ORGA sólo logró seis diputados en las elecciones de 1933.

El triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 relanzó la presión popular por el estatuto de autonomía, que finalmente fue aprobado en referéndum el 28 de junio con 993.351 votos a favor y 6.161 en contra.

Durante todo este período, las organizaciones obreras asentadas en los núcleos urbanos de Galicia fueron incapaces de establecer una alianza con el campesinado. Esta situación se debió precisamente al carácter reformista del programa de los partidos obreros tradicionales, especialmente el PSOE, y a su negativa a vincular la lucha contra el atraso agrario con el establecimiento de una economía planificada socialista, el único marco posible para sacar del atraso histórico a Galicia.

LA BURGUESÍA CATALANA

En el caso de Catalunya, el paso decisivo de su economía se produjo a lo largo del siglo XVIII, desde una estructura basada en la producción agrícola y de manufactura para el autoconsumo local a la producción para la comercialización en mercados más amplios —donde las colonias españolas jugaron un papel decisivo, de ahí el apoyo de la burguesía catalana a la política colonial e imperialista de la monarquía—. El centro gravitatorio de la producción en aquel período era el algodón para la industria textil, que adquiriría una gran pujanza en los siglos posteriores, y la producción vinícola.

La burguesía catalana tardó mucho en mostrar sus inclinaciones regionalistas pues, en esencia, jamás abrazó la constitución de una Catalunya independiente y separada del resto del Estado. Siempre fue una clase profundamente conservadora y reaccionaria identificada con el orden político establecido que aspiró a dominar económicamente el Estado español y, de ahí, a conseguir la hegemonía política.

El nacionalismo catalán fue inspirado fundamentalmente por los sectores ilustrados de la pequeña burguesía y nació como movimiento de resistencia a la castellanización de la lengua y a la defensa de las viejas instituciones políticas catalanas, que ofrecían a esta pequeña burguesía la posibilidad de alcanzar protagonismo social e ingresos materiales nada despreciables.

Estos sectores, impulsores del catalanismo, encontraron en el movimiento re-

publicano federal el mejor paraguas político para sus intereses, que tenían difícil cabida en los partidos de la clase dominante. Pero los republicanos federales de Pi i Margall, aún reconociendo el particularismo catalán, defendían un regionalismo que tenía como proyecto el conjunto de España y no Catalunya.

Basta leer el programa de estos republicanos federales para apreciar que los actuales líderes reformistas de la izquierda —tanto del PSOE como de IU— no han creado nada original. Su alternativa al problema nacional y a la organización estatal no cuestionaba las relaciones capitalistas, defendiendo —como un siglo después defiende la dirección del PSOE e IU— la autonomía de las regiones, que debía coincidir con los antiguos reinos o regiones histórico-culturales de la península, el poder de los municipios y la creación del Estado federal con instituciones comunes y propias.

Pero los republicanos pequeñoburgueses fueron incapaces de imponer su programa frente a la burguesía centralista y a la monarquía, frustrando las esperanzas que depositaron en ellos amplios sectores del proletariado. Después del fracaso de la Primera República, la clase obrera comienza a emanciparse políticamente del tutelaje del republicanismo burgués y fortalece su acción independiente que ya había comenzado tiempo atrás bajo la bandera de la Primera Internacional. Hay que señalar, sin embargo, que en Catalunya como en otras zonas del Estado no es el socialismo posibilista de Pablo Iglesias el que arraiga con más fuerza entre el proletariado y el campesinado, sino el programa del anarquismo bakunista.

Después del pronunciamiento militar de 1874, que precipitó el régimen de la Restauración, la burguesía catalana fue un apoyo activo de Cánovas del Castillo y de la monarquía borbónica reestablecida que, en pago a los servicios prestados, volvió a implantar una política económica proteccionista.

La burguesía catalana jamás contrarió el programa nacional de la burguesía centralista, es más, llegó a manifestar su más fervoroso patriotismo español cuando estalló la guerra de Cuba y la sublevación de Filipinas, que supondría el fin de mercados privilegiados para los industriales y comerciantes catalanes.

Los mentores del catalanismo político de aquel período, como Valentí Almirall, consideraban su movimiento como interclasista. Su único vínculo era la defensa de la “cultura catalana” y “las viejas instituciones” y desde el principio buscaron el apoyo y la adhesión de los industriales catalanes. El famoso *Memorial de Greuges*, una memoria presentada a la monarquía en defensa de los “intereses morales y materiales de Catalunya”, era, en esencia, un manifiesto a favor del proteccionismo de la industria textil catalana frente al librecambismo y por el mantenimiento del derecho civil catalán. En esta primera fase, el catalanismo no consiguió suficiente base social para jugar un papel político decisivo.

Fue a partir de la constitución de la Lliga de Catalunya, integrada por la Juventud Universitaria Catalanista y liderada por Prat de la Riba y Cambó, cuando el catalanismo empieza a adoptar un cuerpo doctrinal que estaba muy lejos, sin embargo, de reivindicar la soberanía e independencia nacional. En 1891 se aproba-

ron las *Bases de Manresa*, el primer proyecto de Estatuto de Autonomía, respetuoso con el Estado español y para nada separatista. Así, Prat de la Riba proclamaba: “Los catalanes no son separatistas ni lo serán mientras Cataluña se encuentre bien dentro de España... Cataluña debe hacerse grande, grande como puede ser, y salvar de la última ruina al Estado español, reconstruirlo y dirigirlo”. Desde esa época el movimiento catalanista, expresando el componente burgués o pequeñoburgués del mismo, fue dividiéndose entre un ala regionalista y otro nacionalista.

En 1901, se forma la Lliga Regionalista, a partir de la fusión del Centre Nacional Catalá y la Unió Regionalista, que constituiría la formación regionalista catalana por excelencia. Desde sus comienzos, el carácter burgués de la Lliga y su programa en defensa de los propietarios industriales y agrícolas marca su enfrentamiento con el movimiento obrero. Tan pronto como en 1902, la Lliga no dudó en aliarse con el Comité de Defensa Social, un grupo clerical reaccionario, para combatir a los trabajadores en huelga de Barcelona.

En julio de 1909, cuando estalla la Semana Trágica de Barcelona, la insurrección obrera que se inicia contra el envío de tres levadas seguidas de Barcelona a Melilla para combatir en la guerra colonial de Marruecos, la Lliga Regionalista respalda activamente la represión del gobierno Maura incluidas las ejecuciones sumarísimas.

La colaboración permanente de la Lliga con el gobierno y la burguesía centralista le granjeará la hostilidad del proletariado y de los sectores de la pequeña burguesía influidos por él y provocará constantes escisiones en el movimiento catalanista que intentan afirmar un mensaje más nacionalista y combativo contra la burguesía española y hacerse con una base de apoyo popular. Ingret y Companys crearon el Partit Republicà Catalá, que logró una base de apoyo en la Unió de Rabassaires, una federación de cultivadores, aparceros y arrendatarios payeses que luchaban por el acceso a la propiedad de la tierra. La vinculación de este amplio sector de campesinos que mantuvieron un enfrentamiento prolongado con los grandes propietarios, dotó posteriormente de una base de masas a la Esquerra y sirvió también para impulsar la radicalización del partido en sus demandas frente a la burguesía catalana y el aparato centralista estatal que salvaguardaban los intereses de los grandes propietarios. Una vez más, la cuestión nacional y la lucha por la propiedad de la tierra aparecen estrechamente relacionadas.

Este proceso coincidirá con el auge de la lucha de clases en Catalunya, especialmente en Barcelona, durante el llamado Trienio Bolchevique (1917-19). En este período la burguesía catalana no duda en apoyar activamente la represión y la actuación del delegado militar de Madrid, el capitán general Milán del Bosch. De hecho, Cambó y otros dirigentes de la Lliga salen a la calle en 1919 armados como miembros del Somatén, la milicia contrarrevolucionaria creada por el gobierno central para combatir a los obreros de la CNT. La Lliga no vaciló en situarse en su lado de la barricada entrando en el gobierno de coalición monárquica de Maura.

En el caso de Catalunya, el movimiento nacionalista se escindió definitivamente en marzo de 1931 con la creación de Esquerra Republicana de Catalunya, producto de la fusión del Partit Republicà Català de Companys y el Estat Català de Maçia. El partido nacionalista por excelencia de Catalunya mostró su incapacidad para liderar el movimiento de emancipación nacional. En la medida en que representaba los intereses económicos de la pequeña burguesía, que era deudora de la defensa del marco capitalista, fue incapaz de arrancar a la burguesía centralista los derechos democráticos para Catalunya, incluido el derecho de autodeterminación.

ERC era un ejemplo acabado de fraseología pomposa, una actitud exteriormente revolucionaria y una intransigencia verbal que le permitió conquistar una simpatía y apoyo entre amplios sectores de la población. Reflejando los intereses de la clase que representaba y de su situación intermedia en la economía capitalista, siempre se veía en la contradicción de provocar el descontento de la burguesía y fomentar el movimiento independiente de las masas. En todas sus actuaciones políticas el partido de Companys se inclinó por la política de concesiones a la burguesía española y cuando bajo la presión popular se lanzaba a la lucha (proclamación de la República Catalana en abril de 1931 o del Estado catalán dentro de la República Federal española en octubre de 1934) lo hacía sin convicción, más asustado por las posibles consecuencias de un desbordamiento popular que decidido a combatir resueltamente.

EL NACIONALISMO VASCO

El nacionalismo vasco y el catalán se desarrollaron de forma paralela pero al mismo tiempo con características peculiares. Mientras en Catalunya el movimiento nacionalista pequeñoburgués siempre tuvo una base de apoyo entre los trabajadores de los centros urbanos, en el País Vasco es precisamente en los centros industriales donde no se sentía el problema de la liberación nacional. El nacionalismo en sus orígenes contó con la hostilidad de las masas obreras, mayoritariamente socialistas, que le opusieron una feroz resistencia. Su cuna y su fuerza se localiza entre la clase campesina dirigida por la Iglesia. Consciente de esta debilidad, el nacionalismo vasco potenciará un sindicato, ELA-STV (Solidaridad de Trabajadores Vascos) partidario de la colaboración de clases y hostil al socialismo. ELA contó con el apoyo de la burguesía para dividir las fuerzas vivas del combativo proletariado vasco.

Además del euskera, los vascos conservaron un sistema de leyes propias o leyes viejas (*Lagizarrak*), conocidas en castellano como los fueros, un conjunto de normas y reglamentaciones sobre la vida política, económica, administrativa y jurídica. Dichos fueros eran normas consuetudinarias, usos y costumbres o tradiciones no escritas que a partir de la Baja Edad Media llegaron a convertirse en leyes escritas.

Los ciudadanos aforados no tenían obligación de prestar el servicio militar y se podían librar de las guerras en las colonias aunque sí podían participar en ellas como mercenarios. En aquellos tiempos los vascos “carecían de lo que luego se llamó conciencia nacional, a pesar de que eran conscientes de los elementos diferenciales que constituían su identidad: la lengua, las leyes, las costumbres, el territorio histórico, la religión católica... Se creían, por tanto, una especie de españoles privilegiados que no tributaban al Estado, no estaban obligados al servicio militar fuera de sus Herrialdes, disponían de aduanas propias, administración soberana y sus Diputaciones o Juntas Generales tenían la última palabra y decisión frente a las exigencias del Estado”⁴.

En lo que se refiere a los territorios vascofranceses, éstos se vieron afectados por la Revolución Francesa, que creó un fuerte Estado central eliminando los particularismos propios del sistema feudal. En 1789, en medio de las protestas de sus representantes en la Asamblea de París, fueron abolidas todas las libertades y derechos de los que disfrutaban y habían hecho uso las provincias vascas del norte. Este modelo de derechos particulares que disfrutaba el territorio vasco en el caso concreto del Estado español fue una fuente de conflictos permanentes a causa de la debilidad de la burguesía española y a su peculiar desarrollo histórico. El problema vasco se agudizó en el siglo XIX, cuando los liberales consideraron que los regímenes forales de las regiones vascas eran arcaicos y estaban en contra de la modernidad. Según su posición, era contraproducente para España que existieran formas de “Estados” dentro de otro Estado, aduanas dentro de un mismo país que entorpecían el tránsito de las mercancías y de las personas y, por consiguiente, legislaciones diferentes dentro de un mismo Reino.

En la lucha dinástica al trono de España, Isabel (hija legítima de Fernando VII, muerto en 1833) se alió con los liberales dando lugar al bando de los isabelinos, mientras que Carlos (hermano del rey Fernando VII) se alió con las tesis foralistas que estaban en contra de la desaparición de los regímenes forales, alumbando el bando carlista. Hubo dos guerras carlistas en las que vencieron los liberales, lo que finalmente acarrió la desaparición de los regímenes forales. Las guerras se iniciaron en 1833 y se prolongaron hasta 1876. La primera guerra se saldó en 1839 con el llamado “abrazo de Bergara” mediante el cual el Gobierno español se obligaba a reconocer los Fueros, aunque decretaba su inclusión en la “unidad constitucional de la monarquía”. Sin embargo, en 1841 se suprimieron las Cortes navarras siendo asumidas sus funciones por la Diputación cuando Navarra pasó de ser reino a Provincia y en 1876, tras otra guerra similar, el Gobierno de Madrid aboló unilateral y definitivamente las “leyes viejas” desplazando 50.000 soldados al norte para prohibir las actividades políticas y los medios de comunicación fueristas.

Fruto de la humillación que supuso para ciertos sectores foralistas la pérdida de unas instituciones seculares, comenzó a surgir entre sectores campesinos —los *jauntxos*, propietarios de tierras—, sectores de la pequeña burguesía urbana, inte-

lectuales y rentistas del antiguo régimen el independentismo vizcaíno, con Sabino Arana a la cabeza. De esta manera surgió el nacionalismo vasco y la posterior fundación del Partido Nacionalista Vasco en 1895. Apoyándose en la existencia de una lengua común milenaria, el euskera, Arana denominó a la nación en la que vivían los vascos *Euzkadi*.

La posición de Sabino Arana reflejaba las aspiraciones de clases sociales en decadencia; así, escribiría en 1895: “fuese pobre Vizcaya y no tuviera más que campos y ganados y seríamos entonces patriotas y felices”. Al mismo tiempo, el nacionalismo vasco surgió destilando racismo y xenofobia contra los emigrantes. “El rechazo se concretaba en la prohibición expresa del mestizaje racial o en la participación en grupos políticos, sociales, sindicales o culturales en los que colaborasen españoles”⁵.

Sin embargo, la gran burguesía vasca pronto vio el potencial del nacionalismo vasco como un instrumento para la defensa de sus intereses, espoleando el descontento de las masas de la pequeña burguesía y los campesinos para arrancar ventajas para sí misma al Gobierno Central. Este cambio de estrategia política se produce progresivamente desde 1898, fecha en que los hermanos Arana dieron la entrada al PNV al multimillonario Sota y su grupo político fuerista. Gracias a estos apoyos pudo Sabino Arana lograr un escaño de diputado provincial cuando las condiciones represivas eran muy adversas. “Ramón de la Sota fue uno de los personajes claves en la vida política y económica vasca de aquellos años. Multimillonario, naviero, banquero y empresario siderúrgico, era un autonomista convencido, bien relacionado en la Corte y enemigo de la separación de España en cuyo mercado tenía cuantiosos intereses. Después de ingresar en el PNV y colocar a sus hombres de confianza en puestos clave, Sota consiguió tras la muerte de Arana el control fáctico del nacionalismo y su deriva hacia un autonomismo moderado” (...) “Político en la sombra casi siempre, supo aprovechar la plataforma del PNV y de su sindicato ELA para sus propios intereses”⁶.

En 1902, un año antes de su muerte, Sabino Arana “propuso transformar el Partido Nacionalista Vasco en una Liga de Vascos Españolistas, a imitación de la Lliga Regionalista catalana, al creer que el nacionalismo que había fundado había fracasado, por culpa de la fortísima represión española y de una cierta apatía vasca”⁷. El partido se rebautizó más tarde como *Comunión Nacionalista Vasca* pero su política colaboracionista dio lugar a una escisión, formándose el PNV-Aberrri, integrado por militantes no comprometidos con la burguesía. Finalmente ambas partes se fusionarían nuevamente en 1930 con las siglas del PNV, hecho que no evitaría nuevas escisiones como *Acción Nacionalista Vasca* (ANV) y el grupo liderado por Eli Gallastegi, Jagi-jagi.

El materialismo dialéctico explica cómo el movimiento, en la naturaleza y en la sociedad, se expresa a través de contradicciones que provocan sucesivos cambios. Unidad y lucha, donde el mismo elemento se convierte en su contrario. El nacionalismo vasco, que surge con la bandera de la vieja sociedad “Dios y Leyes vie-

jas” y la defensa del particularismo feudal y de la monarquía absolutista, liderará posteriormente de la mano de la burguesía vasca una de las zonas más dinámicas e influyentes del Estado.

Mientras las clases dominantes en España se sostenían en una economía principalmente agraria y atrasada, en las costas se producía un rápido desarrollo económico. El incremento de la demanda de mineral de hierro por parte de Inglaterra a lo largo del siglo XIX como consecuencia del auge de la industria siderúrgica, los medios de transporte y las comunicaciones, estimularon este desarrollo en Euskal Herria, la segunda región más industrializada después de Catalunya y la primera en el sector minerometalúrgico.

“Mientras que el incremento del capital comercial supuso en España el fortalecimiento del feudalismo agonizante en las relaciones de propiedad en la tierra y del rentismo, no ocurrió lo mismo con el capital comercial vasco. Éste, espoleado por la afluencia de nuevos capitales, muchos de ellos procedentes de los vascos que emigraron a América y de otra serie de factores como el constante acicate de la concurrencia extranjera, la apertura de nuevos mercados, el descubrimiento de nuevos yacimientos de mineral de hierro y las condiciones propias de su litoral, le permitió surgir como una fuerza perfectamente articulada con su base de producción, dando lugar a nuevas relaciones sociales que permitían la creación de un nuevo régimen. El estrecho contacto establecido entre la producción interior y el comercio exterior le valió al País Vasco su potente predominio en la península y determinó la rápida transfusión del capital comercial a la industria”⁸.

Con el desarrollo del capitalismo en Euskadi se fortaleció la conciencia de clase de la burguesía vasca que, por su potencial económico, se colocó a la cabeza de la sociedad postergando y destruyendo los restos feudales que quedaban. A su vez, el desarrollo de la industria acrecentaba el peso de la clase obrera, que a través de su particular proceso de toma de conciencia se enfrentaba a unos patronos cada vez más intransigentes. Paralelamente, el particular desarrollo y los problemas de la industria de bienes de consumo de Catalunya y Euskadi enfrentaban a sus respectivas burguesías con los grandes propietarios agrarios de Andalucía y Castilla, que dominaban el poder político.

A partir del primer decenio del siglo XX el desarrollo industrial se realizó bajo el dominio de la gran banca y de capitales extranjeros, apoyados por un fuerte proteccionismo. En manos de unas cuantas familias, las de la vieja aristocracia y las de los capitalistas enriquecidos en el siglo XIX (con frecuencia unidos luego por lazos de familia), estaban la siderurgia, la naciente industria de energía eléctrica y las navieras, compartiendo con empresas extranjeras las minas, los ferrocarriles, la industria química, etc.

La pérdida de las colonias durante todo el siglo XIX favoreció también la repatriación masiva de capitales; de ahí surgió, al comenzar el siglo, el Banco Hispano Americano. También se creó en 1901 el Banco de Vizcaya por capitalistas vascos

cuya potencia económica había crecido en los años de la Restauración con la venta de mineral de hierro pero también con el notable ascenso de la siderurgia registrado entre 1882 y 1902.

Inevitablemente, este creciente desarrollo económico en manos de la burguesía vasca en el marco de un Estado dominado por una clase social vinculada a una economía principalmente agraria tenía que provocar continuos conflictos políticos. A lo largo del siglo XIX, el deseo de independencia de los vascos frente a los poderes centrales no se manifestó tanto en el terreno político como en el económico.

Durante la Primera Guerra mundial, aprovechando la neutralidad del Estado español y el incremento de la demanda, los beneficios más exorbitantes fueron realizados por la banca del norte. Los grupos familiares que dominaban la producción siderúrgica y minera, la flota mercante, la producción papelera —los Arteche, Chávarri, Zubiría, Zárate, Sota, Basterra, Urquijo, Echevarrieta, Ibarra, Aresti, Herrero, Ussía, etc. — se hicieron de oro. Este sector social nunca había estado identificado, salvo excepciones personales, con los problemas netamente vascos. Por el contrario, ocupaban puestos clave del capitalismo español desde que se conectaron bancos e industrias y se desarrolló la siderurgia y la producción de energía eléctrica. Si la burguesía vasca abrazó el nacionalismo fue porque le permitía mantener un control político sobre la población a la que explotaba y sacar a la burguesía centralista y al Estado acuerdos beneficiosos en materia fiscal, etcétera, sin renunciar nunca a participar golosamente de los beneficios que le reportaba su pertenencia al Estado español.

Mientras la burguesía vasca se enriquecía con la guerra, las masas de la clase trabajadora eran explotadas en las industrias y minas de Vizcaya con salarios y condiciones de trabajo miserables. La patronal a menudo utilizaba las diferentes procedencias de los trabajadores para formar cuadrillas compuestas por gallegos, andaluces, etcétera, dividiéndolos y enfrentándolos entre sí. Los conflictos con el poder central de la burguesía vasca le permitían desviar la atención y en cierta medida atenuar los conflictos de clase en Euskal Herria.

EL CARÁCTER REACCIONARIO DE LA BURGUESÍA NACIONALISTA

Una y otra vez, cuando los intereses de clase de la burguesía se vieron amenazados por la conflictividad laboral y las luchas del movimiento obrero, como por ejemplo ocurrió tras la victoria de la revolución rusa en 1917 con un importante estallido huelguístico e insurrecciones en distintos puntos del Estado, la burguesía se echó en manos de la reacción.

La burguesía catalana apoyó la dictadura de Primo de Rivera, si bien ésta, más tarde, se enfrentó con saña a cualquier expresión nacionalista. El Poder militar prohibió la bandera y la lengua catalana en las corporaciones oficiales y terminó con la

* Bund: organización socialdemócrata judía (Unión General de los Obreros Judíos). (NE)

disolución de la Mancomunidad en mayo de 1924. Sin embargo, nuevamente en 1930, la oligarquía, incluida la catalana y la vasca, se arrullaba junto al trono temerosa del estallido revolucionario. La Lliga para entonces ya se había incorporado a la oligarquía política que dominaba las instituciones gubernamentales del Estado español, a diferencia de la burguesía del norte que prefirió, salvo alguna excepción, que gobernasen otros con tal de que le dejaran manos libres para sus negocios.

La oligarquía vasca no participó en los gobiernos de la dictadura y sin embargo fue uno de los principales beneficiarios de la misma. No negó jamás su apoyo a la Monarquía pero tampoco quiso comprometerse en su defensa en los últimos momentos. “La casi totalidad de los grupos familiares que tenían en sus manos las palancas de la economía nacional, los títulos de riqueza, las fuentes de ingresos más cuantiosas estuvieron hasta el último día con la monarquía de Alfonso XIII”⁹, sin embargo, no tuvieron ningún prejuicio en proclamarse republicanos si ello les permitía mantener sus propiedades y beneficios.

La burguesía catalana tuvo que pagar un precio por su apoyo incondicional a la oligarquía española. La Lliga Regionalista se escindió como consecuencia de su estrecha colaboración con los Gobiernos de Madrid. Los grupos nacionalistas catalanes, reunidos en Barcelona bajo la presidencia de Macià, fundaron la Esquerra Republicana de Catalunya, que aglutinaba a la pequeña burguesía nacionalista radicalizada.

Mientras los intereses de clase de las burguesías española, vasca y catalana frente a las masas son los mismos —representan los intereses de los explotadores frente a los explotados—, en la lucha por el reparto de la riqueza en manos del Estado, la fiscalidad, los presupuestos, exenciones, gravámenes, comercio exterior, aparato administrativo, etc., tienen intereses enfrentados entre sí. No todos pueden llevarse el mayor trozo de la tarta del Estado y de ahí surgen sus continuos choques y cambios de alianzas en función también de las presiones que reciben de “abajo”.

II. Los años treinta

LA CUESTIÓN NACIONAL EN LA SEGUNDA REPÚBLICA

La revolución social que prendió en el Estado español durante la década de los años treinta despertó, con más fuerza que nunca, la cuestión de las nacionalidades. En los años treinta, los nacionalistas vascos afirmaban que con el 5% de la población total del Estado, concentraban el 24% del capital bancario, el 42% de todos los depósitos bancarios, el 33% de todos los ahorros personales, el 78 y 74% de toda la producción de hierro y acero respectivamente y el 71% de la industria del papel y naval. Catalunya, por su parte, con el 12% de la población total del Estado, disponía del 34% de todos los ahorros personales, el 31% de toda la electricidad, el 19,5% del capital bancario y el 28% del capital industrial. Estas estadísticas dan una idea del abismo que separaba el desarrollo económico entre ambas nacionalidades y el resto del Estado y, por tanto, la importancia de la cuestión nacional en el posterior proceso revolucionario y en la lucha contra Franco.

Estas cifras ocultan, no obstante, las condiciones de extrema penuria en que vivían las masas de la clase obrera y del campesinado vasco y catalán, que sufrían, como la población del resto del Estado, los efectos cada vez mayores del paro y la crisis económica.

La proclamación de la República el 14 de abril de 1931, agudizó las tendencias centrífugas de las nacionalidades históricas. El gobierno de conjunción republicano socialista fue incapaz de solucionar el problema nacional a través de la concesión del derecho de autodeterminación, al tiempo que se mostró impotente para romper con el poder de los grandes capitalistas y terratenientes y solucionar los acuciantes problemas de las masas oprimidas. Las demandas democráticas no podían ser resueltas en el marco del débil y reaccionario capitalismo español, precisamente porque cualquier reforma de esta naturaleza, fuera en el terreno de la cuestión agraria, fuera en el terreno de las nacionalidades, o en la modernización económica del país y la mejora de las condiciones de vida de la clase obrera y los campesinos pobres, chocaba contra las bases en las que se cimentaba el capitalismo español. Las reformas democráticas sólo podían alcanzarse con la

revolución socialista, expropiando la banca, la propiedad capitalista, los monopolios imperialistas y a los terratenientes. De esta manera, en el marco de un régimen de democracia obrera y una economía planificada, se podrían establecer las bases para una Federación Socialista de Nacionalidades Ibéricas que diese solución definitiva al problema nacional.

Toda la experiencia de la República demostró que no había posibilidad de gobernar en beneficio de los capitalistas y de las masas oprimidas a la vez. La renuncia del gobierno de conjunción republicano socialista a aplicar una política anticapitalista apoyándose en la movilización de la clase obrera y el campesinado, preparó finalmente el terreno para el fortalecimiento de la reacción de derechas.

La instauración de la República en Madrid fue anticipada por la proclamación de la República Catalana. Pero como se puede apreciar por el texto del Bando de proclamación, lo que sobre todo preocupaba a la burguesía catalana era, frente al creciente movimiento huelguístico de la clase obrera, poder mantener el poder en sus propias manos levantando la bandera del nacionalismo catalán. El Bando, publicado el 14 de abril de 1931 y firmado por Francesc Macià dice así: "Catalanes, interpretando el sentimiento y los anhelos del pueblo que acaba de dar su sufragio, proclamo la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica. Rogamos que cada catalán, así como todo ciudadano residente en Catalunya, se haga cargo de la enorme responsabilidad que pesa en estos momentos sobre nosotros. Todo aquel pues, que perturbe el orden de la naciente República catalana será considerado como un agente provocador y como un traidor a la Patria". Lógicamente, el orden sagrado, que no había que tocar, era el de la propia burguesía y los destinatarios de este mensaje eran las masas, cenetistas principalmente, que llenaron a rebosar las cárceles catalanas.

En las semanas posteriores a la formación del gobierno de conjunción republicano socialista, una comisión del mismo se trasladó a Barcelona y combinaron promesas de un estatuto de autonomía con amenazas extremas de represión. El arreglo final dio a Catalunya una autonomía muy restringida que dejó a los políticos nacionalistas catalanes muy insatisfechos, hecho que, unido al descontento de las masas por las tímidas reformas del gobierno republicano, pudo ser utilizado provechosamente por aquellos para mantener su apoyo social.

El estatuto de autonomía catalán fue sometido a plebiscito el 2 de agosto de 1931, aprobándose por el 99% de votantes y más del 75% del censo electoral. En Barcelona, donde de un millón de habitantes, 370.000 no eran catalanes, sólo se registraron 3.000 votos en contra, lo cual refleja cómo incluso una parte importante de la base de la CNT participó activamente a favor del Estatuto. Josep Costa, obrero de la industria textil que era cenetista de toda la vida, simpatizaba con el concepto de la autonomía catalana: "No fui el único. En Catalunya amplios sectores de la CNT eran más o menos catalanistas". Al igual que ocurriera en los años setenta del siglo pasado, la lucha por la liberación social se vinculaba a la defensa de los derechos democrático nacionales oprimidos por la burguesía centralista

durante decenios. El nuevo Estatuto reconocía el catalán como lengua oficial al lado del castellano y daba a la Generalitat competencias en enseñanza, servicios internos de policía, transportes ferroviarios, marítimos y por carretera, obras públicas, justicia y ciertos aspectos de la recaudación de impuestos.

A pesar de todo, la situación de las masas continuó deteriorándose producto de una crisis económica cada vez más aguda. Cuando en septiembre de 1932 le fue concedido el Estatuto a Catalunya, Costa, el obrero cenetista, se llevó un sobresalto. De pronto se dio cuenta de que, aunque Catalunya tenía ahora su propio Gobierno, los intereses económicos seguían donde antes. “Mi patrono era catalanista. Siguió jodiéndome a mí y a los demás obreros igual que antes. Comprendí que debía ver claramente dónde estaban mis verdaderos intereses... cosa que en aquel momento no ofrecía demasiadas dudas...”¹⁰. Los trabajadores y campesinos vascos, sin embargo, no pudieron pasar por esta experiencia.

La cuestión nacional en las provincias vascas tuvo consecuencias aún más serias. Para la burguesía vasca de 1931, la autonomía significaba la defensa del catolicismo, del orden social y de las tradiciones fueristas. El 14 de junio, se presentó el Estatuto vasco. En Estella, los representantes de 480 municipios vascos (sobre un total de 520), incluido Navarra, aprobaron un proyecto de Estatuto general del Estado vasco que sería autónomo dentro de la totalidad del Estado español pero que se reservaría la función de las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

En las elecciones generales a Cortes Constituyentes el 28 de junio de ese mismo año, el PNV se presentó en alianza con los carlistas con el objetivo de frenar al movimiento obrero y la posibilidad de una revolución. Consiguieron 15 de los 24 escaños de las 4 provincias vascas (7 nacionalistas, 5 carlistas y 3 católicos independientes). El movimiento nacionalista, controlado por los clericales y conservadores, conformó un bloque de diputados reaccionarios en las Cortes Constituyentes.

En aquellos momentos, bajo el pretexto de que el movimiento nacionalista vasco era reaccionario, la coalición republicano-socialista se negó a aprobar el estatuto de autonomía, otorgando así a los nacionalistas vascos, amenazados por el auge del movimiento obrero, una nueva influencia entre las masas pequeñoburguesas del campo y la ciudad.

Las contradicciones entre los nacionalistas vascos y sus aliados carlistas se agudizaron hasta llegar a la ruptura el 9 de diciembre de 1931. A partir de ese momento, los carlistas profundizan un giro a la derecha de corte fascista iniciando su armamento con la ayuda de Mussolini.

Las tímidas reformas realizadas en el terreno de la cuestión nacional provocaron la ira inmediata de los sectores más reaccionarios, vinculados al ejército y a la burguesía centralista. Estos sectores veían con aprensión la escalada del movimiento obrero y jornalero, que exigía con huelgas y ocupaciones de tierra reformas efectivas para mejorar sus miserables condiciones de vida. Al mismo tiempo, se espantaban ante la posibilidad de “división de la nación española” y las concesiones “intolerables” realizadas a los “separatistas” catalanes. La derecha española

reaccionó levantándose en armas a cuenta de la autonomía catalana. La sublevación monárquico-militarista de Sanjurjo, que tuvo lugar en Sevilla en agosto de 1932, fue un intento de restaurar la monarquía e impedir que el Proyecto de Ley del Estatuto Catalán fuese aprobado en las Cortes. Cuatro meses antes, Calvo Sotelo, líder monárquico, había calificado el proyecto de ley de “explotación de la soberanía y robo del patrimonio”. La oligarquía vasca presionó al PNV para que apoyase el golpe de Sanjurjo. Muchos apellidos vascos, como Urquijo y Zubiría, estaban entre los conjurados, además de March, Goicoechea y José Félix de Lequerica, que actuaba como el principal agente político de los industriales de Bilbao y del Banco de Vizcaya, ligado a los jesuitas. Pero la *Sanjurjada* fue aplastada por la clase obrera sevillana con métodos revolucionarios.

En junio de 1932 se presenta un nuevo proyecto de Estatuto Vasco con el apoyo del PSOE. Los carlistas se oponen y este Estatuto es rechazado en Navarra por 123 municipios frente a 104.

El 23 de abril de 1933 se producen las primeras elecciones municipales republicanas. PNV y ANV (una escisión por la “izquierda” del PNV) logran los dos tercios de los escaños. La coalición republicano-socialista pierde apoyo popular después de que amplios sectores de las masas ven frustradas sus aspiraciones y comprueban la incapacidad del gobierno para acabar con la tiranía de los empresarios y terratenientes. La República burguesa muestra sus límites para resolver los problemas de la mayoría de la población.

El 5 de noviembre de 1933 se aprueba el Estatuto Vasco de autonomía por 411.756 votos contra 14.196, alcanzándose un 87% de participación, el más alto de la historia. Sin embargo, las tensiones entre las distintas provincias vascas se reflejan en los resultados: en la provincia de Álava se situó en torno al 42% y hubo un 11,9% de votos en contra. El 22 de diciembre de 1933, 57 gobiernos municipales de los 77 existentes en Álava se pronuncian contra el proyecto autonómico.

Paralelamente, la situación política se deterioraba por momentos en todo el Estado. Mientras la izquierda pierde terreno como efecto de la frustración por la política del Gobierno republicano-socialista, la derecha gana posiciones y se fortalece incluso en Euskadi. En las elecciones de noviembre de 1933, de 24 escaños electos en Euskadi, el PNV saca 12, principalmente en Guipúzcoa y Vizcaya, los carlistas y sus aliados sacan 10 y la izquierda 2 en Bilbao.

LA REACCIÓN, EL BIENIO NEGRO Y LOS NACIONALISTAS BURGUESES

La victoria de la derecha en las elecciones de noviembre de 1933 supuso una escalada en la ofensiva contra las tímidas reformas que el gobierno republicano-socialista había intentado aplicar en el campo, contra los salarios y las conquistas sociales de la clase trabajadora y contra los derechos democráticos, incluido el de las nacionalidades históricas, mermando la capacidad del movimiento obrero de

defenderse frente a la agresividad de los empresarios y terratenientes. La mayoría parlamentaria de la Confederación de Derechas Autónomas (CEDA) de Gil Robles, implicó la puesta en marcha de una política que intentaba allanar el camino para un régimen autoritario de corte fascista que acabara definitivamente con la amenaza de revolución y con el poder de las organizaciones obreras.

Como explica Juan Ignacio Ramos: “Las intenciones de la coalición liderada por Gil Robles eran bastante cristalinas, aunque luego la historiografía oficial haya intentado lavar su imagen. “Necesitamos el poder”, afirmaba Gil Robles en un mitin de la CEDA en el cine Monumental el 15 de octubre de 1933... “Queremos una patria totalitaria y me sorprende que se nos invite a que vayamos fuera en busca de novedades cuando la política unitaria y totalitaria la tenemos en nuestra gloriosa tradición”¹¹.

Desde el diario *El Debate*, órgano católico y portavoz oficioso de la CEDA, se manifestaban abiertamente simpatías por la obra de Hitler, especialmente respecto a la prohibición de las organizaciones obreras y la legislación laboral. Paralelamente, la patronal y los terratenientes, apoyándose en un parlamento mayoritariamente de derechas, procedían a eliminar las pequeñas reformas y avances impulsados por el anterior gobierno. Se designaron gobernadores provinciales especialmente reaccionarios que utilizaron toda la fuerza represiva a su alcance contra las organizaciones obreras y las huelgas. Se aprobó la ley de amnistía que incluía la libertad con todos sus derechos a los militares sublevados de 1932 a las órdenes de Sanjurjo, excluyendo obviamente a los anarquistas detenidos por la insurrección cenetista del 8 de diciembre de 1933. Este levantamiento, impulsado por la FAI (Federación Anarquista Ibérica), a la que pertenecían la mayoría de los miembros del Comité Nacional de la CNT, se saldó con una represión encarnizada por parte de la derecha con más de cien muertos y miles de heridos y detenidos.

En los giros que protagoniza durante todo el Bienio Negro, podemos apreciar claramente el carácter dual de los movimientos del nacionalismo vasco (PNV). Cuando el nacionalismo español reaccionario amenazaba con recortar sus privilegios optó por oponerse, apoyándose en su ala “izquierda” pero en cuanto la oposición de las masas amenaza con desbordar el régimen del que el mismo PNV forma parte, sus dirigentes se lanzan a los brazos de la reacción. Mientras en julio y agosto de 1934 el PNV se alinea con la oposición frente a los ataques de la derecha, al estallar las movilizaciones obreras en el mes de octubre gira en sentido contrario. Al declararse la huelga general, el PNV se coloca en la retaguardia de Gil Robles y del ejército comandado por Franco desde el ministerio de Guerra, que ahoga en sangre la insurrección obrera asturiana y vasca con un saldo de centenares de muertos y una represión feroz.

Pero mientras la burguesía vasca gira a la derecha por temor a la revolución, la derrota del proletariado alemán en 1933 y del austriaco en 1934 sacudieron a las organizaciones socialistas provocando un profundo giro a la izquierda de Largo Caballero y de las Juventudes Socialistas. En las páginas de *Leviatán*, Luis Araquistáin sacaría conclusiones de estos hechos: “La República es un accidente, hay que

volver a Marx y Engels, no con los labios, sino con la inteligencia y la voluntad. El socialismo reformista está fracasado. Nos engañamos casi todos y ya es hora de reconocerlo (...) No confiemos únicamente en la democracia parlamentaria, incluso si alguna vez el socialismo logra la mayoría: si no emplea la violencia, el capitalismo le derrotará en otros terrenos con sus formidables armas económicas”¹².

La lucha de clases en el Estado español adquirió con rapidez las formas de un choque revolucionario cuando la noche del 4 de octubre de 1934 se anunció la entrada de la CEDA en el gobierno. Largo Caballero y las Alianzas Obreras dieron la orden de la insurrección, si bien el movimiento demostró no estar lo suficientemente preparado salvo en el caso de Asturias.

En Euskadi la huelga general del cinco de octubre convocada por el PSOE y UGT fue secundada por la CNT y el PCE. El sindicato nacionalista ELA-STV (Solidaridad de Trabajadores Vascos, afín al PNV) se dividió, y en aquellas provincias donde su base obrera era mayor y estaba afectada por la presión del movimiento socialista, como en Vizcaya, se posicionó a favor de la huelga, aunque sin ningún fervor. En Vizcaya, el PNV propuso la “abstención absoluta de participar en movimiento de ninguna clase, prestando atención a las ordenes que, en caso preciso, serán dadas por las autoridades”. En contraste ELA-STV ordenó que “allá donde pueda trabajarse sin peligro acudan todos los trabajadores a sus labores, pero si para ello encuentran alguna dificultad o peligro, retírense sin participar en ninguna actividad no ordenada por la agrupación”.

A pesar del abstencionismo propugnado por el PNV y de la “prudencia” de la dirección de ELA-STV, las bases obreras de ambas organizaciones secundaron la huelga general con entusiasmo. La insurrección armada adquirió una mayor dimensión, especialmente en Eibar, Mondragón y la cuenca minera de Gallarta. La huelga fue prácticamente general en todas las localidades de Guipúzcoa y Vizcaya (con Bilbao, primer centro siderometalúrgico del país, a la cabeza) y prácticamente imperceptible en Vitoria. En el caso de las zonas mineras de Vizcaya y Eibar (principal núcleo de producción de armas del Estado español con más de una treintena de fábricas), la huelga se extendió hasta el lunes 15 de octubre. En la zona minera, 3.000 huelguistas tomaron el control de la situación y resistieron las arremetidas del ejército durante días. En Eibar y Mondragón, donde la insurrección armada triunfó en un primer momento, se proclamó la República Socialista. La postura del PNV fue de oposición a la huelga general y por supuesto a las pretensiones de establecer la revolución proletaria. No obstante, durante las jornadas insurreccionales de octubre no hubo manifestaciones en favor de la liberación nacional vasca por los obreros revolucionarios. La actitud de la dirección del nacionalismo vasco y sus vínculos declarados con la patronal y los sectores clericales provocan un hondo rechazo entre el movimiento obrero. Y a pesar de todo, como parte de una historia recurrente, El PNV se ve obligado a nadar entre dos aguas.

Por primera vez en la historia del Estado español, el proletariado revolucionario se enfrentaba con las armas en la mano al ejército de la burguesía para estable-

cer su propio gobierno, si bien el aislamiento impidió cualquier posibilidad de victoria. Todo el aparato del Estado se concentró en la tarea de aplastar al proletariado revolucionario asturiano. En la campaña militar contra la insurrección participaron cerca de 25.000 hombres. Carente de una dirección consecuente, el movimiento se fue disolviendo poco a poco, salvo en Asturias, donde se transformó en poder obrero, un poder que se extendió durante quince días dominando la vida económica, política y social de la región hasta la rendición de las columnas mineras el 18 de octubre. Esta experiencia demostró la necesidad de luchar unidos en todo el Estado y de contar con una dirección revolucionaria, suficientemente probada, para alcanzar la victoria.

Tras la derrota de la insurrección, la represión se ceba igualmente en Euskadi sin que el PNV oponga resistencia: "Ante la represión gubernamental, el PNV respondió replegándose, con un mayor acercamiento al Gobierno y repudiando públicamente a los "revolucionarios". Participó en el homenaje oficial a las víctimas de octubre, achacadas a los huelguistas y votó a favor en la moción de confianza presentada el 6 de noviembre de 1934 por Lerroux. Era la primera vez que el Partido votaba expresamente la investidura de un jefe de Gobierno español"¹³. Éste fue el papel de la burguesía vasca frente a los acontecimientos revolucionarios del 34. Mientras tanto, ¿qué hizo la burguesía catalana?

En Catalunya, la Alianza Obrera dominada por el BOC de Maurín se limitó a desencadenar la huelga y esperar que la Generalitat de Companys tomase la iniciativa. No hubo planes militares ni intentos serios para ganar a la base de la CNT, cuyos líderes en Barcelona se opusieron a la huelga. La política de Maurín era puramente nacionalista "El éxito o el fracaso depende de la Generalitat (...) es muy probable que la pequeña burguesía desconfíe de la causa de los trabajadores. Hay que procurar en lo posible que este temor no surja, para lo cual, el movimiento obrero se colocará al lado de la Generalitat para presionarla y prometerle ayuda, sin ponerse delante de ella..."¹⁴. A media tarde del 5 de octubre, Companys realizó por radio un llamamiento a la calma: "El Gobierno se hace cargo de sus responsabilidades y de su deber y en cada momento marcará la dirección de los acontecimientos con la asistencia y disciplina del pueblo que el Gobierno ha de conservar para la mejor eficiencia de la defensa de las libertades de Catalunya y de las esencias democráticas de la República". Pero ¿quién iba a defender las libertades en Catalunya y las "esencias democráticas", el ala izquierda de la burguesía catalana que ocupaba el poder, la Esquerra, o el proletariado?

Se tenían noticias de que en Sabadell, bajo la dirección de la Alianza Obrera, los trabajadores habían paralizado la ciudad. En Villanueva y Geltrú, Sitges y otras localidades había una situación insurreccional. En Manresa y Tarrasa la huelga era también unánime. Mientras los jóvenes, respondiendo al llamamiento de la Alianza Obrera desfilaban por la Plaza de Catalunya pidiendo armas, Companys volvió a intervenir advirtiendo que era necesario "abstenerse de violencias que el Gobierno se vería en el doloroso trance de reprimir". Sin embargo, cuando ya la presión

de las masas se hace insoportable y el movimiento amenaza con desbordarse y escaparse de su control, la burguesía, en nombre de la "República Catalana" reclama su derecho al poder exigiendo a las masas "obediencia absoluta". Este fue el papel de ERC. Presionado por la situación y superado por los acontecimientos, Companys proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española: "Catalunya enarbola su bandera y llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al Gobierno de la Generalitat,... el Gobierno que preside asume todas las facultades del Poder en Catalunya... y al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Catalunya el Gobierno provisional de la República". Como podemos apreciar una vez más, la burguesía catalana, ante los acontecimientos revolucionarios, reclama en nombre de Catalunya el poder para sí misma temerosa de perderlo.

La reacción no se hizo esperar. Cumpliendo las órdenes de Madrid, el general Batet, jefe de la Cuarta División del ejército, se dispuso a proclamar el estado de guerra en Catalunya. Cuando sus artilleros abrieron fuego contra el palacio de la Generalitat, el presidente Companys telefoneó al general Batet para comunicarle que se rendía. ERC, en representación de la burguesía "radical" catalana, capituló en 24 horas. Companys se rindió sin ofrecer prácticamente resistencia, de una forma ignominiosa. La bandera blanca sustituyó las catalanas izadas en los balcones principales de la Generalitat y del Ayuntamiento. Companys y los miembros del gobierno de la Generalitat fueron arrestados y el Estatuto de Autonomía fue suspendido.

Las burguesías catalana y vasca demostraron, en los hechos, su temor al empuje del proletariado. A pesar de su verborrea desafiante frente al Estado centralista, nunca lideraron consecuentemente la lucha por los derechos democráticos de las nacionalidades históricas. Su nacionalismo suponía una envoltura eficaz para esconder sus auténticos objetivos, que no eran otros que mantener sojuzgados y dividir a los trabajadores en su propio provecho. En este sentido, nunca trasgredieron los límites marcados por la República y por las relaciones de producción capitalistas.

La experiencia histórica volvió a confirmar que la cuestión nacional sólo podría encontrar solución vinculándose a un programa socialista de ruptura con el capitalismo. En esas circunstancias, la defensa por parte de los dirigentes obreros de la democracia burguesa bajo la forma de la "República democrática" contribuyó a desarmar políticamente al movimiento obrero y crear las condiciones para el triunfo de la contrarrevolución fascista. Al fascismo no se le podía oponer la "democracia parlamentaria", pues aquel surge precisamente de la incapacidad de la burguesía y el capital para mantener su dominación sobre la sociedad a través de las formas democráticas. En un período de ascenso revolucionario como el que registró el Estado español entre 1931 y 1936 la burguesía sacó la conclusión de que debía recurrir a los métodos del golpe de Estado y la guerra civil para aplastar al movimiento obrero y a sus organizaciones. En ese contexto no cabía la posibilidad de estabilizar el dominio burgués en un marco "democrático". Sólo con el progra-

ma de la revolución socialista y con una perspectiva internacionalista se podía combatir con éxito al fascismo.

El proletariado catalán estaba situado en la vanguardia del movimiento revolucionario, especialmente las masas anarquistas. Pero para tener éxito, el proletariado catalán debía ir necesariamente de la mano del resto de los trabajadores del Estado español y su fin no podía ser una república burguesa en Catalunya. Dicha consigna representaba una dejación total de las tareas del movimiento obrero por parte de sus dirigentes, que se plegaban de esta manera al nacionalismo burgués renunciando a un programa de clase independiente. En la práctica, sin una política que supusiera la ruptura definitiva con las relaciones económicas capitalistas y la superestructura política que de ellas se deriva, era imposible alcanzar la liberación nacional y social.

Tanto los derechos democráticos de las nacionalidades históricas como la solución al problema de la tierra, el paro y las condiciones de vida de la gran mayoría de la sociedad sólo se podían resolver mediante la toma del poder por parte del proletariado en todo el Estado, barriendo a la burguesía y a sus representantes fuesen de Madrid, Barcelona o Bilbao. Entregar la iniciativa a cualquiera de ellos representaba una traición al movimiento obrero y a la causa de la liberación nacional.

Trotsky, desde principio de los años treinta, alertó a los comunistas de la necesidad de unir férreamente el movimiento obrero en todo el Estado: “Catalunya está a la vanguardia. Pero si esta vanguardia no avanza al mismo paso que el proletariado e incluso que los campesinos de toda España, el movimiento catalán concluirá, todo lo más, con un episodio grandioso del estilo de la Comuna de París. La particular posición de Catalunya puede provocar tales resultados. El conflicto nacional puede agravarse de tal modo que la explosión catalana se produzca antes de que, España en su conjunto, esté madura para una segunda revolución. Sería una desgracia histórica que el proletariado catalán cediendo a la efervescencia, a la fermentación del sentimiento nacional, se dejara arrastrar a una lucha decisiva antes de haber podido ligarse estrechamente a toda la España proletaria. La actividad de la Oposición de Izquierda en Barcelona como en Madrid, podría y debería consistir en elevar todas las cuestiones a su dimensión histórica” (*La cuestión catalana. Carta a Nin, 23 de abril de 1931*).

LA BURGUESÍA VASCA DURANTE LA GUERRA CIVIL

Navarra fue el centro neurálgico donde se preparó el golpe militar del 18 de Julio. El Gobierno republicano envió allí al general Mola, que pudo, a sus anchas, con el ambiente y los medios necesarios, preparar el levantamiento. Mientras éste se producía, los Gobiernos civiles, ante las insistentes noticias, se dedicaron a tranquilizar a la población afirmando que no eran más que rumores, cuando ya se sabía a ciencia cierta el carácter del alzamiento. Todos estos “errores” no fueron producto de ninguna casualidad.

La oligarquía en el Estado español, incapaz de desarrollar las fuerzas producti-

vas y de mejorar las condiciones de vida de las masas, no podía mantener las formas democráticas de dominación. Ante la incapacidad de abortar el movimiento obrero mediante la represión que ejerció tras la fallida revolución de octubre del 34, había llegado a la conclusión de que la lucha de clases únicamente dejaba dos salidas: revolución o fascismo; socialismo o capitalismo.

La Lliga Catalana entró en 1936 en el bloque de las derechas con la consigna de Gil Robles “contra la revolución y sus cómplices”. Por su parte, la dirección del PNV desde el principio vaciló sin saber qué hacer: ¿apoyar el golpe y quedarse al margen o apoyar al Gobierno del Frente Popular?

En enero de 1936 una delegación del PNV se había trasladado al Vaticano, donde les recomendaron un frente católico en Euskal Herria para derrotar al Frente Popular. “La lucha es entre Cristo y Lenin”, repetía una y otra vez la curia vaticana. Pero los diputados del PNV no veían políticamente viable esa alternativa.

Finalmente el PNV decidió presentarse en solitario en las elecciones de febrero, sacando 9 escaños y perdiendo 28.000 votos. En el territorio vasco las derechas sacaron ocho escaños y los carlistas siete, haciéndose con la mayoría en Álava y Navarra, frente a los siete escaños del Frente Popular. Las tensiones provocadas por la polarización entre las clases sociales tiraban del PNV en todas las direcciones resquebrajándolo.

Cuando se produjo la sublevación militar fascista el 18 de julio de 1936, los órganos de dirección del PNV de Navarra y Álava la apoyaron sin titubeos. Mientras, en Guipúzcoa, se produjo un tenso debate interno en pro y en contra de apoyar el alzamiento fascista y en Vizcaya, la provincia dominante, superados por el movimiento de masas, no tenían otra opción que, o quedarse al margen y ser barridos por dicho movimiento, o intentar controlarlo oponiéndose al levantamiento fascista.

Los sectores profascistas del nacionalismo vasco no escatimaron esfuerzos. El Napar Buru Batzar del PNV de Navarra hizo pública el 20 de julio de 1936 una inequívoca declaración de apoyo al ejército de Franco: “El PNV, dada su ideología fervientemente católica y fuerista, no se ha unido ni se une al Gobierno en la lucha actual”. La represión en Navarra, sobre todo en el sur, donde los socialistas tenían más fuerza, fue brutal.

En Álava, mientras tanto, el general Alonso Vega preparó tranquilamente el alzamiento entre los días 16 y 18 de julio. Como respuesta, el Gobierno Civil tranquilizaba a la población diciendo “no pasa nada”, “la normalidad es completa”. En lugar de proporcionar armas a los trabajadores, los delegados de la República optaron por la más absoluta pasividad, lo cual permitió el rápido triunfo de los sublevados.

El día 19 de julio a las 7 de la mañana se declaró el Estado de guerra por parte de los tres jefes de las principales fuerzas militares de Vitoria. Hasta el día 20 no se declara una huelga general en toda la provincia. La huelga acabó ahogada en sangre el día 23.

En esas circunstancias, el Araba Buru Batzar publicó el siguiente comunicado: “El Consejo regional del PNV de Álava con el interés vivamente expuesto de evitar luchas fratricidas y derramamientos de sangre entre hermanos alaveses y para impedir que la anarquía se adueñe de su pueblo ordena a todos los afiliados que realicen todas sus obligaciones sociales y estén en todo momento a las disposiciones de las autoridades militares y delegados que se han constituido”.

Un sector del PNV apoyó abiertamente el golpe, como quedó acreditado en el manifiesto de Javier de Landaburu, diputado a Cortes, y Manuel Ibarondo: “Los suscritos, afiliados al PNV manifiestan: las circunstancias que venía atravesando la gobernación de España y que llevaban irremediablemente a la ruina moral y material de los ciudadanos han hecho que unos hombres de buena voluntad, a impulso exclusivo de su sano patriotismo, iniciaron y estén desarrollando activamente en estos dramáticos momentos una Cruzada de regeneración espiritual y fortalecimiento material. En el panorama que se nos ofrece no caben ya disyuntivas ante la anarquía reinante todavía en muchos pueblos españoles, ante la amenaza seria de un comunismo bárbaro que nada ha de respetar... ya no le cabe duda, y menos al que sea nacionalista vasco, el que desea para este país un mínimo de libertad y de bienestar que el comunismo nunca conseguiría... exhortamos a nuestros amigos nacionalistas a no impedir y coadyuvar al éxito inminente de quienes van a redimir tan precioso tesoro y a gritar con ellos viva España, viva el País Vasco”.

En Guipúzcoa, donde el PNV era el Partido más importante con 50.000 votos en las elecciones de febrero, el EBB se posicionó por la República en una reunión tormentosa. Una parte importante de la base nacionalista se movilizó junto a las fuerzas de izquierda desde el primer momento, mientras que la dirección estuvo en un constante bascular hacia el carlismo. A pesar de que el PNV declaró su apoyo a la República el 19 de julio y a pesar de su participación en la Junta de Defensa creada en San Sebastián, transcurrieron casi tres semanas antes de que en Guipúzcoa se formasen las primeras milicias de nacionalistas vascos, las llamadas Eusko Gudarostea. El poder en Guipúzcoa estaba en mano de las Juntas de Defensa que se formaron: la de San Sebastián, presidida por un socialista de izquierda con la participación de comunistas y cenetistas; la de Eibar, controlada por los socialistas; la de Irún por los comunistas y la CNT y la de Azpeitia presidida por Manuel de Irujo y enteramente controlada por el PNV. Fue esta junta, la de Azpeitia, la que inició la formación de las milicias vascas. Sin embargo, cuando los guardas entraron en combate en el valle del Urola, zona de la que se había hecho cargo la Junta de Azpeitia, se perdió sin lucha o con resistencia “muy discreta”, como afirmó el propio jefe de la artillería enemiga, comandante Martínez de Campos.

En los albores de la Guerra Civil, los dirigentes del nacionalismo vasco probaron la auténtica catadura de sus planteamientos políticos. Ajuriaguerra, dirigente del PNV, relata cómo él mismo, en la noche del 17 al 18 de julio, “tenía la esperanza de escuchar alguna noticia que nos ahorrase el tener que tomar una decisión: que uno u otro bando ya hubiese ganado la partida... A las 6 de la mañana decidi-

mos dar nuestro apoyo al Gobierno republicano (...) Tomamos esa decisión sin mucho entusiasmo (...) convencidos (...) de que, de habernos decidido por el otro bando, nuestra base se nos habría opuesto (...)”¹⁵.

El PNV se vio obligado a actuar de una forma menos ambigua en Vizcaya, donde la base obrera era mucho más importante. En realidad existía un claro riesgo para el nacionalismo vasco de perder el control de la situación si las posturas vacilantes se mantenían públicamente. Una actitud de ese tipo en Vizcaya podría haber representado un acicate para que las organizaciones obreras vascas adoptasen medidas revolucionarias como la expropiación de industrias y la implantación de órganos de poder obrero, al igual que en otras zonas del Estado donde la burguesía se colocó al lado de la reacción.

Las masas obreras en Vizcaya, fieles a su tradición, impidieron cualquier tentativa de golpe. La noticia de la sublevación del ejército en África corrió por Bilbao como un reguero de pólvora. Mientras los fascistas se movían en coches por el centro de la ciudad, oficialmente se insistía en que la situación estaba controlada. Desoyendo al Gobierno Civil, a primeras horas del día 18, miles de trabajadores se concentraron en Garellano, rodearon el cuartel e hicieron desistir de sus propósitos a los militares facciosos.

En contraste con la posición de ambigüedad calculada de los dirigentes del PNV, en el seno del movimiento obrero de inspiración nacionalista la actitud era mucho más clara. ELA-STV se declaró “inmediatamente al lado del pueblo”. Según su presidente, Manuel Robles, “la clase obrera no albergaba ninguna de las vacilaciones de las que daban muestras ciertos elementos del PNV”¹⁶. La clase obrera empujaba a su vez a la izquierda a la pequeña burguesía nacionalista radicalizada, que temía la pérdida de iniciativa del nacionalismo ante la reacción por un lado y la iniciativa de la clase obrera por otro. Acción Nacionalista Vasca (ANV), que, a diferencia del PNV, se presentó a las elecciones en las candidaturas del Frente Popular, ingresó inmediatamente en la junta de defensa del Frente Popular en Bilbao y los militantes de la ANV partieron enseguida para el frente.

Trifón Etxebarria *Etarte*, de Jagi-Jagi, movimiento juvenil partidario de la independencia, escindido del PNV antes de la guerra, fue a ver a Aguirre para sugerirle que Jagi-Jagi se apoderase de la primera partida de armas antes de que pudiesen descargarla. De este modo quedaría asegurada la superioridad de los nacionalistas y la causa de la independencia vasca. “Aguirre se mostró horrorizado. Eso sería traicionar al Frente Popular”. Yo, que tenía sólo 25 años, repliqué: “La única traición que conozco es la traición a mi país. (...) Pero Aguirre era demasiado honrado para aprovecharse de tal oportunidad. Siempre habíamos creído que el estatuto era una trampa muy parecida a aquella en la que Irlanda había caído después de la primera guerra mundial”¹⁷.

Los acontecimientos posteriores demostrarían que los intereses de clase de la burguesía vasca prevalecían sobre la pretendida lealtad al Frente Popular y el exceso de honradez de Aguirre negándose a aprovechar la situación para declarar la

independencia de Euskal Herria. Los movimientos erráticos y contradictorios de la dirección del PNV tenían su fuerza motriz en el devenir de unos acontecimientos que en aquellos momentos no podían controlar.

Es en Euskal Herria donde el papel reaccionario de la burguesía vasca quedó más evidente. Javier de Landaburu, escribió una carta a José Antonio Aguirre, fechada en Vitoria a 3 de agosto de 1936, transmitiéndole el sentir de los sublevados, donde se refleja claramente cuál fue *a posteriori* la actitud del PNV en el transcurso de la Guerra Civil: “Le hacen conocer [a José Antonio Aguirre] la preocupación de altos jefes militares por la suerte de Vizcaya y Guipúzcoa y que se extrañan de que los nacionalistas de ahí estéis de la mano de los rojos (...) si los nacionalistas de ahí os limitáis, mientras ahí manden los rojos, a ser guardadores de edificios y personas, si no tomáis las armas contra el Ejército, seréis respetados cuando el Ejército se apodere de esa zona”.

Hay muchas opiniones en el seno de la burguesía vasca y de destacados militantes del PNV que confirman cuál era realmente su postura. Juan Manuel Epalza (vicepresidente de los Mendigoixales, movimiento juvenil del PNV, de profesión ingeniero industrial), creía que, por encima de todo, la adhesión del PNV a la república significaba que el partido tenía la intención de mantener la ley y el orden en la retaguardia e impedir que la izquierda lo considerase su enemigo: “hasta la noche antes, nuestro verdadero enemigo había sido la izquierda. No porque fuese izquierda, sino porque era española y como tal, intransigente. Vacilamos durante dos semanas o más titubeando sobre si aliarnos con nuestros anteriores enemigos. De haber sido posible, nos habiéramos mantenido neutrales”. Sin embargo, como afirma él mismo: “estábamos decididos a impedir las atrocidades, a asegurarnos de que los de izquierdas no asesinaran, robaran ni incendiaran iglesias. Estábamos entre la espada y la pared. Era algo absurdo, trágico: teníamos más cosas en común con los carlistas que nos atacaban que con la gente con la que de pronto nos encontramos aliados...”¹⁸.

Éste era el sentir de la burguesía nacionalista vasca a la que el Gobierno de la República entregó la dirección de la lucha frente al fascismo. El objetivo, al igual que ocurriera en Catalunya, era impedir a toda costa que la lucha armada contra el levantamiento faccioso se transformara en una revolución social, hecho que estaba teniendo lugar en la mayor parte del territorio republicano. Ante todo había que evitar que las masas radicalizadas, especialmente la base del PSOE, UGT, PCE y CNT tomaran la iniciativa militar y la política; que la clase obrera pudiese el sacrificio y el arrojo en el combate, como ocurrió en la defensa de Bilbao, pero que la dirección política de la lucha quedara en manos de la burguesía vasca para aplastar la revolución y evitar que los trabajadores se hicieran con el poder efectivo. Según Pedro Basabilotra, secretario del jefe de la milicia del PNV, “la izquierda siguió siendo para nosotros un peligro tan grande como los fascistas. Sabíamos que en caso de ganar la guerra habría que librar un segundo asalto...”.

Juan Manuel Epalza, ingeniero industrial peneuvista, ya se estaba preparando para ese segundo asalto. “Sin ningún género de duda, la izquierda se volvería contra los nacionalistas vascos si salían victoriosos. Él y otros crearon un Estado mayor paralelo con el propósito de aprestarse para combatir a la izquierda. Cuando al País Vasco le fue concedido el autogobierno, pudieron prescindir de dicho Estado mayor, ya que a partir de entonces existió una sola autoridad y el PNV la controlaba”¹⁹.

La burguesía vasca temía mucho más a la revolución que al fascismo, que podría traer el “orden” y el respeto a la propiedad privada nuevamente. El rechazo frontal de Franco al nacionalismo vasco y catalán y a todo lo que oliera a separatismo, unido a su oposición a los estatutos de autonomía, permitieron a la burguesía vasca explicar a las masas su apoyo al Gobierno de la República en términos de defensa de los derechos democráticos de Euskal Herria. Sin embargo, lo que primaba por encima de todo eran sus intereses de clase y la burguesía vasca estaba firmemente dispuesta a dejar para mejores tiempos su autonomía si con ello impedía la revolución. Esta actitud determinó totalmente la política del PNV al frente del Gobierno Vasco. El hecho de que junto al PNV colaborasen otras organizaciones obreras no varió un ápice los resultados, ya que era el PNV quien imponía su política.

El 1 de octubre de 1936 las Cortes aprobaron el Estatuto de Autonomía del País Vasco que consistía en un texto breve por el que se concedía un grado de autonomía sensiblemente modesto a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; transfería competencias en legislación electoral, régimen interior, legislación civil, recursos naturales, transportes, organización de la justicia, policía y orden público; declaraba la cooficialidad del euskera y el castellano, reconocía la facultad de crear centros docentes propios aunque el Estado retenía los suyos y afirmaba expresamente la unidad de España. Además, determinaba que en el transcurso de la guerra regiría el País Vasco un Gobierno Provisional, delegando la elección del presidente de dicho Gobierno a los concejales que pudiesen emitir libremente el voto. En otras palabras, entregaba la presidencia al PNV, que controlaba una amplia mayoría de los 1.009 concejales, la mayor parte de Vizcaya, que votaron el 7 de octubre a José Antonio Aguirre como presidente del Gobierno Vasco. La formación del Gobierno de Aguirre representó la reaparición del poder del Estado burgués frente al poder revolucionario que frenó el alzamiento del 18 de julio en Vizcaya y Guipúzcoa.

La guerra en el País Vasco tuvo pues dos fases netamente diferenciadas. Una, la de las Juntas de Defensa, entre el 18 de julio y el 7 de octubre de 1936, en la que el poder regional y el esfuerzo de resistencia recayeron sobre las fuerzas políticas de la izquierda obrera. Otra, la fase del Gobierno vasco entre el 7 de octubre de 1936 y la caída de Bilbao, en la que el PNV asumió la responsabilidad tanto en la gobernación del País Vasco como en la dirección de la guerra.

En Euskadi el Frente Popular, apoyándose en el PNV, pudo evitar que una res-

puesta revolucionaria a la guerra llevase a la expropiación de industrias y bancos. Si esto se hubiese logrado se podría haber utilizado todo el potencial económico de Euskal Herria para combatir militarmente a Franco de una forma mucho más eficaz. La clave estuvo en el papel del PNV: su presencia al frente del Gobierno autónomo equivalió a una moderada reacción termidoriana que detuvo y recondujo la situación pseudo revolucionaria creada en Vizcaya y Guipúzcoa como consecuencia de la respuesta popular a la sublevación del 18 de julio.

El 7 de octubre de 1936 el presidente Aguirre constituyó el Gobierno Vasco. Uno de sus primeros objetivos fue establecer el mando único y la militarización de todas las milicias. “El Gobierno vasco promoverá el acceso del trabajador al capital, a los beneficios y a la coadministración de las empresas, pudiendo llegar a la incautación y socialización de los elementos de producción que estime necesarios para organizar rápidamente la victoria. Procurará en todo momento evitar lesión innecesaria en los intereses de los productores y protegerá decididamente al modesto industrial y al comerciante”. En el texto de este discurso podemos apreciar las presiones del movimiento obrero; sin embargo, toda esta fraseología no servía sino para posibilitar al PNV hacerse con el poder con el fin de proteger la propiedad privada de la banca y la industria que, en medio del conflicto, continuaron funcionando normalmente en manos de sus antiguos propietarios evitando ser nacionalizadas, como exigía la situación para abastecer la industria de guerra.

Esta situación era apreciada por muchos militantes honrados y sin embargo combatida por sus direcciones. Según Saturnino Calvo, joven minero comunista: “El gobierno vasco no sabía cómo sacar el máximo partido del potencial humano e industrial que se hallaba a su disposición. Y eso se debía a que no era un partido revolucionario. Temía que, en caso de ganar la guerra, se produjese un avance del socialismo, al que era hostil...”²⁰.

Como en el resto del Estado, la consigna de la izquierda en Euskal Herria fue, primero ganar la guerra, después la revolución, sin comprender que era imposible la primera sin llevar a cabo la segunda. De esta táctica únicamente salió beneficiada la burguesía vasca, catalana y española y más tarde la reacción fascista. Ésta fue la conclusión de muchos militantes comunistas a través de su propia experiencia, como explica Ricardo Valgañón, fundidor comunista: “Nuestro único deseo era ganar la guerra. Todo lo demás se dejaba para más tarde. La clase obrera, el Partido Comunista de Euskadi no presentaban reivindicaciones al Gobierno Vasco. Incluso cuando *Euskadi Roja*, el periódico del partido, trató de señalar que no estábamos luchando solamente por la liberación nacional, sino para cambiar la estructura de la sociedad, el PNV se las arregló para que lo censurasen” A su modo de ver, “El Partido Comunista estaba excesivamente callado. En aquel momento, la liberación nacional era por supuesto, la mayor conquista social para el pueblo de Euskadi. Si ganaban los fascistas, los vascos perderían su libertad y su democracia. A pesar de todo, el hecho de no conseguir conquistas sociales representa-

ba inevitablemente hacerle el juego a la burguesía vasca”²¹.

Al proletariado vasco le correspondió el mérito de evitar que Guipúzcoa y Vizcaya cayesen en manos del general Mola. Las columnas expedicionarias salían hacia los frentes entre vitores a la República, al Frente Popular, al proletariado. Los lemas colectivos eran lemas revolucionarios. Los improvisados batallones desfilaban a los sones de la *Internacional* y del *Himno de Riego*. Irujo, el diputado nacionalista por Guipúzcoa, criticaría el “culto a los ídolos de la revolución” que, de acuerdo con sus propias palabras, rendía la Junta de San Sebastián. El corresponsal de *The Times*, Steer, escribió que la base de la milicia guipuzcoana era “urbana y proletaria, no nacionalista vasca”. Lo mismo podría decirse de la milicia vizcaína.

El 3 de septiembre, una fuerza compuesta por militares insurgentes y requetés de Navarra capturó la población fronteriza de Irún, cerrando la frontera entre el País Vasco y Francia. En lo sucesivo las comunicaciones del norte con el resto de la zona del Frente Popular sólo pudieron efectuarse por mar o por aire. Antes de abandonar Irún, algunos de sus defensores pegaron fuego a ciertas partes de la ciudad. Diez días más tarde los del PNV rindieron San Sebastián al enemigo sin disparar un tiro. Una fuerza de gudarís (soldados nacionalistas vascos) se quedó en la ciudad para asegurarse de que las fuerzas en retirada no le prendieran fuego, como había ocurrido en Irún. Anteriormente ya habían desarmado a la milicia anarquista, que era partidaria de resistir.

Las encarnizadas luchas callejeras, que culminaron en el aplastamiento de la insurrección militar en la ciudad; el prolongado asedio del cuartel de Loyola, que no capituló hasta el 28 de julio; todo ese esfuerzo generoso del proletariado guipuzcoano fue traicionado por la burguesía vasca. Guipúzcoa permaneció en zona del Frente Popular menos de dos meses.

La rendición de San Sebastián hizo que de la noche a la mañana el frente se desplazase unos sesenta kilómetros hacia el oeste en dirección a las fronteras de Vizcaya, la única provincia vasca que seguía bajo el control del Frente Popular.

El fracaso sufrido en la defensa de San Sebastián suscitó varios enfrentamientos violentos en el seno del PNV. El Bizkai Buru Batzar (dirección del PNV de Vizcaya) afirmaba que si acudía a la defensa de Guipúzcoa, donde abundaban los hombres pero no las armas, la provincia caería igualmente y la defensa de Vizcaya saldría perjudicada. En la misma Vizcaya, el PNV (a diferencia de los otros partidos) no envió milicias al frente hasta los últimos diez días de septiembre, cuando el enemigo estaba casi en sus fronteras.

Los batallones nacionalistas vascos, formados principalmente por campesinos, constituían el elemento con mayor representación en el ejército. Incluso sus oficiales jóvenes eran conscientes de que el jefe del Estado Mayor, el coronel Montaud, un oficial de carrera que gozaba de la confianza del presidente Aguirre, era un derrotista. El teniente Luis Michelena, ex tenedor de libros de Rentería (Guipúzcoa) y militante del PNV, opinaba que deberían haberle fusilado. No se trataba de una

cuestión de lealtad, sino de la forma en que el coronel concebía la guerra. “Pensaba siempre que cualquier operación que planease saldría mal. Aunque claro, había pocos oficiales profesionales que valieran algo en el ejército vasco. La mayor parte tenían mentalidad de funcionario, les faltaba iniciativa y comprensión de las fuerzas populares que tenían bajo su mando. Resumiendo, sospechaban del pueblo...”²².

El presidente del PNV mantuvo al frente del ejército vasco a esta joya del derrotismo hasta que no pudo más; entonces el coronel Montaud fue sustituido como jefe del Estado Mayor y el presidente Aguirre se convirtió en el jefe supremo por sugerencia de los dirigentes estalinistas del PCE.

La pretendida eficacia del PNV para constituir cuerpos de ejército en poco tiempo, bien equipados, numerosos y con un mando centralizado y previsor que preparó el llamado cinturón de hierro para proteger Bilbao, no es más que una falsa cortina de humo para ocultar su felonía y su traición. En realidad el PNV, que durante semanas enteras se negó a levantarse en armas frente a los fascistas, no tuvo más remedio que reaccionar y ponerse al frente de un ejército con el fin de evitar que le superasen los acontecimientos y poder reconducir la situación protegiendo en todo momento, como su principal fin, la propiedad de la burguesía y a sus personas. Por su parte, el mando centralizado de las tropas fue utilizado para poner bajo las órdenes de la burguesía vasca a los batallones proletarios.

En cuanto a “la gran obra defensiva en Bilbao”, fue un completo fiasco. El cinturón de hierro inacabado carecía de protección contra ataques aéreos, tenía poca profundidad (10-15 kilómetros desde Bilbao), no disponía de líneas de apoyo escalonadas y dejaba fuera alturas importantes desde las que era fácilmente dominable. Al general Gamir, el examen del cinturón le resultó “desconsolador” y a Franco le pareció un error, un inmenso error. El 11 de junio de 1937 el cinturón bilbaíno fue roto después de que la artillería y la aviación machacasen un punto cercano a Larrebezúa, donde las fortificaciones estaban por acabar. Las fuerzas franquistas sabían por donde atacar: al comenzar la campaña se había pasado al enemigo el ingeniero Goicoechea, que había trabajado en las fortificaciones. “Habíamos confiado en él, lo considerábamos uno de los nuestros en el fondo porque procedía de una familia del PNV”²³, recordaba Juan Ajuriaguerra, presidente del PNV de Vizcaya. Sin embargo, él no podía ignorar los auténticos deseos de las “buenas familias” del PNV, propietarios de rentables industrias que a toda costa deseaban mantener, aunque fuese con otro régimen. De hecho se trataba de la segunda traición: el primer ingeniero que inició y planeó la línea defensiva había sido ejecutado por intentar pasar información al enemigo. Goicoechea, su ayudante, siguió trabajando en la línea. La tropa estaba perfectamente enterada de su defección. Tanto era así que bautizaron con su nombre un avión enemigo que venía en misiones de reconocimiento. Sin embargo, a juicio de Ramón Rubial, el cinturón de hierro era virtualmente inútil de todos modos. El tornero socialista que ahora mandaba el 5º batallón socialista comprobó que los fortines de cemento no estaban camuflados y que las trincheras eran anchas y rectas. “No nos inspiraba confianza”.

En el batallón de las JSU donde servía Saturnino Calvo, minero de 17 años, se oía la traición del PNV. Ellos sabían que era posible vencer de no haber estado al frente la burguesía nacionalista, que habrían podido contener al enemigo luchando en las montañas con una red adecuada de posiciones defensivas. “Pero para ello hacía falta una política de guerra que el gobierno vasco no estaba dispuesto a adoptar. Una política de tierra quemada, una guerra revolucionaria como en Madrid. Teníamos una gran ventaja sobre los defensores de Madrid: lo accidentado del terreno”²⁴. Pero en manos del PNV de poco servían las ventajas de una poderosa industria y de un terreno accidentado, muy apropiado para establecer líneas defensivas y obstaculizar el avance de las tropas.

El 17 de junio el Gobierno Vasco acordó la evacuación de Bilbao encargando su organización a una Junta de Defensa presidida por Jesús María de Leizaola, consejero de Justicia del Gobierno Vasco. Leizaola impidió que se cumplieran las órdenes del Gobierno Republicano de que se destruyeran edificios de valor estratégico e instalaciones industriales. En pocos días, entre el 22 de junio y el 2 de julio, el ejército de Franco completó la ocupación de Vizcaya conquistando sin resistencia todos los pueblos de la zona industrial y minera de la margen izquierda y las Encartaciones con sus industrias y minas intactas y con abundante material que pudo rápidamente ser utilizado e incluso exportado hacia Alemania para financiar la importación de más armamento para las tropas franquistas.

J. M. L. Espinosa, en su libro *Un pueblo en marcha*, llega a la conclusión de que las condiciones de la Guerra Civil eran idóneas para que el Gobierno Vasco hubiese declarado la independencia de Euskal Herria y luchado por ella, en lugar de apoyar a ninguno de los dos bandos. ¿Por qué el PNV no lo hizo? El 6 de mayo de 1937, apenas dos meses antes de la caída de Bilbao, la corriente nacionalista Jaggi-jagi dirige un comunicado a ANV, PNV y ELA-STV proponiendo un Frente Nacional con el que reorientar la lucha hacia la independencia. “Habrá que buscarse el apoyo de potencias a quienes pueda interesar el que Euskadi asegure su comercio internacional, como consecuencia de su libertad nacional. Igualmente deben buscarse ayudas y ventajas de orden bélico y económico, poniéndose inmediatamente en relación con quien pudiera suministrarlas... alcanzada la independencia harán que en el más breve plazo, el pueblo vasco por medio de una Asamblea democráticamente nombrada, se haga cargo de los destinos de la república vasca”. La burguesía vasca no lo hizo ni siquiera de forma testimonial porque su objetivo al iniciarse la Guerra Civil era preservar sus intereses de clase y también era esa su preocupación al abandonar Bilbao. La burguesía vasca al fin y al cabo era fiel a su trayectoria histórica comportándose como un tendero incapaz de ver más allá de sus míseros cuatro cuartos. En sus primeros pasos apoyó el absolutismo frente al liberalismo, más tarde la monarquía frente a la república y ahora, sin poder confesarlo, prefería el orden católico de Franco a la independencia. La libertad nacional le servía muy poco si no evitaba el peligro de la revolución.

Si Euskal Herria hubiese resistido, la guerra podría haber tomado otros derro-

teros y la revolución haber triunfado en todo el Estado. En esas circunstancias la burguesía vasca probablemente sí hubiera estado dispuesta a defender con las armas la independencia de Euskal Herria para mantener la propiedad privada de los medios de producción y preservar el Estado burgués. Su prioridad hubiese sido dividir y debilitar las fuerzas de la revolución y en dichas circunstancias, probablemente, hubiese encontrado el apoyo de las potencias aliadas por la misma razón.

Otra posibilidad habría sido que Euskal Herria fuera la última en caer ante las tropas de Franco. Desde luego no habría sido gracias al apoyo de potencias extranjeras, que se lo negaron. Euskal Herria podría haber resistido si los partidos obreros hubieran tomado el control de la industria y la producción, llevando hasta sus últimas consecuencias la revolución. En esas circunstancias, como un baluarte para debilitar al franquismo y demostrar a la clase obrera las ventajas de la revolución, ¿no hubiese sido correcto defender la independencia de una Euskal Herria roja y socialista? La burguesía vasca seguramente contempló ambas posibilidades y tomó su decisión. Los intereses de clase primaron sobre todo lo demás. Ésa es la lección.

Si en lugar de Euskal Herria pusiéramos el ejemplo más verosímil de Catalunya, tendríamos opciones similares. Ante una victoria de la revolución en todo el Estado, la burguesía catalana habría abanderado la independencia para preservar su dominación sobre la sociedad. Sin embargo, ante la victoria de la reacción en todo el Estado y de la revolución en Catalunya, la izquierda tendría que haber defendido la independencia para fortificar, consolidar y más tarde extender la revolución. El derecho de autodeterminación y la independencia no son categorías abstractas a defender siempre, en cualquier momento y lugar. Son instrumentos de la lucha entre las clases y desde el punto de vista del marxismo han de estar sujetos

* En cualquier caso e incluso en el caso polaco de 1916, Lenin seguía defendiendo la utilidad de la consigna del derecho de autodeterminación como fórmula para combatir el nacionalismo. Se trataba de ver cómo formularlo en cada momento, no de negarlo. Además de explicar como sólo de la mano de la revolución los polacos podrían conseguir la independencia, insistía en que los marxistas de la nacionalidad oprimida debían poner el énfasis en la unión de los trabajadores polacos y rusos, mientras que los marxistas de Rusia debían proclamar e insistir en el derecho de autodeterminación de Polonia para combatir el chovinismo ruso:

“Los socialdemócratas polacos no están hoy en condiciones de lanzar la consigna de independencia de Polonia, pues como proletarios internacionalistas no pueden hacer nada para ello sin caer, a semejanza de los fraquistas, en el más rastrero servilismo ante una de las monarquías imperialistas. Pero a los obreros rusos y alemanes no les es indiferente si habrán de participar en la anexión de Polonia (eso significa educar a los obreros y campesinos alemanes y rusos en el espíritu de la más ruin villanía, de la resignación con el papel de verdugos de otros pueblos) o si Polonia será independiente.

“La situación es, sin duda alguna, muy embrollada, pero hay una salida que permitiría a todos seguir siendo internacionalistas: a los socialdemócratas rusos y alemanes, exigiendo la absoluta libertad de separación de Polonia; a los socialdemócratas polacos, luchando por la unidad de la lucha proletaria en un país pequeño y en los grandes sin propugnar en la época dada o en el período dado la consigna de independencia de Polonia” (*Ibid.*). (NE)

a la defensa de los intereses generales del proletariado y de la revolución por encima de cualquier otra consideración.

Todos los éxitos logrados por el proletariado vasco y por muchos gudarís sinceiros que luchaban contra la reacción fueron dilapidados por la política de la burguesía vasca que, desde el Gobierno autónomo, se dedicó sistemática y astutamente a facilitar la victoria del “orden y el catolicismo”, como habían hecho abiertamente el Araba y el Napar Buru Batzar en Álava y Navarra, respectivamente. Desde un punto de vista militar, como afirma J. P. Fusi: “La ofensiva del Norte cambió el curso y la naturaleza de la guerra. La conquista de Vizcaya fue una de las claves en la victoria de Franco”.

Pero la cosa no acababa aquí. Aguirre, como el resto de la burguesía, era consciente de que mientras la revolución continuase latente en otras partes del Estado, particularmente en Catalunya, la amenaza contra sus propiedades no habría desaparecido. Tras la caída de Bilbao y antes de la entrega de las tropas vascas a los italianos, Aguirre tomó una iniciativa que él mismo relata en su libro *De Gernika a Nueva York*: “En avión me dirigí a Valencia, adonde llegué una tarde de julio de 1937. El objeto de mi visita era audaz. Iba a proponer el embarque inmediato de las divisiones vascas trasladándolas al frente de Catalunya (...) Las divisiones vascas en Catalunya hubieran servido de encuadramiento a muchos patriotas catalanes y constituido un elemento que hubiera devuelto al territorio republicano la fisonomía que era necesaria para presentarse ante Europa”. ¿A qué “fisonomía” se refiere Aguirre? Él mismo nos lo explica: “La incautación de empresas, incluso extranjeras, por parte de los sindicatos, la abundancia de emblemas comunistas y anarquistas en los primeros momentos de confusión, etc., restaban simpatías en el extranjero a una causa justa por todos los conceptos”. ¿Es posible expresar más claramente el odio de la burguesía nacionalista vasca a la revolución del proletariado?

Según relata Aguirre: “En Catalunya, la desorientación y la indignación de los patriotas catalanes crecía por momentos, pues se veían desbordados por las organizaciones extremistas, las menos en número (*sic*), pero superiores en audacia, y la autoridad catalana se encontraba sin medios coactivos de los que le había privado la rebelión militar (...) la llegada de las divisiones vascas hubiera levantado el espíritu de la verdadera Catalunya y cambiado el rumbo de las cosas”.

La burguesía vasca, incapaz de enfrentarse a los fascistas en Euskal Herria, ofreció lo que quedaba de su ejército para aplastar al proletariado revolucionario catalán. Las propuestas de Aguirre no fueron tenidas en cuenta por Companys y otras “personalidades extranjeras” a las que visitó. Su papel contrarrevolucionario hubiese quedado demasiado en evidencia. Prefirieron apoyarse en los dirigentes del PCE, que, siguiendo las indicaciones de Stalin, se aliaron a la burguesía republicana con el fin de ahogar todo el proceso revolucionario para “ganar la guerra”. El Gobierno de Negrín, llamado el “Gobierno de la Victoria”, sirvió para estos fines.

Así que Companys, Azaña y sus asesores le dijeron a Aguirre que si tenía tantas ganas de combatir por la República lo hiciesen en el frente Norte. Tras esta respuesta Aguirre declinó toda responsabilidad y voló “a Santander dispuesto a hacer aquello que mejor contribuyera a salvar el mayor número posible de hombres”. Dispuesto, en definitiva, a dar luz verde a la firma de una paz por separado con los fascistas italianos.

El PNV dio por finalizada su participación en la guerra tras la rendición de los batallones vascos en Santoña (Santander) en agosto de 1937. Su dirigente, Juan de Ajuriaguerra, se reunió con el mando italiano y firmó un acuerdo según el cual los soldados vascos, después de rendirse, quedarían libres y exentos de toda obligación de participar en la guerra. También se prometía que la población vasca no sería perseguida. El 25 por la noche entraron los italianos en Laredo y fijaron copias de la convención en todas las esquinas. La Junta de Defensa, formada por varios nacionalistas vascos, entregó la ciudad al coronel italiano Fergosi, al tiempo que dos barcos británicos fondeaban en Santoña para transportar a quienes prefiriesen trasladarse a Francia. Poco después se desmoronaron todas las ilusiones. La convención era papel mojado ya que el Cuartel General de Burgos había ordenado que de allí no saliese nadie. Los italianos emplazaron sus ametralladoras frente al puerto para obligar a desembarcar a los que ya estaban a bordo de los buques británicos. Algunos de sus jefes estaban indignados por el triste papel que les habían obligado a representar. Y los vascos allí concentrados fueron conducidos a cárceles y campos de concentración en espera de que se decidiese su suerte.

El PNV había cumplido fielmente su objetivo: cuidar los bienes de la burguesía vasca y evitar su expropiación o destrucción por parte de los revolucionarios. En su traición trataron también de salvar su pellejo dándole a Franco muestras de “buena voluntad” al ofrecer protección a los 2.000 fascistas que fueron liberados de las cárceles tras la caída de Bilbao y conducidos en la noche por los nacionalistas para que pudiesen llegar hasta las líneas franquistas con éxito.

Para los gudaris vascos el balance fue algo diferente. Se calcula que entre 6.500 y 10.000 murieron en la guerra y 5.500 fueron fusilados por las tropas de Franco en la retaguardia. Solamente en el bombardeo de Gernika perecieron en unas horas 1.500 hombres, mujeres, ancianos y niños inocentes por las bombas de la aviación alemana. El número de exiliados vascos, que apenas iniciaban un camino de horror, se calcula en al menos 100.000. La burguesía vasca salvó lo suyo, las masas lo dieron todo.

EL PAPEL DE LA BURGUESÍA CATALANA

El fenómeno más característico de la primera fase de la guerra fue que la iniciativa estaba enteramente en manos de las masas armadas. Los partidos y sindi-

catos obreros eran la columna vertebral del único poder que se levantó frente a la mayoría del ejército sublevado. Perdida la iniciativa, el Gobierno central se encontró suspendido en el aire. En los ministerios se esforzaban por asegurar la continuidad del Gobierno pero la autoridad se había hundido. Azaña era profundamente pesimista. No creía en la posibilidad de resistir y se sentía en desacuerdo íntimo con el giro revolucionario que, como contrapartida a la rebelión, tomaban los acontecimientos. El propio Azaña lo reconoció en *La velada de Benicarló*: “Por rechazo de la insurrección militar, hallándose el Gobierno sin medios coercitivos, se produce un levantamiento proletario, que no se dirige contra el Gobierno... La obra revolucionaria comenzó bajo un Gobierno republicano que no quería ni podía patrocinarla”. En realidad el gobierno republicano hizo todo lo posible por aplastarla, lo cual representaba entregar el proletariado atado de pies y manos al fascismo.

Si Madrid fue clave en la resistencia armada contra el avance del fascismo, Catalunya fue decisiva en el abastecimiento de tropas, alimentos, ropas y armas. El maravilloso proletariado revolucionario catalán, que ocupó y organizó la industria y el transporte como nunca había funcionado antes, logró, al mismo tiempo, que mejoraran las condiciones de vida de los trabajadores.

En Barcelona, el Comité Central de Milicias Antifascistas fue, durante los primeros meses tras el alzamiento, el verdadero poder y la Generalitat era un “verdadero gobierno de paja” que decretaba *a posteriori* lo que la calle ya había realizado. Si la burguesía catalana siguió estando al frente del poder fue porque la dirección de la CNT se lo entregó en contra de sus propias bases.

El 26 de septiembre la Generalitat formó un nuevo Gobierno. En él participaban la CNT, ERC, PSUC y el POUM. Una de las primeras medidas que adoptó fue el establecimiento del mando único y la disolución del Comité Central de Milicias, que representó el principio del fin del Consejo Regional de Defensa de Aragón.

Catalunya se convirtió en el eje y centro del proceso revolucionario y esto fue más acusado aún tras la caída del País Vasco. En aquellas circunstancias fue la Esquerra la encargada de mantener unido el cordón umbilical entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno central frente a las masas revolucionarias en una situación de doble poder. En la tarea de restablecer el aparato estatal burgués, la burguesía nacionalista catalana colaboró estrechamente con el Gobierno central en medio de un proceso revolucionario que, como hemos visto, barrió el aparato estatal y una buena parte de la propiedad privada de la industria y de la tierra, que pasaron a manos de los trabajadores y campesinos.

Tras las jornadas de mayo de 1937 en Barcelona, el Gobierno de la República eliminó la autonomía de Catalunya apoderándose de los ministerios catalanes de Interior y Defensa con el fin de desarmar a las patrullas obreras.

El gobierno republicano burgués utilizó la autonomía en Euskadi para darle el poder a la burguesía nacionalista, que preparó el camino de la reacción, mientras que la burguesía catalana, en nombre de la necesidad de someterse al gobierno

central, arrebató el poder a las masas revolucionarias, preparando igualmente el camino a la reacción.

LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y LA CUESTIÓN NACIONAL

La victoria de la izquierda en las elecciones de 1936 provocó el entusiasmo de las masas tras la pesadilla que representó el Bienio Negro. Los trabajadores pasaron a la acción ocupando las fábricas, las tierras y sacando a los presos políticos de las cárceles. En pocas semanas, los obreros y campesinos ya habían llevado a cabo el programa del Frente Popular sin esperar la opinión de las Cortes. Ya no le quedaba a la clase obrera otra tarea más que la total eliminación del capitalismo y la transición hacia el socialismo mediante un régimen de democracia obrera.

Tras el levantamiento militar del 18 de julio, el camino estaba despejado ya que la casi totalidad de los banqueros, terratenientes, industriales y generales se habían pasado al campo de Franco. En lugar de detentarlo la policía y el ejército, el poder pasó a manos de las milicias obreras en los núcleos proletarios e industriales más importantes. En esta situación, lo único que hacía falta era detener a los ministros burgueses y proclamar la República Obrera para poder llevar a cabo una guerra revolucionaria contra los ejércitos franquistas. No cabe la menor duda de que los obreros y campesinos, la base del PSOE, la UGT, la CNT el PCE y el POUM hubieran aceptado con entusiasmo esta alternativa. Pero los dirigentes de la izquierda estaban comprometidos con lo que era la sombra de la burguesía en el Frente Popular. Bajo la fuerte presión de los prietistas en el seno del PSOE y sus aliados estalinistas del PCE, que habían asumido el papel de los defensores más fervientes del orden burgués, se impuso, no sin una fuerte oposición, la idea de “primero ganar la guerra; después hacer la revolución”.

Los dirigentes de las organizaciones obreras tenían todo el camino despejado para llevar a cabo una política de independencia de clase, negándose a pactar con la burguesía y ganándose, con un programa socialista, a las masas de las nacionalidades oprimidas. La clase trabajadora era la única que podía dirigir este movimiento utilizando en el Estado español el mismo programa respecto a las nacionalidades que habían adoptado los bolcheviques en Rusia. Al fin y al cabo, la clase obrera en el Estado español no era más débil que en Rusia, sino todo lo contrario. Entre 1910 y 1930 la clase obrera industrial había aumentado en más del doble, alcanzando más de dos millones y medio de personas. Ello representaba el 26% de la población trabajadora, en comparación con el 16% de veinte años atrás. Sin embargo los dirigentes de las organizaciones obreras centraron toda su estrategia en la defensa de la República burguesa, que ni resolvió, ni podía resolver radicalmente, ninguno de los problemas fundamentales de la revolución democrática: el agrario, el de las nacionalidades, el de las relaciones con la Iglesia, el de la transformación de todo el mecanismo burocrático-administrativo

del Estado...

La organización obrera más fuerte en Catalunya era la CNT, que en 1931, en el momento álgido del conflicto entre la efímera República Catalana y el poder central, se declaraba dispuesta a luchar contra la independencia de Catalunya por todos los medios, sin excluir la “insurrección armada”. Su posición partía del hecho de que el nacionalismo era algo ajeno a los trabajadores, les dividía y era, por lo tanto, un prejuicio que había que combatir con todos los medios posibles. Esta postura, que trataba supuestamente de preservar la unidad revolucionaria del proletariado de la ideología nacionalista burguesa, no tenía en cuenta que negar la opresión nacional del pueblo catalán suponía objetivamente ponerse al lado del nacionalismo español. Cuando llegó la hora de la verdad, en 1936 y tras las jornadas de mayo de 1937 en que el movimiento obrero en Catalunya pasó a ser la punta de lanza de la revolución, el momento en que para vencer al fascismo era imperiosa la conquista completa del poder por parte de la clase trabajadora, los dirigentes anarquistas renunciaron a tomarlo en Catalunya. Se lo cedieron a la burguesía nacionalista catalana que, a través de Companys, se lo cedió a su vez al gobierno de Madrid, que lo utilizó para aplastar el movimiento revolucionario en Catalunya y en todo el Estado.

La única forma de unir al proletariado catalán con los demás pueblos ibéricos era a través de la defensa de sus derechos democrático-nacionales y, en primer lugar, del derecho a la autodeterminación. La defensa de este derecho, que obviamente suponía que las nacionalidades históricas decidiesen el grado de vinculación que querían mantener con el resto del Estado, incluida la independencia, no suponía que los revolucionarios hiciesen obligatoriamente agitación a favor de la

* El proceso en Finlandia fue el siguiente: durante el proceso revolucionario de Febrero a Octubre la burguesía finesa venía aumentando su influencia utilizando un discurso nacionalista, que se veía reforzado por la incapacidad del gobierno provisional de reconocer siquiera la autonomía. Cuando triunfó la revolución esa influencia estaba presente, indudablemente potenciada por el imperialismo como forma de socavar a los bolcheviques. Sin embargo ahí no acababa el problema. El que este sentimiento y la independencia de Finlandia estuviesen encabezadas por la contrarrevolución era un hecho que no se podía solucionar por la fuerza militar. Precisamente como mecanismo para atraer a las masas finesas y contrarrestar el peso del nacionalismo burgués, el gobierno soviético reconoció la independencia en diciembre de 1917. Sólo con hechos, tras décadas de opresión zarista, podían los comunistas demostrar que ellos eran distintos de los zares. Lenin lo explicó en repetidas ocasiones, incluso tiempo después de la guerra civil que aniquiló a los comunistas fineses. Sobre este punto polemizó con Bujarin, que defendía que como la revolución había triunfado y el derecho de autodeterminación era una reivindicación de tipo democrático-burgués había que obviarla y sustituirla por la fórmula abstracta de autodeterminación de los trabajadores. Lenin era claro: “Véase Finlandia: país democrático, más desarrollado, más culto que el nuestro. En él tiene lugar el proceso de separación, de diferenciación del proletariado, tiene lugar de una forma peculiar, mucho más dolorosa que en el nuestro. Los fineses han padecido la dictadura de Alemania, ahora padecen la de la Entente. Pero gracias a que nosotros hemos reconocido el derecho de las naciones a la autodeterminación, el proceso de diferenciación ha sido allí facilitado. Recuerdo muy bien la escena del Smolny, cuando hube de en-

separación. Por el contrario, los marxistas consecuentes luchaban por ese derecho democrático al mismo tiempo que defendían la unidad del proletariado en una Federación socialista de los pueblos ibéricos.

En Euskal Herria la CNT apostó por una posición diferente a la federación catalana dándole un “margen de maniobra” al Gobierno del PNV en 1936, ya que, según los anarquistas vascos, el federalismo que éste promulgaba era un factor “progresivo”. Esta postura es todavía más sorprendente si cabe porque la postura del PNV, que reprimió a los anarquistas vascos y censuró sus publicaciones, lejos de tener ni un ápice de progresismo, estaba dictada por el frío cálculo de mantener el control de la situación y apartar al proletariado vasco del camino de la revolución. La CNT vasca se hacía eco de la postura dominante en la izquierda de que era mejor tener al PNV “aquí que allá”, sin comprender que la burguesía vasca, en la defensa de sus intereses de clase, representaba la quinta columna de la reacción, su caballo de Troya en Euskal Herria.

La idea de que el PNV representa el ala “progresista” de la burguesía vasca si-

reglar el acta a Svinhufvud (traducido al ruso significa cabeza de cerdo), representante de la burguesía finesa, el cual jugó el papel de verdugo. Me estrechó la mano amablemente y cambiamos unos cumplidos. ¡Qué desagradable fue aquello! Pero había que hacerlo, porque entonces la burguesía finlandesa engañaba al pueblo, engañaba a las masas trabajadoras diciendo que los moscovitas, los chovinistas, los rusos querían ahogar a los fineses. Era forzoso hacerlo (...) Admitamos incluso que los *bashkires* derrocasen a los explotadores y que nosotros les ayudásemos a hacerlo. Pero esto es posible únicamente si la revolución ha alcanzado plena madurez. Y hay que hacerlo con cuidado, para no frenar con nuestra intervención ese mismo proceso de diferenciación del proletariado que debemos acelerar” (Lenin, *VIII Congreso del PC(b) de Rusia, 18-23 de marzo de 1919*. Del “Informe sobre el programa del partido”, pronunciado el 19 de marzo en *La lucha de los pueblos de las colonias y países dependientes contra el imperialismo*, Moscú, Editorial Progreso, págs 327- 328). En otro texto insistía: “Precisamente por haber reconocido la independencia de los Estados polaco, letón, lituano, estonio y finés nos ganamos lenta, pero infaliblemente, la confianza de las más atrasadas masas de los pequeños Estados vecinos, las más engañadas y sojuzgadas por los capitalistas. Este es, precisamente, el camino más seguro para arrancarlas a la influencia de sus capitalistas nacionales, el más acertado para conquistar su completa confianza y para conducir las hacia la futura República Soviética Internacional única” (Lenin, *Carta a los obreros y campesinos de Ucrania a propósito de las victorias sobre Denikin*, diciembre 1919, *op. cit.*, pág. 356).

De esta manera, la política bolchevique había posibilitado acercar a amplios sectores a la revolución, contrarrestando el nacionalismo burgués.

La situación era diferente cuando se planteaban la posibilidad de intervenir militarmente en apoyo de los trabajadores de estas naciones. En 1922 en su libro *La socialdemocracia y las guerras de intervención* (también conocido como *Entre el imperialismo y la revolución*) León Trotsky desarrollaba estas ideas:

“(…) El desarrollo económico de la humanidad actual tiene unas características profundamente centralistas. El capitalismo ha creado las premisas esenciales para la constitución de un sistema económico mundial único. El imperialismo no es más que la expresión rapaz de esa necesidad de unidad y de dirección para toda la vida económica del globo. Cada uno de los grandes países imperialistas está constreñido en los cuadros de su economía nacional y aspira a extender sus mercados. Su fin, más o menos ideal, es el monopolio de la economía universal. La rapacidad y el latrocinio capitalistas son ahora expresión de la tarea esencial de nuestra

que presente en la actualidad, a pesar de que los hechos históricos han puesto en evidencia una y otra vez que, más allá de su fraseología, el Partido Nacionalista Vasco es el partido de la clase dominante vasca.

La postura de los estalinistas era aún más centralista que la de la CNT catalana, como se ve en la declaración del Comité Central del PCE de enero de 1937: “Al mismo tiempo que los más consecuentes internacionalistas somos los más fieles luchadores y defensores de la República española; los más entusiastas defensores de la Patria española; los más fieles ardientes patriotas de la España democrática; los más decididos enemigos de toda tendencia separatista; los más convencidos partidarios de la unidad nacional, del Frente Popular, de la unidad popular (...) Las cuestiones particulares nacionales de los catalanes, vascos y gallegos están ligadas vitalmente con la cuestión nacional de toda España (...) Los intereses nacionales específicos, la pequeña Patria de los catalanes, vascos y gallegos, se ha convertido en parte inseparable de los intereses generales de la gran Patria de todos los pueblos de España”.

época: la coordinación de la vida económica de todas las partes del mundo y la creación, en interés de toda la humanidad, de una producción mundial armónica, penetrada del principio de la economía de fuerzas y medios. Ello también es la tarea del socialismo. Es un hecho que el principio del derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos, no puede estar por encima de las tendencias de unificación características de la economía socialista. En este sentido, ocupa en el curso del desarrollo histórico el lugar subordinado que le cabe a la democracia. El centralismo socialista no puede, por lo tanto, ocupar inmediatamente el lugar del centralismo imperialista. Las naciones oprimidas deben, por lo tanto, tener la posibilidad de revitalizar sus miembros anquilosados bajo las cadenas de la sujeción capitalista. Cuanto tiempo durará el período en que Finlandia, Checoslovaquia, Polonia, etc., se sentirán satisfechas con su independencia nacional es un problema cuya solución depende ante todo del curso general del desarrollo de la revolución social. (...)

“La revolución del proletariado no podría tener como tarea o como método la supresión mecánica de las nacionalidades y la cimentación forzada de los pueblos. La lucha en el dominio del lenguaje, de la instrucción, de la literatura, de la cultura le es completamente ajena, porque su principio rector no es la satisfacción de los intereses profesionales de los intelectuales o los intereses nacionales de los comerciantes, sino la satisfacción de los intereses fundamentales de la clase obrera. La revolución social victoriosa dejará a cada grupo nacional la facultad de resolver como estime conveniente los problemas de su cultura nacional, pero la revolución unificará —en provecho y con asentimiento de los trabajadores— las tareas económicas cuya solución racional depende de las condiciones históricas y técnicas naturales, pero no de la naturaleza de los grupos nacionales. La Federación Soviética creará una forma estatal extremadamente móvil y ágil, que unirá las necesidades nacionales y las económicas de la manera más armónica.

“Entre el Occidente y el Oriente, la República soviética surgió con dos lemas: dictadura del proletariado y derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos. En ciertos casos, esos dos estadios pueden quedar separados el uno del otro por algunos años o quizá por algunos meses. Para el inmenso Oriente, este intervalo de tiempo se medirá seguramente por decenas de años. (...)

“Para nosotros, la independencia nacional ha sido y sigue siendo todavía la etapa histórica, inevitable en muchos casos, hacia la dictadura de la clase obrera que, en virtud de las leyes de la estrategia revolucionaria, manifiesta, aún en el curso de la guerra civil, tendencias profundamente centralistas, opuestas al separatismo internacional y en concordancia con las necesidades de la economía socialista racional, metódica del futuro.

Los estalinistas exigían la renuncia a la defensa de los derechos democráticos de las nacionalidades oprimidas, lo mismo que exigían renunciar a la lucha por el socialismo, con el pretexto de la defensa de una república con un carácter netamente burgués y centralista. Sin embargo, esta postura se combinaba de forma oportunista con la consigna de “hacer suyo” el movimiento nacionalista e “integrar al Partido Comunista” en este movimiento.

Por su parte, la posición de la dirección del Partido Socialista fue plegarse al dictado de la burguesía republicana. En general, el PSOE defendió el nacionalismo español a ultranza agitando la autonomía catalana y negándose al País Vasco al instaurarse la República. Indalecio Prieto, líder de los socialistas vascos, afirmaba en 1931: “El nacionalismo de derechas es un instrumento de la reacción”, lo cual era totalmente correcto; sin embargo, era necesario distinguir entre los móviles reaccionarios de la burguesía nacionalista y las bases de dicho nacionalismo, que, entre campesinos, obreros y pequeña burguesía, expresaba su indignación social y por tanto era un fenómeno netamente progresista. La actitud hostil del PSOE hacia los derechos democrático-nacionales ayudó enormemente a la burguesía vas-

“¿Cuánto tiempo necesitará la clase obrera para liberarse de sus ilusiones de independencia nacional y dedicarse a la conquista del poder? He aquí una pregunta cuya solución depende de la rapidez del desarrollo revolucionario (que ya hemos señalado), así como de las condiciones internas y externas peculiares de cada país. En Georgia la independencia nacional ficticia duró tres años ¿era verdaderamente necesario tres años o eran bastante tres años para que las masas trabajadoras de Georgia se desembarazaran de sus ilusiones nacionales? (...) Para nosotros, la cuestión no se resuelve por los métodos de la estadística democrática, sino por los métodos de la dinámica revolucionaria, en suma, ¿de qué se trata en este caso? De hecho, de que la revolución soviética georgiana, victoriosa con la indudable participación del Ejército Rojo (hubiese sido una traición el no ayudar a los obreros y campesinos de Georgia con la fuerza armada, ya que disponíamos de esa fuerza a nuestra disposición), se produjo después de una experiencia política de tres años de independencia nacional, en unas condiciones que le aseguraban no solo éxito militar temporal, sino el verdadero éxito político, es decir, la facultad de engrandecer y consolidar los fundamentos soviéticos en la misma Georgia. (...)”

“Tal como sus mentores en las cancillerías diplomáticas burguesas, los políticos de la Segunda Internacional hacen irónicas muecas cuando nos oyen hablar del derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos. ¡engañabobos, trampas del imperialismo rojo! exclaman, en realidad, esas trampas las pone la historia misma, que no resuelve los problemas en línea recta. En todo caso, no somos nosotros los que transformamos en trampas los zigzag del desarrollo histórico, porque, reconociendo de hecho el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos, enseñamos siempre a las masas su significación histórica restringida y no le subordinamos, en ningún caso, los intereses de la revolución proletaria. (...)”

“La República Soviética no se dispone a sustituir con sus fuerzas armadas los esfuerzos revolucionarios del proletariado de otros países. la conquista del poder del proletariado debe ser el fruto de su propia experiencia política. Esto no significa que los esfuerzos revolucionarios de los trabajadores (de Georgia, por ejemplo) no puedan encontrar ayuda armada del exterior, esa ayuda debe llegar en el momento en que la necesidad se haya consolidado por el desarrollo anterior y haya madurado en la conciencia de la vanguardia revolucionaria sostenida por la simpatía de la mayoría de los trabajadores. estas son las normas de la estrategia revolucionaria y no el ritual democrático” (...) (Trotsky, *Entre el imperialismo y la revolución*, Barcelona, Ediciones R. Torres, 1976, págs 129-134). (NE)

ca durante los años en que el Partido Socialista necesitaba fortalecerse para enfrentarse a la reacción. Y finalmente, cuando estalló el conflicto a muerte entre el socialismo y la reacción, la dirección del PSOE, olvidando sus propias palabras, en lugar de corregir un error, cometió otro mayor al dar todo su apoyo en el momento decisivo al PNV.

Aparentemente, la incongruencia presidió la actitud de los dirigentes obreros respecto a la cuestión nacional, caracterizada por continuos bandazos, desde el apoyo al nacionalismo español más estrecho, a la subordinación a los nacionalistas burgueses. En realidad, su postura respecto a esta cuestión, como la cuestión agraria, estaba sujeta a su orientación estratégica de no asustar a la burguesía dando continuas muestras de “sensatez” a sus aliados burgueses. En el texto *Leción de España: última advertencia*, escrito en diciembre de 1937, mostrando los tremendos errores de dirección de los socialistas, estalinistas, anarquistas y del POUM, Trotsky explica cómo “la negativa a conquistar el poder lanza inevitablemente a toda organización obrera a la charca del reformismo y de hecho la convierte en un juguete de la burguesía. No puede ser de otro modo dada la estructura de clase de la sociedad”.

El estalinismo fue quien llevó esta táctica contrarrevolucionaria de forma más consecuente, convirtiéndose en el principal apoyo de la burguesía para cortar las cabezas de los revolucionarios a través de la GPU. A pesar de que el PCE inicialmente era un pequeño grupo, elevó su autoridad ante las masas gracias a los abastecimientos militares provenientes de la URSS pero el Gobierno soviético puso como condición de su colaboración una serie de medidas decisivas contra los revolucionarios, deshaciéndose así de los adversarios peligrosos. Como explica Trotsky: “La GPU se hizo dueña de la situación sólo porque defendió más consecuentemente que los demás, es decir, con más artimañas y crueldad, los intereses de la burguesía contra el proletariado”²⁵.

En el contexto de la izquierda revolucionaria de la época, tan sólo la Oposición de Izquierdas, influenciada por León Trotsky, que en el Estado español adoptaría el nombre de Izquierda Comunista, tenía una posición de clase consecuente ante el problema nacional. En 1931, el grupo trotskista aprobó la siguiente tesis sobre la cuestión nacional que fue publicada en el número 2 de la revista *Comunismo*, del mes de junio: “La emancipación nacional no puede ser obra más que de las grandes masas populares. En ellas se apoyó la burguesía en todo el transcurso del siglo XIX. Hoy, esto no es posible, porque ha surgido una fuerza nueva, el proletariado, cuyo papel en la vida económica lo coloca frente a la burguesía y le impulsa a ejercer la hegemonía en todos los grandes movimientos populares. Por esto, la burguesía, en todos los momentos decisivos retrocede, traicionando el movimiento. La emancipación nacional es una de las reivindicaciones de la democracia y, por esto, el proletariado no puede desentenderse de ella, adoptando una actitud de inhibición, escudándose en un internacionalismo abstracto, que se convierte, de hecho, en un sostén de la política del centralismo reaccionario, de ope-

sión de unas nacionalidades por otras. ‘Concebir que la revolución social es posible —decía Lenin— sin la insurrección de las pequeñas naciones en las colonias y en Europa sin explosiones revolucionarias de una parte de la pequeña burguesía con todos sus prejuicios, sin los movimientos de las masas proletarias y semiproletarias conscientes contra los terratenientes, el yugo clerical, monárquico, nacional, etc. Pensar así significa renunciar a la revolución social... Quien espere una revolución social “pura” no la verá, es un revolucionario verbal que no comprende la revolución verdadera”²⁶.

La posición marxista, comunista, siempre había sido apoyar incondicionalmente todo lo que hubiera de democrático y de lucha contra la opresión en el movimiento de emancipación nacional; como señalaba Lenin, los comunistas somos “los enemigos más decididos y consecuentes de toda opresión”. Pero al hacerlo, los marxistas evitamos por todos los medios identificarnos con el nacionalismo de la burguesía de la nación oprimida, que tiende a subordinar los intereses de clase del proletariado al principio nacional, al tiempo que combatimos las aspiraciones explotadoras de la burguesía de la nación dominante, que explotando los legítimos sentimientos de solidaridad supranacional de los obreros, pretende convertir a éstos en cómplices de su política de opresión nacional.

El principio que los comunistas españoles han de defender con toda energía es el reconocimiento del derecho indiscutible de las nacionalidades a disponer libremente de sus destinos, sin excluir el derecho a la separación, si ésta es la voluntad de la mayoría de la población. Ningún demócrata sincero —y no hay partidarios más sinceros de la verdadera democracia que los comunistas— puede pronunciarse contra este principio. Pero una cosa es defender ese derecho y otra la cosa en sí. Como decía Lenin: “El reconocimiento del derecho al divorcio no excluye la agitación contra el divorcio”.

Tan importante es tener una posición política correcta como encontrar el camino para llegar a las más amplias masas y ganarlas al programa de la revolución y para ello hace falta una táctica y una estrategia adecuada. La Izquierda Comunista, liderada por Andreu Nin, se negó a ganar a las Juventudes Socialistas cuando éstas estaban girando hacia posturas leninistas, permitiendo así que fuesen atraídas por los estalinistas. Ganar a los sectores más avanzados de la juventud habría sido la clave para influir en el PSOE, en la UGT y por tanto pasar de ser un pequeño grupo a una opción de masas determinante para garantizar el triunfo de la revolución. No fue éste su único error. La formación del POUM, que en teoría apoyaba la fórmula de la revolución permanente, en la práctica llevó la misma política de colaboración de clases, participando en el Frente Popular y en el Gobierno de Catalunya. “En vez de movilizar a las masas contra los jefes reformistas, incluidos los anarquistas, el POUM trataba de convencer a estos señores de las ventajas del socialismo sobre el capitalismo”. (...) “Para no separarse de los jefes anarquistas se abstuvieron de organizar sus propias células en la CNT y en general no hicieron ningún trabajo en ella. Para eludir conflictos agudos renunciaron a realizar

trabajo alguno en el Ejército republicano. En lugar de esto edificaron sus ‘propios sindicatos’ y ‘sus propias milicias’, que defendían sus propios edificios y se ocupaban de sus propios sectores del frente. Al aislar a la vanguardia revolucionaria de la clase, el POUM debilitaba a la vanguardia y dejaba a las masas sin dirección. Políticamente el POUM ha permanecido más cerca del Frente Popular —como ala izquierda— que del bolchevismo. Si el POUM ha sido víctima de una represión sangrienta y falaz, ha sido porque el Frente Popular solamente podía cumplir su misión de acabar con la revolución socialista destrozando, pedazo a pedazo, su propio flanco izquierdo”²⁷.

La experiencia de la Guerra Civil demostró que la cuestión nacional pudo haberse resuelto al, igual que en la Unión Soviética, mediante la toma del poder por parte de la clase obrera y la creación de una Federación Socialista de Nacionalidades Ibéricas. La política de pactos auspiciada por el Frente Popular con lo que era realmente la sombra de la burguesía, la burguesía republicana, “progresista, proeuropea, moderna” y la subordinación de la acción revolucionaria de las masas de trabajadores y campesinos pobres a la defensa de la llamada “república democrática” sin afectar en nada las bases de dominación del capitalismo, creó todas las condiciones políticas y militares para el triunfo de la contrarrevolución burguesa en la forma de la dictadura franquista. El saldo final fue una horrible derrota para el movimiento obrero de todo el Estado, la práctica desaparición de sus organizaciones a manos de la represión despiadada del ejército franquista y las fuerzas de choque falangistas y, finalmente, la aceleración de los preparativos de la Segunda Guerra Mundial.

La heroicidad de los trabajadores, mujeres y jóvenes de todos los rincones del territorio ibérico ha quedado grabada en la memoria histórica del proletariado mundial. Todas las condiciones objetivas para el triunfo de la revolución socialista estaban maduras en el Estado español en los años treinta. Pero faltaba el factor consciente, el partido revolucionario, el Estado Mayor de la revolución que, con una política auténticamente socialista, pudiese liderar con éxito la ofensiva del proletariado revolucionario. Faltaba un partido bolchevique como el que existió en Rusia durante el proceso revolucionario de 1917. Esa ausencia se pagó con sangre, cárcel y represión por parte del fascismo. Casi cuarenta años de negra dictadura cubrirían la historia posterior del país.

III. La dictadura y el surgimiento de ETA

LA DICTADURA DE FRANCO

Franco llegó al poder después de la matanza de cientos de miles de obreros y campesinos. Su triunfo y la liquidación de la Segunda República supusieron la anulación de los estatutos de autonomía y la más rabiosa represión contra los derechos democrático-nacionales, la lengua y la cultura. En el BOE del 20 de junio de 1937 se anula el concierto económico para Vizcaya y Guipúzcoa, no así para la lealísima Navarra ni para Álava, que realizó “aportaciones valiosísimas a la causa Nacional”.

El discurso de José María de Areilza como alcalde de Bilbao, pronunciado el 8 de julio de 1937, deja clara la visión del nuevo régimen sobre lo vasco: “Que quede esto bien claro: Bilbao, conquistado por las armas. Nada de pactos y agradecimientos póstumos. Ley de guerra, dura, viril, inexorable. Ha habido, ¡vaya que si ha habido!, vencedores y vencidos. Ha triunfado la España una, grande y libre; es decir, la España de la Falange Tradicionalista. Ha caído vencida, aniquilada para siempre, esa horrible pesadilla siniestra y atroz que se llamaba Euskadi y que era una resultante del socialismo prietista, de un lado, y de la imbecilidad vizcaitarra, por otro... Vizcaya es otra vez un trozo de España por pura y simple conquista militar”²⁸.

El 26 de enero de 1939, cuando por las calles de Barcelona desfilan las tropas de Franco, sale a recibir las una masa de gente probablemente mayor que en Madrid unos meses después. Estos catalanes de Franco eran sobre todo los burgueses locales, que estaban dispuestos a canjear la pérdida de poder político por la devolución de sus propiedades, a los que se unían además sectores de las clases medias y profesionales políticamente moderados seguidores de la Lliga.

En el proyecto de “España Una Grande y Libre”, Franco y sus colaboradores más estrechos diseñaron un Estado que se convirtió en una cárcel para los pueblos y las nacionalidades históricas. En la concepción de un país que iría a reencontrarse con su viejo pasado imperial y que había triunfado sobre “el comunismo”, el régimen franquista pretendió establecer un modelo económico autárquico que pudiese funcionar al margen del mercado mundial. Para finales de los años cua-

renta el modelo autárquico conseguiría, entre otros logros, “agotar los recursos del país, disparar de forma irrefrenable la inflación, hundir el nivel de vida de las masas, deteriorar la calidad de la producción, incrementar la corrupción, ahogar las iniciativas más innovadoras, estrangular la producción de energía, arruinar los canales comerciales tradicionales, repeler la inversión extranjera, atrofiar los sectores productivos y viciar las transacciones comerciales”²⁹.

En 1940, mientras los ministerios militares obtuvieron un 27,3% del presupuesto, a Obras Públicas se le asignó apenas un 10% y a Educación Nacional sólo un 5,5%. En 1945 las proporciones fueron 40,3% para Defensa, 6,9% para Obras Públicas y 4,7% para Educación. Los salarios a mediados de la década de los años cuarenta tenían un poder adquisitivo que rondaba el 50% respecto a 1936, mientras que las ganancias de la burguesía eran fabulosas. Tomando como base 100 en 1936, la contratación de renta fija en Bilbao alcanzó el índice 3.107,8 en 1944. Las instituciones financieras vizcaínas pasaron de tener en 1941 depósitos por valor de 1.076,6 millones de pesetas a 9.419,4 millones en 1954. En aquellos años, Barcelona era al mismo tiempo la ciudad de la opulencia y de la miseria donde, según Dionisio Ridruejo, “Nunca los pobres habían jadeado más. Nunca los ricos habían ostentado más su riqueza, cosa que, en general, no había sido el fuerte del prudente burgués catalán”.

Por su parte, los grandes terratenientes se benefician tanto de la mano de obra barata y dócil, como de las enormes posibilidades de enriquecimiento ilícito que el mercado negro ofreció hasta bien entrados los años cincuenta. Una vez más la burguesía española encontraba en la economía parasitaria su forma de extraer fácilmente ganancias exorbitantes a costa de la pobreza, la miseria y el hambre del pueblo. Este parasitismo supuso que mientras los países que sufrieron la guerra mundial recuperaron en su mayoría los niveles productivos prebélicos a los cuatro años de acabado el conflicto como media, en el Estado español hubo que esperar hasta 1954 para alcanzar el mismo nivel. A principios de los años cuarenta había, a costa de los sectores secundarios y terciarios, 700.000 trabajadores agrícolas más que antes de la Guerra Civil. Más de seis millones de hectáreas que habían sido tomadas directamente por el campesinado fueron devueltas a sus antiguos propietarios, que además se quedaron con las tierras y bienes de los vencidos.

La obsesión de la burguesía centralista contra el separatismo nacionalista encontró su medida en la actuación de la dictadura. El uso público y escrito del euskera fue prohibido y cualquier manifestación cultural propia, castigada con saña. La enseñanza de la lengua, la tradición y el arte vasco y catalán era una tarea clandestina. Todas las conquistas de la autonomía fueron suprimidas.

En Gernika, ciudad símbolo machacada por las bombas fascistas, el 2 de noviembre de 1949 el alcalde envió un requerimiento a “familiares y propietarios de tumbas o panteones donde figuran inscripciones en vascuence para que sean retiradas las losas y sustituidas las citadas inscripciones por otras en castellano” Esto no impidió que una delegación de notables de la oligarquía vasca entregase

años más tarde al Caudillo “la medalla de oro y brillantes de la ciudad de Gernika”. Dicha delegación estuvo encabezada por Augusto Unceta Barrenechea, alcalde de Gernika y vicepresidente de la Diputación de Vizcaya en 1966.

La persecución del euskera llevó a la promulgación de leyes específicas que multaban a quien lo utilizase en lugares públicos e incluso se prohibió utilizar nombres vascos en el Registro Civil. “La Orden 14-V-1938 (B.O. 21/5/1938) Normas concernientes a la inscripción en el Registro Civil. Hay un buen número de nombres que no solamente están expresados en idioma distinto al oficial castellano sino que entrañan una significación contraria a la unidad de la Patria... La España de Franco no puede tolerar agresiones contra la unidad de su idioma... Debe señalarse también como origen de anomalías registrales la morbosa exacerbación en algunas provincias del sentimiento regionalista... Tal ocurre en las Vascongadas, por ejemplo, con los nombres de Iñaki, Kepa, Koldovika y otros, que denuncian indiscutible significado separatista”³⁰. El euskera retrocedió drásticamente: de hablarlo unas 700.000 personas en los años treinta descendió a unas 525.000 en 1954.

En Catalunya, se reestableció la división territorial de las cuatro provincias, se expulsó a más de la mitad del profesorado de la Universidad de Barcelona y fueron cesados más de 25.000 empleados de la Administración Pública. Al tiempo, centenares de maestros de Castilla y Extremadura eran enviados a Catalunya con la tarea de descatalanizar la enseñanza.

La represión contra la lengua y la cultura vasca y catalana alimentaba un sentimiento de odio, rabia y amargura. Si la burguesía vasca fue la primera en abandonar la lucha contra Franco, a la clase trabajadora vasca le cabe el honor de ser la primera en empezar la lucha contra la dictadura. El Primero de Mayo de 1947, festividad obrera suprimida por el régimen, se convocó una huelga general en la que participaron 50.000 trabajadores, fundamentalmente de las fábricas de la ría de Bilbao y en algunos pueblos de Vizcaya y Guipúzcoa. El lehendakari José Antonio Aguirre, confinado en Francia, se intentó apuntar el tanto en el exterior mientras en el interior los obreros sufrían la represión. El gobernador civil de Vizcaya, Genaro Riestra, publicó un bando al día siguiente de la huelga:

“Por haber dejado de acudir al trabajo sin causa justa... Dispongo:

“Primero.- Queda rescindido el contrato de trabajo de aquellos productores que no han acudido al mismo en el día de ayer.

“Segundo.- Se concede un plazo de ocho días para que los despedidos puedan solicitar su reingreso en la misma empresa en que hasta ahora prestaron sus servicios. Estas solicitudes deberán ser enviadas por las factorías respectivas a este Gobierno Civil para su examen y aprobación en cada caso.

“Tercero.- Los que en su día sean readmitidos perderán los derechos que por antigüedad hubieran conseguido”.

Los obreros en huelga no volvieron al trabajo hasta el día 8 en que sus organizaciones, CNT, UGT y STV, unidas al grito de “Gora Euskadi”, dieron la orden corres-

pondiente. La clase obrera vasca dará una muestra tras otra de heroísmo desde esta primera acción hasta la caída del franquismo, heroísmo que contrasta vivamente con la pasividad de los dirigentes del PNV ante la maquinaria de la dictadura.

Volviendo a Catalunya, la situación de los trabajadores de Barcelona era realmente espantosa. Un obrero del sector del metal barcelonés, considerado entre los mejor pagados del país, tenía por entonces el siguiente poder adquisitivo: una docena de huevos equivalían a 8,2 horas de trabajo; un kilo de cordero, 7,7 horas de trabajo; un kilo de ternera, entre 14,2 y 17,1 horas; un kilo de arroz, 3,1 horas. La desesperación crecía por momentos. En este ambiente estalló la huelga en Barcelona en 1951, la más importante en todo este período.

Según el historiador profranquista Ricardo de la Cierva, unos 30.000 españoles murieron de hambre entre 1939 y 1945. Otros historiadores, al añadir los fallecidos por enfermedades relacionadas con la desnutrición, sitúan la cifra en 200.000 personas.

En esta situación el movimiento guerrillero, maquis, que sobrevivió a la derrota de la Guerra Civil, sufre, entre 1943 y 1952, la muerte de unos 2.430 combatientes; otros 2.546 fueron detenidos y encarcelados, a los que habría que sumar 22.113 enlaces arrestados. Las zonas donde operaron los maquis se extendieron al conjunto del territorio pero especial importancia tuvieron los focos guerrilleros de Andalucía (la parte oriental, principalmente), Levante, La Mancha, Galicia y Asturias. La zona con menos actividad guerrillera fue, con mucha diferencia, el País Vasco.

En 1959, el franquismo, después de imponer una política económica inflacionista y proteccionista que llevó al país a una situación límite, lanzó el llamado Plan de Estabilización, acordado con el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de estabilizar los precios y reequilibrar la balanza de pagos. La peseta se devaluó un 30%, se congelaron los salarios, se facilitó la libertad de despido, se restringió el gasto público y se aumentaron los impuestos y las tasas, medidas todas ellas que recayeron sobre la clase obrera.

EL SURGIMIENTO DE ETA

La dictadura franquista perdió con rapidez la base de masas que había logrado agrupar en el transcurso de la Guerra Civil, convirtiéndose paulatinamente en un aparato de represión indiscriminado, en una dictadura bonapartista clásica. El terror se extendía a todos los poros de la actividad social y era apuntalado por una maquinaria civil y militar, integrada por jueces, tribunales, policías, matones falangistas, delatores y chivatos de toda ralea. Pero la necesidad de apoyarse en la actividad represiva como medio de control demostraba las debilidades del régimen.

Al acabar la Segunda Guerra Mundial, el PNV, los socialistas, los estalinistas y muchos militantes antifranquistas creían que la derrota de Hitler y Mussolini supondría el fin del franquismo. Mientras la represión se extiende en el interior, en el

exterior toda la actividad política del PNV tiene como objetivo conseguir el apoyo de las potencias occidentales, apoyo jaleado por las expresiones de admiración del presidente Aguirre: “Al mundo anglosajón y principalmente a América corresponde salvar la civilización. No es poca la responsabilidad, pero ¡qué honor más inmenso! El espíritu de la Carta Atlántica cuenta con la adhesión en masa de la inmensa mayoría de la humanidad. Su contenido y su aplicación constituyen el fin de la tiranía totalitaria. Sus preceptos no significan para el futuro ningún programa comunista”³¹.

Las relaciones entre EE.UU. y el PNV fueron estrechándose cada vez más. En 1945 se dio inicio a la colaboración entre los servicios secretos americanos y el PNV. Los hombres del PNV deberían reunir información en el Estado español sobre el régimen franquista, la composición de las fuerzas de la oposición y sobre la guerrilla antifranquista en lo relativo a los sectores comunistas. La mediación entre los miembros del PNV y los servicios secretos americanos quedaba a cargo de Pepe Mitxelena y Antón Irala.

Paralelamente, el imperialismo americano veía en el régimen de Franco un factor de estabilidad en Europa y un contrapeso al auge de la Unión Soviética. En 1950 la ONU anula sus decisiones de aislar al franquismo y en 1951 EE.UU. inicia una política de colaboración con la dictadura a cambio de establecer en suelo español sus bases militares. Tanto EE.UU. como el Vaticano, que han representado los puntos de referencia políticos e ideológicos del PNV, se identifican con el régimen franquista. En 1951 se produce una humillación más: la delegación vasca en París es expulsada de la sede de la Avenue Marceau, siendo cedida a la embajada española. Ese mismo año se lleva a cabo una huelga general en Catalunya, Madrid y las cuatro provincias vascas. Indalecio Prieto, que dentro del PSOE ha liderado la política de alianzas con los imperialistas norteamericanos, al igual que el PNV, dimite.

Aunque al aparato exterior del PNV las cosas le fuesen francamente mal, a la burguesía vasca en el interior le iba francamente bien, ya que estaban engordando sus beneficios de manera muy importante como consecuencia de la falta de libertades sindicales y políticas. Emilio López Adán *Beltza* explica cómo al caer la dictadura “un millar de personas, repartidas en los Consejos de Administración de las principales empresas y a través del poder de la banca privada disponen del 70% de los recursos monetarios ajenos, conceden el 60% de los créditos, poseen el 90% de la cartera de valores del sistema y controlan más del 50% de la electricidad, la siderurgia, el cemento, el vidrio y las azucareras, aparte de su papel principal en los monopolios públicos. Del millar de personas analizadas, 275, o sea, un 30% están ligadas al capital vasco”³². Entre las entidades hay que citar a los Bancos (Vizcaya, Bilbao, Urquijo y sus filiales), que tienen participaciones en Iberduero, la Central Siderúrgica (donde Altos Hornos es la empresa principal), los Cementos del Norte, fertilizantes (con Sefanitro a la cabeza), Campsa, etc.

La burguesía vasca estaba haciendo grandes negocios bajo el franquismo y la iglesia, punto de apoyo indiscutible del entramado nacionalista, disfrutaba de no-

tables privilegios. Cada vez se hacía más evidente, no obstante, una contradicción entre los intereses del aparato del PNV en el exterior, humillado por sus aliados occidentales, y los intereses de la burguesía vasca en el interior, que gana dinero a espaldas y exige tranquilidad a los líderes en el exilio, que deben esperar la llegada de nuevos tiempos. Igualmente se da una contradicción entre la dirección del Partido en el exterior, que puede sentarse cómodamente a esperar en sus despachos y su propia base en el interior, especialmente la juventud, que sufre directamente las consecuencias de la represión y el endurecimiento de las condiciones de vida. Muy críticos con la pasividad de los dirigentes peneuvistas, en 1952 un grupo de estudiantes de Bilbao y Donostia publica un boletín: *Ekin* (Hacer Acción). Entre ellos se encuentran algunos de los futuros fundadores de ETA (*Txillardegi*, Madariaga, Gaintzarain, etc.), que se unen críticamente con las juventudes del PNV (Euzko Gaztedi). La opción armada la representan los hermanos Etxebarrieta. Ganando a la mayor parte de este grupo, acabarán escindiéndose en 1957 tras elaborar un documento muy crítico y ser catalogados por el dirigente del PNV, Ajuariaguerra de “comunistas fanfarrones y contrabandistas”. Así surge ETA, de un grupo de jóvenes descontentos con la política pasiva y colaboracionista del PNV.

Muy lejos de Euskal Herria, en Cuba, a finales de 1959, un grupo de guerrilleros que dos años antes apenas llegaban a 300 hombres, comandados por Fidel Castro y el Che Guevara, logran echar al odiado dictador Batista. Una de las claves fundamentales de esa victoria fue el éxito de la huelga general de La Habana, secundada masivamente por la clase trabajadora, que posibilitó que un ejército rebelde poco numeroso diese el golpe de gracia al viejo régimen podrido y en descomposición. Estos acontecimientos tendrán un enorme impacto en Euskal Herria.

El franquismo mientras tanto promulga leyes como la de “Bandidaje y terrorismo”, de 21 de septiembre de 1960, ejemplo de un Estado policial permanente. Dicha ley preveía condenas de 6 meses a 20 años de cárcel para aquellos que difundiesen “noticias falsas y tendenciosas con el fin de causar trastornos de orden público interior, conflictos internacionales o desprestigiar al Estado, sus Instituciones, Gobierno, Ejército o Autoridades” (Art. I) y para los “que por cualquier medio se unan, conspiren o tomen parte de reuniones, conferencias, manifestaciones con los mismos fines expresados en el número anterior. Tendrán también tal carácter los planteos, huelgas, sabotajes y demás actos análogos” (Art. II).

Desde finales de los años sesenta el Estado de excepción se aplicará una y otra vez en Guipúzcoa y Vizcaya, entrando en vigor los artículos I y II de la Ley sobre Bandidaje y Terrorismo de 1960, que otorgan plenos poderes a las fuerzas de seguridad. Sin embargo la represión, lejos de acabar con el movimiento, se irá convirtiendo en el viento que impulsará sus velas.

El surgimiento de ETA está directamente relacionado con este ambiente opresivo e irrespirable. ETA, en la medida que demuestra con sus acciones la vulnerabilidad del régimen, logra aglutinar a sectores cada vez más amplios entre la juventud vasca.

La primera acción auténticamente armada de ETA se prepara un 18 de julio de 1961 contra un tren militar y aunque la carga explosiva puesta en la vía no llega a explotar siquiera, la policía lo utiliza para llevar a cabo una redada masiva, encarcelando a centenares de personas.

La potente revolución colonial y los logros independentistas en Argelia, Cuba, Chipre, Túnez, Indochina, Vietnam y otros pueblos, son una fuente de inspiración frente a la opresión centralista del régimen. Los jóvenes militantes vascos se sienten identificados con esta tremenda lucha de liberación de los pueblos oprimidos. Para ellos, también la opresión franquista, producto de la derrota en la Guerra Civil, representa la ocupación colonial de una potencia extranjera que niega al pueblo vasco su derecho a existir.

En *Zutik* de abril de 1962 se puede leer: “España obtiene demasiadas ventajas económicas de Euskadi como para que podamos creer que vendrá el día en que se resigne a perder su “colonia”, si nosotros no estamos dispuestos a conquistar nuestro derecho por la fuerza... Hemos de organizarnos para poder luchar durante dos, tres, cinco o cuantos años sean precisos. Hemos de conseguir que Euskadi, colonia española desde 1839, sea ingobernable por los españoles. Es preciso que golpeemos las manos y los brazos del gigante que nos asfixia, que no nos deja desarrollar ni mantener nuestro idioma, nuestra cultura, nuestras esencias políticas y sociales, tan dispares de las latinas”.

La posición de los jóvenes nacionalistas radicalizados tomaba la lucha por la liberación nacional de los pueblos coloniales como una referencia válida para Euskal Herria. Esta visión esquemática suponía una distorsión real de la auténtica naturaleza de la opresión que sufría el pueblo vasco. Euskal Herria no tiene, ni tenía en los años sesenta, ninguna de las características clásicas de una colonia sojuzgada por una potencia imperialista. Euskal Herria, lejos de ser un país atrasado productor de materias primas, constituía uno de los territorios más industrializados y ricos del Estado. Además, la burguesía vasca suponía una columna robusta del capitalismo español, proveyendo a éste de algunos de sus principales instrumentos financieros. La fuerte inmigración hacia Euskal Herria agrupaba además, en una causa común, a los proletarios vascos, andaluces o gallegos, mientras que el campesinado no era muy numeroso en comparación con el potente movimiento obrero, cuyos grandes batallones en la minería y la siderurgia eran fundamentalmente socialistas.

Cualquier estrategia de lucha en estas circunstancias debía de llegar por la vía de la acción de masas del proletariado y no por los métodos de la “acción armada” individual. Lenin y los bolcheviques habían demostrado en la Rusia zarista, una auténtica cárcel de los pueblos, que los métodos del terrorismo individual eran contraproducentes en la lucha de las masas oprimidas y de los pueblos por su liberación ya que, lejos de debilitar el aparato del Estado, que no descansa en individuos, lo acaban fortaleciendo aún más.

Pero, ¿por qué esperar a hacer un trabajo lento entre la clase obrera cuando

cundía el ejemplo de la victoria de la revolución colonial donde, un país tras otro, alcanzaban la independencia? ¿Por qué hacer un trabajo paciente de propaganda y construcción de un partido revolucionario cuando la bomba y la pistola permitían acabar de inmediato con fascistas y torturadores del régimen? El auge del movimiento guerrillero en América Latina y Argelia alimentaba las expectativas en una rápida victoria mediante la utilización de dichos métodos. Federico Krutwig, uno de los ideólogos de ETA en ese momento, expone así su visión de los hechos: “La estrategia militar ha cambiado en la era atómica, la guerra moderna ya nada tiene que ver con la guerra de frentes y de los estrategias clásicos. Así grandes ejércitos pueden ser derrotados por pequeñas unidades de guerrilleros”.

Además, en aquellos momentos de negra dictadura, parecía algo muy lejano pensar en un levantamiento revolucionario del proletariado. La crisis económica, acompañada de la represión policial hacía difícil una contestación política y sindical de una clase obrera obligada a emigrar, a abandonar sus tierras y hogares, para poder subsistir. De 1959 a 1962 más de 700.000 trabajadores, el 7% de la población activa del Estado español, cruzaron las fronteras en búsqueda de ocupación.

ETA DEFINE SUS PRINCIPIOS POLÍTICOS

En el mes de mayo de 1962 ETA convoca su I Asamblea, definiéndose en sus Principios como un “Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional”. ETA no se proclama socialista en sus inicios ni hace referencia al marxismo. Al contrario, como afirma Luigi Bruni en su libro, ETA “pone al mismo nivel los regímenes fascistas y los comunistas” y su objetivo para Euskal Herria era “el establecimiento de un régimen democrático e inequívocamente representativo”³³.

Aunque el PNV se harte de decir lo contrario, la declaración de principios de ETA tiene poco que ver con el genuino marxismo: “ETA, dentro del marco político, propugna para Euskadi: el establecimiento de un régimen democrático e inequívocamente representativo, tanto en el sentido político como en el social-económico y en el cultural, en orden a actualizar, en todo momento, los valores positivos del Pueblo Vasco (...) ETA en el área social, preconiza para el País Vasco: la desaparición del liberalismo económico como sistema base de la futura economía vasca, por considerar ilusoria cualquier pretensión de democracia si ésta se limita exclusivamente al campo político, sin que, asimismo, se establezca una efectiva democracia en el orden económico”.

La desaparición del liberalismo económico no implica obligatoriamente la desaparición del capitalismo, ya que no es la única política económica posible en el marco de la economía de mercado. De hecho, en aquella época primaban las teorías keynesianas de una mayor intervención del sector público en la economía, que constituyeron las bases del reformismo socialdemócrata en Europa. La socialdemocracia siempre ha entendido como participación democrática lograr cierta re-

presentación de los trabajadores en las Juntas de Accionistas o en los Consejos de Administración de las empresas, y promulgar reformas que nunca han afectado a la existencia misma del sistema de explotación capitalista y, por tanto, al poder real de la burguesía en la esfera política.

La declaración de principios de ETA prosigue con la reclamación de “una profunda modificación del status de la propiedad. Por ello se habrá de legislar de manera a destacar y proteger su primordial dimensión social, tanto en la industria como en el agro, pesca y demás ámbitos económicos y sociales. La socialización de los recursos e industrias de los sectores básicos de la economía... La planificación de la Economía Nacional democráticamente realizada. El reconocimiento de la primacía del trabajo sobre el Capital como norma rectora”.

Pero, ¿qué significa modificar el estatus de la propiedad para destacar su dimensión social? La experiencia ha demostrado que las ilusiones en un capitalismo democrático o avanzado, en el que prime el carácter social de la actividad económica, es una utopía de la socialdemocracia. Es imposible democratizar las relaciones de producción capitalistas mientras sean los mismos capitalistas los que tengan la sartén por el mango. Sí, es necesario modificar las relaciones de propiedad, pero eso sólo se puede alcanzar expropiando y nacionalizando bajo el control democrático de los trabajadores las palancas fundamentales de la economía capitalista, esto es, la banca, los grandes monopolios, las empresas y los latifundios, en definitiva, los medios de producción y de distribución y el capital financiero. De esta manera la planificación democrática de la economía, en sentido claramente socialista, sí puede convertirse en una realidad y no mantenerse como un sueño teórico.

No obstante, la influencia de la izquierda y la tradición marxista en la lucha por la liberación nacional se deja sentir en ETA, que al mismo tiempo se declara internacionalista y acepta la unidad con otros pueblos en un marco federal propugnando “la supresión progresiva de las fronteras estatales en todo el mundo por considerarlas antinaturales y perjudiciales al buen entendimiento y al progreso económico y cultural de pueblos e individuos”³⁴.

Efectivamente las fronteras nacionales, que en su momento permitieron a la burguesía acabar con el particularismo feudal y expandir la industria y el comercio, en la época moderna son un freno absoluto para el desarrollo de las fuerzas productivas. Eso es lo que reflejan los continuos intentos por parte de la burguesía de expandir sus relaciones con otros países mediante tratados, acuerdos comerciales o la formación de un mercado único como la Unión Europea. Las fronteras nacionales en los inicios del capitalismo suponían el marco más adecuado para la defensa de los intereses de cada burguesía nacional, a la vez que un mercado para sus productos, algo vital para su subsistencia. Sin embargo, el desarrollo del capitalismo y del mercado mundial hace que estas mismas fronteras representen un obstáculo objetivo para el crecimiento de las fuerzas productivas, lo mismo que la propiedad privada de los medios de producción, convirtiéndose ambos factores en

la causa de la miseria económica y la barbarie que azotan a cientos de millones de hombres, mujeres y niños en todo el planeta.

Si ETA consideraba un objetivo unir a los pueblos: ¿acaso no sería más efectivo propugnar la unidad orgánica del proletariado, en lugar de dividir a la clase obrera en líneas nacionales? ¿Por qué no luchar directamente por el socialismo científico, que es la bandera de la clase obrera a escala mundial?

Es en la II Asamblea cuando ETA se define como socialista y, aunque no precise de qué tipo de socialismo se trata, el hecho de que ETA no llegue a usar nunca en sus documentos los términos comunista o marxista-leninista demuestra que está más cerca de un socialismo interclasista de tipo humanista que del socialismo científico defendido por Marx y Engels.

A pesar de todas las confusiones, es evidente que entre un sector de la dirección de ETA y de su militancia se reflejaban las presiones de la lucha de clases y el papel creciente que estaba empezando a jugar el proletariado en el combate contra la dictadura. A tientas, la dirección de ETA buscaba una alternativa que diera coherencia a su programa y que uniese las reivindicaciones democrático-nacionales a las demandas sociales. El odio y la repulsa hacia la actitud acomodada y conservadora del PNV aceleraban este proceso. Pero la influencia del nacionalismo, como ideología interclasista, se dejaba sentir con fuerza.

En abril de 1964 se convocó la III Asamblea, cuyo eje central de discusión fue la relación entre nacionalismo y lucha de clases. Las conclusiones políticas pueden verse en la carta abierta de ETA a los intelectuales vascos. En dicha misiva, aunque habla de socialización y trata de explicar las limitaciones del capitalismo, su objetivo principal sigue siendo la independencia y la reunificación política nacional: “El cambio de estructuras lo vamos a hacer en Euskadi; va a ser una revolución vasca. La sociedad que vamos a edificar ha de facilitar el desarrollo de la etnia vasca en todas sus manifestaciones. Por eso, si algún trabajador llegado de fuera quiere hacer una revolución extranjera, nosotros le animamos y le apoyamos (pues veríamos con agrado la liberación nacional o social de cualquier otro pueblo) pero le recordamos que la revolución extranjera habrá de hacerla en el extranjero y no en Euskadi. De lo contrario le consideraremos como quintacolumnista extranjero y tratado como tal”³⁵.

ETA se arrogaba a sí misma el monopolio de llevar a cabo la citada revolución, limitada exclusivamente a las demandas democrático-nacionales, esto es, a una revolución burguesa en Euskal Herria, al mismo tiempo que declaraba su voluntad de combatir, incluso como quintacolumnistas, a los revolucionarios marxistas que pretendieran orientarla en un sentido socialista. La razón de este planteamiento parte de una consideración estratégica: ETA priorizaba la unidad de los trabajadores e intelectuales vascos con la burguesía nacional para alcanzar la independencia. Y este frentepopulismo interclasista requería, en una primera etapa, dejar a un lado la lucha por el socialismo.

Para los marxistas, la revolución española de los años treinta demostró preci-

samente que la burguesía en el Estado español, por su propia debilidad, no podía dar satisfacción a las necesidades de las masas en un marco de democracia burguesa. Los acontecimientos llevaron a la clase dominante a la encrucijada de tener que elegir entre dictadura o revolución y quedó claro cuál fue la opción de las distintas burguesías, española, vasca y sus aliados franceses, británicos o norteamericanos. La Guerra Civil demostró con toda su crudeza que no había más alternativas.

Los problemas no quedaron resueltos con la derrota de la república burguesa; la dictadura agudizó aún más la contradicción entre el capital y el trabajo ahogando en sangre las reivindicaciones de los trabajadores hasta que éstos acabaron con la dictadura. Tampoco pudo acabar con las aspiraciones democráticas de las nacionalidades históricas, que habían sufrido una fuerte represión. Pero con la caída de la dictadura, ni el poder económico ni los resortes fundamentales del Estado cambiaron de manos. En realidad la democracia burguesa ha sido incapaz de solucionar los problemas más acuciantes de las masas trabajadoras: el problema de la vivienda, el desempleo, la precariedad laboral que atenazan sobre todo a la juventud ni, por supuesto, el problema nacional que sigue condicionando toda la vida política del país.

En la primera publicación de la revista teórica de ETA, *Iraultza* (Revolución), se podía leer: "La aparición de ETA respondía a una necesidad material de carácter objetivo para que la burguesía nacional vasca y el proletariado se uniesen bajo la dirección de este último en la lucha revolucionaria contra la oligarquía monopolista. El desarrollo de este proceso llevará en sí el desencadenamiento de más violencia en contra del pueblo vasco por parte de las fuerzas de represión del Estado español, cimentando cada vez más esta alianza".

ETA volvía a repetir los viejos esquemas de la revolución por etapas que el estalinismo había recogido de los desechos teóricos del menchevismo. La alianza con una burguesía nacional supuestamente progresista o patriota para luchar primero por la revolución democrático-nacional burguesa y luego por el socialismo fue desarrollada por los mencheviques como su perspectiva para la revolución rusa y combatida por Lenin y los bolcheviques. De hecho, la revolución de octubre de 1917 fue posible gracias a que el proletariado revolucionario, los campesinos pobres y las masas de las nacionalidades oprimidas bajo el zarismo rechazaron su subordinación a la burguesía rusa, que a su vez actuaba como una sucursal de los intereses imperialistas de Francia y Gran Bretaña. Fue la toma del poder por parte de los trabajadores y la eliminación de la propiedad de los capitalistas rusos y extranjeros lo que permitió crear las condiciones para avanzar hacia una sociedad sin ningún tipo de opresión. En el marco del joven Estado obrero soviético no sólo se lograron alcanzar mejoras sustanciales para las masas trabajadoras, sino que el derecho de autodeterminación fue una realidad tangible en las nacionalidades oprimidas por la autocracia zarista. Por primera vez en la historia de Rusia, los derechos democráticos de las nacionalidades que componían el antiguo Imperio Ru-

so fueron reconocidos plenamente.

El aislamiento de la revolución rusa tras los fracasos en Alemania, Bulgaria, Hungría e Italia a principios de la década de los años veinte, unido a la catástrofe económica que asolaba el territorio soviético después de la guerra civil, creó las condiciones materiales para el surgimiento de una nueva casta burocrática. Ésta abandonó con rapidez la perspectiva internacionalista de Lenin y Trotsky, sustituyéndola por un nacionalismo estrecho y conservador que asegurase sus incipientes privilegios. Stalin formuló el programa de esta nueva burocracia ascendente a través de la antimarxista teoría del "socialismo en un solo país", rescatando los viejos planteamientos del menchevismo.

La teoría de la revolución por etapas y del socialismo en un solo país jugó un papel criminal en el desarrollo de la revolución en el mundo colonial. En China se forzó al joven partido comunista a entrar en las filas del Kuomintang nacionalista burgués, que se encargó de liquidar físicamente al Partido Comunista, los sindicatos y los sóviets campesinos en la revolución china de 1925-27. El aplastamiento del proletariado chino a resultas de la política de Stalin fue, en gran medida, el motivo por el que la segunda revolución china tomó la forma de una guerra campesina ante la que la clase obrera se mantuvo pasiva.

En Iraq y en Sudán, en los años cincuenta y sesenta, los partidos comunistas eran organizaciones de masas capaces de organizar manifestaciones de un millón de personas en Bagdad y dos millones en Jartum. En lugar de seguir una política de independencia de clase y dirigir a los trabajadores y campesinos a la toma del poder, los PCs buscaron alianzas con la burguesía nacional "progresista" y los sectores "progresistas" del ejército. Éstos, una vez llegados al poder sobre las espaldas del Partido Comunista, pasaron a eliminarlo mediante el asesinato y el encarcelamiento de sus militantes y dirigentes. Igualmente, en Indonesia, en los años sesenta, el Partido Comunista era la principal fuerza de masas en el país; era el mayor PC del mundo capitalista con tres millones de miembros y diez millones de afiliados a sus organizaciones sindicales y campesinas e incluso decían tener el apoyo del 40% de las fuerzas armadas. El PC indonesio podía haber tomado el poder fácilmente pero en lugar de eso, los dirigentes del PC, bajo el control de los maoístas chinos, hicieron una alianza con Sukarno, un dirigente nacionalista burgués que en aquel momento había adoptado una fraseología de "izquierdas". Esta política dejó al PC sin preparación cuando esa misma burguesía, bajo órdenes directas de la CIA, organizó una masacre de miembros y simpatizantes del PC en la que perecieron al menos millón y medio de personas. Ésas fueron algunas de las experiencias desastrosas de la teoría de las dos etapas. ¿Por qué había que aplicarla en Euskal Herria?

Según este esquema, para alcanzar la independencia de Euskal Herria, primero sería necesaria la alianza entre el proletariado y la burguesía nacionalista, a la cual se le hace acreedora de una postura progresista y rupturista con la burguesía española. En esta alianza estratégica, el proletariado debería renunciar a plantear

un programa político independiente, tendría que someter su acción y sus demandas a esta alianza renunciando, obviamente, a luchar por sus propias reivindicaciones económicas y políticas. Una vez alcanzada la independencia, que nunca rebasaría los límites de una nación vasca capitalista, hablaríamos de socialismo. En esencia era la misma posición que los dirigentes reformistas y estalinistas habían mantenido durante la revolución y la guerra civil española: primero ganar la guerra y, para ello, nada de ruptura con el capitalismo y nada de acciones que pudieran atemorizar a la burguesía republicana y a los aliados, Francia y Gran Bretaña. Esta política, como la experiencia de la lucha de clases en los años treinta demostró, supuso en la práctica acabar con las conquistas revolucionarias del proletariado.

ETA no parece querer admitir que toda la historia del nacionalismo vasco burgués ha sido una crónica de traiciones encadenadas contra la causa de la libertad de Euskal Herria y contra los intereses y aspiraciones de los trabajadores vascos. Esta forma de plantear la cuestión llega incluso a la ingenuidad de presentar esta alianza entre explotadores y explotados bajo la perspectiva de que el proletariado pueda ejercer la hegemonía política. Pero preguntamos: ¿por qué razón la burguesía vasca se va a dejar dirigir por el proletariado? y ¿por qué el proletariado vasco, en una correlación de fuerzas favorable, debe renunciar a luchar como clase por sus propios intereses socialistas para hacerle el trabajo a la burguesía vasca?

Para ETA, la represión contra todo lo vasco por parte del Estado solidificaría esa alianza contra natura entre explotadores y explotados. Los intereses de clase se desdibujarían en pro de los intereses nacionales como pueblo. Se trataba por tanto de alimentar la espiral acción-represión-acción que actuaría como la fragua que aviva la llama de la “unidad fraternal” entre el obrero y su patrón, que es lo mismo que propugnar la unidad que pueda existir entre el burro y el que lo monta.

Toda la experiencia histórica de la lucha de clases ha demostrado que para la burguesía vasca, como para todas las demás, el interés de clase prima sobre el interés nacional. Como explica el marxismo, “el ser determina el pensar”. Las condiciones materiales determinan la conciencia, y no a la inversa. La burguesía necesita la nación, incluso como concepto, para defender sus intereses de clase frente a las demás burguesías nacionales y para dividir y enfrentar entre sí a la clase trabajadora. Esta misma burguesía, patriota hoy, cuando se trata de defender sus intereses no duda en llamar a otras burguesías a invadir “su patria” para salvar sus tierras, propiedades y negocios. ¿No es eso lo que ha ocurrido en todas las revoluciones, desde la francesa, a la rusa o a la española?

Se puede objetar, ¿por qué creéis los marxistas que la burguesía vasca no luchará por la independencia? ¿No ganaría más la burguesía vasca en una Euskal Herria independiente? Visto en abstracto, si le regalasen dicha independencia, la respuesta sería probablemente afirmativa. ¿Por qué no iba a ser viable y desarrollada una Euskal Herria independiente si lo son países europeos mucho más pequeños y con menos industria y recursos? Pero el hecho fundamental es que al País Vasco, como a Galicia y a Catalunya, la burguesía española les niega por

la fuerza el derecho de autodeterminación y la independencia y si la burguesía vasca, catalana o gallega han decidido participar dentro del mercado español en lugar de declarar la guerra a España o venderse a alguna potencia imperialista para que hiciesen el trabajo por ellos, es porque han calculado que no tienen posibilidades serias de vencer y que lo único que lograrían es perder sus mercados y negocios.

Históricamente llegaron tarde para formar un Estado independiente y han rehuido un conflicto de estas características porque no les sería rentable y, mucho menos, si después de la improbable victoria saben que les espera enfrentarse a un proletariado poderoso, listo para luchar por el socialismo y acabar con ella. La estrategia que ETA le propone a la burguesía vasca es inadmisibles desde el punto de vista de la clase dominante vasca e inadecuada desde el punto de vista del proletariado.

Los marxistas rechazamos tajantemente que la independencia de Euskal Herria implicase necesariamente una mejor situación para la clase trabajadora vasca. Quienes relacionan independencia con “mejora de las condiciones de vida de los trabajadores” deberían explicar porqué la clase trabajadora de tantos países nominalmente independientes está tan mal o peor que en Euskal Herria. La mejora de las condiciones de vida de la clase obrera bajo el capitalismo depende fundamentalmente de su nivel de fuerza, organización y lucha y sólo podrá llevarse a efecto definitivamente aboliendo la propiedad privada de los medios de producción.

EL REFLEJO DE LA LUCHA DE CLASES EN ETA

Desde sus inicios, ETA registra recurrentemente la aparición en su seno de dos alas diferenciadas, una más nacionalista y promilitar, y un ala obrerista que busca alternativas en el marxismo y en la lucha de la clase trabajadora

En el debate de fondo que está detrás de esta configuración de fuerzas siempre aparece, como piedra de toque, el papel de la burguesía en la lucha por la liberación nacional. ETA negará sistemáticamente que se pueda hablar de burguesía vasca. Para ellos hay oligarcas vascos vendidos al capital español y burgueses patriotas vascos. “Así, nos encontramos que una parte de esto que se llama burguesía nacional se une a sus pueblos. Sin embargo no debemos olvidar que otra parte de estas burguesías nacionales se pasa a los explotadores extranjeros. Esta alianza del proletariado con una parte de la burguesía nacional tiene un alto sentido patriótico”³⁶.

ETA parece confundir la actitud de algunos burgueses individuales que pueden ser abertzales comprometidos, con los intereses de la clase en su conjunto. La burguesía vasca siempre estará más cerca de la burguesía española que de los trabajadores vascos, sea la oligarquía entregada a Madrid o los más rabiosos nacionalistas del PNV. Eso es lo que ha demostrado la burguesía vasca hasta nuestros días: en los años treinta con la República, durante la Guerra Civil, bajo el franquis-

mo, en la Transición y bajo la monarquía juancarlista.

Los alineamientos en la esfera política se realizan por clases y no por naciones. No es casualidad que en el Parlamento europeo, por poner un ejemplo, los partidos se unan en función de sus intereses de clase, aunque cada burguesía tenga, como es lógico, su propia bolsa que llenar.

Sin embargo, esto que es así en esencia, no lo es siempre en apariencia. En muchas ocasiones, y sobre todo ante procesos revolucionarios o importantes movimientos de masas, la burguesía se escinde entre quienes reclaman hacer concesiones al movimiento para no perderlo todo y quienes exigen mano dura porque temen que cualquier concesión acabe alimentando la lucha. Es una división de papeles como la del policía bueno y la del policía malo. Y ambas partes tienen razón. La burguesía tiene un lema: “No pongas todos los huevos en la misma cesta”, o en otras palabras: en época de crisis diversifica el riesgo para minimizar las pérdidas y tener más opciones de obtener ganancias. La burguesía vasca y el PNV tienen unos intereses como clase muy concretos, independientemente de que en diferentes momentos se apoye en el PP, en CiU, o incluso en partidos de izquierdas como el PSOE, Izquierda Unida y en la propia izquierda abertzale. Pero la burguesía vasca, que cuenta con un partido propio como es el PNV, tratará de dominar siempre que pueda de forma directa, al igual que en Catalunya la burguesía catalana lo hará con CiU y la española con el PP.

La IV Asamblea de ETA, convocada en junio de 1965, volvería a marcar la diferencia entre ambas corrientes: la obrerista que se expresa a través de la llamada “oficina política” y la del aparato militar, que teóricamente acepta la necesidad de la lucha ideológica pero que se mueve en otros parámetros que aparecen definidos en la revista *Irautza*, en un artículo titulado “Estrategia revolucionaria vasca”, documento de gran importancia difundido a comienzos de 1969. En esta declaración el sector militar afirma: “Las medidas de represión engendran mayores acciones revolucionarias, y como las acciones revolucionarias son contestadas con aún más espectaculares medidas de represión, se produce un proceso en espiral donde la actividad revolucionaria y la represión empujan a niveles más altos cada vez. En este proceso de acción-represión-acción el principal perjudicado es el Estado opresor, o sea, las clases dominantes que se encuentran tras él. En efecto, los medios de que dispone un Estado para reprimir a las masas, aunque grandes, son limitados”³⁷.

Este debate planteado por el ala militar no era tan nuevo. En los orígenes del marxismo ruso, Lenin y sus compañeros tuvieron que combatir a fondo las teorías de la acción-reacción que propugnaban los populistas de *Naródnaya Volya* (La Voluntad del Pueblo). Según estos, las acciones armadas individuales (terrorismo individual, en terminología marxista), suponían la forma más eficaz de movilizar a las masas oprimidas del Estado zarista. Esta “propaganda del hecho” motivaría la acción de los explotados contra la represión estatal, elevando la acción revolucionaria a un escalón superior. Lenin había contestado a estas ideas en su texto *Nuevos*

acontecimientos y viejos problemas: “La única tarea digna de un revolucionario es aprender a elaborar, utilizar, tomar en sus manos el material que brinda sobradamente la realidad de Rusia, en lugar de disparar unos cuantos tiros para crear pretextos que estimulen a las masas y motivos para la agitación y la reflexión políticas. Los socialistas revolucionarios no se cansan de alabar el gran efecto “agitativo” de los asesinatos políticos, acerca de los cuales cuchichean a todas horas en las tertulias liberales y en las tabernas de la gente sencilla del pueblo. Para ellos es poca cosa (¡Ya sabemos que están libres de todos los estrechos dogmas de cualquier teoría socialista definida!) sustituir la educación política del proletariado (o por lo menos complementarla) por la sensación política. Por nuestra parte, sólo consideramos capaces de ejercer una acción real y seriamente “agitativa” (estimulante) y no sólo estimulante, sino también (cosa mucho más importante) educativa, los acontecimientos que protagoniza la propia masa, que nacen de los sentimientos y estados de ánimo de ésta y no son puestos en escena “con una finalidad especial” por tal o cual organización. Pensamos que cien asesinatos de zares juntos no producirían jamás un efecto tan estimulante y educativo como la participación de decenas de miles de obreros en concentraciones para discutir de sus intereses vitales y la relación de éstos con la política, como esta participación en la lucha, que de veras pone en pie a nuevas y nuevas capas “vírgenes” del proletariado, elevándolas a una vida política más consciente, a una lucha revolucionaria más amplia. Se nos habla de la desorganización del gobierno (que se ha visto forzado a sustituir a los señores Sipiaguin por los señores Pleve, y a ‘reclutar’ a su servicio a los peores rufianes) pero estamos persuadidos de que sacrificar un solo revolucionario aunque sea a cambio de diez rufianes sólo equivale a desorganizar nuestras propias filas”³⁸.

Se nos dirá una vez más que la acción armada es una actividad complementaria a la lucha de masas pero toda la experiencia pasada demuestra que la táctica del terrorismo individual que afirma querer apoyarse tanto en la lucha de masas como en la actividad armada acaba supeditando todo al ala militar. La acción armada clandestina, por su propia dinámica, concentra la atención y los recursos de la organización, y de esta forma el ala militarista acaba tomando una y otra vez el control de la vida interna y la iniciativa pública, condicionando o expulsando a la parte más política. Esto se demostró años más tarde al escindir-se LAIA (Langile Abertzale Irautzaileen Alderdia), que se consideraba a sí misma el componente marxista-leninista de ETA, criticando la presencia de los componentes antimarxistas, nacionalistas reaccionarios y libertarios presentes, según ellos, en la organización. En estas condiciones les resultaba evidente que ETA nunca podría transformarse en la vanguardia de la clase obrera. “Después de haber sufrido mucho por los acontecimientos durante doce años, consideramos pernicioso la actitud militarista que reina en la dirección del brazo armado desde 1971, pues lo que yo digo brazo ha adquirido la autonomía de dirección logística y económica, y los otros brazos, es decir, el obrero y el cultural no se están desarrollando paralelamente. Y es

más, mientras que este desarrollo del brazo militar se ha logrado gracias a la colaboración de los otros brazos, hoy aquél se desinteresa del desarrollo de los demás. Se quiere ahogarles al servicio del brazo armado, es decir, que se quiere imponer la militarización de la organización y de hecho entre el brazo armado y el resto de la organización existen relaciones de dominación”³⁹.

Además, la idea de que la espiral acción-represión-acción acaba siempre perjudicando al Estado opresor es falsa. Como decía Lenin, la verdad es siempre concreta y depende de circunstancias de tiempo y lugar. En la época que estamos analizando en concreto, la dictadura franquista hacía aguas en la medida que una clase obrera joven y renovada se recuperaba de la terrible derrota de la Guerra Civil y se fortalecía con el auge de una industrialización creciente. Es cierto que en los períodos de menor actividad huelguística la represión, el deseo de venganza y la impaciencia hacían mella en la mente de algunos activistas, particularmente estudiantes e intelectuales. El terrorismo individual llegó a verse como un apéndice de la lucha contra la represión franquista y la falta de libertades. El aparato de la dictadura parecía más vulnerable tras cada acción, aunque el único efecto que provocase fuese la represión y la desorganización temporal del movimiento. No es casualidad que las juventudes del PNV, junto a algunos militantes socialistas, comunistas y anarquistas, se sintiesen contagiados de la táctica de la acción directa. A su vez las acciones armadas en Euskal Herria encontraban igualmente eco, aunque menor, en Catalunya y Galicia.

Sin embargo, en la medida en que el movimiento obrero crece numéricamente por el desarrollo de la propia industria, se organiza y aumenta su nivel de compromiso y experiencia, la táctica del terrorismo individual, que pretende suplantar o ayudarlo desde fuera, no es más que un obstáculo que sólo sirve para dar excusas al Estado para acrecentar la represión y desarticular dicho movimiento.

La lucha por los derechos democrático-nacionales del pueblo vasco y la lucha por el socialismo es una y la misma lucha. Pero para lograr el socialismo en Euskal Herria es necesario luchar contra el aparato del Estado centralista burgués, y ésta es la misma lucha de los demás pueblos y de la clase obrera de todo el Estado. ¿Por qué dividir las fuerzas? ¿Por qué no luchar unidos? Éstas son las preguntas que se hace un sector de la militancia de la propia ETA.

La polémica sobre nacionalismo o lucha de clases se fue haciendo cada vez más agria. En el artículo “Nacionalismo revolucionario”, publicado por Krutwig, se resume el pensamiento del sector que se enfrenta a la “oficina política”, inspiradora de la línea obrerista: “En Euskadi la contradicción principal es la nacional y la lucha de liberación no está ligada ni depende del avance o del reflujó del socialismo en el Estado español. Un seudorrevolucionario vasco que, creyendo ser más revolucionario en tal sentido, se olvidase de que la condición primordial de un movimiento progresista y revolucionario en Vasconia consiste en ser nacionalista, dejaría de ser revolucionario en la misma medida en que deja de ser nacionalista”⁴⁰.

Aquí radica la esencia de las limitaciones del programa de ETA en su lucha por

la liberación nacional. A la idea de sustituir a la clase trabajadora, como protagonista y artífice de esta lucha por la acción armada de pequeños comandos, se unía la negativa a vincular la liberación nacional a la lucha de clases y al socialismo, considerando que la contradicción central era la nacional. Los teóricos de ETA nunca entendieron que la opresión nacional deriva precisamente de la existencia de la sociedad de clases, del capitalismo y de la configuración de la propia sociedad vasca y española y que, sin acabar estas relaciones de clase, es imposible alcanzar el pleno ejercicio de los derechos democrático-nacionales de Euskal Herria.

¡ETA creía realmente en aquella época que un pequeño núcleo de activistas podía poner en jaque mate a los Estados español y francés y lograr llevar a cabo la independencia nacional para Euskal Herria! En realidad estas ideas partían de una visión distorsionada de los procesos que se estaban dando en relación a la revolución colonial. El imperialismo ocupó militarmente las colonias mientras ésta ocupación representó una excelente fuente de negocios e ingresos. En el momento en que la resistencia de las masas se hizo excesivamente cara y la ocupación imposible de mantener llevó a cabo una retirada táctica, concediendo una independencia meramente formal a estos pueblos, apoyándose en sus débiles y corruptas burguesías nacionales, sustituyendo la ocupación militar directa por la intervención económica mediante préstamos a intereses elevados y tratados bilaterales privilegiados que les garantizaban seguir controlando el comercio y las materias primas a su antojo. Aunque el movimiento de liberación colonial por la independencia es uno de los acontecimientos revolucionarios más grandiosos en la historia de la humanidad por la magnitud, fuerza y sacrificio de las masas que lo llevaron a cabo, su experiencia demostró que sólo bajo la bandera del auténtico socialismo internacionalista se puede poner fin al capitalismo, la opresión, la dominación y el horror que ahora se ejerce bajo nuevas fórmulas.

La liberación de Euskal Herria y de todos los pueblos oprimidos estaba y está estrechamente ligada a la lucha por la desaparición de las clases sociales, de la opresión y la explotación capitalista y para ello era y es imprescindible unir las fuerzas del proletariado por encima de fronteras nacionales para poder triunfar.

Un sector de ETA llegaría a esta conclusión. En *Zutik* nº 50, ETA-berri (nueva) contesta a la idea de ETA-bai de que Euskadi es una colonia: “Euskadi no es una colonia de Castilla y Andalucía. Euskadi está explotada por la oligarquía como lo están los demás pueblos y nacionalidades que sufren el yugo del franquismo. No hay una contradicción entre los intereses del pueblo vasco y del pueblo castellano (como no la hay entre el pueblo vietnamita y la población de EE.UU.). Por el contrario, hay una identidad de intereses y un enemigo común ante el que es necesario unirse estrechamente”⁴¹.

Los debates ideológicos entre ambas corrientes jamás dejarán de existir a pesar de sucesivas divisiones y reagrupamientos. El sector que acaba imponiéndose una y otra vez es el ala militar nacionalista que, teniendo como prioridad estratégica la búsqueda de un acuerdo con la burguesía nacionalista, trata de rebajar

el contenido de la lucha por el socialismo. “Los sectores populares de la burguesía nacional son arrastrados por la práctica política de la clase obrera en la medida en que tal política sea justa, es decir, la política históricamente adecuada a las condiciones actuales. Éstas nos definen como tarea inmediata la realización de la Revolución Popular (y no de la revolución socialista) por tanto, la política del proletariado deberá ser una política de lucha popular”⁴². Esta idea aparece una y otra vez en los escritos de ETA militar. “En Euskadi se puede descubrir la contradicción entre ciertas clases populares y el sistema monopolista. La clase dominante no es la burguesía en general, sino la oligarquía. El proletariado y un sector de la burguesía se encuentran enfrentados a la oligarquía para la destrucción de su dominación y de las relaciones impuestas por ellas... Es una necesidad aliarse con las clases burguesas y pequeñoburguesas en un Frente Nacional”⁴³.

Esta idea no tiene nada de nuevo. Aunque a ETA no le guste la analogía, también el sector socialdemócrata del PSOE propugnaba en los años setenta que la burguesía española contaba con dos alas: una reaccionaria y otra progresista. Ésta última, que deseaba la apertura a Europa, estaba dispuesta a comprometerse a favor de la democracia y era necesario pactar con ella. Carrillo y la dirección del PCE defendían la misma idea, que no era sino una aplicación de la teoría estalinista de las dos etapas: primero la democracia, luego el socialismo. Era la misma idea que se defendió en la República: primero ganar la guerra y luego el socialismo.

En los años setenta, con esa teoría, los dirigentes reformistas de la izquierda, que contaban con la inmensa autoridad del exilio y la lucha antifranquista, lograron subordinar la acción de las masas de la juventud y de la clase obrera a un corolario de pactos con la burguesía que finalmente consolidaron un régimen de democracia burguesa y economía de mercado. Las consecuencias fueron la desmovilización general de los trabajadores y la creación de las condiciones para una ofensiva general de la burguesía contra los derechos y conquistas económicas de la clase obrera. Esta estrategia, cuando la correlación de fuerzas era muy favorable a los trabajadores y a sus organizaciones, no nos ha acercado más al socialismo ni a la resolución del problema nacional en el Estado español y en Euskal Herria.

ETA desarrollaba el mismo esquema político que los dirigentes reformistas de la izquierda: propugnaba primero la democracia vasca haciendo un frente nacional con la burguesía vasca y demás clases populares y dejaba la lucha por el socialismo para un futuro incierto. Si dejamos a un lado la lucha armada, los cientos de presos, la capucha, la metralleta y el arrano beltza al fondo, los trabajadores no vemos en estas ideas nada nuevo.

Entre 1960 y 1975 la población en Euskal Herria pasa de 1.800.000 a 2.500.000 habitantes, producto de una fuerte inmigración. El creciente peso del proletariado vasco y su papel hegemónico en la lucha contra la dictadura abre una brecha creciente entre quienes siguen desconfiando en la acción revolucionaria de las masas y quienes ven en éstas el eje de la acción.

Así se llegó hasta la V Asamblea, reunida entre diciembre de 1966 y marzo del

67 y que marcó de manera estratégica el futuro de ETA. Para ETA, en el plano interno, la consecuencia inmediata de la Asamblea fue la asunción de una estructura frentista, reflejando esa idea, entonces popularizada por el vietnamita Trung Chinh, de que las áreas de enfrentamiento serían varias y diversas y de que la lucha armada era el eje que las unía y llevaba hasta el triunfo: “Las victorias en los campos de batalla de la economía, política y cultura dan la victoria militar a la Resistencia Nacional”. La organización armada pretendía huir del reduccionismo de unas siglas para convertirse en un movimiento integral: “No basta una conciencia de clase, no basta una conciencia nacional, es necesaria una conciencia de clase nacional, puesto que sufrimos tanto de las estructuras capitalistas como las imperialistas”.

De esta manera se reforzó el carácter militar de la organización. La primera partida de armas fue comprada a Checoslovaquia, precisamente cuando los tanques rusos entraban en Praga. Mientras desembalaban estas armas, el Comité Ejecutivo de ETA redactaba una dura crítica a la intervención soviética. La reacción no pudo ser más clara: fue la primera y la última vez que ETA recibió ayuda del otro lado del muro de Berlín.

Esta efervescencia supuso también una gran actividad interna. En la V Asamblea, al calor del ascenso de las luchas obreras, el choque entre las corrientes nacionalista y obrerista se agudiza, provocando la primera división importante de ETA entre ETA-bai, puramente nacionalista, y ETA-berri, con más influencia entre la clase trabajadora. Esta última se expresa en la revista teórica *Komunistak* y tras su expulsión de la organización dará lugar al Movimiento Comunista de España, de inspiración maoísta.

Las diferencias entre ambos grupos son bastante claras. *Komunistak* critica: “1) El carácter nacionalista de ETA-bai, definido como clasista y pequeñoburgués; 2) la adhesión idealista y superficial al socialismo ‘humanista’, contrapuesto al socialismo científico; 3) la aceptación, aunque crítica, de la ideología sabiniana, contrapuesta al análisis marxista de clases; 4) el aventurerismo de su táctica militar, fundada sobre la tesis de la acción-reacción-acción”⁴⁴.

LA REPRESIÓN AUMENTA EL APOYO A ETA

La solidaridad con los militantes de ETA es cada vez más amplia frente a las detenciones, torturas y asesinatos de sus militantes a manos de la policía. El odiado régimen debe caer y cualquier método parece válido para lograrlo. Su influencia es tan grande que EGI, la organización juvenil del PNV, pondrá en marcha un grupo de similares características, colocando una ikurriña sobre la catedral de Burgos, preparando atentados contra la Vuelta Ciclista a España, etc. Cuando en abril de 1969 mueren dos militantes de EGI, Artajo y Azurmendi, por la explosión de la bomba que manipulaban, el PNV asumió con orgullo la militancia de ambos; no quería quedarse al margen y perder su influencia sobre la juventud vasca. Tres

años después, casi doscientos militantes de las juventudes del PNV entraron a formar parte de ETA. Según datos de ELA, en 1969 Euskal Herria, con cerca de dos millones y medio de habitantes, tiene 1.953 detenidos políticos y 150 refugiados, mientras que 890 personas han sufrido persecución y malos tratos, de ellos 350 torturas de primer grado y 160 de segundo y tercer grado.

En 1968 la policía asesina al activista Txabi Etxebarrieta en un control policial. En respuesta, ETA elimina al jefe de la policía política de Guipúzcoa, Melitón Manzanas, un conocido torturador. Los implicados fueron llevados ante el Tribunal Militar de Burgos en el llamado proceso 31/69 o Proceso de Burgos. Las sentencias de la justicia franquista son particularmente severas: nueve condenas de muerte y cientos de años de cárcel para los demás implicados. “El ejército entró en estado de alerta total por miedo a una insurrección popular en el País Vasco”. En Guipúzcoa y en Vizcaya se produjeron huelgas generales y se llevaron a cabo manifestaciones en distintas ciudades españolas. Como señala Luigi Bruni en su libro, “es casi imposible hacer un relato de los numerosos acontecimientos solidarios que se produjeron en Euskal Herria, en el Estado español y en el resto del mundo”. Lo más significativo de este hecho fue que el conjunto de la oposición antifranquista de izquierdas y los sectores más avanzados de la clase trabajadora tomaron parte activa en todas las acciones de solidaridad con los procesados y por la conmutación de las penas de muerte. El movimiento se extendió por todo el Estado, demostrando las simpatías hacia la causa vasca entre los luchadores antifranquistas, y las posibilidades reales de vincular esta lucha por los derechos democráticos nacionales a la lucha por el socialismo. Finalmente, y debido a la oleada de movilizaciones en Euskal Herria, a escala estatal e internacional, las sentencias de muerte fueron conmutadas por cadenas perpetuas.

El aumento de la actividad militar de ETA en los años 1972 y 1973 llevó al Gobierno a excluir “nuevos procesos de Burgos” y sustituir su propia “legalidad” por acciones extrajudiciales. Carrero Blanco, brazo derecho de Franco convertido en vicepresidente de Gobierno desde 1967, se inspira en la “Ley de Fugas”, que permite ajusticiar al detenido simulando un intento de fuga, para asesinar a numerosos militantes de ETA.

En ese momento, el debate entre el frente militar y el frente obrero dentro de ETA se incrementa y la represión del Estado franquista fortalece a aquellos que insisten en la vía armada para alcanzar los objetivos: “El frente militar ha adquirido una notable autonomía de la organización. En enero de 1973 el comando *Txikia* se ha trasladado a Madrid para preparar la operación *Ogro*, es decir el atentado contra el almirante Carrero Blanco”⁴⁵.

Cuando en diciembre de 1973 ETA ejecutó al almirante Luis Carrero Blanco, creyó ser la única organización dispuesta a atacar el corazón del sistema. El atentado contra Carrero Blanco fue tremendamente popular y generó auténtica conmoción en las filas de la dictadura, ya agrietada por el empuje huelguístico del movimiento obrero y juvenil. La *lucha armada* subió muchos enteros en aquel momen-

to y le dio una enorme credibilidad ante una generación de jóvenes militantes dispuestos a entregarlo todo con tal de lograr sus objetivos. Pero como explica el marxismo, el sistema no descansa en individuos que son fácilmente sustituidos por otros. Más allá de la entrega revolucionaria de una generación de activistas, más allá de treinta años de actividad armada, el Estado español sigue en su sitio y los derechos democráticos de Euskal Herria, como el derecho de autodeterminación, siguen lejos de alcanzarse. Atacar el corazón del sistema significa atacar las relaciones de propiedad del capital y esto sólo es posible con la revolución socialista victoriosa. Un poder obrero triunfante procedería a la nacionalización de la banca, la tierra y los monopolios bajo control democrático de los trabajadores, como la palanca para la planificación racional de la economía, liberada ya de la lucha por el máximo beneficio. Atacar el corazón del sistema significa destruir el Estado burgués con su ejército, sus jueces y su policía y sustituirlo por un Estado obrero en transición al socialismo, donde los propios trabajadores organizados garantizan el orden y detentan el auténtico poder a través sus propios órganos democráticos de decisión y control, lejos de la mascarada de la democracia burguesa.

Sobre esas bases no sólo es posible acabar con la explotación de clase, reducir la jornada laboral y garantizar el pleno empleo como paso imprescindible para la participación de la población en todas las áreas de la vida social, la política, la cultura y la economía. También sobre esa base económico-social se acabaría definitivamente con la opresión nacional, garantizando a todos los pueblos y nacionalidades del territorio ibérico el pleno ejercicio de sus derechos democráticos, políticos y culturales. La clase obrera es la única clase social que no gana nada con mantener la opresión nacional sobre otros pueblos ya que, como dijo Carlos Marx, un pueblo que oprime a otro nunca será libre.

LA INTERVENCIÓN DE ETA EN LOS CONFLICTOS OBREROS

En diferentes momentos, diversos grupos de ETA intervinieron en conflictos y luchas obreras que se presentaban difíciles de ganar. En febrero de 1972 es secuestrado Zabala, secretario del consejo de administración de Precicontrol. Los obreros saltan a la lucha por mejoras salariales y la dirección, en respuesta, despide a todos los obreros y les suspende el derecho a la mutua. Tras una lucha muy dura con encierros, huelgas de hambre, tribunales, etc., la empresa sólo admite a los trece que se han declarado a favor de la dirección. Poco después, la empresa decide cerrar e irse a otra parte, probablemente fuera del País Vasco. “Dado que todos los medios pacíficos de persuasión y lucha no habían conducido a ningún resultado”, ETA decide pasar “a la acción armada” secuestrando a Zabala. A cambio de su liberación, la empresa acepta hacer concesiones a los trabajadores. Este “éxito” anima acciones similares.

La más sonada intervención de ETA en luchas obreras fue el secuestro de

Huarte, que ocupaba el puesto 29 en el escalafón de los grandes empresarios del Estado. Dicho secuestro se produce tras más de mes y medio de huelga en una de sus empresas, Torfinasa. La intransigencia patronal, que no quiere que el ejemplo cunda, provoca, por el contrario, una extensión del conflicto. La dirección envía 140 cartas de despido, la lucha continúa y, cuando parece llegar a un punto muerto, ETA decide intervenir secuestrando a Huarte y arrancando concesiones para su liberación.

En el libro de Ángel Amigo *Pertur, ETA 1971-76* se analizan los efectos políticos de este secuestro en la propia organización: “En el caso del Estado español, las polémicas surgidas a raíz del secuestro de Huarte, mostraban una disociación entre el papel y las características del aparato del Estado surgido en la posguerra y los intereses reales del sector económico más progresivo, más europeo, que dirían algunos, tendente a homologarse con los sistemas de Gobierno de las democracias europeas occidentales. Hasta qué punto eran contradictorios estos dos sectores, no se vio en ETA hasta la acción de Huarte. A partir de entonces se trató, dentro de la organización, de que la lucha armada se enfocara en este sentido e hiciera ver a los oligarcas lo inútil que les resultaba el aparato que habían creado un 18 de julio, para la política que necesitaban desarrollar. Se trataba, en definitiva de romper su cohesión interna y propiciar, mediante esas acciones, el aceleramiento de la democracia burguesa en las condiciones más favorables para las clases populares”⁴⁶.

En estas breves líneas se puede ver lo que hay en común entre el pensamiento reformista y el sectario. El primero cree que se puede sustituir a las masas por la habilidad en la mesa de negociación, el parlamento y las subcomisiones; se basa en el cretinismo parlamentario como acción política y en la desconfianza en la capacidad creadora de las masas como método. ¿Cuál es el análisis político de los reformistas? Que en la medida en que el movimiento obrero no es lo suficientemente fuerte como para lograr sus propias reivindicaciones en una fábrica o sector, mucho menos ha de serlo para lograr cambios significativos en la arena política. De esta manera su objetivo no es ayudar a la clase a adquirir una conciencia socialista y revolucionaria; por el contrario, conscientemente o no, se convierten en propagandistas de los sectores burgueses “más razonables”, actuando en la práctica como los lugartenientes del capital en las filas de la clase trabajadora.

El pensamiento sectario, por su parte, obvia a las masas a las que considera un apéndice de la acción vanguardista de una minoría capaz y con iniciativa. Ninguno de los dos entiende que la clase obrera aprende de su propia experiencia y que ésta es parte de una dinámica de lucha que prepara al movimiento obrero para abordar en el futuro acciones revolucionarias cada vez más audaces y de mayor envergadura. La clase trabajadora conoce más derrotas que victorias pero siempre acaba levantando cabeza e iniciando una nueva lucha sobre las experiencias pasadas a un nivel superior.

Como decía Trotsky: “Si para alcanzar los objetivos basta armarse con una pis-

tola, ¿para qué sirve esforzarse en la lucha de clases? Si una medida de pólvora y un trocito de plomo bastan para perforar la cabeza del enemigo, ¿qué necesidad hay de organizar a la clase? Si tiene sentido aterrorizar a altos funcionarios con el rugido de las explosiones, ¿qué necesidad hay de un Partido? (...) Para nosotros el terror individual es inadmisiblemente precisamente porque empequeñece el papel de las masas en su propia conciencia, las hace aceptar su impotencia y vuelve sus ojos y esperanzas hacia el gran vengador y libertador que algún día vendrá a cumplir con su misión”⁴⁷.

Los reformistas, al igual que los ultra izquierdistas, tratan de suplantar al movimiento, lo cual sólo sirve para ralentizar y frenar la adquisición por parte de la clase obrera de su propia experiencia colectiva. Ambas corrientes son un obstáculo en el desarrollo de la confianza de la clase trabajadora en sus propias fuerzas, en su capacidad de organización y de lucha, lo único que puede asegurar finalmente la victoria. Al contrario que el sectarismo y el reformismo, una política marxista supone elevar la confianza de la clase obrera en sus propias fuerzas, ayudarle a avanzar mediante su propia experiencia alcanzando mayores niveles de organización y a comprender sus tareas históricas. Por ello, en la lucha de clases contemporánea y desde que el movimiento obrero empieza a dotarse de una organización y un programa independiente, el marxismo ha luchado permanentemente contra ambas tendencias: oportunismo y ultra izquierdismo. Son como los dos polos del mismo imán, no es posible separarlos. En palabras de Lenin, el izquierdismo es el precio que la clase trabajadora tiene que pagar por los errores y crímenes del reformismo.

Según Eduardo Moreno Bergaretxe *Pertur*, el secuestro de Huarte permitió a ETA ver dentro del régimen al “sector económico más progresivo, más europeo, que dirían algunos, tendente a homologarse con los sistemas de Gobierno de las democracias europeas occidentales. Una vez que salió a la superficie la existencia de este sector, ETA trata de “propiciar, mediante esas acciones, el aceleramiento de la democracia burguesa en las condiciones más favorables para las clases populares”.

Como ya hemos señalado anteriormente, la cuestión en los años setenta no era dilucidar entre dictadura y democracia, pues obviamente los sectores decisivos del capital eran conscientes de que no podían seguir respaldando una dictadura cuestionada popularmente e incapaz de hacer frente a la ofensiva del movimiento obrero en todos los rincones del Estado. Necesitaba reformar la fachada política, hacer concesiones en materia de libertades democráticas, aunque fuera de manera limitada, para garantizar la continuidad del sistema capitalista que, al fin y a cabo, era el sostén de sus beneficios y privilegios.

El marxismo nunca ha rechazado el uso de las armas, ni el papel que la violencia revolucionaria juega en el cambio social. Como el estratega militar alemán Clausewitz explicó hace mucho tiempo, la guerra es la continuación de la política por otros medios, y la lucha de clases muestra semejanzas muy acusadas con una

guerra. Lenin, que no era ningún pacifista, en 1905 luchó por la formación de grupos armados para hacer frente al zarismo en defensa de la revolución, pero cuando comprendió que la ola ascendente de ésta había pasado luchó sin cuartel para orientar el trabajo hacia las masas y la educación de cuadros. Lenin sabía que, con la mejor intención del mundo, la táctica de la lucha armada al margen de las masas adquiriría una dinámica propia y acabaría arrastrando al conjunto del movimiento. Posteriormente, en octubre de 1917, los bolcheviques no dudaron en organizar desde un punto de vista militar la insurrección. Pero en octubre apenas hubo derramamiento de sangre, los bolcheviques se hicieron con el poder sin que nadie en Petrogrado se molestase en defender el gobierno de Kerensky. La acción política de los cuadros y militantes bolcheviques había ganado al programa de la revolución socialista a la inmensa mayoría de los trabajadores, soldados y campesinos pobres del país, incluidos aquellos que meses antes apoyaban las posiciones conciliadoras y reformistas. A través de un trabajo paciente en los sindicatos, en los consejos de fábrica, en los sóviets, planteando las consignas adecuadas de “paz, pan y tierra” y “todo el poder a los sóviets”, los bolcheviques ganaron la adhesión incondicional de millones de oprimidos. Y esos resultados tampoco se hubieran hecho realidad de no ser por una labor política continuada a lo largo de años, en las condiciones más difíciles bajo la represión del régimen zarista, que permitió al bolchevismo convertirse en la referencia revolucionaria de los trabajadores más avanzados.

Pertur no hizo caso de las lecciones de Lenin e intentó presentar ambas luchas como algo compatible. En el número 3 de la revista *Hautsi* se afirma: “La acción de ETA no es sustitutiva de los métodos clásicos de lucha obrera sino, donde los obreros no pueden llegar, llega su vanguardia armada. La patronal y el capitalismo han construido un Estado a su medida, burgués y represivo creando fuerzas de policía, ejército, tribunales, sindicatos verticales, etc. con el único objeto de reprimir y ahogar toda lucha del pueblo por defender sus intereses en pos de la igualdad y de la libertad. Hasta ahora dentro del Estado fascista español, y a costa de mucha sangre, lo iban consiguiendo. Pero el pueblo trabajador vasco ha dicho basta ya, y ha empezado a encuadrarse en organizaciones que defienden sus aspiraciones tanto de índole social como nacional y ha decidido que ya no se tienen que perder necesariamente más huelgas; que al capitalismo hay que atacarlo con sus mismas armas.

“En sustitución de los Tribunales fascistas está constituyendo verdaderos Tribunales Populares (los que condenaron a Manzanos y han condenado a otros colaboradores, chivatos, policías...). Al Sindicato Vertical le oponen Comités de Fábrica libre y democráticamente elegidos. A los Ayuntamientos y demás órganos estatales los Comités de Barrio, pueblo, etc. Y a la Policía y Guardia Civil un verdadero Ejército popular. Sabemos que muchas de estas cosas están en sus comienzos pero constituyen ya un embrión de ese futuro poder del pueblo que sustituirá al poder burgués, para construir una sociedad sin clases y sin la explotación del

hombre por el hombre, es decir la sociedad comunista”.

La clase trabajadora tiene sus propios desarrollos y ritmos. Su nivel de conciencia evoluciona a saltos en función de su propia experiencia y los intentos de buscar atajos o tratar de sustituir a la clase y a las organizaciones de que ésta se dota, por muy buena voluntad que se tenga, acaba dando funestos resultados. ETA, aunque creyese estar aportando un genuino y novedoso modelo vasco de lucha hacia el socialismo estaba aplicando los viejos métodos del terrorismo individual de *Naródnaya Volya* (La Voluntad del Pueblo) que Lenin combatió.

Pertur, asesinado en confusas circunstancias, fue uno de los dirigentes con mayor nivel político de ETA y buscaba una inspiración en las ideas comunistas. Si su visión inicial del marxismo era incompleta, ya que partía de unas premisas incorrectas en lo referido a la táctica de la lucha armada individual en lugar del trabajo paciente entre las masas, que él trató de conjugar supo avanzar y buscar el camino correcto. Antes de su muerte había llegado a la conclusión de la lucha armada no era el camino, sino que la única vía era y es la política. Sus partidarios creen que el haber llegado a estas conclusiones totalmente correctas fue precisamente lo que le costó la vida.

Otro de los más significativos dirigentes de ETA fue José Miguel Beñarán Ordeñana *Argala*, víctima del terrorismo de Estado. Dos días antes de su asesinato envió un mensaje dirigido a las Gestoras Pro Amnistía de Arrigorriaga donde hacía un llamamiento a “organizarse en ETA (...) la lucha armada es imprescindible para avanzar. El Gobierno español para su plan de reforma se sostiene en el respaldo del Ejército y en las Fuerzas Represivas. Para luchar contra esta fuerza es imprescindible la fuerza armada del pueblo... Pero ni ETA ni Herri Batasuna, ni KAS ni ninguna organización por grande que sea puede resolver los problemas de la clase trabajadora vasca. Únicamente el pueblo trabajador vasco puede solucionar sus problemas. Por eso yo creo que debemos organizarnos (...) Sólo un pueblo organizado puede conseguir los objetivos a los que aspira”⁴⁸.

Efectivamente, la emancipación de la clase obrera sólo puede ser obra de la propia clase obrera. De ser cada obrero carne de explotación para el burgués a ser una clase con conciencia de su fuerza, de sus tareas y su poder en la sociedad. La clase obrera llega a comprender según su lucha va subiendo peldaños, de forma tortuosa y dialéctica, la necesidad de usar sus armas genuinas como la huelga general, que paraliza la sociedad y permite a los trabajadores demostrar y comprender su propia fuerza, la insurrección y el armamento de las masas para tomar el poder. En toda revolución auténtica, y los ejemplos abundan, la maquinaria represiva del Estado burgués se resquebraja por la iniciativa de los trabajadores en lucha. El mismo ejército se divide en líneas de clase creando condiciones favorables para la agitación revolucionaria en sus filas. Esto ocurrió en Rusia en 1917, durante la revolución española 1936, en Mayo de 1968 en Francia, en 1945-1946 en Italia, Francia y Grecia, durante la Revolución de los Claveles en Portugal, o en la propia situación que vivió el Estado español en los años setenta. Lo hemos vuel-

to a presenciar en Ecuador, en Venezuela y en Bolivia en este nuevo milenio y volverá a ocurrir en cada nueva revolución social.

Lo que también es cierto, como ha demostrado el fracaso de la gran mayoría de estas revoluciones, es que para que la clase trabajadora tenga éxito en sus tareas, es imprescindible contar con una organización, un partido revolucionario con una dirección forjada en el conocimiento teórico de la historia del movimiento obrero, de sus éxitos y derrotas, capaz de orientar eficazmente en cada situación la acción revolucionaria de los trabajadores. Un Estado mayor de la revolución no se improvisa, se forja durante décadas fundiendo a los mejores cuadros con la acción viva de la lucha de clases. Por el contrario, la idea de un pequeño grupo de hombres armados durante décadas que ayudan al conjunto del movimiento a crear un Estado proletario paralelo al burgués, es una utopía irrealizable aunque pueda aparecer como algo “práctico” e inmediato.

A quienes practican el terrorismo individual no les gusta que sus acciones sean calificadas ni de terrorismo, ni de individual. Pero este término es más correcto que el de “lucha armada”, ya que la clase trabajadora, que aborrece la acción estéril del terrorismo individual, sí necesita defender la revolución, y esa acción armada de masas consciente y organizada no tiene nada que ver con la “lucha armada” de un pequeño grupo de individuos que, lejos de debilitar al Estado, lo fortalecen y hacen el mismo efecto al sistema que el que provoca una vacuna frente a una infección: dota al sistema de los anticuerpos —leyes, armas, profesionalización del ejército, etc.— que se convierten en obstáculos añadidos en el camino de la clase trabajadora para la toma del poder.

De ETA salieron en diez años varios grupos de distinta tendencia política, tal y como hemos señalado. En 1966, dejarían la organización el grupo llamado de *los Cabras*, los de Branka (desde planteamientos de socialismo autogestionario) y, a finales de año, la autodenominada ETA-berri (nueva), bajo el paraguas del maoísmo.

En 1970 la escisión se produciría al calor de los acontecimientos del Mayo del 68 francés y su influencia en una parte de los dirigentes refugiados en Francia, que serían ganados por la LCR francesa. En el marco de la discusión inmediata, los dirigentes que respaldaban estas posiciones ganaron un apoyo considerable en la VI Asamblea de ETA, que nutriría de militantes y cuadros a la LCR española y a su sección vasca, la LKI. En este proceso se vuelve a ver la impronta que recorre toda la historia de ETA y las contradicciones ideológicas que siempre han aflorado en su seno en cada fase de auge de la lucha de clases. En 1974, parte del Frente Obrero daría origen a un partido que se reclamaría marxista leninista, LAIA, y ese mismo año, la organización *polimili* rompería con el Frente Militar, en lo que consideraba una readecuación de la estrategia frentista.

ETAPM: DE ROBIN HOOD DE LOS OBREROS A LA DESAPARICIÓN

En octubre de 1978 ETA político-militar (ETAPm) anuncia el comienzo de una nue-

va campaña. Se trata del tiro en la pierna de dirigentes de empresas que han generado conflictos sindicales, además de la demanda del “impuesto revolucionario” contra “los industriales que lleven a la descapitalización de Euskadi”.

Había ejemplos más que suficientes a escala internacional para ver qué se podía esperar de esta táctica. A mediados de los años setenta los Montoneros argentinos secuestraron a los hermanos Born (presidente y director general de Bunge y Borne, una de las empresas de comercio de cereales más importante del mundo) y únicamente los pusieron en libertad por un rescate de sesenta millones de dólares. Los Montoneros insistieron en la condición de que se debía distribuir a los pobres comida y ropa por valor de un millón de dólares, como castigo por las deficiencias en el abastecimiento que la empresa había producido al pueblo.

Acciones como ésta demuestran el abismo que separa el “socialismo” de los grupos guerrilleros del socialismo científico. Éste concibe la tarea de la clase obrera como la lucha para eliminar las causas de la explotación, de la miseria y de la pobreza mediante la revolución socialista que elimine la propiedad privada de los medios de producción. Los guerrilleros se limitan a pedir una “indemnización” para las masas por los crímenes que el capitalismo ha cometido contra ellas. Ésta era la filosofía de Robin Hood, robar a los ricos para ayudar a los pobres, pero de ninguna manera la de Marx, Engels, Lenin o Trotsky.

La Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), en su mayoría agentes policiales, aprovechó la situación para asesinar a dirigentes obreros, políticos y sindicales, abogados laboristas... sin vinculación en la mayoría de los casos con los movimientos guerrilleros. El Gobierno prohibió las huelgas y ocupó policialmente las sedes sindicales, obligando a sus líderes a pasar a la clandestinidad. De paso, también aprovechó para reducir drásticamente el nivel de vida de la clase obrera congelando los salarios cuando la inflación crecía un 100%. La clase obrera fue a la huelga general en julio de 1975, logrando en 36 horas importantes subidas salariales. Sin embargo, sin una dirección marxista y revolucionaria, los obreros no pudieron tomar el poder y la continuidad de las acciones guerrilleras permitió a la reacción retomar la iniciativa preparando las condiciones para el golpe de Estado de Videla. El éxito de la revolución argentina dependía, no del terrorismo individual, independientemente del heroísmo de sus partidarios, sino de la necesidad de ganar el apoyo de la mayoría de los trabajadores para los métodos probados y la política del marxismo.

Había multitud de ejemplos de los que aprender pero, como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír. Ya caída la dictadura, legalizados los partidos y sindicatos obreros en todo el Estado después de una dura batalla, el 19 de febrero de 1980, en medio de la huelga de Michelin en Vitoria, ETAPm secuestró al director de la empresa, Luis Abaitua. La lucha se vio temporalmente frenada por la injerencia de un grupo ajeno a los propios trabajadores. La postura de la empresa diciendo que sólo negociaba por el secuestro del director significaba hacer creer a los trabajadores que las movilizaciones y las huelgas no habían servido para nada. La acción de ETAPm, al desmovilizar a

los trabajadores durante el secuestro, servía objetivamente a los intereses de la patronal. El 1 de marzo ETApM lo liberó sin que la empresa hubiese ofrecido una contraoferta global.

Dos semanas después, la policía detuvo a Santiago Abad, militante de la CNT en Michelín y uno de los principales dirigentes del conflicto. Como reacción, más de mil trabajadores salieron a la calle al día siguiente y 35.000 asistieron a la manifestación de solidaridad convocada por los sindicatos para el 5 de abril. Esta lucha acabó en un triunfo ese mismo mes de abril. Como recuerda A. Val del Olmo: “la alegría era tan intensa que se llegó a cantar *La Internacional* en la Asamblea, tal era el optimismo que se respiraba (...) En ese proceso de tres meses de lucha, el secuestro de Abaitua había sido tan sólo un obstáculo que no aportó nada positivo”⁴⁹.

Sin embargo no todas las organizaciones sacaron esa misma conclusión. Algunos creyeron que la intervención de ETApM había ayudado a elevar la escalada represiva y como consecuencia el conflicto había subido a un nivel superior. Al mismo tiempo, la idea de que el patrón tiene un sólo pellejo y de que la acción armada puede obligarle a hacer concesiones había calado hondo en un sector del movimiento. La CNT sometió a votación un texto firmado como Asamblea de Trabajadores de Michelín en el que se exigía la absolució n “de los luchadores juzgados de ETApM (...) ya que tal secuestro fue un hecho complementario de la lucha de los trabajadores de Michelín como lo demuestra el hecho de que la empresa comenzara la negociaci6n del convenio de forma inmediata a aquella acci6n”⁵⁰.

A principios del año siguiente la Empresa pasó nuevamente a la ofensiva y ETApM respondió el 16 de mayo tiroteando en Vitoria al ayudante del Jefe de Personal, Jesús Casanova. La empresa decidió el cierre patronal y el gobernador civil prohibió las manifestaciones y concentraciones. El 23 de mayo más de 16.000 trabajadores secundaron una huelga en solidaridad con los trabajadores de Michelín. La direcci6n de la empresa, al tiempo que exigía pronunciamientos contra la violencia a las organizaciones sindicales, facilitaba la formaci6n de grupos organizados con porras y otras armas en el interior de la fábrica. Dirigentes sindicales fueron amenazados. Estos grupos fascistas creados en Michelín fueron utilizados contra otros conflictos obreros en la ciudad de Vitoria, como las trabajadoras de limpieza de Txagorritxu, en huelga a finales de los ochenta.

El 25 de junio ETApM asesinó a tiros a Luis Hergueta, directivo de la empresa. Una vez metidos en esta dinámica, sólo los propios trabajadores de Michelín podían pararla. El 16 de julio la asamblea de trabajadores condenó el terrorismo individual como método ajeno al movimiento obrero por 1.500 votos a favor, 300 en contra y 100 en blanco. La intervenci6n, principalmente de ETApM, en los conflictos obreros resultó un absoluto fracaso incluso en aquellos conflictos donde parecía tener “más éxito”.

Finalmente ETApM, cuyo brazo político era EIA (Euskal Iraultzarako Alderdia) y que en las elecciones generales de junio 1977 se presentó bajo el paraguas de la coalici6n Euskadiko Ezkerra (EE) —en la que participaba también EMK⁵¹ y el grupo

Eusko Sozialistak— inicia un proceso de disoluci6n y negociaci6n con el Estado. Juan Mari Bandrés y Mario Onaindía juegan un papel destacado en los contactos con el gobierno de la UCD y finalmente en la cristalizaci6n del acuerdo. EE, que se refundaría como organizaci6n política, y ETApM que se disuelve en septiembre de 1982, reconocen el Estatuto de autonomía como “la ruptura con el régimen pasado” y “el autogobierno de hecho para Euskadi”. Finalmente, defendiendo una política cada vez más reformista y tras una existencia pública efímera, la direcci6n de Euskadiko Ezkerra, cargada de deudas, se integrará mayoritariamente en las filas del PSE-PSOE no logrando arrastrar tras de sí a su base social.

La experiencia de ETApM fue aleccionadora. En un artículo titulado *La posici6n marxista acerca del terrorismo individual*, Trotsky explicó las profundas diferencias entre la acci6n de masas de la clase trabajadora, capaz de generar una conciencia y una acci6n colectivas, y la acci6n individual: “En el primer caso, la clase obrera puede hacer huelgas, paralizar la producci6n, defender sus intereses colectivamente; por el contrario, para asesinar a un funcionario del gobierno no es necesario contar con las masas organizadas. La receta para fabricar explosivos es accesible a todo el mundo y cualquiera puede conseguir una pistola. En el primer caso hay una lucha social, cuyos métodos y vías se desprenden de la naturaleza del orden social imperante; en el segundo, una reacci6n puramente mecánica que es idéntica en todo el mundo, desde China hasta Francia: asesinatos, explosiones, etc. Pero totalmente inocua en lo que hace al sistema social.

“Una huelga, incluso una modesta, tiene consecuencias sociales: fortalecimiento de la confianza en sí mismos de los obreros, crecimiento del sindicato y, con no poca frecuencia, un mejoramiento en la tecnología productiva. El asesinato del dueño de la fábrica provoca efectos policíacos solamente, o un cambio de propietario desprovisto de toda significaci6n social. Que un atentado terrorista, incluso uno ‘exitoso’, cree la confusi6n en la clase dominante depende de la situaci6n política concreta. Sea como fuere, la confusi6n tendrá corta vida; el Estado capitalista no se basa en ministros de Estado y no queda eliminado con la desaparici6n de aquellos. Las clases a las que sirve siempre encontrarán personal de reemplazo; el mecanismo permanece intacto y en funcionamiento. Pero el desorden que produce el atentado terrorista en las filas de la clase obrera es mucho más profundo”⁵².

IV. La Transición

EL PAPEL DE LA CUESTIÓN NACIONAL EN LA CAÍDA DE LA DICTADURA

El problema nacional, junto con la crisis económica, es la fuente de un sin fin de contradicciones y tensiones en el Estado español. Las décadas de auge económico agravaron los desajustes regionales y las injusticias en la distribución de la renta. La renta *per cápita* de Madrid, Catalunya y Euskal Herria en 1975 era más del doble que en Extremadura. Una situación similar se daba en Castilla y León, Castilla - La Mancha, Galicia, Andalucía, Canarias y Aragón. Esta última, a pesar del crecimiento de Zaragoza, perdió 55.000 puestos de trabajo en el período 1955-75.

Durante décadas de centralismo burocrático, las regiones sufrieron una falta de atención total. En 1976, la cantidad de dinero público gastada en las regiones era del 11% del total. La cifra correspondiente en Gran Bretaña era del 35,7% y en Suecia, del 45,4%. Estos países no tienen un sistema federal. Tratándose de Alemania y Canadá, que sí tienen un sistema federal, las cifras eran del 43,8% y 58,8%, respectivamente. Incluso Francia, con sus viejas tradiciones de “República única e indivisible”, dedicaba el 19% de sus gastos públicos a las regiones. Estas cifras explican la existencia de tendencias regionalistas en todas estas provincias, que reflejan las frustraciones y el descontento de las masas de la pequeña burguesía.

Al calor del crecimiento experimentado en Europa y Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial se fraguó el auge de la economía española en los años sesenta. La consecuencia más inmediata del crecimiento económico fue el fortalecimiento de la clase trabajadora. Su concentración creciente en las ciudades acentúa las terribles condiciones de explotación, de represión y de falta de libertades que la empujan a la lucha y la endurecen progresivamente. Liberándose de las cadenas del miedo, el movimiento obrero toma confianza en sus propias fuerzas y se organiza a un nivel superior con el surgimiento de las Comisiones Obreras y el crecimiento del Partido Comunista, principalmente, que más tarde jugarán un papel clave en la Transición.

El PCE realizó un trabajo clandestino sistemático durante la dictadura por medio de valerosos y curtidos cuadros, muchos de los cuales tenían a sus espaldas la

experiencia de la Guerra Civil, encarcelamientos y torturas. Eran militantes abnegados para quienes “el Partido” constituía la razón vital de su existencia. Por su actividad, el PCE brindó numerosos mártires a la causa de la lucha contra la dictadura y, justamente, se convirtió en una verdadera obsesión para el régimen franquista. La represión, detenciones, torturas, la continua declaración del “Estado de excepción”, los asesinatos de militantes de izquierdas a manos de la policía por manifestarse, repartir hojas o, simplemente, por reunirse, irán acrecentándose en la medida en que el régimen se hace cada vez más débil y agonizante. Sin embargo el movimiento crece con el auge de una clase obrera joven, renovada e inexperta que abandona progresivamente el medio rural —que en los años treinta concentraba al 70% de la población— para nutrir las filas del proletariado industrial en ciudades como Vitoria, Pamplona, Valladolid..., que habían sido baluartes de la reacción.

A principios de los setenta tuvieron lugar movilizaciones que evidenciaban un alto nivel de reorganización de los trabajadores. En 1971, CC.OO. consiguió copar una parte muy importante de los “enlaces” y “jurados” en las elecciones sindicales celebradas ese año. En 1973 se declara la huelga general en Pamplona, eligiéndose un comité de huelga formado por los representantes de las empresas más importantes. La represión era incapaz de contener el movimiento de los trabajadores. Fueron muchos los obreros que cayeron bajo las balas de la policía en aquellos años y centenares los que eran detenidos o despedidos del trabajo por participar en manifestaciones, huelgas o reuniones ilegales.

En 1972 era detenida toda la cúpula dirigente de CC.OO., con Marcelino Camacho a la cabeza. El juicio contra los dirigentes de Comisiones ha pasado a la historia como *el Proceso 1.001*, por el número del sumario. Durante las semanas previas al juicio, cuyo comienzo estaba previsto para el día 20 de diciembre de 1973 (el día que ETA ejecutó al entonces presidente del Gobierno franquista, Carrero Blanco), se desató una impresionante movilización a escala internacional en gran cantidad de países exigiendo la libertad de los detenidos y el final de la dictadura. El movimiento de la clase obrera era imparable y constituía la espina dorsal de la oposición a la dictadura alrededor del cual basculaba el resto de capas oprimidas de la sociedad: los estudiantes e intelectuales, las nacionalidades oprimidas, las capas medias del campo y la ciudad, las mujeres y la juventud.

En la curva ascendente de la lucha huelguística podemos ver el proceso de toma de conciencia de los trabajadores: en el trienio 1964-66 hubo 171.000 jornadas de trabajo perdidas en conflictos laborales; en 1967-69, 345.000; en 1970-72, 846.000 y en 1973-75, prácticamente se dobló hasta 1.548.000. Posteriormente, después de la muerte de Franco, el movimiento huelguístico adquiere unas dimensiones insólitas: de 1976 a mediados de 1978 se perdieron nada menos que 13.240.000 jornadas en conflictos laborales.

Ante esta situación, la burguesía no tuvo más remedio que buscar el apoyo de los dirigentes obreros, como hizo en los momentos más crudos durante la República y más tarde en la Guerra Civil para encauzar el movimiento. Joaquín Satrustegui,

empedernido monárquico y negociador de Suárez con las fuerzas obreras señaló en 1973: “Hay que dominar, a costa de lo que sea, a los comunistas, sobre todo y, más importante aún, hay que integrar a sus dirigentes en nuestro proyecto, para que sean ellos mismos los que controlen y eviten la violencia de las huelgas y las revueltas estudiantiles, sobre las que tienen una gran autoridad e influencia...”.

Su opinión sobre los dirigentes, como en el caso de Santiago Carrillo, era muy clara: “Este señor [por Santiago Carrillo] está intentando y poniendo todos los medios a su alcance para que su organización acepte la monarquía y paralice todo el desorden insurreccional que se está produciendo en España. Él está de acuerdo en los términos de lo que debe ser un gran acuerdo nacional que conduzca a la reconciliación definitiva y a la normalización de un sistema parlamentario. Sin su colaboración no podríamos hacer nada, pero las resistencias que encuentra en los miembros de su propio partido y, particularmente, fuera de él, especialmente en los sectores más radicalizados, puede poner todo en peligro” (citado en *El Otro País*, nº 1, diciembre 2000 - enero 2001).

El régimen franquista, que trataba de perpetuarse tras la muerte del dictador, agonizaba con cada una de las oleadas de huelgas que sacudían todo el Estado y particularmente los centros neurálgicos, donde se concentraba el proletariado. Madrid, Catalunya, Asturias, Euskal Herria son escenario de numerosas huelgas donde participan los grandes batallones del proletariado: Ensidesa, Hunosa, Standard Eléctrica y el metal además de otros sectores como el Metro de Madrid, Correos, Telefónica, etc.

En 1974 la dirección del PCE, como parte de su estrategia de reconciliación nacional y pactos con la “burguesía democrática”, crea la Junta Democrática, formada por el monárquico Calvo Serer, García Trevijano y otros, proponiendo a D. Juan de Borbón, padre del actual rey, la presidencia de dicha Junta. A este pacto se adhirió el Partido Socialista Popular de Tierno Galván y grupos maoístas como el PTE (Partido de los Trabajadores de España). El PSOE, por su parte, organiza en 1975 la Plataforma de Convergencia Democrática, que incluye además a los franquistas reconvertidos Ruiz-Giménez, Dionisio Ridruejo y otros. A finales de marzo de 1976 se unificaron la Plataforma y la Junta Democrática, dando lugar a la *Platajunta*, a la que se adhirieron UGT y CC.OO.

LOS ÚLTIMOS FUSILAMIENTOS DE FRANCO

Durante los cuarenta años que duró la dictadura, Franco firmó más de 200.000 sentencias de muerte, un genocidio sólo comparable a las atrocidades nazis en los territorios que ocuparon en Europa. El régimen franquista se mantuvo en el poder esclavizando a los pueblos del Estado español y garantizando de esta forma una acumulación de plusvalía fabulosa para los empresarios, banqueros, terratenientes y multinacionales, que hicieron un negocio redondo con los crímenes de

la dictadura. Las últimas ejecuciones sumarias del régimen fueron tan tarde como el 27 de septiembre de 1975. En este último acto atroz de la dictadura, apenas un mes antes de la muerte del dictador, cayeron dos miembros de ETA y tres del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico)⁵³.

Para descabezar el movimiento de oposición al franquismo, la dictadura pone en marcha todo su arsenal represivo intentando dar un escarmiento ejemplar. A todos los detenidos se les aplica con carácter retroactivo el Decreto Ley Antiterrorista aprobado el 22 de agosto de 1975. Esta norma es promulgada expresamente para aplicársela a los militantes de FRAP y de ETA, a los que se quiere fusilar.

Durante la detención en San Sebastián del militante de ETA José Antonio Garmendia se había producido una refriega a tiros y éste recibió varios balazos. Una vez caído, uno de los guardias que participaban en la operación le remató con un tiro en la cabeza. Trasladado al hospital en estado de coma, Garmendia logró sobrevivir tras ser intervenido quirúrgicamente pero permaneció en coma durante varias semanas: había perdido masa encefálica. A pesar de su situación crítica, los policías le someten a interrogatorios en el centro hospitalario y tres semanas después, como no puede firmar, le obligan a imprimir su huella dactilar en una declaración redactada por la policía en la que inculpa a Ángel Otaegi, quien no ha intervenido en los hechos y ni siquiera pertenece a ETA. Sólo ha procurado cama durante una noche a dos miembros de la organización⁵⁴.

Franco está enfermo y el tiempo apremia. A última hora el Gobierno decide incluir en el paquete de condenados a muerte a Juan Paredes Manot *Txiki*, un joven extremeño criado en Zarautz desde niño y detenido el 30 de julio en Barcelona acusado de haber participado en el atraco a un banco, en el que murió un policía. No hay ninguna prueba que le incrimine directamente ya que en el fuego cruzado han participado siete personas pero su suerte está echada antes de comenzar el juicio farsa. El Gobierno tiene ya decidido que tiene que haber un fusilado por cada atentado. Otaegi será fusilado con Txiki y con Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo y José Humberto Baena.

Txiki es fusilado junto al cementerio de Collserolla, en las afueras de Barcelona. Era muy bajito y le pusieron sobre un montículo atado por cadenas a un trípode. Los guardias civiles que le iban a fusilar eran voluntarios. Sólo estaban presentes su hermano Mikel y dos abogados, Marc Palmes y Magda Oranich, que lo recuerda así: “Sonrió al vernos a los tres. Las cadenas que le ataban al trípode eran largas y pudo levantarnos el brazo. A continuación, empezó a cantar el *Eusko Gudariak* y ya sonaron los tiros, no una ráfaga cerrada, como yo esperaba. Eran seis guardias y llevaban dos balas cada uno. Las empezaron a disparar de una en una, con saña, no hubo una descarga. Con cada tiro, Txiki iba cayendo y desapareciendo detrás de los uniformes verdes, pero le seguíamos oyendo cantar. Cuando pararon los tiros, todavía salía un murmullo del suelo”⁵⁵.

Estas ejecuciones sumarias generaron tal nivel de repulsa que hasta la dirección del PSOE hizo las siguientes declaraciones: “Franco, los guardias civiles que han

participado como voluntarios en el pelotón de ejecución, Arias, Juan Carlos, cada uno de los ministros del Gobierno, los falsos jueces de los falsos procesos, todos los reaccionarios que facilitan estos crímenes salvajes, todos pagarán sus culpas”.

El 1 de octubre se celebra el aniversario de la proclamación de Franco como Jefe del Estado, que se convierte en un acto de reafirmación patriótica frente a las muestras de rechazo a los recientes fusilamientos por toda Europa: movilizaciones masivas en Italia, el asalto a la embajada española en Lisboa que acabó ardiendo, grandes concentraciones en Estocolmo y en Oslo, en Alemania, Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda, Noruega. Doce países han llamado a consulta a sus embajadores en Madrid e incluso el Papa Pablo VI ha pedido que no se lleven a cabo las ejecuciones. A la misma hora que se celebra la concentración franquista aparece en escena una nueva organización armada: los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Sus militantes pretenden vengar a los cinco antifascistas que acaban de ser fusilados y el 1 de octubre matan a cuatro policías nacionales en Madrid. Su nombre hace referencia a este día.

Tras una lista interminable de asesinatos, terror y violencia, Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Millones de puros se encendieron en los hogares obreros para festejar la muerte del cruel dictador. El franquismo fue derrotado por la acción sacrificada de las masas de la clase trabajadora, muchos de cuyos mejores militantes dieron su vida para poner fin a cuarenta años de opresión.

RECRUDECIMIENTO DE LA LUCHA

En zonas donde el problema nacional no se había desarrollado históricamente, las tendencias centrifugas surgieron con mucha fuerza pero eran la expresión de la voluntad del pueblo en su lucha contra todo tipo de opresión. Los trabajadores que nutrían estas manifestaciones no apoyaban ideas nacionalistas, sino que demostraban deseos de combatir todo aquello que identificaban con la dictadura, y especialmente contra lo que había sido uno de sus objetivos represivos preferidos.

Franco había nombrado sucesor al entonces príncipe de España, Juan Carlos, en 1969. De esta manera, se establecía una línea directa entre la dictadura nacida del alzamiento fascista y la monarquía. El día 22 de noviembre de 1975 Juan Carlos fue proclamado rey, jurando ante las Cortes franquistas los Principios del Movimiento Nacional, que era la declaración de principios fascista que justificaba el alzamiento del 18 de julio de 1936.

La escalada huelguística de la clase obrera no cesa a pesar de todos los intentos de la burguesía por ofrecer una cara reformista. En realidad, los resortes del aparato del Estado siguen firmemente en la mano de ex falangistas y reaccionarios que, como Martín Villa o Fraga Iribarne, no están dispuestos a realizar concesiones fácilmente. Los acontecimientos de Vitoria van a probar la auténtica catadura “democrática” de estos individuos. El 3 de marzo de 1976, el ministro de Interior, Ma-

nuel Fraga Iribarne, ordena el desalojo a tiros de la Iglesia de San Francisco, donde se iba a llevar a cabo una asamblea general para valorar la incidencia de la huelga general que ha prendido en las principales empresas y barrios obreros de la ciudad. La acción brutal de la policía provoca una masacre. La elección de la ciudad de Vitoria para dar un escarmiento no fue una casualidad. Lo que caracterizó el movimiento de Vitoria fue la coordinación de las empresas en lucha a través de la elección en asamblea de comisiones representativas de fábrica que, junto a los jóvenes, las mujeres, los barrios, crearon una estructura de poder obrero que dirigía y organizaba el movimiento, las cajas de resistencia, etc. Este poder obrero, de haber sido extendido por las direcciones del PSOE y del PCE a todo el Estado, hubiese implicado la maduración de la situación prerrevolucionaria que se estaba desarrollando. En definitiva, representaba una amenaza para la propia pervivencia del capitalismo que la clase dominante no estuvo dispuesta a tomar a la ligera⁵⁶.

Como ocurrió a lo largo de 1976 y 1977, los dirigentes reformistas de la clase obrera no tenían ninguna intención de llevar el movimiento por estos derroteros. La excusa para no hacerlo era el temor a provocar una nueva guerra civil. “Franco ha muerto en la cama”, era la frase preferida de los dirigentes del PSOE y del PCE, como si la gigantesca oleada de huelgas y manifestaciones que sacudió todo el Estado no fuesen los hechos decisivos que llevaron a la clase dominante a comprender que no podían seguir gobernando con los viejos métodos de la represión. Cada nuevo asesinato a manos de la policía animaba a un número mayor de obreros a salir a la calle y la experiencia de la Revolución de los Claveles en Portugal demostraba que un movimiento de masas de esas características podía acabar rompiendo el propio aparato del Estado franquista y dejar a la burguesía suspendida en el aire.

En aquel contexto de polarización social y auge de la lucha obrera, la burguesía se vio obligada a acelerar los planes de reforma y ampliar la profundidad de la misma. El intento continuista de Arias Navarro había que darlo por fracasado. El 30 de julio de 1976 Adolfo Suárez sustituye a Carlos Arias Navarro, anunciando poco después el referéndum para la Reforma Política para diciembre de ese mismo año. El temor a una explosión revolucionaria y a que los dirigentes de las organizaciones de masas no puedan controlarla crece por momentos.

Como explica David Rey, uno de los hechos que mejor revelaba esta situación fue la creación, de manera clandestina, de la UMD (Unión Militar Democrática) en agosto de 1974 por un grupo de oficiales y suboficiales jóvenes contrarios a la dictadura franquista e influenciados por la Revolución portuguesa de abril del 74 (dirigida por oficiales izquierdistas del ejército portugués). La UMD fue desarticulada en julio de 1975 y en aquellos momentos contaban con cerca de 200 oficiales y suboficiales del ejército y con ramificaciones hasta en la Guardia Civil. Los dirigentes de la UMD fueron expulsados del ejército y condenados a prisión⁵⁷.

Si esta situación es la que podía vivirse en sectores de la oficialidad, no hace falta mucha imaginación para entender la que se vivía entre la tropa. Los sectores

más perspicaces de la burguesía se daban cuenta de que no podrían utilizar el ejército contra la población sin provocar la ruptura del mismo. Lo mismo ocurrió en octubre de 1975 cuando Marruecos invadió el entonces Sahara Español y la burguesía española se vio impotente para utilizar su ejército contra Hassán II. En otros cuerpos represivos, como la Policía y la Guardia Civil, también se estaban organizando los embriones de lo que luego sería el SUP (Sindicato Unificado de Policía) o el Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC).

La burguesía estaba aterrada. La evasión de capitales adquirió cifras dramáticas en aquellos años. Sólo entre enero y mayo de 1976 salieron del país 60.000 millones de pesetas. Esta fuga de capitales afectó directamente a la industria. Así, mientras en 1973 la formación bruta de capital crecía un 12,5%, en 1975 se contrajo en un 4%, siendo aún peor en 1976, a pesar de que el INI invirtió 115.000 millones de pesetas, lo que representaba un 30% de la inversión total. La clase obrera sufría los efectos de esta crisis. La inflación en 1976 llegó al 20% y sólo el pan subió cerca de un 40% en el primer trimestre del año. El desempleo, que afectaba a apenas 300.000 trabajadores en 1973, superaba en 1976 el millón de personas.

EL RESURGIR DE LA CUESTIÓN NACIONAL

La radicalización en la lucha de clases afectaba a todas las organizaciones obreras, a pesar de las intenciones de sus dirigentes. También en el terreno de la cuestión nacional el peso del auge del movimiento de las masas se dejaba sentir con fuerza. Ése era el carácter de la época. En 1976, *El Socialista*, órgano de expresión del PSOE, resalta la resolución del Comité Central socialista de Euskadi. “El Comité Central Socialista de Euskadi (PSOE) propugna:

“El autogobierno de Euskadi en sus aspectos político, administrativo, legislativo, cultural y social mediante un Estatuto de Autonomía en la perspectiva de un Estado federal aprobado por el pueblo vasco en un proceso constituyente.

“La ruptura democrática, a partir de la cual el período de provisionalidad en Euskadi deberá ser regido por los principios e instituciones autonómicas contenidos en el estatuto de 1936, con arreglo a los que se organizará el período constituyente y la aprobación por el pueblo del Estatuto de Autonomía definitivo.

“El ejercicio del derecho de autodeterminación por el pueblo de Euskadi que deberá ser garantizado en cuanto tiempo y forma por el Estatuto de Autonomía.

“El Comité Central Socialista de Euskadi exige la inmediata liberación de todos los presos políticos vascos, sin exclusiones y la supresión de todas aquellas instituciones contrarias a la libertad y derechos del hombre...

“Sólo el socialismo liberará al pueblo de Euskadi de la opresión nacional y capitalista que sufre. Euskadi será socialista o no será libre. Solo los vascos seremos libres en una sociedad sin clases, sin explotación económica, sin que unos pueblos opriman a otros y las relaciones entre los mismos sean de solidaridad y fra-

Euskal Herria y el socialismo

Eloy Val del Olmo

ternidad, unidos por el internacionalismo socialista en el marco de un Estado federal, libremente decidido por los diversos pueblos que componen el Estado”.

En aquel período el movimiento en defensa de los derechos democráticos nacionales estaba vinculado estrechamente a la lucha de la clase trabajadora y tenía una poderosa resonancia en sus organizaciones tradicionales. Como Trotsky señaló al analizar el fenómeno de la lucha nacional en la Revolución Rusa, las masas del proletariado, de campesinos y sectores de la pequeña burguesía de las nacionalidades históricas que despertaban a la lucha política exigían sus derechos democráticos como parte de una lucha más global contra la dictadura.

Las organizaciones de masas, entre ellas el PSOE, que acababa de sufrir un proceso de crisis interna, estaban igualmente afectadas por estos desarrollos. Arturo Val, en su libro sobre el 3 de marzo, cita la resolución sobre Nacionalidades y Regiones del congreso del PSOE de Suresnes (octubre del 74):

“Ante la configuración del Estado español, integrado por diversas nacionalidades y regiones marcadamente diferenciadas, el PSOE manifiesta que:

“1.- La definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español.

“2.- Al analizar el problema de las diversas nacionalidades el PSOE no lo hace desde una perspectiva interclasista del conjunto de la población de cada nacionalidad sino desde una formulación de estrategia de clase, que implica que el ejercicio específico del derecho de autodeterminación para el PSOE se enmarca dentro del contexto de la lucha de clases y del proceso histórico de la clase trabajadora en lucha por su completa emancipación.

“3.- El PSOE se pronuncia por la constitución de una República federal de las nacionalidades que integran el Estado español por considerar que esta estructura estatal permite el pleno reconocimiento de las peculiaridades de cada nacionalidad y su autogobierno a la vez que salvaguarda la unidad de la clase trabajadora de los diversos pueblos que integran el Estado español”.

Cómo suenan estas palabras hoy, después de la experiencia de catorce años de gobierno de Felipe González en los que la guerra sucia y el apoyo a las posiciones más reaccionarias frente a los derechos democráticos de las nacionalidades históricas fueron una de sus señas de identidad más destacadas. Pero en 1976 la dirección del PSOE, en el marco de una situación prerrevolucionaria, se tenía que hacer eco de las aspiraciones de millones de oprimidos al menos en las palabras. Precisamente el abandono de una perspectiva genuinamente socialista e internacionalista condujo a la dirección del PSOE a finales de los años setenta, ya controlada por el ala socialdemócrata, a repudiar su viejo programa respecto a la cuestión nacional. Las ideas de Suresnes fueron sustituidas por otras, inspiradas en las altas esferas del aparato del Estado y por individuos como Barrionuevo, Vera o Cor-

cuera, que utilizaron como instrumentos de su acción política a gente del tipo de Amedo o el general Galindo.

La cuestión nacional se recrudecía con fuerza a la muerte del dictador. En Barcelona, la conmemoración del 11 de septiembre (la Diada Nacional) de 1976, realizada en Sant Boi y a la que asistieron más de 100.000 personas, tuvo como eje reivindicativo la huelga de los trabajadores de Seat. La Diada del año siguiente, ya conseguida la legalización de los partidos obreros, logró congregarse a más de un millón y medio de personas. En Catalunya el peso del proletariado en el conjunto de la sociedad se fortaleció al calor del desarrollo económico de los años sesenta y setenta y se nutrió de una enorme masa de inmigrantes. De 1952 a 1981, el saldo migratorio favorable a Catalunya fue de 1.464.000 personas, concentrándose más de la mitad de esa cifra en los años sesenta. Del total de la población catalana en 1970, sólo el 62,3% había nacido en Catalunya. Esto explica el hecho de que el nacionalismo catalán tenga tan poca presencia en la actualidad entre el movimiento obrero.

Las movilizaciones contra la opresión nacional aparecieron de esta manera como una palanca extraordinariamente útil en la lucha contra la dictadura y el capitalismo. En Andalucía, el 4 de diciembre de 1977 más de 200.000 personas se manifestaron en Málaga exigiendo la autonomía, pero esta exigencia formaba parte de una serie de reivindicaciones más amplias: la reforma agraria y el fin del latifundismo, la vuelta de los emigrantes, la desaparición del analfabetismo y el fomento de la cultura, el establecimiento del pago del desempleo... En aquella manifestación, la policía cargó brutalmente y en la refriega asesinaron al militante de CC.OO. García Caparrós. La respuesta de ira de los trabajadores en las horas siguientes y el día posterior obligó al gobierno Suárez a decretar el estado de excepción en Málaga. La defensa de los derechos democráticos nacionales aparecía no como un obstáculo, sino como parte de la lucha revolucionaria de los trabajadores.

El aparato del Estado había adquirido una cierta independencia en su actuación durante el franquismo con respecto a la burguesía, lo que demostraba la debilidad de esta última. El 23 de enero de 1977 varios pistoleros fascistas asesinaron a sangre fría a cinco abogados laboristas de CC.OO. en su despacho de la calle Atocha de Madrid. Todo el mundo estaba pendiente de la convocatoria de una huelga general mientras la burguesía y el Gobierno estaban muertos de pánico. Pero en lugar de declarar la huelga general, Santiago Carrillo, secretario general del PCE, salió en los medios pidiendo el apoyo para el Gobierno y realizando llamamientos "para no responder a la provocación". A pesar de todo, más de 300.000 trabajadores se declararon en huelga en Madrid y se realizaron paros y manifestaciones de solidaridad en Euskal Herria.

El periódico oficial del capital financiero británico, *Financial Times*, declaraba en un artículo de diciembre de 1978: "El apoyo del PCE, tanto a la primera como a la segunda administración Suárez, ha sido abierto y sincero. El señor Carrillo fue el primer líder que dio su apoyo a los Pactos de la Moncloa e inevitablemente el

PCE ha apoyado al Gobierno en el Parlamento. Pero como partido que controla la central sindical mayoritaria, CC.OO., su apoyo durante algunos momentos más tensos de la Transición ha sido crucial. La moderación activa de los comunistas, durante y después de la masacre de los trabajadores de Vitoria el 3 de marzo de 1976, el ametrallamiento de cinco abogados comunistas en enero de 1977, y la huelga general vasca en mayo de ese mismo año, por poner sólo tres ejemplos, era probablemente decisiva para evitar que España cayera en un abismo de conflictividad civil importante y permitir la continuación de la reforma".

La amnistía para todos los presos políticos del franquismo fue una de las exigencias democráticas que motivaron centenares de manifestaciones y huelgas y por la que cayeron asesinados numerosos trabajadores y jóvenes, víctimas de la represión policial. Finalmente el movimiento de masas logró que muchos presos políticos salieran de las cárceles franquistas. Sin embargo, al promulgarse la Ley de Amnistía de 1977 para los presos políticos, la política de pactos de los dirigentes reformistas permitió al aparato de la dictadura blindarse ante futuras demandas de responsabilidades por los numerosos crímenes cometidos. Dicha ley, aunque pasase prácticamente desapercibido entonces, tenía de hecho el carácter de una "ley de punto y final" en la que procuraron protegerse los asesinos a sueldo del régimen. El artículo 2º, que especifica los "casos comprendidos por dicha amnistía", recoge los siguientes apartados: e) "Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley". f) "Los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas". En definitiva, esta ley ponía al mismo nivel a los agresores y las víctimas y daba garantías de impunidad al aparato del Estado de todos los crímenes, torturas y asesinatos cometidos por los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad desde la dictadura hasta su publicación.

El fracaso electoral del PCE en las primeras elecciones de 1977, en las que apenas logró un 9,2%, se comprende si se tiene en cuenta que Carrillo en todo el período anterior a las mismas, hizo concesión tras concesión, aceptando la monarquía y la bandera nacional franquista que exhibía en los actos públicos, el apoyo a Suárez, la ley de "punto y final", etc. Fue precisamente la renuncia a defender una política revolucionaria y la aceptación de las reglas del juego capitalista lo que provocó la desmoralización y el reflujo entre los trabajadores. La consecuencia inmediata de esta política de colaboración de clases fue la renuncia a defender el derecho de autodeterminación, aceptar la monarquía, dar impunidad a torturadores y fascistas y participar en la organización del Estado de las autonomías que la clase dominante, presionada por las luchas de aquel período, no tuvo más remedio que conceder pero que lo utilizó para rebajar las demandas de las nacionalidades históricas.

EUSKAL HERRIA: LA OPCIÓN INDEPENDENTISTA COBRA FUERZA

Si los dirigentes obreros del PSOE y del PCE, especialmente éste último, que tenía la influencia decisiva sobre la juventud y el proletariado organizado —a través de CC.OO.—, hubieran defendido una estrategia socialista para conquistar el poder, el problema de las nacionalidades hubiera entrado en una fase de resolución.

El PSOE de Euskadi firmó un Pacto Autonómico con el PNV comprometiéndose a defender un proyecto político autonómico con Navarra incluida. Apareció en la pancarta del Aberri Eguna de 1977, última convocatoria unitaria, defendiendo el derecho de autodeterminación. Esta reivindicación, olvidada hoy por los dirigentes socialistas, impregnaba hasta el tuétano a todo el movimiento obrero en un momento en que las organizaciones nacionalistas pequeñoburguesas estaban profundamente fragmentadas y divididas.

A finales de 1977 la crisis económica estaba afectando a Euskadi de forma catastrófica. El empresario vasco Olarra caracterizaba así la situación: “posiblemente, antes del próximo verano, las cotas de paro en Vizcaya y Guipúzcoa serán iguales a las más altas que se registran en el país. El paro en Vizcaya ya alcanza a 80.000 personas en una población laboral de 400.000 y puede llegar a cotas del 20 o 22%, o sea, un obrero de cada cinco sin trabajo en el antiguo ‘imperio industrial vasco’ y añadía: “La gran empresa en Vizcaya está en una situación caótica y puede decirse que la empresa vasca va a sufrir más que la de todo el resto del Estado español. Muchas de las empresas fuertes de Vizcaya están en situación irreversible. El 80% están en suspensión de pagos” (*El País*, 7/10/1977).

El periódico *Le Monde* (16 de octubre) reseñaba que las quejas de los industriales vascos sobre la actual situación van acompañadas de “una nostalgia de los viejos tiempos, es decir, del franquismo y de esta constatación: volver atrás es imposible, pues sería ofrecer un pretexto a nuestros socios para cercarnos sus mercados. La única solución es la autonomía. Así los nacionalistas vascos serán los que detengan a los extremistas”.

Ésta era la tarea encomendada a la burguesía vasca: traicionar la lucha por la libertad de Euskal Herria a cambio, nuevamente, de mantener intacto el orden burgués. En la Guerra Civil muchos gudararis, militantes nacionalistas vascos honrados y sinceros del PNV, de ANV y Jagi-Jagi, del sindicato ELA, la mayoría obreros y gente humilde del pueblo, dieron su vida y sufrieron lo indecible en la lucha contra el franquismo mientras sus dirigentes burgueses pensaban en salvar su pellejo, sus negocios, sus posesiones y la potente industria vasca, que fue entregada prácticamente intacta al ejército fascista para ahogar las libertades, la República y la revolución. Esta misma burguesía vasca que lanzaba lágrimas de cocodrilo durante la dictadura mientras llenaba el cazo con la esclavitud de la clase obrera, ahora que las masas de obreros vascos enarbolaban nuevamente su roja bandera, salía como una comadreja del escondrijo para colocarse al frente de las manifestaciones, tratando de aprovechar el nuevo impulso de las masas para alcanzar prebendas y

privilegios y continuar aplicando una política afín a sus intereses.

La potenciación del PNV por parte de los capitalistas vascos era una táctica consciente para “detener a los extremistas”, desviando la atención de las masas de sus problemas económicos, dividiendo al movimiento obrero y descarrilando la lucha por el derecho de autodeterminación mediante la división territorial, la autonomía y los cauces parlamentarios. Pero para actuar de esta forma seguían necesitando a los dirigentes obreros.

En las primeras elecciones legislativas de 1977, el PSOE fue el primer partido en Euskal Herria y el PSUC obtuvo el 17% de los votos en Catalunya, por delante de la UCD y de la organización de Jordi Pujol. En Euskadi se formó el Consejo General Vasco por primera vez tras la Guerra Civil con un socialista al frente, Ramón Rubial. Esto demostraba que los trabajadores vascos, que jugaron un destacado papel en la lucha contra Franco, estaban buscando una solución de clase a sus problemas. Estatalmente un sector de la burguesía maniobraba hacia las organizaciones principales de la izquierda buscando su apoyo para que contuviesen una situación prerrevolucionaria que maduraba por momentos, con la idea de que era mejor hacer algunas concesiones y perder algo, antes que perderlo todo. La política de alianzas con esta burguesía supuestamente progresista, europeísta y democrática supuso un giro a la derecha de los dirigentes del PSOE y de los del PCE y un abandono de las reivindicaciones democrático-nacionales como el derecho de autodeterminación. Pero era imposible dar ese salto sin fricciones internas.

Desde principios de 1977 la dirección del PSOE llevó a cabo una caza de brujas sistemática contra la corriente marxista que se oponía a su política de pactos y consenso con la burguesía y que defendía el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas vinculándolo a la unidad de la clase trabajadora para transformar la sociedad. Dicha caza de brujas se trasladó también a la UGT, siendo disueltas las federaciones de Navarra y de Badajoz.

En el año 1979 estalló una lucha abierta. En el XXVIII Congreso, con unos mil delegados en la comisión de la ponencia ideológica, la posición defendida por el secretario general Felipe González fue rechazada, siendo asumida la presentada por los críticos: “El PSOE reafirma su carácter de partido de clase, de masas, marxista, democrático y federal”. En el pleno obtuvo el 61% de apoyo de los delegados. Ante tamaña derrota Felipe González dimitió, pero el ala crítica del partido dirigida por Pablo Castellanos, Bustelo, Gómez Llorente..., fue incapaz de dar una alternativa y la ocasión se perdió. Aun así, seis años le costó a la dirección del partido arrancar el marxismo revolucionario de la base, proceso que se completó con la expulsión de la UGT de Álava en 1983.

Esta política “pragmática” tendrá un coste elevado en las elecciones generales de 1979, en las que el PSOE pierde un 10% de sus votos en Euskadi mientras una fuerza nueva, Herri Batasuna, obtiene 170.000 votos. ¿De dónde y por qué emerge con tanta fuerza una organización hasta hace poco inexistente?

Herri Batasuna se crea en la primavera de 1978 y está integrada por ANV, LAIA,

ESB y HASI⁵⁸, además de por personalidades del campo nacionalista como Telesforo Monzón, Letamendía, Idígoras, Iríbar, Zabaleta, Gorostidi y otros. Herri Batasuna (Unidad Popular) se constituye como el embrión de un frente nacionalista vasco. En la composición interclasista de HB cabían organizaciones estrechamente vinculadas con ETA y personajes como Telesforo Monzón, ex ministro del Gobierno autonómico vasco en la República y ex militante del PNV. Un buen burgués al que *El País* calificó entonces de pacifista y que llegó a decir que “si Euskadi fuese independiente estaría a favor de su entrada en la OTAN”, o que en declaraciones a *El Correo* del 13 de marzo de 1979 afirmaba: “Han votado a HB los patriotas que creen en la independencia de Euskadi, que creen en la reunificación de Euskadi, en la euskerización y en una solución social para Euskadi. Unos le llaman socialismo, pero yo no dejo de llamarle *jelkidismo*, que es un movimiento colectivo revolucionario de la máxima importancia”. También cabían ESB (los exponentes clásicos del nacionalismo pequeñoburgués, vinculados a las cooperativas de Mondragón), Letamendía (un experto en historia vasca que aceptaba la teoría estalinista de la revolución por etapas) y militantes de todo tipo simplemente hartos del PNV y de la política de pasteleo de los dirigentes socialistas y comunistas con la burguesía.

La primera prueba de fuego de la nueva organización de la *izquierda abertzale* fue el referéndum sobre la Constitución llevado a cabo a finales de 1978. Mientras el PNV propugna la abstención, HB defiende el voto en contra. En Euskal Herria el referéndum constitucional no fue aprobado por votación popular. Los votos afirmativos en ningún caso llegan al 50% del censo. A diferencia de los resultados estatales, donde la aprueban un raquítico 58%, en Guipúzcoa sólo un 27,71% apoya la constitución española, frente a un 12,97% de votos negativos y un 56,57% de abstenciones. En Vizcaya la aprueban el 30,4% frente a un 8,9% en contra y un 57,54% de abstención; en Álava y en Navarra votan afirmativamente el 42,33% y el 47,1%, respectivamente, siendo los votos negativos el 11,38% y el 12,6% y las abstenciones el 40,71% y el 33,4%, reflejando el descontento profundo de los oprimidos contra el modelo de transición que habían pactado los dirigentes reformistas de la izquierda. Los trabajadores que votaron a la izquierda abertzale en las elecciones generales de 1979 lo hicieron, no tanto porque les atrajera el programa de la coalición, sino como rechazo a la política de los dirigentes del PSOE y del PCE. Muchos obreros en Euskal Herria razonaban, “yo no estoy de acuerdo con la independencia pero ETA es la única que hace algo; los demás, pactos y consensos”. El éxito de HB probablemente no se debía tanto a los aciertos propios como a los errores ajenos.

En aquellos momentos dramáticos un amplio sector de la izquierda más combativa cerró filas contra la represión de quienes daban su vida o cayeron presos por acabar contra el odiado régimen. Los trabajadores llevaron a cabo numerosas huelgas contra las detenciones, torturas y asesinatos de militantes de ETA a manos de la policía. Como consecuencia de un apoyo de masas creciente, ETA pudo creer que la espiral acción-represión podía conducir a la victoria militar frente

al Estado. La táctica del terrorismo individual llevó a la organización armada a acciones cada vez más desesperadas en las que se empezó atentando contra torturadores y generales y se acabó atentando contra dirigentes socialistas, o de una forma indiscriminada contra trabajadores, como fue el atentado de Hipercor en Barcelona.

Aquellas movilizaciones de la clase obrera en defensa de los presos de ETA desafiando el “estado de excepción”, respondidas con asesinatos de obreros, cárcel y torturas no tienen nada que ver con las masivas movilizaciones que años más tarde hemos visto contra la misma ETA, no sólo en el Estado español, también en las calles de Euskal Herria. Las acciones de ETA han permitido a la burguesía desviar la atención de la clase trabajadora, debilitarla, al separar de la lucha a muchos activistas honestos que se pudren en las cárceles, y desorganizarla, en la medida que han orientado la acción de masas como un mero apoyo a sus acciones. Finalmente, sus atentados han servido de excusa al aparato del Estado para fortalecerse y recortar los derechos democráticos.

LA CONSTITUCIÓN Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

La UCD (Unión de Centro Democrático), liderada por Adolfo Suárez, antiguo jefe del Movimiento y camisa azul falangista desde su juventud, había conseguido la mayoría parlamentaria en las elecciones de 1977 gracias a la política de colaboración de clases suscrita por el PCE y el PSOE y también a otros factores, como el hecho de que sólo los mayores de 21 años pudiesen ejercer el derecho al voto, o la preeminencia del voto rural a través de la ley D'Hondt.

Para dar solución al problema nacional, la burguesía a través de la UCD ideó el Estado de las autonomías en la Constitución de 1978 o, lo que es lo mismo, “café para todos” con la pretensión de limitar las reivindicaciones de las nacionalidades históricas y de enfrentarlas al resto del Estado. En el período de discusión de la ponencia constitucional, Arzalluz, dirigente del PNV, apuntaba que “el texto aprobado es más positivo que el de la Constitución de la República en muchos aspectos y concretamente en el autonómico”. A pesar de esas consideraciones, el PNV planteó que se reconociesen los derechos forales de las provincias vascas a cambio de su apoyo a la Constitución pero la negativa del Gobierno Suárez y el ambiente de oposición al mismo que se vivía en Euskal Herria le llevaron a abandonar la Cámara antes de la votación. En ese momento el PNV pasó a defender la abstención en el referéndum constitucional. Como recoge Arturo Val en su libro sobre el 3 de marzo: “ni siquiera habían planteado el derecho de autodeterminación en el debate constitucional. Sólo Letamendía y Monreal de ESEI⁵⁹ presentaron una enmienda en el Senado”.

En la Comisión del Congreso el PNV apoyó la enmienda de Letamendía pero des-

1. León Trotsky, *España 1930-36*, Madrid, Akal Ed., 1977, pág. 37.

pués se abstuvieron en todas las votaciones argumentando que la vía foral era una forma de autodeterminación que tenía precedentes históricos. Esta posición ambigua, sin embargo, no impidió que aparecieran ante algunos sectores a la izquierda de los partidos obreros como opositores al centralismo de Madrid. Su postura contribuyó al rechazo de la Constitución en Euskal Herria, mientras que la postura de los dirigentes obreros, PSOE y PCE, apoyándola sin críticas y sin reservas, contribuyó al desarrollo explosivo de Herri Batasuna, que se nutrió del descontento de la izquierda.

Las objeciones desde la izquierda abertzale a la Constitución las resume Luigi Bruni, la Constitución española era “centralista y antisvasca:

“La constitución se funda sobre la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles (Artículo 2).

“Relega al euskera a lengua subalterna mientras ‘el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los ciudadanos tienen el deber de conocerlo y el derecho de emplearlo’ (Artículo 3).

“Atribuye una función política al ejército: ‘Las fuerzas armadas tienen la tarea de garantizar la soberanía y la independencia de España, defender su integridad nacional y el ordenamiento constitucional’ (Artículo 8)

“Se niega la posibilidad de abrir una fase constituyente con amplias consultas populares.

“Es una constitución capitalista y antiobrera: bajo la inocente dicción de economía de mercado se sanciona la naturaleza capitalista del régimen (Artículo 38) y se garantiza expresamente la propiedad privada (Artículo 33)

“Se garantiza a los patronos los derechos de organización y de cierre de las fábricas, mientras quedan limitados los derechos sindicales de los trabajadores (Artículos 28 y 37)

“Mantiene el poder de la Iglesia Católica y la enseñanza de la religión en las escuelas públicas (Artículos 16 y 26)

“Sanciona la situación de subalternidad política de los jóvenes, niños y mujeres.

“Se prohíbe expresamente la forma republicana del Estado y se atribuyen al rey (indicado nominalmente por la autoridad de Franco) importantes tareas institucionales y de arbitraje (Artículos 62, 63 y 64).

“Es institucionalizada la declaración de ‘estado de emergencia’, sobre todo en relación a Euskadi. (Artículo 55)⁶⁰.

La postura de los marxistas, que rechazamos igualmente la Constitución, es explicar que la burguesía se vio obligada a “romper con el franquismo” en el momento en que la actividad de la clase obrera ponía en peligro el sistema burgués. Dicha constitución perpetúa la enseñanza privada como negocio; mantiene el Senado como arma a emplear en el futuro contra un Parlamento con mayoría de izquierdas; deja abierta la posibilidad de suspender los derechos individuales, es decir, los artículos referentes al derecho de domicilio inviolable, residencia, expresión, reunión..., pudiendo el Gobierno decretar el Estado de Alarma durante 15 días o de Excepción durante dos meses; limita la formación y el ejercicio de los partidos

y sindicatos al marco de la Constitución; legaliza una monarquía con poderes bonapartistas tales como quitar y poner ministros, convocar o disolver el Parlamento, nombrar senadores, promulgar leyes y referéndum; reconoce el derecho al cierre patronal, la economía de libre mercado, el capitalismo y todas sus formas de explotación y se ponen una serie de impedimentos a las Autonomías con 32 apartados llenos de prohibiciones para los gobiernos autónomos, negando el derecho de autodeterminación a las nacionalidades históricas.

En Euskal Herria el apoyo a la Constitución no logró en ningún caso superar el 50% de los votos emitidos, a diferencia del Estado español, donde fue aprobada con un 58% a pesar del apoyo de los dirigentes del PSOE y del PCE y de los sindicatos de clase.

La burguesía se vio obligada a llegar más lejos de lo que pretendía pero, aún así, se salió con la suya al negar el derecho de autodeterminación a las nacionalidades históricas, dividir Euskal Herria y colocar al ejército como el garante de la unidad indivisible de la patria española. La Constitución otorgaba al rey la capacidad de disolver las Cortes y declarar el estado de excepción, emergencia y sitio si la “seguridad nacional” se viese amenazada.

El ministro de Defensa, el general Gutiérrez Mellado, partidario de la reforma política, aunque descartando la hipótesis del “Ejército al poder”, afirmaba que “si hubiera un mínimo peligro de separatismo, daremos la batalla. Con nacionalidades o sin ellas, jamás se romperá la unidad de España”.

Después de la aprobación de la Constitución les llegaría el turno a los Estatutos de Autonomía. Producto de una negociación bilateral entre las fuerzas políticas catalanas y el Gobierno de la UCD, el 6 de agosto de 1979 quedó definitivamente redactado el Estatut de Catalunya y ratificado tanto por el Congreso como por el Senado, aunque no se llevó a cabo ningún referéndum. En el seno del PSC-PSOE no se llevó a cabo discusión o debate previo. Ni el Estatut de Catalunya ni el Estatuto de Gernika contemplaban una autonomía plena, que para los marxistas supone que no exista ninguna limitación que no sea la defensa y las relaciones exteriores. Al aceptar los límites de la Constitución española se renunciaba a reivindicaciones democráticas fundamentales como el libre ejercicio del derecho de autodeterminación.

Las reivindicaciones democráticas que recogen los estatutos no los concedió la burguesía española, fueron arrancados por la movilización de masas y representaban, a pesar de sus limitaciones, un paso adelante. El Estatut reconoce la cooficialidad del catalán (Art. 3), transfiere el control de la enseñanza (Art. 15), competencias en sanidad (Art. 16), obras públicas (Art. 17), etc. También se recogían competencias en orden público (Art.13 y 14), si bien la policía autónoma catalana tenía el mismo papel que el resto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, esto es, defender los intereses de la patronal y de los banqueros. Siendo un paso adelante, aunque insuficiente, ningún estatuto podía resolver los problemas fundamentales de la clase obrera mientras la economía siguiese controlada por

cien familias de banqueros, terratenientes y monopolistas; pero las masas eran conscientes de que cada concesión había sido arrancada mediante durísimas batallas en la calle y no en las mesas de negociación. La Diada del 11 de septiembre de ese año contó con medio millón de manifestantes.

Poco después del Estatut catalán le tocó el turno al gallego. El nacionalismo gallego era más débil, con poca implantación social y una reducida representación electoral. La burguesía gallega estaba tan pegada a la española que ni siquiera se podía hablar de una burguesía nacional. Como explicamos anteriormente, el movimiento nacionalista nació sobre todo como una reacción frente a una situación de atraso económico, social y cultural cuya primera expresión fue la organización de sectores intelectuales en torno a reivindicaciones lingüísticas y culturales que dieron lugar a los partidos nacionalistas pequeñoburgueses de la Segunda República.

En junio de 1977, la expresión electoral del nacionalismo gallego volvió a ser pequeña: desaparecieron los partidos nacionalistas republicanos y su bandera la recogieron dos partidos, el PSG (Partido Socialista Galego, que se declaraba marxista) y la UPG (Unión do Povo Galego, que se declaraba marxista-leninista) y su coalición electoral, el BN-PG (Bloque Nacional-Popular Galego). La incidencia de estas organizaciones entre la clase obrera de Ferrol y Vigo era prácticamente nula y sus resultados electorales en las zonas industriales insignificante. Entre el campesinado la situación era distinta: los problemas derivados del atraso económico, la carestía de los productos del campo, la instalación de centrales nucleares y de industrias contaminantes, una educación deficiente y una sanidad propia del Tercer Mundo provocaron movilizaciones canalizadas por estas organizaciones. Sin embargo, al igual que ocurrió en Euskal Herria, la política de acuerdos con la UCD por parte de la dirección del PSOE supuso la consolidación del BN-PG como primera fuerza de izquierda en el campo, duplicando e incluso triplicando los votos en municipios obreros en la misma proporción que los perdían los socialistas. Por ejemplo en el municipio de Fene, donde está situado Astano, el PSOE ganó las elecciones generales del 15 de junio de 1977 pero las de 1979 las ganó el BN-PG, que también obtuvo la alcaldía en las municipales celebradas poco después.

El 25 de octubre le tocó el turno al más polémico de todos, el Estatuto de Gernika, que fue sometido a referéndum y aprobado con tan sólo un 53% del censo, un porcentaje menor que su predecesor de 1936, a pesar de que sólo faltó prometer que con la autonomía los perros irían atados con longanizas, como dice una expresión popular. Votaron a favor el PCE, PSOE, EE, ESEI, PTE, ANV, y PNV, mientras la Alianza Popular de Fraga Iribarne, predecesora del Partido Popular, votó en contra y la izquierda abertzale se abstuvo.

El Estatuto de Gernika, encorsetado por la Constitución como los demás, hacía posible que un gran número de competencias siguieran en manos del Estado central. Por ejemplo, otorga al gobierno la capacidad, con el apoyo del senado, de obli-

2. Marx y Engels, *La revolución en España*, Moscú, Ed. Progreso, 1974, pág. 13.

gar a la comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de obligaciones que de no llevarse a cabo “atentarían gravemente el interés general de España”, es decir, el interés general de la oligarquía española. Además no contempla el derecho de autodeterminación y deja fuera a Navarra, consolidando la división territorial del sur de Euskal Herria.

LA ‘ALTERNATIVA KAS’

Una vez que se constató la negativa de la burguesía española de aceptar el derecho de autodeterminación, ETAm relanzó su actividad armada. Paralelamente, en el plano político, los diferentes grupos que se reclamaban de la izquierda abertzale, y que habían tenido una presencia más bien limitada en los acontecimientos de la Transición, junto con la propia ETA, reagrupan progresivamente sus fuerzas en Herri Batasuna. Representan a un sector nada desdeñable de la población de Euskal Herria que rechaza el Estatuto de Autonomía y defiende, para una normalización política en Euskadi, la consecución de la *Alternativa KAS* (Koordinadora Abertzale Sozialista)⁶¹.

La conocida como Alternativa KAS reivindica:

- 1.- Amnistía para todos los presos políticos.
- 2.- Libertades democráticas, legalización de todos los partidos políticos independentistas sin que deban modificar sus estatutos.
- 3.- Retirada de Euskadi de la Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo General de Policía.
- 4.- Mejora de las condiciones de vida y trabajo de las clases populares y especialmente de la clase trabajadora.
- 5.- Estatuto de autonomía, cuyos niveles mínimos son: su entrada en vigor en las cuatro regiones históricas de Euskadi Sur; reconocimiento del derecho de autodeterminación, que incluye el derecho a crear un Estado propio e independiente; reconocimiento de los vínculos existentes entre Euskadi Sur y Euskadi Norte; el euskera como lengua oficial y prioritaria de Euskadi; sustitución de las actuales fuerzas represivas por fuerzas de defensa ciudadana creadas por el Gobierno vasco y dependientes de él; las fuerzas armadas de estancia en Euskadi pasarán bajo el control del Gobierno vasco; el pueblo vasco tendrá poderes suficientes para dotarse en todo momento de las estructuras económicas que considere social y políticamente más convenientes para su progreso y bienestar⁶².

La Alternativa KAS representa una compilación de requisitos mínimos que la izquierda abertzale considera imprescindibles para hablar de democracia en Euskal Herria. La negación de estas reivindicaciones representará, para la dirección de ETA, la confirmación de que para el pueblo vasco no ha habido una auténtica tran-

3. *Ibid.*, pág. 130.

sición a la democracia burguesa, que es la primera etapa por la que hay que luchar. Toda la estrategia de los años siguientes irá dirigida a lograr estas reivindicaciones mínimas, como paso previo a la lucha por el socialismo.

Contrarios a la Alternativa KAS, por considerarla reformista, surgen los Comandos Autónomos Anticapitalistas, compuestos por viejos militantes de ETA y militantes de LAIA, que tienen como objetivo una estrategia anticapitalista y de ataque al poder en las formas más inmediatas, al tiempo que critican la jerarquía de las estructuras de ETA y reclaman la máxima autonomía para los militantes. No creen que la lucha deba ser por una democracia burguesa: “lo que nosotros queremos desarrollar es una democracia obrera y esto lo vemos unidos a un autogobierno obrero de Euskadi, por consiguiente, a una Euskadi independiente y socialista”. Critican a los polimilis y su opción institucional y a ETAm por su forma organizativa de bloque dirigente. Los CAA comienzan a partir de 1983 sus acciones contra dirigentes socialistas, concluyendo con la muerte del senador Enrique Casas en 1984 y extinguiéndose poco después por la represión y por sus propias contradicciones.

ETAm pretende convencer al Gobierno de la conveniencia política de la Alternativa KAS, ya que ésta representaría “una condición de paz sin suponer la revolución socialista, la independencia y ni siquiera el fracaso total de la reforma”, mientras que para Euskadi significa “conseguir las condiciones necesarias para el desarrollo de un proceso que lleve a la completa liberación nacional y social de los trabajadores vascos” (*Zutik* nº 69, febrero de 1978).

ETA lo dice claramente y con rotundidad: no defiende una política de ruptura con el sistema. Existen muchos puntos de coincidencia con la estrategia política de los dirigentes del PSOE y del PCE: no al socialismo ni a la ruptura con el capitalismo. La burguesía española, lejos de negociar la Alternativa KAS, se opone a ella con todas sus fuerzas. ¿Cómo piensa arrancar ETA dichas reivindicaciones a la burguesía española? La burguesía se sentó a negociar con los dirigentes del PSOE y del PCE cuando quedó demostrada su voluntad y su capacidad para frenar la marea huelguística y poner fin a la situación prerrevolucionaria que amenazaba el sistema. A la burguesía no le quedó más remedio que hacer algunas concesiones y reformas en el terreno de las libertades democráticas mientras conservaba firmemente en sus manos el poder político y económico.

En el caso de los derechos democráticos de Euskal Herria, a pesar de que para ETA el ruido de sus bombas representase el “máximo exponente, eje garantía y clave de su éxito”, para el sistema sus atentados, aunque molestos e indeseables, no representan en ningún caso una amenaza determinante. Los atentados proporcionan una excusa perfecta para el fortalecimiento del aparato del Estado, que defiende al sistema capitalista de las masas. Los hombres y los edificios se sustituyen por otros, el sistema permanece y los cuerpos de seguridad y las leyes se fortifican para defenderlo.

La única forma de avanzar en la lucha por los derechos democráticos de Eus-

kal Herria era ganando el apoyo de las masas de la clase trabajadora en todo el Estado. Para ello era necesario aprovechar todas las posibilidades, incluidas las legales como la participación en el Parlamento español utilizándolo como un altavoz para defender los derechos democráticos de Euskal Herria y la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora. La izquierda abertzale renunció a ocupar sus escaños salvo en momentos excepcionales.

La amnistía para todos los presos políticos fue una reivindicación que contó con un apoyo de masas en aquella época. Finalmente fue arrancada al gobierno Suárez por la presión social pero como ya hemos explicado anteriormente el régimen la convirtió en una ley de punto y final para salvaguardar de responsabilidades “a los funcionarios y agentes del orden público”. Esta consigna, tras décadas de lucha, se ha ido haciendo más difícil de asumir por el conjunto del movimiento obrero en la medida en que ETA ha atentado indiscriminadamente, matando también a trabajadores y militantes socialistas. En estos momentos el acercamiento de los presos vascos a las cárceles de Euskal Herria y el respeto a sus derechos se ha impuesto entre las asociaciones de presos como consigna de transición hasta que los presos políticos vascos salgan a la calle.

Otra de las reivindicaciones de la Alternativa KAS, como la salida de las fuerzas policiales y militares españolas de Euskal Herria, no garantiza a los trabajadores vascos una menor represión. De hecho, desde las luchas del 3 de marzo en Vitoria era normal ver llegar unidades antidisturbios de Burgos y Valladolid. Además, la sustitución de las fuerzas de represión españolas por otras vascas no cambia mucho las cosas. Dos décadas después, la intervención de la policía vasca, la Ertzaintza, en la ilegalización de la izquierda abertzale lo ha dejado en evidencia. Los acuerdos policiales en el marco de la Unión Europea y a escala internacional demuestran cómo sólo aboliendo el capitalismo acabaríamos con el carácter represivo del Estado. Pensar que bajo el dominio de la burguesía se puede conseguir una policía “democrática” o “al servicio del pueblo”, por muy vasca o catalana que ésta sea en su composición, es una ingenuidad mayúscula.

La mejora de las condiciones de vida de la clase obrera, otra de las consideraciones de la Alternativa KAS, únicamente es posible a través de la organización y la lucha de la propia clase obrera y, finalmente, en lo referido a una más amplia autonomía y a la unidad de las cuatro provincias vascas era y es necesario tener en cuenta la particular situación de Navarra. Los marxistas estamos a favor de preservar la unidad de la clase trabajadora navarra con las demás provincias vascas pero decir que Navarra es Euskadi, sin más, no es suficiente. Los elementos más reaccionarios de la provincia se apresuraron a subirse al carro del llamado *navarrismo* con el único fin de dividir, confundir y desorientar a la clase obrera atacando con saña la lengua y los signos de identidad vascos. Lamentablemente las bombas de ETA reforzaron las posiciones de estos derechistas. El objetivo de estos cáiques reaccionarios no es solamente la negación de los derechos democráticos de un sector del pueblo navarro sino también, y principalmente, dividir al movi-

miento obrero. Por todo ello los marxistas nos pronunciamos a favor de la convocatoria de un referéndum en el que se decida, por mayoría, la integración o no de Navarra en Euskadi. Por nuestra parte, apoyaríamos la integración de Navarra en Euskadi con el fin de preservar antes que nada la unidad de la clase trabajadora pero advirtiendo de antemano que para la clase obrera, dentro o fuera de Euskadi, no hay ninguna solución mientras la burguesía siga dominando en el conjunto del Estado español. La unificación de Euskal Herria y el reconocimiento del derecho de autodeterminación sólo se pueden lograr con la unidad y el apoyo consciente de la clase trabajadora de todo el Estado.

La situación prerrevolucionaria que atravesó el Estado español de 1976 a 1979 se resolvió a favor de la burguesía, que pudo recomponer sus posiciones gracias al apoyo de los dirigentes del PSOE y del PCE principalmente. En las nacionalidades históricas éste fue el caldo de cultivo para el fortalecimiento de las opciones nacionalistas burguesas, el PNV y CiU, que lograron conquistar un apoyo de masas entre la pequeña burguesía urbana y rural. En Euskal Herria, donde la radicalización del movimiento obrero y la juventud adquirió grandes dimensiones —de hecho fueron las zonas con mayor número de huelgas generales—, el descontento y la frustración de amplias capas de la juventud y de la pequeña burguesía, radicalizada con la política de los partidos obreros tradicionales, encontró su expresión más acabada en el apoyo al independentismo de “izquierdas”.

La izquierda abertzale ha promovido grandes luchas durante décadas por el euskera, la ecología, la vivienda, el movimiento estudiantil y juvenil, la mujer..., movilizando a centenares de miles de personas y demostrando que cuando los jóvenes y los trabajadores tienen delante una estrategia de lucha, responden y demuestran una entrega y un sacrificio ejemplares. Sin embargo, estas movilizaciones han tropezado una y otra vez con la táctica errónea de la autodenominada “lucha armada”. Gran parte del apoyo social logrado entre las masas desde las plataformas citadas se diluía cuando el “máximo exponente, eje, garantía y clave de su éxito” hacía explotar sus bombas.

CRECE LA ESPIRAL ACCIÓN-REACCIÓN-ACCIÓN

El contexto político en Euskal Herria a partir de 1978 se complica. El movimiento huelguístico de la clase obrera está en ascenso por el alza del paro y la subida de la inflación y las luchas contra la represión provocan que mes tras mes los obreros lleven a casa un sueldo incompleto. Sin embargo, la valoración que hace ETA del momento político es bastante significativa: “Reconocemos que ni el grado de concienciación existente entre los trabajadores, ni la correlación de fuerzas alcanzada por los sectores abertzales de izquierda aconseja plantearnos en la actual coyuntura la inmediata lucha por la consecución del objetivo estratégico... Nuestra actual reivindicación táctica viene concretada en el logro de una Democracia política que

permita la libre elección de unos vínculos y unas instituciones verdaderamente populares que garanticen un proceso autónomo vasco, al margen de ingerencias externas a su voluntad”⁶³. Esta supuesta baja conciencia de los trabajadores contrasta con el ascenso de la lucha de clases que en los meses siguientes de escribirse estas líneas llevará al movimiento huelguístico a las cotas más altas de la historia.

KAS, que se autoproclama bloque dirigente de la revolución vasca, podía haber dado una dirección y una estrategia hacia el socialismo al proletariado de Euskal Herria, que durante los años setenta se mantuvo en la vanguardia de las luchas. Podía haber utilizado su emergente autoridad entre un sector de activistas para promover la unidad de la clase obrera para derribar al capitalismo. La autoridad del movimiento obrero vasco se extendía por todo el Estado. La transición aún no estaba completada. Lejos de ello, su estrategia de mantener la lucha en el marco de las reivindicaciones de la revolución nacional democrático-burguesa vasca empujaba a sectores del proletariado vasco a separarse de sus hermanos de clase del resto del Estado y de la propia Euskal Herria y confiar sólo en ETA. “La estrategia independentista constituye el motor de la lucha de clases en Euskadi Sur (Hego Euskal Herria), la lucha de clases adopta en Hego Euskal Herria una forma de lucha de liberación nacional de la cual el máximo exponente, eje y garantía del mismo y clave de su éxito lo constituye la actividad armada”⁶⁴.

Entre junio de 1977 y diciembre de 1979, la represión de las fuerzas de orden público en Hego Euskal Herria provocará 35 muertos y 807 heridos. Más de quinientas manifestaciones serán disueltas por las cargas de la policía. Además, los grupos paramilitares BVE (Batallón Vasco Español) y Triple A provocarán 13 muertos y 84 heridos. Como colofón, cabe destacar los sanfermines de 1978, donde la policía interviene salvajemente para retirar una pancarta proamnistía de la plaza de toros en plenas fiestas, asesinando al militante de LKI Germán Rodríguez y provocando doscientos heridos en una ciudad asolada. Posteriormente la policía saquea escaparates y tiendas en Rentería y en Donosti abre fuego contra una manifestación matando a Joseba Barandiarán.

ETA a su vez responde con una escalada de atentados contra las fuerzas de seguridad del Estado y ejército. Entre 1975 y 1978 se contabilizaron más atentados que en el resto de los años de existencia de ETA, a los que habría que sumar los de ETA político-militar y los de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Sólo en junio de 1977 hubo 34 atentados y 1978 se saldó con 75 muertos en distintas acciones armadas.

El PNV desautoriza la actividad de ETA e impulsa la movilización en la calle: el 28 de junio de 1978 organizará una manifestación contra ETA apoyada por el PSOE, PCE y la UCD a la que acudirán unas 30.000 personas. Pero las contradicciones en el seno del PNV se dejan sentir. Las bases nacionalistas se resquebrajan: “Tengo tres hijos, uno de los cuales es militante de ETA y está actualmente exiliado. Mi hijo es un gudari igual que lo fue mi marido y ha consagrado su juventud de forma que toda su vida quedará marcada al engrandecimiento de

Euskadi... No estoy de acuerdo con lo que hace mi hijo pero lo respeto y lo admiro. Ahora mi partido y el de mi difunto marido quiere que yo salga a la calle a manifestarme contra mi hijo, a combatir allí sus ideas. El desgarramiento que me produce esta cuestión necesita de una pluma más rica que la mía. Sufro ahora como no he sufrido ni en la posguerra” (*Egin*, 27/10/1978).

La manifestación no logró el efecto esperado. En 1979 hubo 136 acciones de ETA y 71 personas muertas. La espiral represión-acción-represión alcanzaba cotas cada vez mayores. Las Gestoras pro Amnistía afirman en un documento de diciembre de 1979 que “se realizan hasta 200 detenciones cotidianas”, refiriéndose al mes de noviembre. Un año después el general Sáenz de Santamaría será nombrado gobernador de Euskadi, “con plenos poderes en la lucha antiterrorista”. Para reforzar las tareas de represión se envían nuevos cuerpos especiales de la policía, los GEO de la Guardia Civil, que son la versión española de las GSG9 alemanas, conocidos como los *cabezas de cuero*, y las UAR (Unidades de Antiterrorismo Rural), que se suman a los 12.000 guardias civiles y 6.000 policías que se encuentran ya en Euskadi combatiendo en lo que ya se conoce como “la guerra del Norte”.

A estas medidas en el terreno policial se unen los cambios legislativos: se aprueba la ley antiterrorista 56/1978, que establece la prioridad del poder policial sobre el jurídico, prolongando la detención policial hasta diez días sin que el detenido tenga posibilidad de comunicarse con su abogado, y se crea la Audiencia Nacional para delitos de terrorismo y de apología del terrorismo, figura penal que se contempla en el Decreto Ley 3/1979.

EL CIERRE DE LA CENTRAL NUCLEAR DE LEMÓNIZ

La intervención de ETA en la lucha por el cierre de la central nuclear de Lemóniz merece una mención específica porque ha pasado a la historia como uno de los grandes éxitos de la autodenominada “lucha armada”. Es interesante hacer una secuencia de algunos de los hechos más relevantes del conflicto, como si de una película se tratara, para poder hacer una valoración rigurosa⁶⁵.

La decisión de Iberdrola de construir una central nuclear a 17 kilómetros del Gran Bilbao, que aglutina a un millón de habitantes, es contestada con una acción de masas contundente. En la primera marcha que se convoca el 29 de julio de 1976 de Plentzia a Górliz participan más de 50.000 personas. ETA interviene en el conflicto colocando tres explosivos en la zona de obras el 3 de junio de 1977.

El 14 de julio de 1977 la Comisión de Defensa de una Costa Vasca No Nuclear lleva a cabo en Bilbao la que será considerada como la mayor manifestación en Vizcaya después de la Guerra Civil. Es un movimiento que surge desde abajo, de forma asamblearia, mientras la mayoría de los partidos políticos, junto a la totalidad de los parlamentarios vizcaínos, se inhiben. El 1 de octubre ETAm coloca otra

bomba y destruye el generador eléctrico.

A lo largo de 1978 los comités antinucleares organizan todo tipo de actividades, manifestaciones, semanas antinucleares, etc. El 17 de marzo ETAm coloca un artefacto, a consecuencia del cual mueren dos trabajadores de la central y otros 14 resultan heridos.

El 28 de marzo de 1979 ocurre el accidente nuclear de Three Mile Island (EE.UU.). El movimiento antinuclear se extiende a la clase obrera. En mayo de 1979 la asamblea de trabajadores portuarios decide no descargar el material destinado a la central de Lemóniz. El barco se dirige entonces al puerto de Burdeos, donde los estibadores también le niegan el desembarco, al igual que los obreros ingleses, que manifiestan su solidaridad con sus colegas vascos. Finalmente, en un buque distinto y con grandes medidas de seguridad, el reactor será trasladado desde Santander.

El 2 de junio de 1979, con motivo del Día Internacional contra la Energía Nuclear, los Comités antinucleares organizan una manifestación en Tudela. De repente aparecen camionetas de la policía, que junto con la Guardia Civil rodean el pueblo. Un grupo de jóvenes es agredido a culatazos. Un testigo relata así los hechos: “Un guardia civil le golpeó violentamente en los riñones con la culata del fusil. Mientras Gladys intentaba levantarse, el militar le disparó un tiro en la cabeza”. Se trataba de la joven Gladys del Estal, militante antinuclear de San Sebastián. El 13 de junio de 1979 ETA coloca otra bomba que mata a otro trabajador, Ángel Baños. ETA, ante las críticas, decide atentar sólo contra las instalaciones, colocando el 11 de noviembre cincuenta kilos de dinamita que provocan cuantiosos daños a la central.

El Gobierno vincula la lucha antinuclear con la subversión aplicando la ley antiterrorista a militantes antinucleares e interviniendo a partir de 1980 cada vez más contra las manifestaciones antinucleares. A finales de 1980 y principios de 1981 el arranque de la central parece inminente. ETA recrudescer sus acciones contra instalaciones de Iberduero —101 en todo el año— y el 29 de enero de 1981 se-cuestra al ingeniero jefe de la central nuclear de Lemóniz, José María Ryan.

El 5 de febrero, 10.000 personas desfilan por Bilbao exigiendo la liberación de Ryan pero al día siguiente ETAm anuncia su ejecución a las 19:30 h. Este asesinato provocará una huelga general de condena el 9 de febrero en Hego Euskal Herria, con una participación del 70% de los trabajadores vascos, y algo menor en Navarra.

El movimiento antinuclear se siente relegado a un segundo plano. “Nos repugna la innoble utilización de los derechos humanos y el atentado contra la libertad de expresión que tanto el Gobierno como grupos políticos y sindicales consienten y propician. Nos repugna y asquea el maniqueísmo presente en sus declaraciones y planteamientos: ‘O estamos con Iberduero SA (sinónimo de paz, orden, progreso) o estamos con ETA’. Reducir la controversia de Lemóniz a esta inapropiada dicotomía es delirante. La confrontación parece haberse asentado entre dos fuerzas. Por una parte, la violencia dialéctica, institucional y de Estado; por otra, la violencia de

ETA. Pues bien, en esta guerra a nosotros no nos queda espacio, por lo que sólo entraremos en batallas argumentales e informando en la medida de nuestras posibilidades como siempre lo hemos hecho. El problema ha alcanzado unos niveles ajenos a nuestros modos de actuación”.

El PNV, que ante la intervención de ETA no quiere ceder, propone un referéndum sobre Lemóniz y el control público de la central a través del Gobierno vasco. El 8 de marzo el Gobierno Vasco presenta al Parlamento autónomo el acuerdo alcanzado con Madrid e Iberduero. “Conclusión de los trabajos con una inversión de Iberduero de 130.000 millones de pesetas y la creación de una Sociedad de Gestión por parte del Gobierno Vasco que se encargará del control de la central” (*Euskadi*, 23/10/81).

Este acuerdo dará un nuevo impulso a la militarización del conflicto. El movimiento antinuclear frustrado se pregunta: ¿se da todavía un espacio para el movimiento popular? ¿Qué importancia tiene para los sectores no militantes la militarización del conflicto? ETA continúa su campaña: 36 atentados contra instalaciones de Iberduero en 1982 y el 5 de mayo ETA mata al sustituto de Ryan al frente de la central, Ángel Pascual.

Poco después los trabajos en la central se paralizan finalmente. En las semanas siguientes las empresas adjudicatarias de los trabajos de la central despiden a 2.500 trabajadores, que se quedan en la calle luchando frente al Gobierno central y al autonómico... Para ETAm esta victoria ha logrado que “el pueblo vasco recupere una cuota mínima de democracia que le permita autogobernarse y sobre todo discutir libremente la política energética que decida para su propio desarrollo y su propio bienestar” (entrevista con ETAm en *Enbata*, 3/10/1982).

¿Qué conclusiones se pueden extraer de estos hechos? La primera es que un movimiento de masas que se extiende hasta lograr el apoyo de los trabajadores portuarios vascos, franceses e ingleses es sustituido progresivamente por la “lucha armada”. A su vez, ésta provoca un aumento de la represión que, con la excusa de la lucha contra el terrorismo, se extiende al conjunto del movimiento, lo confunde y desorganiza hasta el punto de que sus dirigentes afirman no saber qué hacer. Merma además las filas de éste al matar a varios trabajadores y provoca que lo que era una movilización contra Iberduero, el gobierno de la UCD y el PNV acabe convirtiéndose en una movilización, con huelga general incluida, contra las acciones de ETA.

Y como colofón, la valoración final de la organización armada vasca: ETA ha conseguido que el pueblo vasco “recupere una cuota mínima de democracia”. ¿Qué democracia? Han machacado las manifestaciones incrementando la represión al final del movimiento. Han catalogado de terroristas a todos los que apoyaban la lucha antinuclear desorganizando a los comités formados desde la base. Se ha aislado la lucha contra la central nuclear del movimiento obrero. Se ha fortale-

4. Lorenzo Espinosa, J. M., *Un pueblo en marcha*, Bilbao, Ed. Gite-Ipes, 2004, pág. 32.

cido la posición del aparato del Estado. ¿Se puede considerar el aumento de la represión como más democracia? ¿Dónde queda el autogobierno y la libre discusión para que el pueblo vasco decida su política energética? ¿Acaso se estableció el control de los trabajadores sobre la producción de Iberduero? ¿Acaso los trabajadores se hicieron con los mecanismos del poder económico y político en Euskal Herria y en el Estado español para decidir su propio desarrollo y bienestar?

Lo que se logró es que ETA tapase el éxito de la acción de masas y mermase la confianza de éstas en sus propias fuerzas y en su unión. De no haberse cruzado las acciones de ETA en el conflicto, el movimiento de masas contra la central podría haber adquirido unas dimensiones extraordinarias, ¿Quién puede decir que no? ¿Acaso no se lograron victorias en otros países donde no estaba presente ETA? Repasemos someramente algunas de las acciones más sobresalientes del movimiento antinuclear de la época.

En febrero de 1975 centenares de activistas antinucleares ocuparon los terrenos donde se proyectaba construir la central nuclear de Whyll, en la República Federal de Alemania. Tras un inicial desalojo por la policía, la ocupación se prolongará por espacio de ocho meses. Un tribunal paralizará el inicio de las obras el 21 de marzo y el 14 de marzo de 1977 es descartada definitivamente su construcción. Con la ocupación de Whyll arranca con fuerza el movimiento antinuclear alemán. El 5 de noviembre de 1978, el movimiento antinuclear austriaco lograba la paralización del programa nuclear en un referéndum. Unos meses más tarde, el 28 de marzo de 1979, ocurre el accidente en la central nuclear de Three Mile Island (EE.UU.). La gravedad y repercusión del acontecimiento paralizan el programa nuclear norteamericano. Tres días después de este accidente, el 31 de marzo, decenas de miles de alemanes federales se manifiestan en contra de la planta de procesamiento nuclear de Gorleben.

En Alemania, Austria y EE.UU. se logró frenar los programas nucleares, al menos temporalmente, y el movimiento antinuclear se extendió durante los años siguientes. Cuando el 26 de abril de 1986, el reactor cuatro de la central nuclear de Chernóbil (Ucrania) estalla, fundiéndose el núcleo del reactor, 140.000 personas tuvieron que ser evacuadas y, en 1990, 640.000 se encontraban bajo control médico debido a las emisiones radiactivas; 30.000 kilómetros cuadrados de territorio serán baldíos durante al menos dos generaciones y la nube radiactiva se extendió por el territorio occidental de la URSS alcanzando a Europa occidental. En junio de ese año 4.000 mujeres finlandesas inician una huelga de embarazos por la que renuncian a tener hijos hasta que el Gobierno abandone el programa nuclear. Chernóbil y las movilizaciones antinucleares que provoca asestan un tremendo golpe para los procesos de nuclearización. Las moratorias nucleares se extienden

5. *Ibíd.*, pág. 41.

6. *Ibíd.*, pág. 44.

7. *Ibíd.*, pág. 43.

a lo largo y ancho de Europa, aunque sigue quedando en manos de la burguesía su posible reapertura o la instalación de otras nuevas.

¿Por qué creer que la intervención de masas en Euskal Herria, donde las gentes de la izquierda abertzale jugaron un importante papel, hubiesen sido insuficientes para paralizar Lemóniz? ¿Fueron finalmente los atentados de ETA el factor determinante? Lo que es un hecho es que la intervención de ETA endureció la postura de los Gobiernos central y vasco, que no querían bajo ningún concepto frenar la construcción de la central nuclear para no dar la imagen de que cedían ante la presión de las bombas. ETA se convirtió en un fenómeno distorsionador de la lucha que impidió una victoria clara de las masas que habría ayudado a extraer lecciones colectivas respecto a la organización y los métodos a emplear ante futuras luchas como, por ejemplo, el cierre de la vieja central nuclear de Garoña, a escasos kilómetros de Gasteiz. Además, ¿qué conclusión se podía extraer de dicha lucha tras el supuesto “éxito” de ETA? ¿Acaso que cuando haya asuntos serios que tratar debemos llamar a las puertas de ETA para que consiga lo que la clase trabajadora y la juventud no podamos conseguir con nuestros propios medios?

EL GOLPE DE ESTADO DEL 23-F

Lemóniz no era el único problema que tenía la clase obrera. Ante la grave crisis económica que deterioraba los salarios y estaba provocando despidos masivos, los dirigentes reformistas del PSOE y del PCE, con el apoyo posterior de CC.OO. y de UGT, firmaron con el gobierno de la UCD los Pactos de la Moncloa. Este primer pacto social de la democracia impuso topes salariales muy duros, redujo el poder adquisitivo de las familias trabajadoras, creó exenciones fiscales de todo tipo a los empresarios, limitó el gasto social y, sobre todo, ató de pies y manos a los trabajadores a través del compromiso de los dirigentes sindicales de garantizar la paz social y poner freno a la escalada huelguística. Todo se hizo en nombre de “la consolidación de la democracia”. Las condiciones para el reflujo del movimiento obrero, después de un período de luchas, huelgas generales y movilizaciones que sacudieron todo el Estado, estaban servidas. Miles de trabajadores que se habían afiliado con ilusión a los sindicatos de clase romperán sus carnés asqueados por esa política. Este repliegue de la clase obrera, junto a la excusa del terrorismo individual, maduró los planes de las fuerzas reaccionarias del aparato del Estado para dar el golpe del 23 de febrero de 1981, cuando 200 miembros de la Guardia Civil con Tejero al frente asaltaron por las armas el parlamento español, el mismo día en que debía tomar posesión como sustituto de Adolfo Suárez el nuevo presidente Calvo Sotelo.

En 1977 los sectores decisivos de la burguesía decidieron abandonar sus víncu-

8. Arenillas, J. L., en *Revista Comunismo*, Barcelona, Ed. Fontamara, 1978, pág. 153.

los con los símbolos políticos más comprometidos con la dictadura y organizaron un nuevo partido en el que se integraron las diferentes corrientes de la derecha. Antiguos falangistas, hombres del OPUS, liberales, barones regionalistas y caciques locales provenientes de la vieja estructura del poder franquista, democristianos... Toda una mirada de reaccionarios que en los años posteriores acabaría en el aparato del PP conformó la Unión de Centro Democrático. Es común en los actuales momentos políticos considerar a la UCD como una organización de centro “progresista” con líderes de talante “abierto” y discurso “moderado”, como Adolfo Suárez. Nada más lejos de la verdad. Bajo los gobiernos de la UCD siguieron brillando con fuerza los mismos elementos represivos de la dictadura; se siguieron cometiendo decenas de crímenes políticos; se amparaba con total impunidad la actividad de las bandas fascistas; y en materia social y económica, este partido garantizaba grandes beneficios a la patronal a través de una ofensiva permanente contra los trabajadores provocando grandes luchas que tenían el efecto de dividir a la burguesía respecto al ritmo y las tácticas a adoptar.

La UCD se estaba partiendo en pedazos, reflejando la debilidad de la burguesía para controlar el descontento social y las ambiciones crecientes de las distintas familias que la componían. La patronal, a través de la CEOE y el ejército, declaraba repetidamente contra el “vacío de poder”, exigiendo un gobierno fuerte. En este ambiente se produjo antes del 23-F la *operación Galaxia*, una intentona golpista frustrada en la que participaron Sáenz de Ynestrillas y el teniente coronel Tejero, que quedaron en libertad y se reincorporaron a sus puestos sin problemas. Fue un ensayo de lo que vendría después. La reacción del gobierno de la UCD frente a la conspiración militar fue reveladora: no se delimitaron responsabilidades ni se sacó lección alguna. Al contrario, uno de los implicados fue ascendido poco después. La dimisión de Suárez, todavía no aclarada, tuvo lugar en vísperas del viaje del rey a Euskadi y algunos periódicos afirmaron directamente que Suárez dimitió al darse cuenta de que había perdido la confianza del monarca. En el discurso en el que anunció su dimisión, Suárez hizo una alusión velada a la posibilidad de un golpe de Estado.

El panorama político anterior al 23-F reflejaba agudamente la crisis política de la clase dominante. El descontento de las masas con la política de la UCD no dejaba de aumentar. A pesar de la colaboración de los dirigentes obreros, especialmente de Santiago Carrillo, que se desgañitó en aquellos años reclamando un gobierno de concentración nacional, la clase dominante tenía enormes dificultades para estabilizar la situación.

El 4 de febrero era detenido junto a Isidro Etxabe, Joxe Arregi Izagirre, vecino de Zizurkil, por miembros de la Brigada Regional de Seguridad Ciudadana que les abordaron en una céntrica calle de Madrid para llevarlos después a la Dirección General de Seguridad de la Policía. Allí permanecieron, incomunicados bajo la ley antiterrorista nueve días, durante los cuales, el militante de ETA fue salvajemente torturado hasta la muerte el día 13.

La víspera, Joxe Arregi fue trasladado al Hospital Penitenciario de Carabanchel. Tres presos políticos ingresados allí presenciaron la llegada de Joxe Arregi al centro y compartieron con él sus últimas horas. El militante de ETApM Iñaki Agirre, Xose Lois Fernández González, de los GRAPO, y Lois Alonso Riveiro, del PCER, ofrecieron su relato a través de una nota que hicieron llegar al exterior arrojándola por una ventana. Encontraron a Arregi sentado en su celda, “aplastado físicamente”. Con un fuerte temblor en todo el cuerpo y casi sin fuerzas para respirar, consiguió darles algunos datos y pudieron identificarle. “¡Tengo mucha sed!”, repetía con insistencia. Al observar que tenía los párpados totalmente amoratados, un enorme derrame en el ojo derecho y las manos hinchadas, le preguntaron por su paso por comisaría. “Oso latza izan da” (Ha sido muy duro), contestó. “Me colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos no sé con qué; saltaron encima de mi pecho siguió, los porrazos, puñetazos y patadas fueron en todas partes”, les relató. Le ayudaron a desvestirse y al hacerlo descubrieron su cuerpo cubierto por grandes hematomas. La superficie de sus pies hinchados mostraba también hematomas ennegrecidos, visibles quemaduras y ulceraciones. Cada vez respiraba con mayor dificultad y manifestaba un continuo tembleque. “He sufrido en la DGS varios ataques epilépticos y esto nunca me había ocurrido”, les explicó Arregi.

A la mañana siguiente su estado había empeorado: “Nik uste diat hiltzekotan nagoela” (Creo que me muero) balbuceó. Había pasado la noche en vela, con continua diarrea. A la vista de su estado, el director médico decidió su traslado a un centro extra penitenciario. No llegó a salir del Hospital de Carabanchel. A este escalofriante testimonio se sumaron catorce diapositivas que, días después, recibieron de forma anónima distintas organizaciones. En las fotografías se apreciaba claramente su cuerpo torturado. Habían participado 73 policías en los interrogatorios a Joxe Arregi Izagirre, según la Comisión de Derechos Humanos de Madrid.

Probablemente las consecuencias que podían derivarse de las investigaciones del caso Arregi aceleraron el golpe del 23-F. Una oposición creciente dentro de la cúpula policial se manifestó contra cualquier intento de depuración de responsabilidades. En la lucha contra ETA la impunidad debía seguir siendo la norma. La ola de dimisiones en la policía durante la semana anterior al golpe era una anticipación de lo que podía pasar. Los golpistas probablemente aceleraron sus planes en lo que consideraban un momento propicio para ganarse un mayor abanico de simpatías en los cuerpos represivos del Estado. Todo esto indicaba la independencia que adquirió el aparato del Estado en una situación de crisis de Gobierno y de vacío de poder.

El País del 12 de febrero recogió la siguiente noticia: “Presentado el primer libro sobre la dimisión de Adolfo Suárez. Sus autores afirman que la tensión entre

los palacios de la Zarzuela y la Moncloa fue un factor determinante en la crisis. Atribuyen al propio Rey la sugerencia al líder del PSOE, Felipe González, poco después de la investidura de Suárez en 1979, para que solicitara una entrevista con el monarca, a fin de romper el “cercó” al que le tenía sometido el jefe de Gabinete”. Asimismo, la noticia confirma que dirigentes socialistas participaron en el estudio de un Gobierno de coalición presidido por un militar (Alfonso Armada) y revelan lo que Enrique Múgica se preguntó en torno a este tema: “¿Y quién le vende esta idea a nuestras bases?”.

El general de división Alfonso Armada, una pieza clave durante todo el desarrollo del golpe, fue jefe de la Casa Militar del rey desde 1956 y poco antes del golpe fue nombrado Segundo jefe de la Junta de Jefes del Estado Mayor. Como señalaba *El País*, “No se trata sólo del segundo jefe del Estado Mayor, sino de un hombre que goza de la máxima confianza del Rey”. Según *Financial Times*, a las cuatro de la tarde del día 23 tuvo lugar una entrevista entre Juan Carlos y Armada en la que éste le explicó todos los planes de la insurrección militar. Por lo visto, aunque el rey no dio el visto bueno al golpe, lo hizo de una forma suficientemente ambigua como para que Armada siguiese adelante, convencido de que los golpistas tendrían finalmente el apoyo del monarca. En las horas que siguieron a esta entrevista hubo una serie de consultas apresuradas entre el palacio de la Zarzuela y los sectores claves de la banca y el mundo de los negocios. La intención de Armada y de Del Bosch, ambos monárquicos y amigos de Juan Carlos, era presentar al rey un hecho consumado. Los elementos vacilantes del ejército se unirían al golpe una vez que el rey declarase su apoyo.

El tiempo que transcurrió desde que Tejero tomó el Parlamento a las 18 horas hasta la 1:15 horas del día 24, cuando el rey compareció públicamente, demostraba que no se trataba de un incidente de cuatro locos. La planificación del golpe necesitó fuertes recursos y apoyo para tomar, al mismo tiempo, el Congreso de los Diputados y la sede de RTVE en Madrid, y conseguir llevar a cabo en Valencia una sublevación militar en toda regla, sacando los tanques a la calle. *El País* reveló que los generales Fortea y Lamas, gobernadores militares de Cartagena y Murcia respectivamente, se pusieron a las órdenes de Valencia. Las capitánías generales de Zaragoza, Valladolid y Sevilla mostraron una actitud vacilante y solamente Burgos y Cataluña se declararon en contra del golpe sin vacilaciones desde el primer momento.

En el hemiciclo, los representantes parlamentarios de la democracia se postraron en el suelo. Uno de los guardias civiles, lleno de emoción y acariciando su pistola, dejó caer la frase “qué bonita es”. Como siempre en la historia, el soldado tiende a exagerar el poder independiente del fusil. Pero sin el respaldo de grandes masas, el poder del fusil no puede ser el factor determinante de la situación, ni para la revolución ni para la contrarrevolución.

Entre la clase obrera, pegada literalmente a la radio y la televisión, se esperaba una palabra valiente por parte de sus direcciones para salir a la calle con-

tra la intentona. Pero las órdenes de movilización no llegaban. Los activistas obreros —en medio de una confusión casi total provocada por la falta de dirección, la desinformación y la campaña mediática a favor de la calma— intentaban penetrar en la oscura niebla de los acontecimientos. En un ambiente muy tenso, los dirigentes naturales de la clase asumieron una vez más el protagonismo de los acontecimientos convocando asambleas, sacando octavillas en algunos casos y tomando medidas de seguridad. Los obreros más conscientes irán sacando sus conclusiones.

En el pueblo de Valdelatosa (Andalucía), el alcalde comunista “organizó partidas de vigilancia en los accesos al pueblo mientras los vecinos se intercambiaban escopetas y cartuchos. El ambiente de tensión y autodefensa debió ser tal, que el comandante de puesto de la Guardia Civil se presentó al alcalde para decirle que estaba a favor de la Constitución y que se ponía a sus órdenes” (*El País*, 1/3/1981). En este pequeño pueblo andaluz, los trabajadores habían comprendido mil veces mejor que los dirigentes de los partidos obreros, la naturaleza del problema y las medidas concretas a tomar para “consolidar la democracia”. Si algún guardia civil en Valdelatosa pensaba seguir el ejemplo del teniente coronel Tejero, las escopetas de los jornaleros y la movilización, organización y conciencia de la población eran argumentos más que suficientes para convencerles de quién mandaba allí.

Comentando la situación de los pueblos de Andalucía, el secretario general de Comisiones Obreras del Campo afirmó: “Aparte de que tengamos muchos alcaldes comunistas, socialistas y de izquierda, es que la gente recuerda todavía cómo sacaron a sus padres en 1932 y 1936 y los fusilaron a la puerta del cementerio, y como en las zonas rurales todos tienen escopeta legal para cazar, la mayor parte durmió con ella debajo de la almohada. La gente se decía: A mí no me sacan de casa, si no es con los pies por delante”.

Andalucía no fue el único sitio donde la cuestión vital de las armas salió a flote en las discusiones tensas de aquella noche en que una clase entera, de millores de hombres y mujeres, sintió toda la frustración de la impotencia ante un puñado de pistoleros armados que acababan de secuestrar a sus representantes parlamentarios. En una cafetería en Sama de Langreo, en la cuenca asturiana, un grupo de mineros se juntaron para discutir las medidas a tomar. En un momento dado un minero se dirige al camarero para pedir la cuenta y ostentadamente pone una pistola en la barra. No es la única pistola que hay en ese bar. Los obreros asturianos no van a ir tranquilamente a la cita con su destino. A ellos tampoco les van a pillar dormidos. Al día siguiente, los mineros asturianos organizan una huelga general de 24 horas.

Las discusiones sobre la autodefensa todavía tienen un carácter esporádico y quedan limitadas a un sector minoritario de los activistas. No obstante, en una noche en la que el poder de las leyes, las constituciones, los parlamentos quedaron reducidos a polvo en cuestión de minutos por la acción de 200 metrallero-

tas, estos mineros asturianos y jornaleros andaluces habían llegado a unas conclusiones infinitamente más serias que las de sus dirigentes con sus llamadas tranquilizadoras.

La presión se dejaba sentir. En Catalunya se hablaba de una huelga general para el día siguiente. Jordi Pujol, asustado, intenta presionar a los dirigentes obreros para desconvocarla. Mientras tanto en los cuarteles hay tensiones y enfrentamientos incluso entre los oficiales: los más jóvenes, que no han participado en la conspiración, están indignados. Entre los oficiales de la División Acorazada Brunete de Madrid se da un intenso forcejeo no sólo dialéctico, sino físico. El ejército no es un bloque homogéneo. Los mandos inferiores están abiertos a las presiones de las masas. Cualquier intento serio de un golpe fascista conduciría, inevitablemente, a un colapso de la cohesión interna del ejército. Además las tropas todavía no han hablado. Están todas acuarteladas salvo en Valencia, donde se han sacado los tanques a la calle pero los soldados que van dentro no comprenden aún la razón de estos movimientos. Evidentemente los golpistas temen cualquier contacto entre los soldados y la clase obrera en estos momentos.

Una huelga general contra el golpe, convocada por las organizaciones sindicales y los partidos de la izquierda, hubiese paralizado a todo el país llevando a las masas a la calle y rompiendo el aislamiento del soldado con la clase obrera a la que pertenece. Cuando el soldado se da cuenta de que la cosa va en serio la disciplina se pone en entredicho.

En el crisol de esta experiencia concreta podemos analizar el papel de los líderes reformistas —los mismos que llevaron a la clase obrera a la derrota en la Guerra Civil pactando con los elementos “progresistas de la burguesía”—, los republicanos y los nacionalistas burgueses en Euskadi y Catalunya y, también, el papel nefasto del terrorismo individual, precisamente de aquellos que adoran el poder de la pistola pero que demostraron no tener ni idea de cuándo hay que usarla.

En el momento del golpe, ¿de qué podía servir la acción armada de un puñado de hombres en Euskal Herria enfrentados a los tanques y a la reacción? Sólo la movilización decidida de la población, de los batallones de la clase obrera, podía pararlo. ¿Qué aportó ETA en esos momentos decisivos? Ante estos acontecimientos resuena en nuestros oídos una de las frases de ETA: “En Euskadi la contradicción principal es la nacional y la lucha de liberación no está ligada ni depende del avance o del reflujo del socialismo en el Estado español”. ¡Cómo no va a importar en Euskal Herria el avance o reflujo del socialismo en el Estado español! ¿Quiere esto decir que Euskal Herria estaba, de alguna manera, blindada ante un golpe de Estado en España? ¿Por qué, entonces, muchos dirigentes abertzales pusieron pies en polvorosa?

La necesidad de unir las fuerzas de la clase obrera en todo el Estado en lugar de luchar por separado, un día en Euskal Herria, otro en Catalunya, Sevilla, Madrid

o Galicia, deriva del hecho de que nos enfrentamos a un aparato burgués organizado a escala estatal. En 1934, la heroica revolución en Asturias fue aplastada por haberse quedado aislada. El ejército, a las órdenes de Franco, concentró sus tropas allí y derrotó la insurrección. La derrota del 34 y la posterior represión se cebó en todo el territorio, incluida Euskal Herria. De la misma manera, la dictadura fue derrotada por la acción mancomunada del conjunto de los trabajadores de todo el Estado español y en esa lucha la clase obrera vasca fue admirada por su tesón y coraje. Incluso los derechos democráticos, arrancados tras fuertes combates, decenas de muertos, miles de torturados y exiliados, fueron la consecuencia de la acción unificada de la clase obrera. Como Marx inscribió en la bandera del movimiento obrero hace más de 150 años: ¡Proletarios del mundo, uníos!, un grito que refleja una necesidad material y política frente a un enemigo que actúa también de forma común, por encima de fronteras nacionales, anteponiendo sus intereses de clase a cualquier otro.

EL 23-F EN EL PAÍS VASCO

¿Qué pasó en Euskal Herria durante los acontecimientos del 23-F? La prensa, la burguesía vasca, los dirigentes del PSOE, EE, del PCE, UGT, CC.OO., pero también los de ELA y LAB, se dedicaron a llamar a la calma en lugar de paralizar inmediatamente toda la producción a través de una huelga general y crear patrullas de autodefensa obrera. A nadie se le escapa que uno de los sitios donde la represión hubiese sido más salvaje hubiese sido en el País Vasco. Miles de delegados sindicales, dirigentes vecinales y activistas juveniles hubiesen sido barridos por la represión como lo fueron durante el golpe militar en Chile contra Allende o en Argentina. ¿Dónde estaban el “ejército popular vasco” y KAS, el bloque dirigente, para orientar a las masas en este momento decisivo?

Una situación histórica crítica como aquella pone a todas las organizaciones en su sitio. En situaciones así, donde la clase se lo juega todo, es cuando se ve la fuerza de las ideas y la calidad de la dirección. Las fugas al monte de dirigentes de la izquierda abertzale fueron algo corriente, otros como Letamendía (*Ortzi*), se echaron al mar buscando refugio en Francia. Qué duda cabe que la integridad física de muchos cuadros estaba amenazada. Pero sobre todo la amenaza se cernía sobre el conjunto de los luchadores de base, de los militantes, que no tendrían tantas posibilidades y medios para alcanzar un refugio seguro. En esas circunstancias lo fundamental era cohesionar la resistencia y ofrecer un plan de lucha basado en la movilización de la población, incluyendo la autodefensa armada. Tampoco la izquierda abertzale mostró estar a la altura de las responsabilidades que exigía el momento. En realidad se demostraba una carencia política fundamental: su escasa confianza en la capacidad de lucha de los trabajadores. Para ETAm el 23-F fue nada más que un “autogolpe” que demostraba el fracaso de la reforma política emprendida a la muerte del dictador. ¿Nada más? ¿Qué es eso del autogolpe? ¿No iba a haber represión, ni listas de gentes de izquierda, incluyendo a miles de mili-

tantes de la izquierda abertzale, a las que eliminar?

En aquellos momentos cruciales es cuando hubiese sido necesario sacar las armas; entonces es cuando son realmente valiosos quienes están dispuestos a empuñarlas y saben usarlas siempre que, en lugar de realizar acciones individuales que hubiesen sido una provocación, su tarea fuese organizar patrullas obreras de autodefensa que vigilasen y controlasen los movimientos en cuarteles y comisarías y defender las ciudades y pueblos de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra, como se estaba haciendo en algunas zonas de Asturias y Andalucía. Peor aún fue la actitud rompedora de la dirección de Euskadiko Ezkerra haciendo continuos llamamientos a la tranquilidad. La excepción honrosa de Euskal Herria aquella noche fueron los marxistas, al frente de la central sindical socialista en Álava que adoptó el acuerdo de llamar a la huelga general a toda la población. Desde las cinco de la mañana del 24 de febrero, los sindicalistas marxistas de Álava repartieron masivamente una hoja en los polígonos industriales de Vitoria llamando a la huelga general, encontrando la oposición del resto de organizaciones, que se negaban no sólo a ir a la huelga, sino también a la celebración de asambleas.

El día 26 la UGT de Álava publicó una octavilla para repartirla en la manifestación del 27 en la que se decía que sólo una respuesta firme y decidida, tanto dentro como fuera de los centros de trabajo, garantizaría el fracaso de un golpe o impediría que volvieran a intentarlo en el futuro. En esa declaración se exigía la depuración de fascistas del ejército y la Guardia Civil. Dicha octavilla fue prohibida por Ramón Jáuregui, que en aquellos momentos era el secretario general de la UGT de Euskadi, pero se repartió entre los trabajadores asistentes a las manifestaciones.

Ésta fue la posición de los marxistas en todas las movilizaciones del día 27 convocadas por las fuerzas políticas, tanto de la derecha como de la izquierda. Su postura fue clara: ninguna confianza en la UCD ni en el aparato del Estado heredado de la dictadura; por una política de independencia de clase que exigiese la depuración de tribunales, juzgados, cuarteles y academias policiales de elementos fascistas; control democrático por las organizaciones obreras de las academias militares y policiales; derechos democráticos para los soldados, incluyendo el de libre sindicación y militancia en partidos políticos; por una política de clase, socialista y revolucionaria para combatir la amenaza golpista.

En Euskal Herria, la confusión con relación al *tejerazo* fue tal que las manifestaciones para el día 27 resultaron un fracaso en las capitales vascas. ¡Es increíble! La dirección de la izquierda abertzale desconvocó las manifestaciones con el argumento de que “HB no es carne de cañón para nadie” (*Egin*, 28/2/1981). La clase trabajadora de la nacionalidad histórica que más sufrió posteriormente los efectos del *tejerazo*, que había hecho ese mismo mes una huelga general contra el asesi-

11. Ramos, J. I., “La Comuna asturiana de 1934. La insurrección proletaria y la República”, en *Marxismo Hoy* nº 13, Madrid, Fundación Federico Engels, 2005, pág. 16.

nato del ingeniero de la central nuclear de Lemóniz y otra huelga general la semana siguiente contra el asesinato de Arregi, torturado en comisaría, no fue movilizada para parar un golpe de Estado que, de triunfar, hubiese tenido efectos dramáticos para Euskal Herria. Los grandes batallones del proletariado vasco fueron desmovilizados por sus direcciones. Este hecho, mejor que ningún otro, refleja la miopía política de los dirigentes reformistas del PSOE, EE y del PCE, la incapacidad del PNV a la hora de defender las libertades y la incorrección de los métodos del terrorismo individual de ETA y de la idea del nacionalismo radical vasco de que es suficiente luchar en Euskal Herria.

El día 27 se convocaron movilizaciones masivas en todo el Estado. Más de tres millones de hombres y mujeres salieron a las calles en Madrid, Barcelona, Valencia, Oviedo, Sevilla... para protestar contra el golpe de Estado del día 23-F. Era la reacción de la clase obrera contra el intento de destruir sus derechos democráticos. Sin embargo, los dirigentes del PSOE y del PCE colocaron a los representantes de la derecha al frente de las mismas. Banqueros y políticos burgueses de AP y de UCD que habían dado protección a los golpistas para que elaborasen sus planes se ponían al frente de millones de obreros hablando de reconciliación. ¡Ya sabemos de qué reconciliación se trataba! No apoyaron el golpe porque temieron la reacción de las masas, y no estaban equivocados, pero aprovecharon para leerle la cartilla a los dirigentes socialistas y comunistas y mostrarles el programa de los golpistas: nada de depuraciones serias en el aparato estatal, favorecer los intereses de la banca y la patronal, recorte del Estado autonómico y de las libertades democráticas conseguidas hasta entonces, apoyo a la guerra sucia y a los planes estratégicos de la burguesía, como la entrada en la OTAN. Múgica fue el hombre del PSOE que negoció con los golpistas al más alto nivel. La dirección del PSOE jamás le exigió responsabilidades por ello; al contrario: le hizo ministro de Justicia. Más adelante, el PP acabaría nombrándolo Defensor del Pueblo. ¡Qué ironía!

En la historia del Estado español hay una larga tradición de golpes militares y pronunciamientos, nada menos que 25 en 200 años. La caída de Suárez bajo presiones de los militares y con el beneplácito del rey, fue el paso decisivo para un régimen bonapartista más abierto. Negando su apoyo a un golpe que estaba condenado al fracaso, Juan Carlos fortaleció el poder de la monarquía como aglutinador de las fuerzas reaccionarias de la sociedad. De haberlo apoyado habría firmado la sentencia de muerte de la monarquía, como le pasó a su cuñado, Constantino de Grecia. Al día siguiente, Juan Carlos dedicó todas sus energías a una defensa acérrima de los golpistas y sus innumerables colaboradores en los cuarteles. Era de prever lo que pasó después. Tejero en la cárcel de Alcalá de Henares, como héroe de la reacción, recibió visitas de generales, periodistas y damas de la alta sociedad que ingresaron millones de pesetas en sus cuentas privadas. Si cualquier trabajador hubiera hecho una centésima parte de lo que hicieron esos pistoleros,

12. *Ibid.*, pág. 18.

¿qué castigo hubiera recibido? En cambio a Tejero y Milans del Bosch les ofrecieron un avión para escapar del país y si no lo aceptaron es porque sabían que su estancia en las dependencias de Su Majestad el rey no iba a ser ni muy larga ni excesivamente incómoda. Qué diferencia con los malos tratos, vejaciones y torturas sufridos por tantos militantes de izquierda en cuartelillos y comisarías. Y ello sin asaltar el Parlamento a punta de pistola.

Nada más acabar el secuestro de los diputados en el parlamento, los dirigentes de los principales partidos fueron llamados al palacio de la Zarzuela, donde el monarca les leyó la cartilla. El espectáculo de los representantes políticos respaldados por millones de votos con las cabezas agachadas escuchando la reprimenda insolente del nieto de Alfonso XIII era todo un síntoma de la nueva etapa de “democracia vigilada” donde el rey, vitoreado por los dirigentes del PSOE y del PCE como el “salvador de la democracia”, se levantaba como árbitro supremo y portavoz del ejército.

Ceder al chantaje de los golpistas y de sus mentores no era combatir el golpe, sino abrir el camino a nuevas tentativas. Si la reacción no había seguido sus planes hasta el final era por el miedo a una reacción masiva de una clase obrera que había crecido numéricamente y se había recuperado definitivamente tras cuarenta años de opresión. La clase obrera vasca, por ejemplo, estaba concentrada en grandes industrias. En 1981, según un estudio del Gobierno vasco, el 1,08% de las empresas vascas tenían más de 500 empleados pero daban trabajo al 30,41% de los operarios del país. En Vizcaya, el 0,94% de las empresas empleaban al 31,55% de los trabajadores. Pero no basta con que la clase obrera tenga una fuerza potencial, necesita convertirla en fuerza real, ser consciente de la misma y tener un programa claro para transformar la sociedad. Los dirigentes del PSOE y del PCE renunciaron a llevar a cabo manifestaciones genuinas de clase y el precio a pagar por tener al frente a los amigos de los golpistas fue la libertad de expresión. Masivas manifestaciones “en defensa de la democracia” donde estaba prohibido que la clase trabajadora y la juventud portasen sus propias banderas y pancartas.

El *Financial Times*, órgano del sector financiero inglés, comentó tras el golpe: “Hasta ahora, parece que los políticos han actuado con un miedo exagerado hacia los militares, sobre todo el Partido Comunista y el Partido Socialista en la oposición. Eso, a su vez, quizá ha otorgado a los militares más poder del que realmente poseen” (*Financial Times*, 25/2/1981). Los dirigentes obreros habían perdido la oportunidad de organizar una campaña masiva exigiendo la completa depuración de los elementos fascistas y la democratización del aparato del Estado. En lugar de ello, tras el fracaso del “tejerazo”, el Congreso aprobó en abril la “Ley de Defensa de la Constitución y sobre el terrorismo”, aumentando las medidas represivas para los “delitos de terrorismo” y limitando la libertad de expresión. Posterior-

13. Lorenzo Espinosa, J. M., *op. cit.*, pág. 55.

14. Maurín, J., *Hacia la Revolución*, 1935.

mente, los estatutos de autonomía quedarán mermados con la aplicación de la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización de los Procesos Autonómicos), anunciada por Martín Villa un año antes, que equipararía (a la baja para Euskal Herria y Catalunya) las 17 autonomías surgidas de la nueva configuración del Estado. Asimismo, la represión se endureció. Entre 1981 y 1982 las fuerzas de seguridad detuvieron a 2.561 personas en virtud de la legislación antiterrorista. Los casos de torturas y malos tratos se multiplicaron. El más terrible tuvo lugar en mayo de 1981, cuando tres jóvenes santanderinos fueron detenidos por la Guardia Civil en Almería al ser confundidos con militantes de ETA. Les torturaron en una casa abandonada, les asesinaron y sus cuerpos aparecieron carbonizados, dos de ellos con las manos y los pies amputados. La Guardia Civil que los escoltaba adujo que habían muerto “al intentar escapar”. El tristemente conocido como *caso Almería* quedó impune.

V. El reformismo y la cuestión nacional

EL TRIUNFO DEL PSOE: UNA OPORTUNIDAD FRUSTRADA

En las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 el PSOE obtuvo un triunfo histórico. Con más de diez millones de votos superó la mayoría absoluta en el Parlamento iniciando una etapa de ilusión y esperanza para millones de trabajadores, mujeres y jóvenes. La victoria del PSOE se consideró el final de la llamada Transición pero realmente fue una transición inacabada. La clase obrera había logrado una serie de reformas democráticas y de avances en cuanto a la libertad de asociación, de expresión, de manifestación, recortadas tras el 23-F, que no existían durante la dictadura; pero los resortes fundamentales del Estado y de la economía seguían en las mismas manos que antes. Se podía elegir quién habitaría en el palacio de La Moncloa y estaría al frente del Gobierno los cuatro próximos años pero los poderes fácticos que movían la sociedad, las llamadas cien familias que continuaban ejerciendo su dictadura en la sombra, no eran elegibles. Los mismos banqueros, la misma patronal, los mismos generales y policías que habían amasado sus fortunas oprimiendo a la clase trabajadora seguían controlando firmemente las palancas del poder.

A pesar de ello, el auge del voto socialista y la formación por primera vez en la historia del Estado español de un gobierno monocolor de izquierdas supuso una fuente de ilusión y esperanza en una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. La promesa del PSOE de crear 800.000 puestos de trabajo era vista como un importante paso adelante junto a otras medidas anunciadas como reducir la jornada semanal a 40 horas, la defensa de la enseñanza y la sanidad públicas, incluso una mejor relación con las nacionalidades históricas. Pero como siempre ha ocurrido en la historia de la lucha de clases del Estado español, la dirección del PSOE tenía que elegir entre apoyarse en la clase obrera y llevar a cabo una auténtica política socialista o mantenerse en el marco del capitalismo apoyando a la burguesía, la banca, los monopolios y el aparato del Estado heredado del franquismo.

Como explicó el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, no se puede servir a dos amos al mismo tiempo. Hay que elegir entre el capital y el trabajo. Felipe, Boyer,

Solchaga tenían hecha su elección antes de llegar al Gobierno. La lectura que hicieron del 23-F fue que la democracia burguesa y su régimen de “libertades” era el fruto de sus habilidades negociadoras con la burguesía “progresista” y la monarquía, y no de la fuerza de la clase obrera. Para ellos, el régimen democrático sólo se podría consolidar evitando enfrentamientos con los llamados “poderes fácticos”. Esta política llevaría al Gobierno del PSOE a enfrentarse con el movimiento obrero y con su propio sindicato, la UGT, enfrentamiento que alcanzará su punto más álgido en la huelga general del 14 de diciembre de 1988.

Cabe recordar hoy, cuando tan en boga están las declamaciones solemnes a favor del “Estado de derecho”, que el pacto entre los dirigentes obreros y la burguesía mantuvo intacto todo el aparato estatal heredado de la dictadura. Ni se depuró el ejército, que mantuvo en toda la escala de mandos a los oficiales leales a Franco, ni se depuró la policía ni la Guardia Civil de represores y torturadores, ni el aparato judicial. En 1982 “de las trece Jefaturas Superiores de Policía nueve eran aún dirigidas por ex miembros de la Brigada Político Social”.

Bajo el Gobierno del PSOE, el director de la Guardia Civil, el general Sáenz de Santamaría, con una amplia experiencia represiva en Euskal Herria, insistía que “la Benemérita es el pilar de la seguridad ciudadana y del orden público. Estas fuerzas son más necesarias en la democracia que en la dictadura. La razón reside en el hecho de que la dictadura garantiza de por sí el orden. El desarrollo de las libertades y su ejercicio necesitan protección mientras que en la dictadura las libertades no se protegen, se suprimen. El peso de un régimen democrático es que la libertad conlleva desorden” (*Tiempo* 12/12/1983). Declaraciones que reflejaban perfectamente lo que se enseña en las academias de los cuerpos de seguridad desde la época de Franco, cuando libertad y democracia son sinónimos de desorden, anarquía, caos.

La obligación del PSOE era ponerse a la cabeza en la defensa de los derechos democráticos, dejando que la democracia entrase en los cuarteles, comisarías y academias de policía, concediendo a estos cuerpos el derecho de sindicalización, manifestación y huelga, como reclamaban organizaciones aún clandestinas como el SUGC (Sindicato Unificado de la Guardia Civil), y depurando a los fascistas implicados en torturas y crímenes, dando responsabilidades a los sindicatos de clase para controlar a estos cuerpos. Por el contrario, la dirección socialista dejó que todo siguiese intacto. Hipotecando el nombre del socialismo pusieron sus pretendidos “cien años de honradez” al servicio de los poderes fácticos heredados del franquismo. ¿Qué se podía esperar de esta política?

LOS GOBIERNOS DE FELIPE GONZÁLEZ Y LA CUESTIÓN NACIONAL VASCA

Como los marxistas siempre hemos señalado, si dices A tienes que decir B, C y el resto de las letras del abecedario. Si respetas las reglas del juego del capitalismo, las asumes en todos los terrenos, incluidos los derechos democráticos y la cuestión

nacional. Felipe González tenía prisa por mostrar sus credenciales de “hombre de Estado” al conjunto de la burguesía y preparó su puesta de largo precisamente atacando duramente los derechos democráticos en Euskal Herria.

En mayo de 1983 la prensa reveló la existencia del llamado Plan ZEN (Zona Especial Norte), elaborado por el Ministerio del Interior socialista. El Comité de Encuesta sobre las violaciones de Derechos Humanos en Europa dice de este plan: “La versión pública de esta biblia de la ‘guerra total’ muestra que sus usuarios deciden, ya en 1983, combatir el enemigo del Estado (interior y exterior) desde todos sus aspectos: político, jurídico, económico, social y policial”. El Plan ZEN considera sospechoso a todo joven vasco que lleve un determinado atuendo como zapatillas, pantalones vaqueros, etc., y desarrolla un modelo integral de represión tanto interior como en el extranjero.

El gobierno del PSOE, con la excusa de combatir el terrorismo, aprobó toda una batería de medidas legislativas que implicaban recortes drásticos de los derechos y libertades democráticas, como la Ley Orgánica 9/1984 de 28 de diciembre, conocida como Ley Antiterrorista, que planteaba, entre otras, las siguientes medidas: incremento de la duración de la detención policial a diez días (Art.13); autorización a las fuerzas de seguridad para realizar detenciones y requisitorias sin mandato o autorización judicial (Art.16); autorización al poder judicial para cerrar un medio de información en el que se haya “difundido o publicado” apología de los delitos previstos en dicha ley.

La burguesía vasca también prestó su colaboración incondicional a los planes del gobierno PSOE. Arzalluz, máximo dirigente del PNV, lideró la estrategia del partido entrevistándose con el rey Juan Carlos, con los embajadores de la Comunidad Europea y con el de Estados Unidos, Thomas Enders. Los temas tratados: “Ingreso en el Mercado Común Europeo, apoyo a la OTAN, la contrapartida la liquidación de ETA. La normalización de Euskadi pasaba, inevitablemente por el eje Bruselas-Washington. Mercado Común, OTAN y ETA están en el mismo paquete”⁶⁶. Durante ese año serán 1.864 las personas arrestadas en Euskal Herria por motivos políticos. El 20 de noviembre de 1984 es asesinado por un comando parapolicial el dirigente de HB y presidente de HASI, Santi Brouard, en su consulta médica en Bilbao. Euskadi quedó paralizada por una huelga general y decenas de miles de personas salieron a la calle en la manifestación más grande en la historia del nacionalismo vasco. El capítulo de la guerra sucia, terrorismo de Estado, bajo el gobierno del PSOE había comenzado.

Meses más tarde se firma en la Comunidad Autónoma Vasca el pacto de legislación entre el PNV y el PSOE, que incluye la formación de una “Comisión de expertos sobre la violencia” prevista en el decálogo aprobado por el Parlamento vasco en marzo de 1985. La elección de dichos *expertos* es muy elocuente: el alemán Hans Joseph Horchem, coordinador de la comisión, había colaborado con el Ministerio del Interior español en 1978. Sus ideas sobre la “cuestión vasca” se resumen en estas frases: “El PNV podría poner fin al terrorismo de ETA”; para hacer frente a los

“grupos terroristas” hace falta “descubrirlos, conocerlos, detenerlos o matarlos”. El inglés Sir Clive Rose, miembro fundador del Royal United Service Institute for Defence Studies, con una gran experiencia en el conflicto norirlandés, estaba a favor de la intervención del ejército para hacer frente a las huelgas. De su compatriota, Peter Janke se conoce, entre otras cosas, un libro sobre la España franquista en el que aparecen afirmaciones como ‘gracias al mandato autoritario de Franco, España conoció 35 años de paz y de progreso’. El criminólogo italiano Franco Ferracuti era una de las mentes más lúcidas de la logia masónica P2, terrorismo de Estado que entre los años setenta y ochenta causó en Italia 149 muertos y más de 600 heridos. La conclusión de dicha Comisión es que la naturaleza del terrorismo vasco impone que sea combatido sobre la base de la cooperación de los vascos.

Esta política represiva tiene su expresión acabada con la aparición de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), que recogen el testigo de las sucesivas organizaciones paramilitares que han asesinado activistas de izquierdas desde la dictadura como el Batallón Vasco Español o la Triple A. En 1985 la guerra sucia de los GAL registra la realización de 16 atentados con un balance de 11 muertos y otros tantos heridos; de las 22 víctimas, 9 son ciudadanos de Iparralde. Las primeras detenciones de los GAL permiten saber que los mercenarios son reclutados desde Madrid en los bajos fondos de Burdeos y entre la mafia marsellesa. La trama es organizada por los policías Amedo y Domínguez, que trabajaban bajo las órdenes del ministro del Interior José Barrionuevo y bajo un Gobierno presidido por Felipe González.

La lucha contra ETA ha estado jalonada por la práctica del terrorismo de Estado desde los años setenta. Con los gobiernos de UCD, bajo las siglas de ATE, AAA o BVE, o bajo el gobierno del PSOE con los GAL, el terrorismo de Estado, esa forma de violencia amparada y legalizada por el sistema, no ha dejado de actuar. En la práctica, el carácter profundamente reaccionario del aparato del Estado ha dejado su huella, y vaya huella, en la política de los diferentes gobiernos “democráticos” respecto a la cuestión nacional. El asesinato de Santi Brouard y Josu Muguruza a manos de los GAL y el secuestro, tortura y asesinato de Lasa y Zabala ordenados por el coronel de la Guardia Civil Rodríguez Galindo fueron algunos de los acontecimientos más representativos de la guerra sucia pero no los únicos. La tortura en comisarías bajo los Gobiernos del PSOE, lejos de remitir, es espeluznante. Según el Parlamento Europeo, entre el 1 de enero de 1981 y el 5 de octubre de 1984, se registraron 3.500 denuncias de torturas en comisarías. Tanto estas prácticas, como los asesinatos cometidos por las bandas fascistas en la Transición, financiadas y amparadas por la policía y la burguesía a la que servían, han quedado impunes.

Con el ingreso oficial del Estado español en la Comunidad Europea el 1 de ene-

15. Fraser, R., *op. cit.*, pág. 66.

16. *Ibid.*, pág. 264.

ro de 1986 se pondrá final a la guerra sucia de los GAL, aunque todavía causarán dos víctimas francesas más. Una vez más la experiencia demostró que la represión policial y el terrorismo de Estado jamás acabarían con un problema político como es la cuestión nacional vasca. Lo único que consiguieron los crímenes de los GAL fue el incremento del apoyo a la lucha armada y el incremento de la militancia en ETA, cuyos comandos se sentían plenamente justificados y arropados socialmente para vengar a sus compañeros caídos. Madrid registrará en 1985 el mayor número de atentados en la historia de ETA.

Con el gobierno del PSOE el problema nacional siguió sin resolverse. En la medida en que los dirigentes socialdemócratas apoyaban y se identificaban con la política de la burguesía centralista, renunciaron a la defensa de una política socialista. Es más, su compromiso con la guerra sucia —que era la consecuencia de su política reformista en la cuestión nacional y la cuestión de clase—, su apoyo a las medidas represivas contra el movimiento obrero (*ley Corcuera*) y su política procapitalista redujeron sensiblemente su influencia en las nacionalidades históricas. A esto se sumaba su política de pactos con los partidos nacionalistas burgueses, CiU y PNV, en los aspectos fundamentales de la política económica, exterior o nacional. Éstas fueron las causas políticas que permitieron a los nacionalistas burgueses y a la izquierda abertzale mantener un apoyo de masas.

No hay que olvidar tampoco que tanto PNV como CiU respaldaban la posición del PSOE en su política represiva en las nacionalidades. Tanto Arzalluz como Pujol conocían detalladamente los orígenes de los GAL y por eso fueron los más firmes partidarios en tapar el asunto, criticando con dureza la actitud demagógica del PP sobre este tema. La burguesía, a pesar de las declaraciones cínicas de la burocracia del PP, jamás iría hasta el final en el caso de los GAL. Sería una insensatez contraria a sus intereses de clase. El PP echó tierra a los procesos judiciales. No podía ser de otra forma. El terrorismo de Estado será siempre una práctica inevitable bajo el capitalismo. Hoy es utilizado por la burguesía para combatir a ETA, pero mañana lo será contra el movimiento obrero, sus cuadros sindicales y políticos y especialmente contra su vanguardia.

En enero de 1986 Felipe González anuncia la celebración de un referéndum popular sobre la permanencia del Estado en la OTAN. Xavier Arzalluz y José Antonio Ardanza, en la tradición de la ambigüedad cínica y ventajista del nacionalismo burgués, piden el voto afirmativo, si bien la postura oficial del PNV será dar “libertad de voto” a sus militantes. El resultado del referéndum en Euskadi refleja un rechazo mayoritario a la OTAN de un 40%, frente a un 21,4% que mostrará su apoyo. En las elecciones generales de ese mismo año, el PSOE obtuvo 8.901.718 votos, un descenso claro respecto a los 10.127.392 de octubre de 1982.

El PNV también pagaría un precio por esta política “realista y pragmática”. La disputa por la Ley de Territorios Históricos entre el lehendakari Garaikoetxea y Ar-

17. *Ibid.*, pág. 264.

zalluz, líder del PNV, y el malestar que crea en la base los intentos de éste último de forzar una alianza con UPN en Navarra, llevará a la ruptura del Partido Nacionalista Vasco y a la formación de Eusko Alkartasuna en septiembre de 1986.

La clase obrera que apoya al Gobierno a regañadientes para evitar una vuelta de la derecha, no se resigna a aceptar su política. El enfrentamiento con los trabajadores se inicia desde el principio de la primera legislatura. La política económica, diseñada de acuerdo a los intereses de la gran banca, los monopolios y las grandes empresas, se centra en recortar los gastos sociales y llevar a cabo una reconversión salvaje en el sector industrial. El choque con los batallones pesados de los obreros de la siderurgia y el sector naval es prolongado y extremadamente duro y se extiende al conjunto de la clase.

A pesar de que los dirigentes ponían freno a la lucha con continuos pactos, capa a capa la clase obrera se iba incorporando a la lucha. En el mes de abril de 1987 más de un millón de trabajadores fueron a la huelga. Las luchas estudiantiles de 1986-1987 dirigidas por el Sindicato de Estudiantes, que movilizaron a millones de estudiantes de enseñanza secundaria y acabaron con un éxito histórico, contagiaron al movimiento obrero: "Hay un empujón fuerte de la sociedad que ha visto un boquete que comenzó por abrirse con los estudiantes que consiguieron un gran éxito político y son cada vez más los que se animan" (*El País*, 16/3/1987).

Entre todos los conflictos el más revelador fue el de Reinosa (Cantabria), cuando los trabajadores furiosos de Forjas plantaron cara a la Guardia Civil cuando intentó reprimir violentamente un encierro en la empresa, les arrinconaron y les desarmaron, destrozando sus armas contra el asfalto. Posteriormente la Benemérita quiso vengarse con una actuación tan violenta que en un solo día los vecinos presentaron 700 denuncias por actos de vandalismo. Como consecuencia de la represión el trabajador Gonzalo Ruiz murió asfixiado por los gases lacrimógenos. Las luchas obreras en Puerto Real y Riotinto afectaban igualmente a comarcas enteras. En el caso de Cádiz, el gobernador civil, militante del PSOE y de la UGT, dijo refiriéndose al conflicto de AESA: "Son [los trabajadores] una banda de terroristas (...) A veces casi estoy deseando el estado de excepción" (*Diario de Cádiz*, 25/3/1987). En el sindicato le expedientaron, pero en el partido no.

En las elecciones al Parlamento Europeo de 1987, el PSOE obtuvo 7.568.752 votos, 1.300.000 menos que en las generales de 1986. En las municipales de ese mismo año perdió 2.600 concejales y la mayoría absoluta en 21 de las 27 capitales de provincia. De once comunidades autónomas donde el PSOE tenía mayoría absoluta, sólo la mantenía en tres de ellas, retrocediendo en el resto.

Como rechazo una vez más a la política del PSOE, represiva con los derechos democráticos y complaciente con los intereses del capital, Herri Batasuna registra un aumento muy importante de votos en las elecciones legislativas, autonómicas,

18. *Ibid.*, pág. 262.

19. *Ibid.*, pág. 263.

municipales y europeas. En las generales de 1986 la coalición independentista vasca obtiene 250.000 votos, convirtiéndose en la segunda fuerza política de Euskadi por delante de un PNV roto y dividido. El 10 de junio de 1987, HB obtiene en las elecciones europeas más de 350.000 votos en todo el Estado, convirtiéndose en la primera fuerza nacionalista vasca que logra un escaño al Parlamento europeo, que sería ocupado por el abogado Txema Montero. De los 170.000 votos obtenidos en todo el Estado, 40.000 provinieron de Catalunya. Sin embargo, el 12 de junio ETA hará explotar una potente carga explosiva en la refinería de Empetrol en Tarragona provocando el pánico en la ciudad y una semana más tarde, el 19 de junio a las 16:12h, una potente bomba incendiaria estalla en el supermercado Hipercor de Barcelona, provocando una masacre con 21 muertos y 29 heridos. De poco servirá que ETA se justificase argumentando que avisó de la colocación de la bomba. La masacre no tenía ninguna justificación.

Dos manifestaciones con decenas de miles de personas atacarán con dureza a ETA, creando una fosa entre la organización armada y la clase obrera de Catalunya, que siempre había defendido mayoritariamente los derechos democráticos del pueblo vasco.

En aquellos momentos el apoyo a la lucha armada todavía era importante en Euskal Herria pero ETA desprecia las movilizaciones en la calle contra sus atentados. Era una seria advertencia de lo que años más tarde ocurriría.

El 11 de diciembre un coche bomba en el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza destruirá un ala del edificio causando doce víctimas, de las cuales cinco eran niños. ETA afirma que dicho atentado "es responsabilidad de los poderes fácticos del Estado y de sus gestores socialdemócratas, así como de sus colaboradores, al perpetuar una situación que puede ser perfectamente soluble mediante la negociación política" (*Egin*, 29/1/88). El atentado de Hipercor tendrá repercusiones profundas en la izquierda abertzale y provocará una crisis en la coordinadora KAS y en HASI, de donde son expulsados un centenar de militantes, entre ellos Txomin Ziluaga, su secretario general.

Estos atentados irán lastrando el apoyo a la lucha del pueblo vasco por sus derechos democráticos. ETA irá perdiendo cualquier atisbo de justificación para una mayoría aplastante de trabajadores y jóvenes de todo el Estado. Paradójicamente, la represión, las torturas, la guerra sucia, la dispersión y el ensañamiento con los presos políticos vascos por parte del Estado, junto a unas desigualdades sociales crecientes, permitirán a ETA mantener una periferia todavía importante en Euskal Herria que justifica sus actividades y nutre el apoyo que necesita para subsistir.

LA HUELGA GENERAL DEL 14-D

Durante 1988 se producen una serie de cambios en el Gobierno y en el aparato

del Estado. El ministro del Interior José Barrionuevo, investigado por los GAL, cede su puesto a José Luis Corcuera, miembro del ala derechista de la UGT. Enrique Múgica asciende al frente del Ministerio de Justicia a pesar de su implicación en negociaciones secretas con los golpistas del 23-F. En mayo Narcís Serra nombra capitán general de la región militar Pirenaico Occidental al general de brigada Andrés Casinello, especialista en la “guerra del norte”. En sus palabras se refleja la táctica del Estado respecto a la cuestión nacional vasca: “Es preciso hablar, moverse, confundirse, captar, contactar, negociar con las fracciones, romper todo...”. El 28 de mayo es derogada la ley antiterrorista y se reduce a cinco los días máximos de detención policial pero muchos de los aspectos más regresivos de la ley pasan a formar parte del procedimiento penal ordinario.

En ese mismo año el paro alcanza el 20,2%, casi tres millones de trabajadores en todo el Estado se encuentran desocupados. La situación de la clase trabajadora que ha sufrido las reconversiones y los recortes del gasto público se hace cada vez más insoportable, mientras que los beneficios de la gran banca son desorbitados. En 1989 los grandes grupos bancarios españoles, según un documento de la empresa de análisis bancario IBCA publicado ese mismo año, tienen el mayor índice mundial de beneficios, con un rédito que oscila entre el 20 y el 50%.

En ese contexto, el gobierno planea una nueva vuelta de tuerca en su política económica con la aprobación del mal llamado “Plan de Empleo Juvenil” (PEJ), que pretende legalizar la precariedad y generalizarla para el conjunto de la juventud. El Sindicato de Estudiantes (SE), en su II Congreso, emplazó a los dirigentes de UGT y CC.OO. a que convocasen una huelga general contra esta nueva agresión. A su vez el SE convoca movilizaciones estudiantiles que preparan el camino a la huelga general, explicando en miles de asambleas en todo el Estado qué es el PEJ y sacando a decenas de miles de estudiantes a la calle el 1 de diciembre. La presión sobre las direcciones sindicales se hace insostenible. Durante todo el año 1987 se han ido sucediendo huelgas durísimas en una gran cantidad de sectores que han desbordado a las cúpulas de los sindicatos en un proceso clásico de indisciplina sindical. Nicolás Redondo, secretario general de la UGT, lo retrata gráficamente durante un debate televisado con el ministro de Economía Carlos Solchaga: “No estamos dispuestos”, afirma Redondo, “a correr detrás de los huelguistas”. Finalmente, el 14 de diciembre de 1988, se convocará la huelga general más importante de las últimas décadas en Europa contra los planes de empleo juvenil. Más de catorce millones de trabajadores secundan la huelga, que se convierte en un rotundo éxito en todo el Estado español. Millones salen a la calle el día 14 y el 16 de diciembre. El gobierno, acorralado ante semejante demostración de fuerza, tiene que retirar el PEJ y realiza toda una serie de concesiones en los gastos sociales. Felipe González se plantea incluso la posibilidad

20. *Ibid.*, pág. 266.

21. *Ibid.*, págs. 266-67.

de la dimisión.

León Trotsky, en agosto de 1931, refiriéndose al papel de las huelgas en una revolución, afirmaba: “La inmensa mayoría del proletariado en el Estado español no tiene ni la más remota idea de lo que es la organización. Durante la dictadura nació una nueva generación de obreros sin experiencia política independiente. Pero la revolución despierta —precisamente ésa es su fuerza— a las masas trabajadoras más atrasadas, más despreciadas, más oprimidas. Su despertar toma la forma de la huelga. Por medio de una huelga, las diferentes capas de las masas trabajadores se dan a conocer, se relacionan entre sí, experimentan sus propias fuerzas y las de su enemigo. Una capa despierta y contagia a la otra. La consecuencia de esto es que la huelga se hace absolutamente inevitable”.

En Euskal Herria las centrales sindicales abertzales ni habían previsto la huelga general, ni creyeron que fuese en serio cuando se convocó, sumándose al carro a última hora. A pesar de esa debilidad, la huelga general del 14-D en el País Vasco fue también un rotundo éxito, expresando las tendencias naturales a la unidad en el seno de la clase trabajadora.

LAS CONVERSACIONES DE ARGEL

En este contexto político se produce un acontecimiento novedoso: el Gobierno anuncia el inicio de conversaciones con ETA en Argel. La situación de debilidad del gobierno, enfrentado a un movimiento obrero en auge, le lleva a buscar una vía de pacificación para el conflicto vasco. Las dos delegaciones tendrán cinco encuentros: 28 de enero, 14 y 22 de febrero, 14 y 22 de marzo. El 23 de enero Egin reproduce un comunicado de ETA con nueve puntos acordados en Argel:

- 1.- La formación de una mesa de conversaciones políticas para analizar las diferentes cuestiones del conflicto.
- 2.- Un calendario de trabajo.
- 3.- Una agenda de los trabajos. ETA ha presentado ya un programa político.
- 4.- La designación de interlocutores y asesores.
- 5.- Argelia como sede de los encuentros.
- 6.- El Gobierno argelino como mediador y moderador.
- 7.- Información pública sobre la marcha y los resultados de las conversaciones.
- 8.- Creación de un período de distensión mutua. ETA declara una tregua hasta el 26 de marzo.
- 9.- La comunicación pública del resultado del encuentro.

Dichas conversaciones crean grandes expectativas en Euskal Herria. Para los dirigentes de la izquierda abertzale se trata de un encuentro histórico, sin precedentes en Occidente, entre una organización armada y un Gobierno. Con el co-

22. *Ibid.*, págs. 135-36.

mienzo de los contactos entre ETA y el Gobierno español, HB considera necesario dar un salto organizativo para hacer frente al escenario político que pueda surgir después de una posible solución política al contencioso. HB entra en un largo proceso de reorganización interna para abordar “La fase inmediatamente posterior al acuerdo entre ETA y los poderes fácticos, la fase que debe poner en práctica la institucionalización del nuevo marco político-jurídico surgido de la negociación política de la Alternativa KAS” (...) “debemos crecer tanto en el análisis como en la elaboración de alternativas y programas globales claros y de acuerdo a las medidas económicas que defendemos o que adoptaremos en el caso de disponer de suficiente poder político, dentro de la dinámica surgida en la negociación política como son medidas y planes de intervención para una progresiva y eficaz euskaldunización de todos los ámbitos de la sociedad vasca; modelo de escuela y de enseñanza que propugnaremos o todas las decisiones que pondremos en marcha en el campo social, económico o cultural”⁶⁷.

¿Qué nuevo marco político-jurídico podía salir de dicha negociación? ¿Qué decisiones se podrían poner en marcha en el campo social, económico y cultural sin un cambio revolucionario en la estructura del Estado burgués? ¿Acaso los dirigentes abertzales creen en la vía gradual hacia el socialismo a través de la negociación? El problema de cualquier reforma, sea para euskaldunizar todos los ámbitos de la sociedad vasca o para garantizar una sanidad, una educación gratuita o una vivienda digna, es que se necesita dinero pero este capital está en manos privadas.

La reorganización interna de HB no mira solamente el aspecto estructural sino también la formación de hombres y mujeres que han de estar preparados para ocupar puestos de responsabilidad en la futura “administración nacional vasca”. “Una administración honesta y eficaz no es el resultado de un trabajo a corto plazo. Cargos claves en la administración no dispuestos a dejarse sobornar por recompensas económicas o poltronas políticas y al mismo tiempo de altura profesional y de probada eficacia técnica, responsables técnicos dispuestos a enfrentarse contra la corrupción y el zanganeo tan generalizado en la administración actual, no surgen por arte de magia, no vamos a encontrarlos entre las típicas personas oportunistas que se nos acercan en la medida que nos vean con posibilidad de acceso a cotas de poder político”⁶⁸.

Los problemas que sufrimos la clase trabajadora, ¿son consecuencia de la mala gestión y la ineficacia o de la crisis orgánica del capitalismo, que aplica en todas partes la misma política de recortes sociales y privatizaciones? El discurso de la dirección de HB no suena nada nuevo. Es el razonamiento que se ha escuchado miles de veces en las filas de las direcciones reformistas de los partidos y sindicatos obreros. Palabras que reflejan que la dirección abertzale estaba muy lejos de entender que, bajo el capitalismo, las llamadas leyes del mercado obligan a los

23. *Ibid.*, pág. 143.

24. *Ibid.*, pág. 145.

distintos gobiernos, sean de derechas o de izquierdas, a hacer una determinada política en beneficio de la clase que detenta realmente el poder, esto es: la clase capitalista.

Hace mucho tiempo Lenin explicó en su libro *El Estado y la Revolución* que los gobiernos modernos, incluso en las más avanzadas de las repúblicas democráticas, sólo son los comités ejecutivos que velan por los intereses de la clase dominante en su conjunto. Como Lenin insistía, toda la superchería del parlamento, del sufragio universal y las elecciones, no puede ocultar que bajo el capitalismo el gobierno real de la sociedad está oculto tras los consejos de administración de los grandes consorcios imperialistas, de la gran banca, de los Estados mayores. Mientras los gobiernos formados tras las elecciones no cuestionen los intereses generales de los capitalistas y actúen de acuerdo a ellos todo ira bien. Pero en el caso de que un gobierno llegue a la conclusión de aplicar políticas que puedan cuestionar la fuente de ingresos, beneficios y privilegios de la clase dominante, ésta no tendrá la menor duda en arrojar al cubo de los desechos todas las instituciones de la “democracia” y gobernar mediante los métodos del golpe de Estado y la dictadura. Los ejemplos de esto en la historia son abundantes: Italia en 1923, Alemania en 1933, el Estado español en 1936, Indonesia en 1964, Chile en 1973, Argentina en 1976... La lista es interminable. Por eso no se puede transformar la sociedad mediante una “negociación”; por eso es necesario destruir toda la maquinaria del Estado burgués para crear uno nuevo, transitorio, basado en la democracia obrera para construir el socialismo.

Es imposible democratizar realmente la economía bajo el capitalismo, de la misma manera que es imposible gobernar en beneficio de los explotadores y de los explotados a la vez. Incluso ahora, en la Europa civilizada y avanzada, vemos cómo se desarrolla una furiosa ofensiva contra todas las conquistas sociales de la posguerra, creando en el viejo continente una situación más similar a la del capitalismo salvaje, que ha sido la norma en la historia de los últimos doscientos cincuenta años. Por no hablar de lo que ocurre en Latinoamérica, África o Asia.

La huelga general del 14-D demostró el potencial revolucionario del proletariado y la juventud y el camino real para poder cambiar las cosas, no sólo cambiar drásticamente las condiciones de vida de la población, también cómo resolver el problema nacional como parte de una lucha más amplia contra el capitalismo. Sin embargo, para la dirección de la izquierda abertzale, como quedó constatado en sus análisis durante las conversaciones de Argel, lo que realmente cuenta es el protagonismo de la organización armada y la formación de cuadros para “cargos claves en la administración” y “responsables técnicos” cuando logren “cotas de poder político” en la administración vasca.

El momento político elegido para las conversaciones obliga a hacerse la siguiente pregunta: ¿son las conversaciones de Argel una cortina de humo del Gobierno para desviar la atención de la huelga general del 14 de diciembre o hay una auténtica voluntad de negociación? Eugenio Etxebeste *Antxón*, interlocutor de ETA,

reconocerá una nula voluntad negociadora en el Gobierno. Lo único que había encima de la mesa era la reinserción de los presos a cambio del desarme. No hubo tal negociación pero la cortina de humo funcionó. El 22 de enero de 1987, pocas semanas después de los encuentros iniciados en Argel, el entonces ministro de Justicia Enrique Múgica, a petición del PNV⁶⁹, inaugura la política de dispersión de los presos. *El País* (10/5/1989) lo explicó así: “La dispersión de los presos de ETA, modificando la línea de concentración en Herrera de la Mancha y Alcalá-Meco seguida hasta la fecha reciente, parece lógica. La política de concentración, iniciada en 1983 fue decidida por motivos de seguridad (...) la dispersión geográfica de los presos de ETA destruye el condicionamiento material —la concentración y la organización— que facilitaba a la dirección de la banda su dominio sobre ellos, liberando, paralelamente, las tendencias de sectores del radicalismo abertzale a plantear en términos diferentes la cuestión de la reinserción”. Xabier Arzalluz, el 16 de agosto de 1989, defendió que la dispersión “no viola los derechos humanos del preso, ni siquiera a la luz del derecho comparado”⁷⁰.

En las elecciones del 29 de octubre HB logra cuatro representantes para el Parlamento español y decide participar de forma puntual en la sesión constitutiva del Parlamento, en la que denomina la “legislatura de la negociación” para ser la voz del “pueblo trabajador vasco”. El 20 de noviembre de 1989 los diputados de HB serán tiroteados en Madrid, cayendo asesinado Josu Muguruza y herido grave Iñaki Esnaola. Aunque las pesquisas policiales apuntan a sectores de la extrema derecha, las sospechas recaen directamente en el propio aparato del Estado, el ejército y la Guardia Civil.

La participación en el Parlamento español era absolutamente necesaria para ganar el apoyo de la clase trabajadora de todo el Estado, siendo, efectivamente, la voz del pueblo trabajador vasco para combatir la propaganda reaccionaria de la derecha. En esas circunstancias, la palabra en lugar de las bombas hubiese sido infinitamente más temible para la clase dominante, poniendo en evidencia la dictadura del capital y el carácter reaccionario de un Estado sin depurar desde la dictadura. Que dicha participación hacía daño al ala más reaccionaria del aparato estatal lo demostró este atentado contra los diputados de HB pero la dirección de la izquierda abertzale no supo o no quiso extraer las lecciones oportunas.

Caer en el cretinismo parlamentario, esto es, creer que se podían cambiar las cosas a través de la participación en el parlamento español hubiese sido una ingenuidad pero negarse a participar y dirigirse a la clase trabajadora de todo el Estado en una época en la que era imprescindible una política de acumulación de fuerzas, era un error imperdonable. Como explicó Lenin en su libro *La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo*, la única circunstancia en que es permisible el boicot al parlamento y a las elecciones parlamentarias es cuando el movimiento revolucionario está en condiciones de sustituir el sistema parlamentario burgués por una estructura de poder obrero y popular como fueron los sóviets de diputados obreros y campesinos en el momento álgido de la Revolución Rusa.

Boicotear el parlamento y las elecciones cuando no se está en condiciones de ofrecer una alternativa mejor, equivale a boicotarse a uno mismo.

El 12 de diciembre de 1989 el Parlamento autónomo catalán aprueba una Proposición no de Ley en la que se afirma que el pueblo catalán no renuncia al derecho de autodeterminación. La repercusión en Euskadi es inmediata y el PNV promueve una iniciativa análoga que es apoyada por EE, EA y HB, aunque no todos piensan lo mismo sobre la autodeterminación. Para Egibar, portavoz del PNV: “A esta Unión Europea, Euskadi podría llegar por dos caminos: el primero convirtiéndose en un Estado independiente sobre la base de la reunificación de los territorios vascos, actualmente dependientes de los Estados francés y español. Seguidamente se cedería la soberanía en el mismo grado y ritmo que los otros 12 Estados que forman la Comunidad Europea. El segundo obteniendo, mediante un desarrollo del Estatuto de autonomía, todos los poderes menos la moneda, defensa, fronteras, etc., que un día serán competencia de los futuros Estados Unidos de Europa. La opción es de política práctica. El ideal sería el primero si fuera posible. El segundo es más realista respecto al futuro de una Europa democrática, mediante el ejercicio del derecho de autodeterminación” (*El Mundo*, 17/12/1989). Egibar puede permitirse hacer este discurso para satisfacer los oídos de la izquierda abertzale e intentar pescar sus votos. La cuestión es, ¿de qué manera Egibar y la dirección del PNV piensan arrancar a la burguesía y al ejército español y francés la independencia de Euskal Herria, cuando ni siquiera están dispuestos a conceder el derecho de autodeterminación? ¿Cómo convencerían a la burguesía europea de que aceptasen el nuevo Estado vasco en el marco de la UE, cuando no reconocen ni el euskera como lengua minoritaria? ¿Cómo lograría un desarrollo del Estatuto de autonomía con todos los poderes menos moneda defensa y fronteras, cuando ni siquiera se cumple el Estatuto de Gernika? ¿Y a esto le llaman ser realistas y hacer política práctica? Es curioso que cuando algún trabajador hace preguntas semejantes se le responde que eso es “alta política”. Sólo para entendidos.

La reacción de los estamentos del Estado a este debate fue contundente. El 6 de enero de 1990 el rey recuerda que la misión del ejército español consiste “en garantizar la soberanía y la independencia de España, la defensa de su integridad y el orden constitucional”. Intervienen además los capitanes generales de Cataluña, Galicia y Burgos, para quienes la integridad de España debe ser defendida con la vida. El general Manuel Fernández Monzón, escribe en *El Mundo* (7/9/1991): “Toda la filosofía política reconoce al Estado, como atributo indispensable y primario para ser reconocido como tal, la fuerza. Fuerza que se concreta precisamente en la existencia de los ejércitos y fuerzas de seguridad (...) Remitir la garantía de la unidad nacional al ejercicio de la voluntad popular es como remitir esta unidad —en nuestra Constitución, indisoluble e indivisible— a la incertidumbre plebiscitaria permanente, al estilo de las primeras etapas inmediatamente posteriores a la explosión de la Revolución Francesa. Impensable (...) Adoptar actitudes pasivas suicidas que podrían conducir a la disgregación nacional, podrían consti-

tuir un 'supuesto inconstitucional máximo' que sólo Dios sabe, con la Constitución en la mano, a qué respuestas podría y debería llevar". Es evidente que con estas declaraciones el generalato avisa de que la autodeterminación equivaldría a una declaración de guerra.

Por si existiese alguna duda acerca del doble lenguaje del PNV y la sumisión de la burguesía vasca a los poderes fácticos del Estado, tras estas declaraciones se firma un acuerdo sobre el despliegue de la Ertzaintza en la Comunidad Autónoma Vasca que promueve la permanencia de oficiales de las FSE y del ejército español en la dirección del cuerpo autónomo de la policía vasca. La posibilidad de participar en las pruebas de admisión en la Ertzaintza por parte de los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil es criticada duramente por la izquierda abertzale: "Después de diez años de Estatuto-Amejoramiento, no solamente no se ha conseguido 'que se vayan' sino que por el contrario, el despliegue está estrechamente ligado a una progresiva inducción, introducción y adaptación a métodos, formas y acción represiva, orientados a convertirla en una mera policía de complemento de la Policía Nacional y de la Guardia Civil" (*Egin*, 19/5/1990).

En definitiva, la policía vasca se convierte en una guardia pretoriana del PNV para defender los intereses de clase de la burguesía vasca. Bajo el mando de los consejeros del PNV, los *beltzas* (los *negros*, en alusión al pasamontañas que les cubre el rostro) serán reconocidos por la dureza de sus intervenciones represivas en las luchas obreras y manifestaciones en defensa de los derechos democráticos de Euskal Herria.

En octubre de 1990 se celebran nuevas elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca. El Gobierno tripartito (PNV-EA-EE) apenas durará 222 días antes de ser disuelto por iniciativa del PNV en medio de duras acusaciones contra EA por haber apoyado, por iniciativa propia o con HB, mociones a favor de la independencia de Euskal Herria. En pocos días se forma un nuevo Gobierno del PNV con el PSOE y Euskadiko Ezkerra, organización que acabará incorporándose, con Mario Onaindía al frente, en el PSE-PSOE.

LOS EFECTOS DE LA DESINTEGRACIÓN DEL ESTE EUROPEO

El estalinismo fue una reacción burocrática contra el joven Estado obrero soviético nacido al calor de la revolución de octubre de 1917. Aunque no es éste el lugar para analizar el fenómeno histórico del estalinismo y su naturaleza política, sí nos vemos en la obligación de subrayar el vínculo orgánico entre estalinismo y chovinismo. Bajo el dominio de la burocracia estalinista en la URSS toda la política de opresión nacional gran rusa volvió a resurgir con fuerza. Así que cuando estalla la crisis en la URSS, ante la ausencia de un papel independiente por parte del proletariado, la contrarrevolución adopta la forma de tendencias nacionalistas pro capitalistas por parte de las diferentes secciones nacionales de la burocracia. La buro-

cracia estalinista de las repúblicas integradas en la URSS alimenta un proceso de secesión, con el objetivo de mantener sus privilegios frente a la burocracia de Moscú. Para lograrlo se apoyan en el descontento de las masas de estas repúblicas, descontento que encauzan a través de la agitación independentista.⁷¹

De la noche a la mañana se proclaman múltiples Estados independientes: Lituania, Letonia, Estonia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación Rusa, Kazajstán, Kirguizistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Chechenia...

Esta explosión de Estados nacionales independientes fue recibida en el País Vasco con euforia por quienes creían ver algo positivo en este nuevo auge de los nacionalismos en Europa del Este de cara a la independencia de Euskal Herria. En realidad el desmembramiento de la URSS, de Yugoslavia, de Checoslovaquia... es apoyada por el imperialismo americano y alemán para desmontar los regímenes de economía planificada y atraerlos a las órbitas del poder capitalista en Occidente. No hay un átomo de contenido progresista en una desintegración que desgarrará el cuerpo vivo de naciones enteras y de pueblos que han logrado un nivel de integración y convivencia notable. El derecho de autodeterminación fue agitado con fuerza por los imperialistas de occidente para hacerse con áreas de influencia política y económica, que en la práctica han transformado en sus modernas colonias bajo el paraguas de la OTAN. Algunos de estos procesos, además, se han visto coronados por guerras fratricidas que han provocado la muerte de miles de personas inocentes, la destrucción de infraestructuras y ciudades sembrando el odio nacional para décadas entre los sectores más humildes de la población. En el caso de Yugoslavia, la intervención del imperialismo alemán, que el 16 de diciembre de 1991 impuso a la Unión Europea el reconocimiento de la independencia de Croacia y Eslovenia, desencadenó una sangrienta guerra en los Balcanes, la limpieza étnica y el asesinato en masa. La desmembración de la Federación Yugoslava fue un hecho reaccionario y un acto criminal contra la clase trabajadora y los pueblos que la integraban que provocó, tras cuatro años de guerra, 250.000 muertos, dos millones de refugiados y la destrucción de las estructuras económicas de la región. Las ilusiones en la independencia de estos nuevos países pusieron su grano de arena en distorsionar aún más las posibles "soluciones" al problema nacional vasco.

En 1992 el Gobierno tenía sobre su cabeza la espada de Damocles de la seguridad en eventos de alta proyección internacional como la Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona y la celebración del V Centenario de la conquista de América. El aparato del Estado se movilizó en pleno: 3.500 soldados fueron destinados a vigilar las líneas de ferrocarril, los edificios públicos y las zonas estratégicas de las grandes ciudades; además, 15.000 miembros de las fuerzas del orden se encargan de que no se cometan atentados en dichos eventos. La colaboración francesa e internacional estaba asegurada. El parlamento aprueba la Ley orgánica del 21 de febrero sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que añade nuevos poderes a las Fuerzas de Seguridad del Estado para restringir la libre circulación de los ciudadanos y los derechos a la inviolabilidad del domicilio y manifestación.

La incapacidad del Gobierno del PSOE para solucionar la cuestión del terrorismo individual es tan evidente como la incapacidad de ETA para forzar una negociación por más atentados que haga. El 2 de julio *Egin* abrirá su portada con una nueva oferta de tregua de ETA en estos términos: “Los gestores del Estado español han apostado fuerte sobre el 92, como si para estos tecnócratas la historia se concluyera el 31 de diciembre de este año... ETA está dispuesta a mostrar su voluntad política en un período de distensión de dos meses de duración. Paralelamente se daría comienzo a una fase de contactos oficiales”... Los contactos se mantendrán por parte del Gobierno del PSOE con la intención de “tomar el pulso a la banda” pero en ningún caso con intenciones de hacer prosperar una auténtica negociación política que el Gobierno, con los poderes fácticos detrás, no se podía permitir.

La situación económica, como consecuencia de una política presupuestaria de ataque a los gastos sociales llevada a cabo con el pretexto del cumplimiento de los acuerdos de Maastricht, elevan nuevamente la tensión social al límite. El 28 de mayo de 1992 CC.OO. y UGT convocan una huelga general de 4 horas en todo el Estado, mientras que en Euskadi, ELA y LAB plantean no secundarla, convocando a su vez una huelga general de 24 horas la víspera. Esta convocatoria cristaliza la división del movimiento sindical en Euskal Herria. ELA y LAB crecerán en años sucesivos resaltando los retrocesos que experimenta la clase trabajadora vasca por la política de moderación y pactos sociales con la patronal a escala estatal impulsada por las cúpulas de CC.OO. y UGT.

LA CRISIS AZOTA EUSKAL HERRIA

Las veinte principales empresas del País Vasco en la década que va de 1982 a 1992 han reducido a la mitad sus plantillas. El vicelehendakari para asuntos económicos, Ion Azúa, llegó a afirmar que “la mejor política industrial es la que no existe”, pero las familias obreras no podían pensar lo mismo cuando el paro afectaba a 201.000 personas, un 23,5%, tasa superior a la del resto del Estado y el doble que la media europea.

En los presupuestos aprobados en 1993 por el Gobierno vasco se produce una disminución acusada de los gastos sanitarios y las partidas dedicadas a investigación, transporte, obras públicas, cultura, vivienda... Mientras, los altos cargos de la administración vasca cobraban en conjunto más de 2.000 millones de pesetas, convirtiendo a la comunidad autónoma en líder en puestos de confianza en la Administración. Asimismo, el presupuesto de la Ertzaintza supera los 40.000 millones de pesetas anuales; los impuestos indirectos que gravan a las rentas más bajas suben del 33,9% en 1991 al 38,1% en 1993. Por si esto fuese insuficiente, el PNV propone unas vacaciones fiscales para los empresarios que supondrá para la hacienda vasca ingresar en 1994 10.000 millones de pesetas menos que en 1993. Mientras la política del PSOE consiste en apoyar al PNV, la de la izquierda

abertzale se orienta a pedir al PNV que rompa con el PSOE para formar un frente nacional vasco. ¿Qué ofrecía a la clase trabajadora la derecha vasca?

En 1993 se habían perdido 24.500 empleos directos en Euskadi y en 1994 se preveía la pérdida de otros 40.000. Sin embargo, la economía capitalista supera todo tipo de fronteras nacionales. En Euskadi con subvenciones del Gobierno Vasco las multinacionales van copando poco a poco el grueso del empleo. La industria vasca a su vez se internacionaliza invirtiendo en otros países, como ocurre en el caso del Grupo Mondragón. Empresas como Gamesa, vinculada al PNV y EA, permiten que trabajadores de su grupo vayan al paro a la vez que aumentan sus inversiones en Latinoamérica atraídas por los bajos salarios. Fagor y Tavex se van a Marruecos, Duñaiturria y Estancona liquidan la empresa en Vizcaya y se van a Sevilla por las ayudas que concede la Junta de Andalucía.

Para los trabajadores se hace necesario unificar derechos en el nivel más amplio posible porque la patronal busca dividir, fragmentar, debilitar el movimiento obrero y romper la negociación colectiva y toda la legislación de carácter laboral. El modelo de convenio ideal para la patronal es el que no existe; la mejor legislación laboral, la que le permita establecer relaciones directamente con cada trabajador sin sindicatos, sin leyes, sin convenios y con la mínima regulación. Su modelo es el que impera en la economía norteamericana. Ante esta ofensiva general de la patronal, la alternativa pasa por unificar la lucha y la más amplia organización de los trabajadores por encima de fronteras nacionales. La extrema fragmentación sindical del movimiento obrero vasco es una tragedia y no una ventaja. Los acuerdos políticos y los frentes de la izquierda con la burguesía vasca también.

CiU, que apoya al Gobierno del PSOE, presiona para que éste lleve a cabo una reforma laboral lesiva para los intereses de los trabajadores. El Gobierno del PSOE implantará el contrato de aprendizaje, un “contrato basura”, como será definido por los sindicatos de clase, además del recorte de las pensiones, de los subsidios de desempleo y la congelación salarial a los funcionarios. Todo este paquete de contrarreformas motiva la convocatoria de una nueva huelga general el 27 de enero de 1994. Pero una vez más, los dirigentes de UGT y CC.OO. no dan continuidad a la lucha, lo que genera un ambiente de frustración entre los trabajadores, que ven al Gobierno y la patronal salirse con la suya a pesar de la fuerza demostrada en la calle. El ambiente crítico hacia los dirigentes sindicales en el seno de las fábricas se hace nuevamente cada vez más patente. En Euskal Herria este ambiente acentúa las tendencias centrífugas entre la clase trabajadora y particularmente entre la juventud. La idea de separar a la clase obrera vasca de la del resto del Estado, idea que no tiene nada de progresista, cobrará fuerza al calor de la política de pactos y acuerdos con la patronal y el gobierno que las direcciones de CC.OO. y UGT profundizan aún más a partir de 1994.

El 19 de febrero una manifestación con decenas de miles de trabajadores marcharán sobre Bilbao convocados por ELA-STV y LAB a favor de un marco autónomo de relaciones laborales. La experiencia del movimiento obrero demuestra que

cuanto más atomizada esté la legislación y mayores diferencias haya entre la clase trabajadora más ventajas obtiene la patronal que amenaza con irse donde haya salarios más bajos, mayor jornada y menos obligaciones. No en vano la reivindicación del marco autónomo de relaciones laborales la promovía igualmente el ala de derechas de la UGT.

Las reivindicaciones de la convocatoria giran en torno a que el Gobierno vasco pueda tener competencias en materias como empleo, recuperación económica, protección social, formación profesional, normas laborales, etc. Estas competencias implicarían, según los convocantes, que en Euskadi se pudiese hacer una política en materia laboral favorable a los trabajadores.

Que el movimiento obrero vasco esté al frente en la lucha por la más amplia autonomía y el derecho de autodeterminación es necesario y enormemente positivo pero dichas reivindicaciones deben ir acompañadas de una política de independencia de clase, esto es luchar en primer lugar contra la burguesía vasca. No se debe permitir que el PNV se frote las manos utilizando las competencias logradas por el movimiento obrero y popular para liderar un ataque frontal a la sanidad pública y a la educación pública vascas en beneficio del sector privado, para dar migajas en el problema de la vivienda y gastar los impuestos que pagamos la clase trabajadora en subvenciones a una patronal que ni siquiera se compromete a mantener el empleo y las condiciones de trabajo. La precariedad laboral que reina en la administración vasca es igualmente inadmisibile. El programa de la burguesía vasca y el de la española es el mismo por lo que resistir la ofensiva patronal exige unir férreamente a la clase trabajadora por encima de diferencias nacionales para luchar.

MÁS POLARIZACIÓN

El 23 de octubre de 1994 se celebran nuevas elecciones al Parlamento Vasco. En una situación de desgaste de los Gobiernos del PSOE en Madrid y del PNV en Vitoria, el Partido Popular experimenta un avance notable, convirtiéndose en la primera fuerza en San Sebastián y la segunda en Bilbao. En Vitoria Unidad Alavesa, una fuerza reaccionaria cercana al PP, obtiene 4.000 votos más que el PNV con un programa antinacionalista visceral en el que propone fragmentar aún más Euskal Herria. Un sector de la clase obrera busca una alternativa a la izquierda del PSOE, como se ve en el ascenso de IU, que logrará 93.000 votos y 6 escaños cuando anteriormente carecía de representación en el parlamento vasco. El PSOE pierde 30.000 votos respecto a las anteriores elecciones autonómicas de 1990 y la izquierda abertzale retrocede electoralmente como consecuencia del desencanto

25. Trotsky, *Lección de España: última advertencia*, en *España* 36-39, Madrid, Akal Ed., 1977, págs. 127-148.

que su base social acusa con los métodos del terrorismo individual.

A principios de 1995 se está produciendo un fuerte debate en la izquierda abertzale. La ponencia oficial *Oldartzen*, que representa al sector más duro, logra un 71% de apoyo frente a la ponencia crítica *Iratzar*, defendida por el comité de Rentería.

La táctica del palo y la zanahoria, de “aislamiento” hacia HB propugnada por los partidos del Pacto de Ajuria Enea, la represión policial, los GAL, el intento de dividir al colectivo de presos políticos vascos mediante la dispersión, junto con promesas de reinserción individual, han resultado un fracaso. Los mayores éxitos policiales que el gobierno de Felipe González pudo imaginar en la lucha contra ETA, que les permite detener en colaboración con el Gobierno francés y de la Ertzaintza al grueso de la dirección de ETA e incautar buena parte de su infraestructura logística, económica y militar, se encuentran de frente con el peor de los mundos posibles: la cantera de ETA que se incrementa con una juventud sin futuro en los barrios y pueblos de una Euskal Herria industrialmente desertizada y con un 23% de desempleo, el 50% del cual se da entre la juventud. Esta dinámica favorece la entrada en la dirección de ETA de una remesa de jóvenes activistas capaces de acciones desesperadas e indiscriminadas propias de auténticos kamikazes.

Por otra parte, la polarización se acentúa con la creación de movimientos como Gesto por la Paz, Bakea Orain, etc., que buscan el aislamiento de HB y la aparición desde las filas de la propia izquierda abertzale de un colectivo como Elkarrri, que busca el diálogo entre las partes y que irá distanciándose de sus orígenes para caer en la órbita del PNV-EA. Estos movimientos pretendidamente pacifistas caerán atrapados en las redes del conflicto por la derecha española o vasca, representando un obstáculo más que una ayuda en la resolución del mismo.

El indulto a los guardia civiles Manuel Barroso y José Domínguez, condenados por torturas en sentencia firme, y la represión de la Policía Nacional en el aeropuerto de Hondarribia y de la Ertzaintza en el cementerio de Tolosa contra los familiares de Lasa y Zabala y contra quienes habían acudido al homenaje y entierro de sus restos, fueron acontecimientos dignos de los tiempos más brutales de la dictadura.

La nueva ofensiva de ETA haciendo explotar una bomba el 11 de diciembre en el barrio obrero de Vallecas (Madrid), con un saldo de 6 trabajadores muertos y 17 heridos, y posteriormente en Valencia, el día 16, con una trabajadora muerta y 9 personas heridas, alimenta la indignación contra este tipo de métodos. En el barrio obrero de Madrid se responde al atentado con una manifestación de más de 100.000 personas que desborda, literalmente, a los organizadores. Las masas han decidido intervenir en la calle para parar a ETA. Manifestaciones importantes se desarrollan en Valencia, Aragón y otras zonas del Estado. Los dirigentes del PSOE se lamentan de la escalada de ETA, de la violencia callejera y del apoyo social en

26. Arenillas, J. L., *op. cit.*, pág. 47.

el País Vasco a Herri Batasuna pero parecen olvidar que ellos están al frente del gobierno y, por lo tanto, son los máximos responsables de lo que está ocurriendo.

Los GAL, UNA TRAMA DE TERRORISMO DE ESTADO

En una cena homenaje a Barrionuevo celebrada en Madrid con la asistencia de más de 700 personas fueron muchas las voces que clamaron en defensa del “derecho a la vida”. A dicho acto se invitó a individuos implicados en los GAL y en la utilización fraudulenta de los fondos reservados, como Rafael Vera; en casos de asesinatos y torturas, como el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo; junto a una nutrida representación de destacados guerristas y renovadores del PSOE que dieron unánimemente su apoyo a la gestión del ex ministro Barrionuevo entre los años 1982 y 1988. Esta hipocresía, lejos de restar apoyo a ETA en Euskal Herria, reafirmaba entre un sector de la población los métodos de la “lucha armada” frente al terrorismo de Estado. ¿Qué autoridad moral tienen para hablar sobre el derecho a la vida aquellos que han diseñado la guerra sucia, que tienen las manos manchadas con la sangre de los torturados, aquellos que justifican la dictadura franquista o las intervenciones militares del imperialismo norteamericano?

Esta demagogia repugnante sobre el derecho a la vida oculta la auténtica naturaleza criminal de la sociedad capitalista y la clase que la dirige. La misma que permite la muerte diaria de 50.000 niños por hambre y enfermedades curables, la misma que ampara el genocidio de millones de personas en el continente africano en guerras organizadas por las potencias imperialistas en su lucha por el control de las materias primas. La misma que organiza las intervenciones imperialistas provocando la muerte de decenas de miles de hombres, mujeres y niños, sacrificados por la avaricia de un puñado de grandes consorcios económicos y por la ambición de individuos sin moral y sin escrúpulos. La misma que justifica el criminal asedio contra el pueblo palestino, que ha justificado dictaduras sangrientas en Chile, Argentina, etc.

En el Estado español, los responsables políticos no dejan de hablar de terrorismo pero ocultan que entre 1981 y 1992 murieron 11.852 trabajadores por accidentes laborales, víctimas del capital, sin cara y sin nombre, que al parecer no merecen ninguna atención. Un terrorismo patronal, legalizado y amparado por las leyes del mercado que provoca todos los años el asesinato de miles de trabajadores, en una guerra de clases unilateral, para mayor beneficio de un pequeño puñado de empresarios. Multiplíquense estas cifras a escala mundial y se podrá apreciar el auténtico carácter terrorista de la sociedad de clases capitalista.

Las confesiones de Amedo y Domínguez sobre el caso GAL se confirmaron con

la “recuperación de la memoria” de personajes con más responsabilidad policial y política como Julián Sancristóbal, ex gobernador civil de Vizcaya y ex director de la Seguridad del Estado, Francisco Álvarez, ex jefe superior de Policía de Bilbao o el ex secretario general del PSOE de Vizcaya, Ricardo García Damborenea, que apuntaron al ex ministro de Interior José Barrionuevo, al ex secretario de organización del PSOE Txiki Benegas, al ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra y al secretario general del PSOE Felipe González como instigadores de los GAL.

En aquel momento, los trabajadores y los jóvenes de la corriente marxista de *El Militante* defendimos consecuentemente una política de clase contra el terrorismo de Estado y la guerra sucia. Planteamos la creación de una comisión de investigación y lucha integrada por representantes de los sindicatos y partidos obreros opuestos a la política del Gobierno y de la dirección del PSOE sobre este asunto con el fin de:

- 1.- Investigar todas las tramas que se ocultaban detrás del caso GAL.
- 2.- Investigar a fondo las relaciones entre el caso GAL y la corrupción relacionada con el caso Roldán y la utilización de fondos reservados.
- 3.- Elaborar una plataforma en defensa de los derechos democráticos que exija al menos los siguientes puntos:
 - Abolición de los fondos reservados. Todo el dinero público debe gastarse de manera transparente.
 - Abolición de todas las prácticas de diplomacia secreta.
 - Derogación de la *Ley Corcuera*.
 - Disolución de la Guardia Civil y su integración en un único cuerpo civil de policía con plenos derechos políticos y sindicales para sus miembros. Depuración inmediata de todos los elementos comprometidos con prácticas de corrupción, represión o guerra sucia en la policía y el ejército.
 - Juicio y castigo ejemplar para cualquier cargo político implicado en la guerra sucia. Expulsión inmediata de estos individuos de cualquier organización obrera si militase en la misma.
 - Control obrero de las academias de policía y del ejército para garantizar una formación democrática a los futuros integrantes de estas fuerzas.
 - Democratización interna del ejército: derechos políticos y de sindicación plenos para los soldados.

Esta Comisión de las organizaciones obreras debería de llevar la lucha por estas reivindicaciones a la calle, a la vez que explicar lo sucedido a la clase trabajadora y la juventud a través de la organización de mítines, asambleas, manifestaciones...

La implicación de la dirección del PSOE en la guerra sucia tuvo también otras consecuencias. Como muchas otras veces ha ocurrido en la historia, los dirigentes socialdemócratas, después de hacer el trabajo sucio de la burguesía en las cloacas del Estado, reciben el desprecio de la clase dominante hasta que finalmente

27. Trotsky, *Lección de España: última advertencia*, en *España* 36-39, pág. 139.

28. Lorenzo Espinosa, J. M., *op. cit.*, pág. 261.

son arrojados al cubo como un papel arrugado.

Felipe González, que creía haber hecho “tanto por España”, no comprendió que pudiera merecer por parte de la burguesía española el mismo trato vejatorio que un pañuelo de usar y tirar. “Váyase señor González”, le espetó Aznar hasta la saciedad.

A un sector de la burguesía le debió doler desperdiciar tanto talento y le reservó una tarea más: vender en América Latina las bondades de la Transición española, tratar de que las masas oprimidas respeten a los torturadores argentinos, chilenos, etc., como se ha respetado a los torturadores de la época de Franco, y educar a cuanto dirigente de la izquierda se precie en la política de la colaboración de clases para descarrilar los procesos revolucionarios del continente.

Los crímenes del GAL permanecieron impunes, amparados en la complicidad del aparato del Estado, del PSOE y del PP. En agosto de 1995 fue ascendido a general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, jefe del cuartel de Intxaurren (San Sebastián), implicado en múltiples casos de torturas y asesinatos como los de Zabalza, Lasa y Zabala y expresamente citado en las denuncias sobre el caso GAL. Era un nuevo acto de cobardía por parte del Gobierno del PSOE en forma de vergonzosa concesión a los poderes fácticos. En la campaña para las elecciones generales de 1996 la reacción de ETA no se hace esperar: asesinan al histórico dirigente del PSOE Fernando Múgica, en una nueva y nefasta estrategia que incluye atentar contra líderes y militantes del PSOE.

Una vez más, los métodos utilizados por ETA empañaban la comprensión del conjunto de la clase obrera sobre la necesidad de defender los derechos democráticos de Euskal Herria. Con estos atentados, la reacción de derechas y la cúpula del PSOE podían justificar la guerra sucia como la única forma de acabar con la “locura terrorista”. Los derechos democráticos en Euskal Herria y en todo el Estado se verán seriamente afectados en el futuro por esta política miope por parte de ETA, carente de cualquier perspectiva y visión de futuro. La negra cosecha de esta siembra la recogerá el PP durante los ocho años de pesadilla que supusieron los gobiernos de Aznar.

29. Cazorla Sánchez, A., *Las políticas de la victoria. La consolidación del Nuevo Estado franquista 1938-1953*, Madrid, Ediciones de Historia, 2000, pág. 70.

VI. La política reaccionaria del Partido Popular

LA DERECHA LLEGA AL GOBIERNO

En las elecciones generales del 3 de marzo de 1996 el PP obtiene una victoria exigua, alzándose con 156 diputados, un 38,85% del electorado y apenas 340.000 votos más que el PSOE, que obtiene 141 escaños y 9.318.510 votos, un 37,48%.

La clase obrera demostró su actitud decidida de cerrar el paso al PP a pesar de la política derechista de los Gobiernos de Felipe González, política que fue contestada con tres huelgas generales. La precaria mayoría del PP les llevará, una vez más, a buscar la colaboración de los nacionalistas burgueses y no tardará en encontrarla. Los diputados de CiU, del PNV y Coalición Canaria sostendrán en el Parlamento al gobierno de Aznar, dando una cobertura decisiva para que el PP pueda llevar adelante sus leyes y ataques a los trabajadores. Aznar se guarda sus insultos de “Pujol, enano, aprende castellano”, mientras que Arzalluz afirma que con el PP será mucho más fácil negociar.

En Galicia, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) logra por primera vez representación en el Parlamento estatal. El periódico nacionalista *A Nosa Terra* (7/3/1996) valora: “El BNG ha sido percibido por el electorado como el representante gallego, a imagen de CiU y PNV en las otras naciones periféricas”. A pesar de que la inmensa mayoría de votantes y militantes del BNG son gentes de izquierdas, sobre todo tras la caída del estalinismo la dirección abrió el partido a políticos de derechas, como Carlos Mella (ex PP) o Rodríguez Peña (ex UCD), potenciando la idea nacionalista de que los problemas de los trabajadores gallegos se derivan de la falta de soberanía o de la ausencia de “una voz propia” en Europa, y no de la crisis del capitalismo. “No es difícil en estos momentos poder aunar en una acción política los más diversos intereses sociales y mucho menos los inherentes a Galicia como nación” (*Ibíd.*). Sin embargo, también la nación gallega está dividida en clases sociales con intereses antagónicos. Como en Euskal Herria y Catalunya, el nacionalismo gallego

30. Val del Olmo, A., *3 de Marzo, una lucha inacabada*, Madrid, Fundación Federico Engels, 2004, pág. 116.

se fortaleció como expresión de rechazo a la política reformista de los dirigentes del PSOE y de IU pero la deriva hacia la derecha de los dirigentes del BNG provocará retrocesos electorales y un creciente descontento en su militancia y en su base social.

En Euskadi, las elecciones del 3 de marzo también siguen marcadas por la cuestión nacional. ETA presenta la *Alternativa Democrática*, donde propone dos marcos de negociación diferentes: el primero entre ETA y el Estado español en el que éste debería reconocer a Euskal Herria el derecho de autodeterminación y la unidad territorial, con una amnistía general previa y respeto del resultado por parte del Estado y el segundo, donde se dejaría a los “ciudadanos vascos” la decisión del desarrollo concreto del derecho de autodeterminación y de la unidad territorial, competencias, modelo socioeconómico, plazos, etc. La respuesta del Gobierno por medio del Tribunal Supremo no se hace esperar: 23 miembros de la Mesa Nacional de HB son detenidos y encarcelados por mostrar el vídeo con dicha *Alternativa Democrática* en sus espacios gratuitos durante la campaña electoral. Como respuesta a este nuevo acto represivo del Gobierno y el Estado, la izquierda abertzale convoca el 7 de marzo una huelga general pero el seguimiento de ésta, que afecta principalmente al comercio y la enseñanza, es apenas simbólico en la industria. Tras abonar en conjunto una fianza de casi treinta millones de pesetas, los 23 dirigentes serán puestos en libertad semanas después con una petición por parte del fiscal de ocho años de cárcel para cada uno de ellos.

ETA VUELVE A LA ESCENA, LA REPRESIÓN AUMENTA

La detención de la cúpula de HB es sólo el principio de la política represiva que tiene diseñada la burguesía española. Se aprueban planes para contratar 10.000 guardias civiles para añadir a los 70.000 que ya hay. Se proponen nuevas reformas del Código Penal para incluir entre los delitos de terrorismo “los cometidos por quienes, sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública” cometieren una serie de actos violentos. Con este criterio los asesinatos y otros delitos perpetrados por los GAL no son clasificados como actos de terrorismo por estimar que, para ser considerados actos terroristas, su finalidad debía concretarse en la alteración del orden constitucional y no en “defender la estabilidad del sistema”, aunque fuera “por medios jurídicamente repudiables” (*El País*, 19/5/1996).

La juventud está en el punto de mira del PP. El Anteproyecto de Ley de Justicia Juvenil establece penas de hasta dos años de internamiento para menores de 14 años y cinco años de reclusión para los jóvenes de 16 y 17 años y hace responsables a los familiares de los daños que hayan podido causar. Por su parte Atutxa, consejero vasco de Interior, prepara la Ley de Videovigilancia, que finalmente se aprobará el 6 de agosto de 1997. En Euskadi se llevó a cabo un despliegue po-

licial de 7.260 ertzainas, que unido a los 7.000 guardias civiles y policías nacionales y a los 2.400 policías locales, la convierten en la zona de mayor concentración policial de Europa. Los gastos policiales son exorbitantes. Sólo para la policía vasca se ha pasado de un presupuesto de 18.012 millones de pesetas en el año 1988 a 61.839 millones diez años después.

La espiral acción-represión-acción se ha acelerado desde la llegada al Gobierno del PP pero lo que va a dar un giro inesperado a los acontecimientos es la irrupción masiva de la población en las manifestaciones contra ETA, proceso que ya se ha iniciado bajo el último mandato del PSOE.

El 1 de julio de 1997 la Guardia Civil libera al funcionario de prisiones y militante del PP, José Antonio Ortega Lara, tras 532 días de secuestro a manos de ETA. Las imágenes de este funcionario esquelético que parece salido de un campo de concentración provocan un tremendo impacto. Diez días después de que estas imágenes se reproduzcan constantemente en los medios de comunicación de todo el país es secuestrado el concejal del PP de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, de 29 años, hijo de un albañil. La amenaza de proceder a su ejecución si el Gobierno no pone fin a la política de dispersión de los presos provoca una movilización masiva en todo el Estado. Finalmente su ejecución de un tiro en la cabeza por ETA dos días después, a pesar de las gigantescas manifestaciones que se produjeron para pedir su liberación, provoca una auténtica explosión social: 1.500 manifestaciones, en su mayor parte espontáneas y masivas, se desarrollan en todo el Estado con una participación de cerca de seis millones de personas. Los gritos de “ETA, escucha, así es como se lucha” y “vascos sí, ETA no” y la expulsión de elementos fascistas que pedían la pena de muerte dando vivas a Franco, reflejan que amplios sectores de las masas que participan en estas demostraciones no persiguen fines reaccionarios como el recorte de la libertad de expresión y manifestación. Exigen a ETA el fin de los atentados.

Que millones de personas se lanzasen a la calle demostraba el fracaso rotundo de la política de la burguesía, del PP, PNV, CiU, CC y de los dirigentes del PSOE, incapaces de haber solucionado el problema. Afirmar que las multitudinarias manifestaciones fueron consecuencia de la manipulación de la prensa, como hicieron los dirigentes de HB, es realmente comprender poco de lo que estaba ocurriendo. Las movilizaciones de julio probablemente actuaron como válvula de escape de un descontento profundo en la sociedad, principalmente entre la clase trabajadora, la juventud y sectores amplios de las capas medias, como consecuencia de un progresivo empeoramiento e inestabilidad en sus condiciones de vida y de trabajo. La frustración, la incertidumbre en el futuro como consecuencia del paro masivo, la precariedad, la sobreexplotación, en definitiva, los nervios, sobrecargados por el trabajo y las preocupaciones, estallan y la energía liberada se canaliza a través de

31. Giacomuzzi, G., *ETA. Historia política de una lucha armada (2ª parte)*, Tafalla, Ed. Txalaparta, 2001., pág. 12.

acontecimientos accidentales como éste. Millones de personas deciden tomar parte activa en la solución de un problema que cada día les afecta más y que los políticos son incapaces de solucionar: el del terrorismo individual.

Aquellas manifestaciones, que ponían de manifiesto la enorme fuerza de los trabajadores, fueron descarriladas y manipuladas por la derecha, en la medida en que el PSOE e IU no marcaron ninguna diferencia con el PP. Más bien al contrario: su identificación con la política del Gobierno para solucionar el problema nacional en Euskal Herria no hizo más que extender el apoyo a los prejuicios españolistas entre la población y dar una base social al incremento de los ataques contra las libertades y los derechos democráticos con la excusa de luchar contra ETA.

En todo esto, obviamente, el papel de ETA fue fundamental. El carácter contra-productivo de los métodos del terrorismo individual quedó totalmente demostrado. ETA consiguió justo lo contrario de lo que pretendía alcanzar: la represión se fortaleció, la política de dispersión se endureció, más presos abarrotan las cárceles, la influencia de los prejuicios españolistas contrarios a la defensa de los derechos democráticos de las nacionalidades se extendieron a un nivel desconocido, y la esperanza de alcanzar el derecho de autodeterminación para Euskal Herria quedó aún más lejos.

La muerte de Miguel Ángel Blanco fue utilizada por el Gobierno del PP para lanzarse a fondo con la estrategia del aislamiento y la represión para “acabar con los violentos”. Esta política se concreta con el apoyo de los demás partidos en el llamado “Acuerdo para la Convivencia Pacífica” suscrito el 25 de julio de 1997. En aplicación del citado acuerdo se destituye a cargos políticos de HB en numerosas instituciones vascas. La consigna del PP era perseguir a cualquiera que discrepe de su política represiva convertida en una auténtica caza de brujas. El gobierno de Aznar se asemeja a la Santa Inquisición. El concierto organizado por el PP, y retransmitido por TVE dos meses después de la muerte de Miguel Ángel Blanco, será una demostración suprema de reacción y del más puro nacionalismo casposo español. Raimon fue abucheado “por catalán” y José Sacristán “por comunista”, mientras los fascistas, con sus banderas rojigualdas, están en su salsa.

Algunos hechos cuestionan puntualmente la política de “aislamiento”, como los acontecidos en Arrigorriaga (Vizcaya), donde todos los partidos apoyan la moción presentada por HB exigiendo explicaciones por la muerte del preso de ETA Juan Carlos Hernando, que se “suicida” en su celda en la cárcel de Albacete. Las direcciones de los demás partidos, incluido el PNV y a excepción de IU, desautorizan a sus concejales.

Si las manifestaciones masivas tuvieron el efecto de impactar a las bases de HB y hacer reflexionar a un sector, la represión del Gobierno provoca un nuevo cierre de filas. El 27 de julio HB reúne en San Sebastián a más de 20.000 manifestantes a favor de “una salida política para Euskal Herria”. La idea de una caza de

32. López Adán, E., *Nacionalismo vasco y clases sociales*, Ed. Txertoa, 1976, pág. 82.

brujas pueblo a pueblo contra cada uno de estos manifestantes y contra los 180.000 votantes de HB lanzada por el Gobierno del PP representaría en el País Vasco la destrucción de familias, pueblos y comunidades provocando una pesadilla de enfrentamiento social, sectarismo y violencia.

El PP modifica una vez más el Código Penal recortando drásticamente los derechos conquistados por la clase trabajadora como el de la libertad de expresión, reunión y manifestación. El artículo 346 del Código Penal relativo a los que “sin pertenecer a banda armada causen destrozos en la vía pública, en edificios o medios de transporte” establece penas de 10 a 20 años de cárcel para los autores de estragos. Dicho artículo se podría aplicar a los mineros de León, a los trabajadores de astilleros o a los estudiantes.

Esta política represiva va dirigida contra el conjunto de la clase trabajadora y no tiene otro efecto en quienes apoyan a ETA que provocar un endurecimiento de sus posiciones. Así lo reconocerá *El País* el 15 de septiembre en un artículo publicado por Genoveva Gastaminza desde San Sebastián. “Una situación adversa como la que atraviesa el mundo violento del País Vasco no parece que vaya a servir tampoco para estimular la reflexión interna... En el seno de los radicales se afirma que la coyuntura en la que actualmente se encuentra HB sólo alimenta la política de resistencia, que tan arraigada está en este movimiento. Cualquier gesto realizado en un momento como éste, caracterizado por la política represiva del PP se interpretaría como una debilidad (...). La apuesta policial que ven en el gobierno de Aznar solamente refuerza a los sectores partidarios de responder a la firmeza con más violencia. Nadie se plantea realizar cambios sustanciales cuando le dan una paliza”.

Los atentados de ETA contra concejales del PP y la *kale borroka*, que destroza sedes del PSOE y la UGT y que pone en peligro, con el lanzamiento de cócteles molotov, la integridad física de conductores y usuarios de autobuses urbanos, lejos de ampliar la base social de la izquierda abertzale la aíslan, dejándola cada vez más a merced de la política represiva del Gobierno.

Cuando se ejecuta la sentencia condenando a 7 años de cárcel a los 23 miembros de la Mesa Nacional de HB, ésta convoca una huelga general y una manifestación para los días 13 y 15 de diciembre de 1997, respectivamente. Numerosos colectivos están dispuestos a movilizarse a favor de la libertad de expresión y los derechos democráticos de Euskal Herria y contra una sentencia vergonzosa que condena a toda la dirección de una organización política por mostrar un vídeo con una propuesta política sobre la cuestión nacional vasca. La misma semana en que está programada la huelga general, ETA interviene ejecutando a un concejal del PP en Zarautz y la conmoción se produce en primer lugar en las propias filas abertzales. Con toda la Mesa Nacional en la cárcel, tras este atentado, la manifestación de apoyo se suspende y aplaza y son los partidos del Pacto de Ajouria Enea quienes convocan una manifestación en San Sebastián con decenas de miles de personas. El paro convocado por ELA y LAB fue igualmente desconvocado.

No será hasta el 27 de diciembre cuando se movilicen 40.000 personas con la

consigna “Democracia para Euskal Herria”, en una manifestación convocada por la izquierda abertzale y otros colectivos contrarios a la política represiva de la derecha, PP y PNV. Esta protesta no logra impedir que poco después los diarios *Egin* y *Egin Irratia* sean clausurados por las fuerzas de seguridad dejando a todos sus trabajadores en la calle. La ofensiva del PP da un paso decisivo cerrando el diario emblemático de la izquierda abertzale. Esta agresión a la libertad de expresión fue respondida con una manifestación masiva en Donostia (San Sebastián) con cerca de 100.000 asistentes, una de las más grandes que se recuerdan en la ciudad y en la que se recogerán cantidades ingentes de dinero para editar un nuevo diario, *Gara*, que saldrá a la calle poco después. A pesar de la represión, la fuerza y la influencia social de la izquierda abertzale se hace sentir.

El 12 de marzo de 1998 el lehendakari José Antonio Ardanza presenta a los miembros de la Mesa de Ajuria Enea otro “Plan de paz” que es rechazado frontalmente por el Partido Popular, abriendo una profunda crisis política. El acuerdo de gobernabilidad entre el PP y el PNV sufre un serio revés desde la primavera de 1996, que se mantiene tácitamente por los intereses de clase que unen a la burguesía española y vasca.

El documento sobre pacificación de Ardanza proponía, entre otras cosas, elaborar por “consenso de los grupos democráticos cómo debe ser el final dialogado [de ETA]”. El Pacto, se decía, “elaborará una oferta dirigida al MLNV para el momento en que ETA renuncie a la violencia”. Con este segundo punto se pasaba la pelota a la izquierda abertzale. Pero el Gobierno del PP, a pesar de la disposición del PNV a colaborar, no acepta esta estrategia. La derecha tiene sus propios “planes de pacificación”.

En la reunión de la Mesa de Ajuria Enea el PP rechaza tajantemente el plan diciendo que beneficia a los partidos nacionalistas y que hace concesiones intolerables a ETA. La actitud del PP saboteando las propuestas de Ardanza —en esencia un desarrollo del planteamiento escrito en la primera parte del documento de la Mesa de Ajuria Enea— obedece también a sus propios intereses electorales. Rentabilizando políticamente las movilizaciones del verano anterior contra los atentados de ETA y apoyándose en los últimos éxitos policiales, la dirección del PP se frota las manos pensando que las encuestas, que le auguran ser el segundo partido más votado en la CAV, se pueden hacer realidad.

Por su parte la dirección de la izquierda abertzale, que afirma haber estudiado el plan en profundidad, resalta elementos positivos en el mismo como “el reconocimiento de que la derrota policial y política de la izquierda abertzale es imposible, situando el problema en términos políticos e independientemente del esquema que promueve, plantea la negociación como salida”.

¿Es una casualidad que Ardanza presentase dicho plan poco después de que

33 Bruni, L., *ETA. Historia política de una lucha armada (1ª parte)*, Tafalla, Ed. Txalaparta, 2001, pág. 43.

Aznar declarase cerrado el proceso de transferencias a la Comunidad Autónoma Vasca y pocos meses antes de la celebración de las elecciones autonómicas?

LA DECLARACIÓN DE LA TREGUA Y EL PACTO DE LIZARRA-GARAZI

El 10 de abril de 1998 se firma en Irlanda del Norte el acuerdo de Viernes Santo. Dicho acuerdo contempla en primer lugar la formación de una asamblea autónoma en Irlanda del Norte. Su Ejecutivo estará formado por representantes de todos los partidos de la asamblea. Cada ministro tendrá a su lado un comité formado a su vez por representantes de todos los partidos, de tal manera que todas las decisiones tendrán que contar con una mayoría favorable tanto entre los partidos católicos como entre los partidos protestantes. Se formará también un consejo británico-irlandés de las islas con representantes de los gobiernos irlandés y británico, de la asamblea autonómica galesa, el parlamento escocés y la asamblea de Irlanda del Norte. Por último habrá un organismo norte-sur compuesto por representantes del gobierno irlandés (que renuncia a sus reivindicaciones territoriales con el norte) y de la asamblea de Irlanda del Norte. Los presos de aquellas organizaciones que mantengan el alto el fuego serán puestos en libertad gradualmente en los dos años siguientes y se formará una Comisión Real para examinar la reforma del Royal Ulster Constabulary (RUC), la odiada policía protestante de Irlanda del Norte.

El acuerdo de Viernes Santo tendrá una influencia muy importante en Euskal Herria. Pocos meses después de la firma de este acuerdo, el 18 de septiembre de 1998, ETA declara un alto el fuego indefinido apoyando la Declaración de Lizarra firmada por PNV, HB, EA, IU, ELA, LAB y otros 17 grupos que componen el llamado “Foro de Irlanda”.

En su declaración de tregua, ETA se hacía eco de “una mejor situación” que al parecer posibilitaba la tregua y la negociación. Pero ¿de dónde sacaban esta conclusión? En 1998 el derecho de autodeterminación para Euskal Herria estaba mucho más lejos que dos décadas atrás. En aquella época había grandes simpatías hacia los derechos democráticos de Euskal Herria entre la clase trabajadora de todo el Estado. La lucha del pueblo vasco contra la dictadura y su capacidad de movilización era vista con admiración. En 1998, debido a los atentados de ETA y a la política derechista de los dirigentes de las organizaciones obreras, una de las instituciones más valoradas en el Estado era la Guardia Civil. Además, hace veinte años ningún gobierno se hubiese atrevido a encarcelar a la Mesa Nacional de HB o cerrar el diario *Egin* mientras que en el momento de la tregua en las cárceles hay más de 600 presos, la mayoría muy lejos de Euskal Herria y un número significativo de ellos, que ya han cumplido su condena, permanecen entre rejas como rehenes del Estado, a los que hay que añadir cerca de dos mil exiliados.

En cuanto a la situación política, ¿acaso se había avanzado en la cuestión de Navarra? Dos décadas atrás la mayoría de los trabajadores y jóvenes navarros se

sentían vascos, sin embargo, debido al sectarismo, a los atentados y a un mayor crecimiento económico en Navarra que en la CAV, la burguesía ha logrado hacer penetrar entre amplios sectores de la población el llamado *navarrismo*, una fachada tras la que se esconden las ideas más reaccionarias y en Álava, Unidad Alavesa junto con el PP, intentaba promover la ruptura de esta provincia con el País Vasco intentando fragmentar aún más Euskal Herria. ¿Dónde estaba la “mejor situación” que mencionaba ETA en su comunicado?

La situación, a pesar de las declaraciones de ETA, reflejaba una correlación de fuerzas desfavorable para la actividad armada. ETA no podía ignorar la movilización gigantesca que sacudió el país y que retumbó en cada pequeño rincón de Euskal Herria, en cada casa, en cada *herriko taberna*. La declaración de la tregua fue la consecuencia de todo un período marcado por las movilizaciones de masas contra la actividad armada, especialmente después de la muerte de Miguel Ángel Blanco. La tregua no se debió a la represión del PP, que daba contenido precisamente a la lucha por las libertades del pueblo vasco, ni al giro del PNV hacia “una nueva vía”, marcado exclusivamente por oportunismo electoral. La tregua reflejaba el impacto de la movilización de seis millones de personas y fue vista mayoritariamente como un paso adelante, alimentando grandes esperanzas en una solución al conflicto.

Para el PNV los cálculos eran diferentes. La declaración de tregua marcó la posibilidad de atraer a la izquierda abertzale a su terreno y fortalecer políticamente su posición frente a la burguesía española y el aparato estatal. De esta manera, en sus cálculos cínicos y egoístas, su capacidad de negociación con Madrid aumentaría, lo que en términos contantes y sonantes significaría probablemente más ingresos para sus bolsillos y más medios para explotar a los trabajadores vascos. Un objetivo así bien merecía un giro demagógico hacia “posiciones soberanistas” con el que atraer a la izquierda abertzale y presionar al gobierno de Madrid.

LA EXPERIENCIA DE IRLANDA

El Pacto de Lizarra, que no pasaba de ser una declaración democrática a favor de la paz, la negociación y la soberanía de Euskal Herria, parte de los “éxitos” alcanzados en el acuerdo de “paz” anglo-irlandés. En la declaración se subrayaba el papel positivo que en ese proceso jugaron factores internacionales como “la apuesta firme y la participación directa del gobierno y presidente de los EEUU en la resolución del conflicto, la buena acogida dispensada por diferentes instituciones de la Unión Europea (de la que son exponentes las ayudas económicas prometidas), el apoyo mostrado y el asesoramiento ofrecido por el gobierno y el presidente de Sudáfrica a lo largo de todo el proceso...”⁷².

34. *Ibid.*, págs. 41-42.

Sin embargo, una cosa son las intenciones y otra muy diferente la realidad. Tal como los marxistas explicamos en su momento, con el acuerdo de Irlanda en la mano nadie puede afirmar que los católicos, el sector más oprimido de los seis condados del norte, hayan obtenido concesiones del gobierno británico más allá de declaraciones genéricas. Dicho acuerdo consagra la división territorial de la isla.

Irlanda del Sur, cuya Constitución reclamaba la unión con la parte norte de la isla, ha tenido que renunciar expresamente a dicha reclamación. El acuerdo establece un “Consejo” que integra a representantes de todas las partes de las islas, incluyendo a representantes galeses y escoceses, pero que no tiene ningún poder efectivo, lo que supone en realidad una concesión al unionismo protestante.

Respecto al derecho de autodeterminación, se limita a Irlanda del Norte, lo que en la práctica es una salvaguardia para la mayoría protestante y los unionistas, que jamás aceptarían la reunificación de la isla.

En el gobierno autonómico de Irlanda del Norte, participan todos los partidos firmantes del acuerdo, desde el Sinn Fein hasta la derecha unionista. En la práctica ¿qué solucionará el acuerdo para las masas de la clase trabajadora protestante o católica? Ni el paro, ni las desigualdades sociales, ni el recorte de las condiciones de vida van a desaparecer bajo el capitalismo. La opresión de clase en Irlanda del Norte no desaparecerá con este acuerdo.

James Connolly, el gran revolucionario marxista irlandés, ya advirtió a los que luchaban por la libertad de Irlanda que esta lucha debía formar parte de otra más amplia por el socialismo o fracasaría: “Si mañana echas al ejército británico e izas la bandera verde sobre el Castillo de Dublín, a no ser que te plantees la organización de una república socialista, Inglaterra seguirá dominándote, te dominará a través de los capitalistas, de sus terratenientes, a través de todo el ejército de instituciones comerciales e industriales que han instalado en el país. (...) Estamos por una Irlanda para los irlandeses. Pero, ¿quiénes son los irlandeses? No es el caso-ero rentista poseedor de suburbios, ni el capitalista sudoroso triturador de beneficios, ni el pulcro abogado, no el prostituido hombre de la prensa —los mentirosos a sueldo del enemigo— (...) No son éstos los irlandeses de los que depende el futuro. No son éstos, sino la clase obrera irlandesa, la única clase sólida sobre la que se puede alzar una nación libre”.

El IRA no tuvo en cuenta ni las ideas de Connolly ni su legado. Creyó ver un atajo en lo que ha resultado ser el callejón sin salida de la autodenominada “lucha armada”, favoreciendo la división de la clase obrera en líneas sectarias y haciendo más fácil el trabajo a los imperialistas británicos y a la burguesía irlandesa. Ahora los líderes del IRA abandonan definitivamente la lucha armada, sin resolver el problema, a pesar de décadas de “soluciones” y “alternativas” prácticas, y apoyan la colaboración de clases como hacen los reformistas y socialdemócratas.

35. *Ibid.*, pág. 57.

Es indudable que entre la población de Irlanda del norte se ha visto con satisfacción el fin de la lucha armada. En realidad el instinto y la experiencia del movimiento republicano indicaban que de esta manera no se podía batir al Estado imperialista de Gran Bretaña. Pero las necesidades de la clase obrera católica y también de la protestante, no tendrá solución en el marco de una Irlanda capitalista dependiente del imperialismo británico. Al igual que en Euskal Herria, la solución realista a la opresión nacional, la conquista de los derechos democráticos nacionales incluido el derecho de autodeterminación, sólo será alcanzado mediante la lucha revolucionaria de la clase obrera unida por encima de fronteras nacionales o religiosas, enarbolando la bandera de la revolución social y combatiendo, al mismo tiempo, a la burguesía de la nación opresora como a la burguesía nacionalista de la nación oprimida que siempre ha consentido de esta opresión mientras sus negocios sean garantizados.

EL PROGRAMA DE LA IZQUIERDA ABERTZALE

Ocultando y tergiversando a sus bases la auténtica realidad del proceso de Irlanda, ETA y la dirección de la izquierda abertzale se entregan a los brazos de la burguesía nacionalista proclamando a los cuatro vientos que una alianza con ellos sería la clave para “liberar Euskal Herria”. Manteniendo el hilo conductor de sus análisis políticos, descubren los parabienes de la burguesía vasca: “los que apostaron a favor del autonomismo (EA, PNV y ELA y muchos sinceros abertzales), se han dado cuenta de la esterilidad de esta vía. Esta vez, han mostrado su voluntad de avanzar por una nueva vía: la construcción de Euskal Herria” (Declaración de tregua de ETA).

Con la caída del estalinismo, el contenido ideológico del programa de la izquierda abertzale se ha ido descafeinando progresivamente. Si siempre supeditaron su estrategia al socialismo a la conquista en primer lugar de la “independencia”, en la actualidad sus dirigentes se refieren al socialismo como un vago horizonte. La política de la dirección de la izquierda abertzale fue siempre una reproducción del programa estalinista de la revolución por etapas. Primero, resolver el problema nacional a través de la alianza con la burguesía vasca y luego, una vez garantizada la “soberanía”, luchar por el socialismo. El contenido de este programa se ha manifestado falso de cabo a rabo, como hemos explicado, y el fracaso del estalinismo y de la “teoría del socialismo en un solo país” ha inclinado aún más el discurso de la izquierda abertzale al nacionalismo burgués puro y duro.

La burguesía vasca jamás ha defendido consecuentemente los derechos democráticos de Euskal Herria; jamás ha movilizado seriamente a las masas para conseguir el derecho de autodeterminación. Su “nacionalismo” no es más que un instrumento para mantener sus privilegios y su base social, explotando los sentimientos honestos de sectores de la pequeña burguesía y de trabajadores que vivieron en sus carnes la represión de la dictadura. En todos los aspectos decisivos la burguesía vasca siempre ha colaborado con sus hermanos de clase, los burgue-

ses españoles. Sus intereses de clase han primado permanentemente sobre cualquier otra consideración, de ahí que su verborrea nacionalista tenga un carácter cínico y calculado.

La idea que los dirigentes abertzales subrayaron constantemente durante el período que duró la tregua, sobre las nuevas posibilidades que la construcción europea abriría a la unificación territorial de Euskal Herria, no dejaba de ser una vacía ilusión. En primer lugar, considerar a la UE como una estructura “democrática” que puede favorecer la solución del problema nacional, es no comprender el carácter de clase de la construcción europea y sus objetivos estratégicos. La UE no es un proyecto a favor de los pueblos, sino de la burguesía del viejo continente en su lucha contra el imperialismo americano y japonés principalmente por el mercado mundial. Las medidas adoptadas por la UE en todos los terrenos buscan la salvaguarda de los intereses capitalistas, de ahí los ataques en la legislación contra los derechos de los trabajadores. La llamada “construcción” de Europa es, ante todo, una coartada para dismantelar el Estado del bienestar, acabando legalmente con las reformas que el movimiento obrero conquistó en la época de la posguerra y que hoy se hacen incompatibles con los intereses fundamentales del capital.

Pensar además que la UE podría respaldar la unificación territorial de Euskal Herria supone un terrible error, cuando no una mentira consciente. La UE no va a cuestionar la unidad del Estado francés o del Estado español, ni a enfrentarse a los intereses decisivos de los capitalistas de estos países para dar satisfacción al pueblo vasco, entre otros factores por temor a la desintegración que experimentarían otros Estados de la UE que también conocen tendencias centrífugas en su seno, como es el caso de Alemania, Francia, Bélgica, Italia, etc.

La burguesía española considera a Euskal Herria un territorio importante desde el punto de vista económico; jamás se dejará arrebatar por las buenas esta porción de su mercado pero además hay otras razones políticas. La independencia de Euskal Herria alimentaría las tendencias centrífugas y separatistas de otros territorios, como Catalunya y Galicia, afectando a la integridad del mercado económico del Estado español. A estas consideraciones se suma la actitud reaccionaria y españolista del aparato estatal, que tradicionalmente ha considerado la “unidad de la patria” como una tarea sagrada. Si esto es así para la burguesía española, qué hablar de la francesa, que niega incluso la independencia de Nueva Caledonia.

La revolución proletaria, la expropiación del poder político y económico de la burguesía, tanto española como vasca o catalana, es la precondition necesaria para garantizar el fin de la opresión nacional y el ejercicio del derecho democrático de autodeterminación. Como en la revolución rusa, este fin sólo se puede alcanzar garantizando la unión más estrecha de los trabajadores por encima de nacionalidades o diferencias regionales.

Sería en ese contexto probablemente, de lucha por el socialismo (como ocurrió

en la Revolución Rusa con Ucrania, Finlandia o Georgia), cuando las tendencias separatistas de la burguesía nacionalista vasca o catalana se convertirían en algo sincero. Los burgueses vascos y catalanes, como ya demostraron en los años treinta, sienten la patria de verdad cuando ésta les preserva de la revolución. Ante el avance del socialismo en todo el Estado, se acordarán de defender el derecho de autodeterminación y la independencia hasta con las armas. Entonces sí. Para luchar por la independencia contra los burgueses españoles el PNV no gastaría ni una caja de cerillas pero para luchar contra el avance del socialismo sería bien distinto. Usarían todos los medios a su alcance, incluso el “terrorismo” que hoy critican, sin ningún prejuicio. Olvidándose de proclamar el sagrado derecho a la vida defenderían con todos los medios a su alcance el derecho a la propiedad como sinónimo de libertad para intentar descarrilar la revolución y defender sus intereses de clase, su poder y sus actuales privilegios.

EFFECTOS POLÍTICOS DE LA TREGUA

La declaración de la tregua abrió un período nuevo en la escena política de Euskal Herria. Decenas de miles de personas vieron en el fin del terrorismo individual y la negociación política un objetivo por el que merecía la pena participar.

Asimismo la burguesía vasca utilizó la tregua para atraer activamente a los dirigentes de la izquierda abertzale al terreno de la actividad parlamentaria, siguiendo el modelo de Irlanda del Norte. Los dirigentes de EH (Euskal Herritarrok), la nueva denominación de la izquierda abertzale en aquel momento, lanzados por la vía de Lizarra al acuerdo con el PNV-EA, realizaron todo tipo de gestos y de actos para confirmar su buena disposición en esta nueva etapa. En la práctica generaron ilusiones entre su base de que sería posible una solución al conflicto de la mano del PNV-EA.

En las elecciones autonómicas a finales de 1998 estas esperanzas en la nueva situación se reflejaron en primer lugar en una participación once puntos superior a las últimas autonómicas de 1994: un 70,7% de los votantes acuden a las urnas. El PNV y EA consiguieron el 36,7%, 458.957 votos y 27 diputados, tres menos que en las anteriores elecciones, mientras que EH pasaría de 11 a 14 escaños y de 166.147 votos (16,29%) a 224.001 (17,91%). EH obtuvo unos resultados extraordinarios. No obstante, la polarización política en líneas nacionales se reflejó también en un preocupante crecimiento del PP, que obtuvo 100.000 votos más que en las anteriores autonómicas e incluso 19.000 votos más que en las generales de 1996.

Estos resultados animarían aún más al PP a continuar con su línea dura respecto a unas inexistentes “negociaciones” con ETA. Estaba claro que el PP no iba a hacer concesiones de fondo a ETA en una hipotética negociación. Aspectos como el derecho de autodeterminación o la unidad territorial estaban descartados totalmente. Sin embargo, otros gestos más formales como el reagrupamiento de presos o modificaciones constitucionales para ampliar las competencias del Estado sí hubiesen parecido posibles, pero tampoco esta vía fue aceptada por el PP.

El PNV-EA formó un Gobierno en minoría después de obtener el respaldo de Euskal Herritarrok. El nuevo lehendakari, Juan José Ibarretxe, presenta a la burguesía española y vasca en el discurso de investidura las líneas estratégicas de su proyecto: “La construcción de una nación o como quieran llamarle es el poder económico y financiero. Una soberanía basada en los números y la competitividad, que tiene como modelo los países más desarrollados de Europa, con todo respeto del sur, esto es, de España” (*El País*, 30/12/1998). Con este ideario Ibarretxe forma un Gobierno de tecnócratas al servicio del PNV y la oligarquía vasca que reclaman paz social para conseguir sus objetivos. Para ello buscan el apoyo de EH, ELA, LAB e IU, organizaciones comprometidas en desarrollar el pacto de Lizarra que abrió la tregua de ETA.

De esta manera, lo que para el pueblo trabajador vasco es la lucha por los derechos democráticos y por una vida digna, para la burguesía vasca, como para la española, es la lucha por mayores cotas de beneficio empresarial. Los dirigentes de EH dieron un salto cualitativo tras su respaldo a este gobierno burgués. La nueva orientación de la dirección de EH, que a corto plazo se benefició de los efectos positivos de la tregua de ETA y de las expectativas creadas por el incipiente proceso de paz, crearía a medio plazo más descontento entre su base, especialmente entre aquellos sectores del movimiento obrero y de la juventud que aspiran a una salida revolucionaria para acabar con la opresión nacional y el capitalismo.

¿Qué contrapartida obtuvo la dirección de la izquierda abertzale en Lizarra? La creación de Udalbiltza, una institución bastante testimonial integrada por representantes de los municipios de toda Euskal Herria. Incluso esta institución, nacida por iniciativa de EH, pudo ser utilizada contra la propia izquierda abertzale cuando el PNV exigió un pronunciamiento de los representantes municipales en contra de ETA. La izquierda abertzale fue expulsada y se vio obligada a formar su propia Udalbiltza⁷³.

Así pues, la Asamblea de Municipios respondía a unos intereses de clase específicos, los de la burguesía vasca. El PNV en los pactos de Lizarra demostró una vez más que estaba dispuesto a hacer concesiones en temas que consideraba secundarios para sacar adelante lo fundamental: la tregua de ETA y el apoyo de la izquierda abertzale a su Gobierno de derechas. Después de décadas de “lucha armada”, ¿se podía calificar de éxito entregar la dirección de la construcción nacional al PNV-EA? ¿Dónde quedaba la lucha por una Euskal Herria socialista? ¿Cómo se puede llevar a cabo una oposición seria y consecuente contra un Gobierno de derechas con el que se está pactando?

El pacto de legislatura firmado por PNV-EA y Euskal Herritarrok no dejaba lugar a dudas: “La finalidad principal del presente documento es establecer las bases para prestar apoyo parlamentario al Gobierno (...) EH se compromete a no adoptar ni apoyar iniciativas o posicionamientos en el Parlamento que puedan su-

36. *Iraultza* nº 1, citado en Bruni, pág. 59.

poner el bloqueo (...) por falta de quórum o afectar a la estabilidad del Gobierno (...). La aplicación de estos principios se hará sin merma de la libertad de cada grupo para exponer los criterios que propugne de acuerdo con las posiciones ideológicas y programáticas de su partido, así como de la orientación de su voto, siempre que se respeten los principios anteriores y se trate de iniciativas que no sean susceptibles de producir consecuencias de naturaleza legislativa, condicionen la acción ejecutiva o impliquen efectos presupuestarios, según criterios de la Comisión de Seguimiento o en su caso de la Comisión de Coordinación [formada por 8 del PNV-EA y 4 de EH]”.

El cese de la actividad de ETA ayudó a que salieran a la superficie con mayor claridad los problemas de clase que afectaban a decenas de miles de familias: el paro masivo, la precariedad, las ETTs, el incremento de accidentes laborales y el incremento de la jornada laboral. El balance realizado por ELA desde 1992 a 1998 reflejaba muy bien el abismo de intereses que separa a la burguesía vasca de la clase trabajadora y la juventud. Los beneficios netos empresariales crecieron un 52% en 1996, un 77% en 1997 y un 78% en 1998, mientras que la clase trabajadora perdió 300.000 millones de pesetas en ese mismo período, según la distribución de riqueza en relación al PIB. El paro era en 1998 del 47% entre los jóvenes de la comarca de Bilbao; el 93% de los contratos eran temporales y uno de cada cinco trabajadores fue contratado por ETTs con salarios de miseria. Los gastos de protección social cayeron del 12,2% del PIB en 1996 al 11,3% en 1998. Las prestaciones por desempleo se redujeron de 97.700 millones de pesetas en 1996 a 86.000 millones en 1998. La tasa de cobertura por desempleo cayó del 36% en 1993 al 26% en 1998. Los gastos de sanidad pública, del 4,7% del PIB en 1994 al 4,2% del PIB en 1998 y los de educación, del 4% del PIB al 3,7% en el mismo período.

Tal era la situación que se vivía en los hogares de la clase obrera vasca, que el 21 de mayo se convocó por parte de ELA y LAB una huelga general en Euskal Herria a favor de las 35 horas semanales que resultó un rotundo éxito, paralizando la actividad económica y comercial. La huelga fue seguida por el 80% de la clase obrera y el soporte principal de la convocatoria fueron los batallones pesados del proletariado. De 608 empresas con más de cincuenta trabajadores pararon 526. Pero al igual que habían hecho en otras convocatorias a nivel estatal UGT y CCOO, las direcciones de ELA y LAB no dieron continuidad a la lucha y las condiciones sociales y laborales en Euskadi continuaron deteriorándose.

Mientras los dirigentes de EH apoyaban al Ejecutivo vasco, sus bases salían a la huelga general. Los apoyos a la huelga por parte de la dirección de EH no podían ocultar el descontento y la frustración creciente entre amplios sectores de la militancia. Al fin y al cabo era difícil estar en misa y replicando al mismo tiempo.

Como toda la experiencia ha demostrado, en las cuestiones fundamentales que afectan a la clase obrera, el PP y el PNV, igual que CiU, comparten los mismos

37. *Ibid.*, pág. 63.

intereses de clase. No hay más que señalar las declaraciones de los líderes de Confebask, la patronal vasca, para ver su coincidencia absoluta con las opiniones de la CEOE, o las medidas económicas y sociales regresivas adoptadas por el PNV, que son un calco de las de Aznar. Durante toda la primera legislatura, el PNV fue sostén de las medidas antiobreras del PP, incluidas las que se tomaron en el plano judicial y policial para aumentar la represión.

LA RUPTURA DE LA TREGUA

Poco después de las elecciones autonómicas, se celebraría en Bilbao una manifestación apoyada por los firmantes de Lizarra que agruparía a más de 150.000 personas reclamando el acercamiento de los presos vascos a Euskal Herria. Después de esta multitudinaria manifestación se esperaba algún gesto por parte de los responsables gubernamentales para apuntalar la tregua. Pero esto no ocurrió.

La actitud del PP ante la tregua se puede resumir en el calificativo acuñado por Mayor Oreja, ministro de Interior: “tregua-trampa”. El aparato del PP desarrolló sus posiciones en Euskal Herria al calor de los atentados de ETA y su actitud provocadora mostraba su nulo interés en buscar una solución al conflicto. La derecha española se negó a hacer el más mínimo gesto democrático, como aplicar la legislación penal permitiendo que salieran de las cárceles los presos enfermos o que habían cumplido las tres cuartas partes de su condena; poner en libertad a la Mesa Nacional de HB, o posibilitar el acercamiento de los presos a las cárceles vascas y la vuelta de los refugiados. En lugar de eso se negaron incluso a que dos presos preventivos de EH ejercieran sus funciones como parlamentarios mientras continuaban los juicios, las detenciones y la represión a la juventud.

En aquel período los únicos presos liberados serían Vera y Barrionuevo, implicados en la guerra sucia contra ETA y la izquierda abertzale. La capacidad de maniobra del PP decidido a adoptar la represión en lugar de la negociación, estaba determinada también por el apoyo incondicional del aparato del PSOE y del PSE-EE. La actitud de la derecha durante todo el período que duró la tregua fue una clara advertencia a aquellos que pensaban que sería posible arrancar concesiones a la burguesía española en el terreno nacional a través de la negociación. En realidad, la burguesía españolista quería la total humillación y capitulación de ETA por la vía de la represión policial.

Durante los catorce meses de tregua fueron detenidos en Francia y en el Estado español cincuenta activistas de ETA. En octubre de 1999 fue detenida Belén

38. Lenin, *Nuevos acontecimientos y viejos problemas*, en *Obras Completas*, t. VI, Madrid, Akal Editor, 1976, pág. 308.

39. *Zabal* nº 9, citado en Bruni, págs. 207-08.

González, miembro de la delegación de ETA que se reunió con el Gobierno en Suiza, a pesar de las garantías de inmunidad. En cuanto a los presos, la política del PP continuaba siendo la misma: negativa al reagrupamiento y violación de la legislación burguesa en lo referido al cumplimiento de las penas.

La responsabilidad del PP en la ruptura de la tregua fue fundamental. La burguesía españolista y el aparato del Estado no veían ninguna razón para hacer concesiones aunque estas fueran mínimas, proporcionando de esta manera argumentos a la dirección de ETA para volver a los atentados.

El fin de la tregua el 21 de enero del 2000 supuso un auténtico jarro de agua fría. El saldo para los dirigentes de EH, después de catorce meses de tregua, no podía ser peor. Después de confiar en la alianza con la burguesía vasca, la vía “soberanista” quedaba truncada. Lizarra fue la cobertura para que EH se convirtiera en el apoyo imprescindible del gobierno vasco, que necesitaba de sus votos en el parlamento para sacar adelante su política antisocial.

En medio de aquellos acontecimientos, la desorientación política y la miopía de los dirigentes de EH alcanzaron un grado superior. Pensando en que todo podría seguir igual, minusvaloraron las consecuencias que tendría la vuelta a la actividad armada y la ofensiva del PP contra los derechos democráticos. Éste era el ambiente predominante cuando desde la dirección de EH se afirmó que “ni nos asombra ni nos preocupa” que haya un próximo lehendakari del PP. Pronto los dirigentes abertzales comprobaron la importancia decisiva que para Euskal Herria tendría el triunfo del PP por mayoría absoluta. Nadie en sus filas podría imaginar un ataque tan directo, profundo y continuado, que acabaría con la ilegalización de Batasuna.

EL PP LOGRA LA MAYORÍA ABSOLUTA

La llamada “oposición responsable” del PSOE y la firma de numerosos pactos por parte de los dirigentes sindicales no mejoró las condiciones de vida de la clase trabajadora, que se continuó deteriorando con la política de privatizaciones masivas promovida por la derecha. Pero esta acción política, que favoreció la paz social y la estabilidad del gobierno, tuvo el efecto de proporcionar “una apariencia democrática” al Partido Popular que le permitió en las elecciones generales del 12 de marzo del 2000 conquistar la mayoría absoluta. Dicha victoria fue posible, principalmente, por la abstención de un millón y medio de trabajadores desilusionados con la política de sus dirigentes.

El PSOE perdió, respecto a 1996, 1.596.468 votos (-16%), e Izquierda Unida, 1.385.915 votos (-52,2%). La abstención se disparó en los barrios obreros, con una diferencia del 7,3% respecto a las elecciones generales anteriores. A pesar de haberse incorporado 1,4 millones de personas al censo en todo el Estado, votaron

40. *Nacionalismo Revolucionario* de Krutwig, citado en Bruni, pág. 71.

1,36 millones menos. En el caso de Euskal Herria, a este fenómeno contribuyó también la dirección de la izquierda abertzale con su “abstención activa”.

Los atentados contra Aznar y contra concejales como Miguel Ángel Blanco facilitaron al PP un crecimiento en votos, sobre todo en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, que no hubiesen podido ni soñar diez años antes. Con la mayoría absoluta en sus manos, el Partido Popular iría progresivamente mostrando su verdadera cara, la misma cara de la derecha de siempre, la que se opuso a cualquier reforma democrática, a cualquier concesión a los derechos de las nacionalidades históricas, la que nutrió el franquismo y sacó gigantescos beneficios de la ausencia de libertades, la misma que en su momento se opuso a la Constitución y al Estatuto que ahora, con tanto ahínco, dicen defender.

El gobierno de Aznar jamás hubiese podido ir tan lejos en la represión de los derechos democráticos de no haber contado con el apoyo de la dirección del PSOE que, desde el fallido golpe de Estado de 1981, se acercó a los sectores más reaccionarios del aparato estatal ofreciéndoles su leal colaboración. La creación de los GAL, la persecución de los sectores progresistas de la Guardia Civil y la policía nacional negándose a depurar el aparato estatal de fascistas y torturadores, su defensa del general Rodríguez Galindo, fueron algunas consecuencias de esta colaboración.

Con todo, esta política de subordinar la acción del partido a los intereses del PP, provocaría divisiones. Las Juventudes Socialistas de Euskadi plantearon tímidamente, en algunas resoluciones congresuales, la posibilidad de que el pueblo vasco opinase sobre las relaciones con el resto del Estado. La reacción no se hizo esperar: el aparato les presionó para que rectificaran inmediatamente. También Odón Elorza, alcalde de Donostia, se atreve a cuestionar el acercamiento al Partido Popular y es contestado de forma insultante por la dirección, que lo acusa de fundamentar sus posiciones políticas por temor a ETA.

La actividad de ETA con el atentado que costaría la vida del dirigente socialista vasco Fernando Buesa y de su escolta, contribuye a fortalecer las posturas más derechistas en el seno del PSOE. La manifestación que recorre las calles de Vitoria-Gasteiz muestra la fractura social que se está produciendo. En primer lugar desfila el Gobierno vasco, seguido por buena parte del nacionalismo vasco, incluyendo algún sector crítico de la izquierda abertzale. Un segundo bloque más pequeño lo componen gentes de Izquierda Unida y sectores pacifistas contrarios a la polarización. En tercer lugar marchan los dirigentes del PSOE y del Partido Popular, seguidos de una masa de burgueses, capas medias y trabajadores extrañamente mezclados. La polarización se refleja en las pitadas que desde este último cortejo se lanzan a quienes llevan una ikurriña o algún símbolo del nacionalismo vasco. En este contexto Nicolás Redondo Terreros, secretario general del PSE-EE,

41. *Zutik* nº 50, citado en Bruni, pág. 77.

42. *La carta a los makos*, citado en Bruni, pág. 97.

llama a abrir las filas del partido a los liberales y a apoyar a los empresarios que “crean riqueza y empleo”, profundizando el acercamiento al PP.

En los ocho meses transcurridos desde la ruptura de la tregua se llevaron a cabo más actos de kale borroka (400) que en todo el año anterior. La Universidad de Deusto hizo una investigación en la que se señala que un 30% de los jóvenes vascos justifica tanto la llamada kale borroka como el terrorismo individual y de ellos, un 9% se declara dispuesto a empuñar las armas en cuanto se lo pidan. El autor del estudio, el catedrático de Sociología Javier Elzo, afirma que ese verano caliente confirma sus peores previsiones: “Le han echado un pulso al sistema y alardean del desafío (...) cualquier sacrificio es pequeño si se trata de liberar a la patria vasca del capitalismo español y francés e instaurar en su lugar el socialismo más ortodoxo (...) parecen bravos y están seriamente enfadados con el mundo en general y con la democracia española en particular (...) pretenden cambiar la sociedad mediante una revolución y creen que la violencia de ETA no es tal, sino una respuesta a la auténtica violencia, la represión ejercida por el Estado invasor. Su objetivo es la ruptura frontal con las instituciones” (*El País*, 27/8/2000).

No es comprensible la persistencia de este problema en pleno auge económico sin entender claramente el carácter de la época, una época de crisis y declive, de decadencia a todos los niveles de la sociedad y donde las ideas burguesas dominantes (el liberalismo, el pensamiento único), la sobreexplotación y la expoliación de las masas más pobres del planeta están creando en un país tras otro un sentimiento de rabia e indignación. Esta actitud se puede observar en las manifestaciones contra el FMI y el Banco Mundial, en el auge de movimientos revolucionarios en América Latina, en las huelgas generales convocadas contra los recortes sociales y en movimientos anticapitalistas que surgen, aun con ideas confusas, en los países avanzados. Euskal Herria, lejos de ser una excepción, vive estos problemas pero agravados por la opresión nacional.

LA IZQUIERDA ABERTZALE TRATA DE TOMAR LA INICIATIVA

En el contexto de la mayoría absoluta del PP, la dirección de Euskal Herritarrok intenta tomar la iniciativa confiando en arrastrar a la burguesía vasca. EH propone a PNV-EA elaborar un “censo vasco mediante la adhesión personal de quienes se consideren ciudadanos vascos” para crear una Asamblea de Herrialdes compuesta por representantes de los Parlamentos vasco y navarro y de las instituciones del País Vasco francés que defina y desarrolle las competencias de los territorios en un nuevo marco. En el horizonte se trataría de constituir una Asamblea Constituyente, con la misión de elaborar una carta magna que plasme la soberanía vasca, antes de la elección de un Parlamento en el conjunto de Euskal Herria. Según los

43. *Zutik* n° 62, citado en Bruni, pág. 102.

dirigentes de EH, bastaría el compromiso de la burguesía vasca para que ETA declarase poner fin a sus acciones. “Ellos pueden poner el día y la hora del fin de la violencia, pero han de ser valientes”.

En la práctica, el único que se toma en serio estas propuestas es el juez Garzón, que ordena la detención por “integración en banda terrorista” de cinco dirigentes de Ekin, implicados en una supuesta “trama de desobediencia civil diseñada por ETA-Ekin”. Garzón afirma que tratan de crear un “Estado paralelo”, como demostrarían las siguientes medidas propuestas por Ekin para hacer frente a la opresión española y francesa:

- Rechazo de DNI, pasaporte, permiso de conducir, creación de un registro sustitutorio y utilización de un DNI de Euskal Herria, obligando a las instituciones a que lo acepten.
- Rechazo a las selecciones deportivas española y francesa.
- Insumisión fiscal
- Lucha contra la lotería y las quinielas, instrumentos de negocio para el Estado, y creación de posibilidades para que Euskal Herria gestione su propio dinero.

Si no fuese porque estas acusaciones constituyeron una base jurídica para aumentar la represión, diríamos que se trataba de una broma pesada. Pero no era ninguna broma. El aparato del Estado y la burguesía española estaban planificando un golpe terrible contra la izquierda abertzale. La sombra de la ilegalización se hacía cada día más presente.

En agosto de 2000, parte de la dirección de EH presenta las *Bases para un acuerdo político*, que se convierte en la alternativa programática para una futura construcción de Euskal Herria. El documento no deja lugar a dudas de la renuncia que la dirección de la izquierda abertzale hace del socialismo. El apartado 3.7.1 del texto, referido a la estructura socioeconómica plantea lo siguiente: “El marco jurídico-político actual limita la capacidad económica de Euskal Herria. En el modelo autonómico construido por la Constitución, no existen posibilidades para desarrollar una política económica diferente al modelo estatal. La economía vasca sigue cumpliendo un papel marginal. La dependencia de los poderes estatales y supraestatales es absoluta, sin capacidad de reacción y sin posibilidad de desarrollar lo que demanda la mayoría de la sociedad vasca (...) Como nos encontramos dividi@s entre dos Estados y entre diferentes administraciones, es imposible realizar una política económica según las necesidades que surjan de la concepción como nación. De esta manera se refuerza el carácter periférico con respecto a los Estados francés y español (...) La creciente desestructuración de la economía en tiempo de crisis y de cambio, se debe al centralismo de los Estados a los que está atada la estructura económica de Euskal Herria (...)”. En el punto 7.2.1 se señala: “Euskal Herria para ser dueña de sí misma y poder asegurar su futuro, tiene que ser capaz de superar el sometimiento que hemos descrito anteriormente. Esto es,

44. Citado en Bruni, pág. 76.

Euskal Herria debe decidir su futuro con toda libertad y, entre otros, su futuro socioeconómico. L@s ciudadan@s tenemos que tener auténtica capacidad para definir nuestro proyecto socioeconómico (...) tenemos que crear espacios socioeconómicos vascos". Y en el punto 7.2.1.1, dedicado a la planificación económica: "Los objetivos de esta planificación económica básica son la creación de un espacio económico y social vasco y asegurar el bienestar social. En esa planificación deberán formar parte la Administración, los partidos políticos, los sindicatos, cámaras de comercio, la economía social, las empresas, etc."

Basta este botón de muestra para ilustrar el proyecto de Euskal Herria que defiende la dirección de la izquierda abertzale. En todos los apartados de su propuesta, ya sea el del poder judicial, ordenación territorial, cultura o enseñanza, su programa en ningún caso pretende trascender los límites del capitalismo. Abandona completamente el punto de vista de la clase trabajadora y sitúa a Euskal Herria y la sociedad vasca como un ente abstracto dotado de personalidad propia, sin comprender los intereses de clase contradictorios y enfrentados que existen en Euskal Herria. Se habla de la "*marginalidad de la economía vasca*" por su dependencia de los poderes estatales. ¿Pero de qué marginalidad habla la dirección de la izquierda abertzale? ¿La de la burguesía vasca que llena sus bolsillos año tras año vendiendo sus productos en el mercado español y que obtiene beneficios históricos de la precariedad, la siniestralidad y la explotación de los trabajadores vascos? ¿Acaso de la marginalidad de la Banca vasca, de los especuladores financieros vascos? ¿De los directivos vascos de Confebask, que defienden los mismos objetivos que sus hermanos de clase de la CEOE? "La creciente desestructuración de la economía vasca en tiempo de crisis" se debe "al centralismo de los Estados a los que está ligado" (!). Pero la crisis, ¿quién la padece? El empresario, el especulador, el comerciante, el propietario vasco o el trabajador, la mujer obrera, el joven, el desempleado. Y esta crisis, ¿es producto de la "centralización" del Estado español o francés, o del capitalismo y de la sociedad de clases?

En otros terrenos la postura de la dirección de la izquierda abertzale tampoco tiene mucho en común con una posición de clase. En el caso de la defensa del euskera, que los marxistas apoyamos incondicionalmente, es necesario desmascarar la demagogia de la burguesía vasca.

Lenin y los grandes marxistas, partiendo de una postura de clase, es decir, del rechazo intransigente a todo tipo de opresión y discriminación cultural y lingüística, siempre combatieron consignas como la de "cultura nacional". Lenin escribía en *Notas críticas sobre el problema nacional*: "En cada cultura nacional existen, aunque no estén desarrollados, elementos de cultura democrática y socialista, pues en cada nación hay una masa trabajadora y explotada cuyas condiciones de vida originan inevitablemente una ideología democrática y socialista. Pero en cada nación existe así mismo una cultura burguesa (y, además, en la mayoría de los ca-

45. Giacomuzzi, G., *op. cit.*, pág. 30.

sos, ultra reaccionaria y clerical), y no en simple forma de elementos, sino como cultura dominante. Por eso, la 'cultura nacional' en general es la cultura de los terratenientes, de los curas y de la burguesía".

Para los marxistas la lucha contra la opresión cultural y lingüística no significa ofrecer un cheque en blanco a la burguesía nacionalista para apoyar su monopolio sobre la vida cultural del país.

El euskera fue reprimido brutalmente por la dictadura española. Prohibida su enseñanza, su utilización en instituciones y en la vida social, el euskera fue perseguido en todos los rincones de Euskal Herria, hasta en los cementerios. En esta actitud se hallaba el sello inconfundible del chovinismo español y su larga historia de atrocidades con las nacionalidades y las minorías. Por eso cuando desde la barricada de la burguesía españolista se clama contra la "marginación" del castellano en Euskal Herria o en Catalunya, en realidad lo que se pretende es volver a la situación en la que el castellano era utilizado para aplastar las lenguas maternas de las nacionalidades y prohibir las expresiones culturales en dichas lenguas. Por tanto, los marxistas defendemos la recuperación, el conocimiento y la utilización plena, oral y escrita, de las lenguas de las nacionalidades: el euskera, el catalán y el gallego. Los idiomas nacionales deben ser enseñados en las escuelas públicas con medios materiales y humanos suficientes y utilizados en las instituciones públicas sin ninguna restricción.

No es ninguna casualidad los ataques contra el euskera en Navarra, identificando euskera y violencia terrorista para favorecer la extensión de los prejuicios españoles "navarristas" entre la población; o la persecución del juez Garzón contra la coordinadora de alfabetización en euskera, AEK, considerándola una parte de ETA. En la medida en que han sido lenguas perseguidas y reprimidas, su recuperación exige de recursos suficientes en el terreno escolar, universitario e institucional, ya que el castellano, que es la lengua mayoritaria del Estado, sigue siendo dominante en la esfera económica, política, cultural y de las relaciones sociales.

Los marxistas estamos a favor de la recuperación de estas lenguas y su uso habitual y común por parte de la población. Por haber sufrido la represión sañuda de la dictadura, su reimplantación y extensión a la población ha de venir del estímulo positivo, de la riqueza en la oferta cultural y del incremento de los medios económicos y materiales. Pero el euskera y las demás lenguas nacionales no deben ser un arma para azuzar el enfrentamiento entre los trabajadores. Por eso, dejar la política lingüística en manos de la burguesía vasca o catalana, significa hacer del idioma una fuente de beneficios, una plataforma para engordar los negocios de la enseñanza privada en detrimento de la enseñanza pública, de su calidad y gratuidad.

Por ese motivo denunciamos la postura hipócrita de la burguesía vasca, que utiliza el euskera para explotar demagógicamente los sentimientos de la población pero que no hace prácticamente nada, en comparación con lo que se podría llevar a cabo con los medios modernos (desde el plano material y de recursos), por ex-

tender el euskera a las relaciones sociales, culturales o deportivas. Como marxistas, exigimos también el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras a aprender el euskera y los medios para lograrlo —gratuitos y dentro del horario laboral—, y que en ningún caso suponga un obstáculo para acceder a un puesto de trabajo.

En el ámbito educativo, la dirección de la izquierda abertzale planteó en este documento, como en posteriores, la defensa de una escuela nacional vasca, independientemente de si es privada o pública; controlada por los empresarios o gestionada democráticamente por la comunidad educativa; de pago o gratuita. Igual que en el conjunto del Estado, los marxistas defendemos en Euskal Herria una escuela pública de calidad, gratuita, democrática, laica y científica, y este modelo entra en total contradicción con el que defiende la burguesía vasca, basada en la privatización de la enseñanza y en las concesiones a la Iglesia católica en esta materia.

En el terreno lingüístico y cultural, el marxismo es también internacionalista. Lenin señalaba que la consigna de la democracia obrera no es la “cultura nacional”, sino la cultura internacional de la democracia y del movimiento obrero mundial: “Al lanzar la consigna de ‘cultura internacional de la democracia y del movimiento obrero mundial’, tomamos de cada cultura nacional sólo sus elementos democráticos y socialistas, y los tomamos única y exclusivamente como contrapeso a la cultura burguesa y al nacionalismo burgués de cada nación. Ningún demócrata, y menos aún ningún marxista, niega la igualdad de derechos de los idiomas o la necesidad de polemizar en el idioma propio con la burguesía ‘propia’ y de propagar con el idioma propio las ideas anticlericales o antiburguesas entre los campesinos, los pequeños burgueses ‘propios’ (...) la cuestión estriba en si pueden permitirse los marxistas lanzar directa o indirectamente la consigna de cultura nacional o si, en oposición a ésta, deben preconizar sin falta en todos los idiomas la consigna del internacionalismo de los obreros ‘adaptándose’ a todas las peculiaridades locales y nacionales (...) El nacionalismo militante burgués, que embrutece, embauca y divide a los obreros para hacerles ir a remolque de la burguesía, es la circunstancia fundamental de nuestra época”.

Lenin sentenciaba la cuestión sin ningún tipo de concesiones: “Quien quiere servir al proletariado debe unir a los obreros de todas las naciones y luchar constantemente contra el nacionalismo burgués. Quien defiende la consigna de cultura nacional no tiene cabida entre los marxistas, su lugar está entre los pequeño-burgueses nacionalistas”.

LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE 2001

Con una participación sin precedentes —un 79,9% de los electores acuden a las

46. Amigo, Á., *Pertur, ETA 1971-76*, Donostia, Ed. Hórdago, 1978, pág. 44.

urnas, diez puntos por encima de las autonómicas de 1998, celebradas tras la declaración de tregua de ETA—, las elecciones vascas de mayo de 2001 arrojaron un resultado extremadamente polarizado: PNV-EA logra la mayoría simple con 33 escaños y 600.000 votos, un resultado histórico; el PP ve frustrada su estrategia al aumentar tan sólo un escaño, sacando 19 diputados; el PSOE pierde un diputado, obteniendo 13 escaños; IU logra tres escaños y EH sufre una auténtica debacle al caer de 14 diputados a tan sólo siete.

El PNV logró por primera vez más votos que el PSOE en la mayoría de los feudos socialistas de la margen izquierda, como Sestao, Baracaldo, Santurce o Portugaete. Por su parte el PP consiguió, a pesar de todo, alzarse como segunda fuerza política con diferencia. ¡Cuándo hubiese podido soñar la burguesía española que podría obtener unos resultados así en Euskadi presentando a un ex ministro de Interior como candidato a lehendakari!

Los resultados conmocionaron a amplios sectores de la izquierda abertzale. En el diario *Gara* (16 de mayo de 2001) se puede leer: “Los resultados obtenidos superan a la baja las peores previsiones... no se trataba de ligeras fugas sino de un corrimiento de voto de sorprendente magnitud. La pérdida del 50% del electorado”. Dicha pérdida se da en todas las magnitudes en que se analice; pueblo a pueblo, los votos de EH se hunden mientras los del PNV suben casi en la misma proporción. Especialmente importante es el desplome en Guipúzcoa donde EH pasa de ser la primera fuerza política en 1998 a ser la cuarta. La estrategia de la dirección de EH de acercamiento al PNV abandonando la defensa del socialismo fue rotundamente sancionada por sus votantes. Al no verse diferencias sustanciales, el temor al crecimiento del PP provocó un corrimiento del voto útil hacia el PNV.

En el diario *Gara*, el artículo de opinión de Jesús Valencia se revuelve contra estos votantes de EH que “severos con sus dirigentes han dado un cheque en blanco a quien ha ignorado los presos y silenciado la tortura”. El mismo articulista afirma: “puede doler pero los números están ahí y una izquierda curtida tiene que asumir sin complejos la realidad en que se mueve. Aunque ésta desmonte sus cálculos y cuestione sus estrategias... Lo que ha sucedido es grave pero es mucho más grave lo que puede suceder”.

47. León Trotsky, *Der Kampf*, noviembre 1911.

VII. El papel de la clase obrera

LA CLASE OBRERA REAPARECE EN ESCENA

La primavera del año 2000 trae un importante incremento de la conflictividad laboral en el País Vasco. En Álava, que está a la cabeza, saltan a la lucha Sumesa, Intecsa, Icoa, Urbina, Caballito y la construcción. En el conjunto de la CAV sólo en marzo de ese año las jornadas perdidas por huelgas aumentan un 60%. La clase trabajadora vasca comienza a levantarse de nuevo. No son los únicos.

El 15 de junio de 2001 los trabajadores gallegos van a una huelga general convocada por UGT y CIG con la oposición de la dirección de CC.OO. Es la respuesta a un decreto de reforma laboral aprobado por el gobierno del PP en marzo, decreto que la dirección oficialista de CC.OO. rechaza formalmente pero sin dar ninguna respuesta sindical. A pesar de la división introducida por la postura de la dirección de CC.OO., la huelga tuvo un seguimiento significativo porque las bases del sindicato en los astilleros de las comarcas de Ferrol y Vigo, punta de lanza del movimiento obrero gallego y cuna de CC.OO., salen a la lucha. El papel del Sector Crítico de CC.OO. en el astillero ferrolano de Izar (la antigua Bazán, hoy Navantia), donde los marxistas de *El Militante* juegan un papel decisivo, fue fundamental para llevar a la huelga a los afiliados de CC.OO.. Decenas de miles de trabajadores y jóvenes gallegos se manifestaron en las principales ciudades, destacando la manifestación de Vigo, con 50.000 participantes.

El *decretazo* impuesto unilateralmente por el Gobierno del PP marca el fin del ciclo de concertación social. El gobierno y los empresarios están a la ofensiva. Por tanto, negociar por negociar no sirve. La indisciplina sindical crece en todo el Estado, desde Palma de Mallorca, donde la asamblea de trabajadores de autobuses discrecionales rechaza el pacto suscrito por los dirigentes sindicales y decide continuar la huelga, hasta el rechazo de la plantilla de Roca en Barcelona al convenio firmado por sus dirigentes. Casos similares se dan en Volkswagen en Navarra y en otros convenios. El conflicto de Sintel, cuyos trabajadores llevan meses acampados en el Paseo de la Castellana; la huelga de transportes la Unión en Pontevedra, con 121 días de huelga o la del sector de basuras en Benidorm y Segovia son una

muestra de que cada vez más jóvenes trabajadores se están implicando en la lucha sindical. Ni el gobierno es tan fuerte como quiere hacer creer, ni la clase obrera es débil. El ascenso en las luchas de los trabajadores y la juventud se hará sentir en los meses y años posteriores y jugará un papel decisivo en el desgaste del Gobierno del Partido Popular y su derrota electoral de 2004.

EL PP ACENTÚA SU POLÍTICA REPRESIVA

La política de represión de los derechos democráticos se agudiza paralelamente al despertar de las luchas sociales y obreras. Existe un interés nada disimulado en desviar la atención de los problemas que afectan a millones de trabajadores en todo el Estado español, y nada mejor para ello que agitar con la cuestión vasca y el problema "terrorista". La ofensiva se produce en todos los frentes, en el político, en el mediático y para apuntalar la estrategia se recurre a los servicios de la judicatura.

El juez Baltasar Garzón ordena la detención del periodista Pepe Rei, director de la revista *Ardi Beltza*, imputado por "amenazas terroristas" y "colaboración con banda armada" por su vídeo titulado: *Periodistas, el negocio de mentir*. Al mismo tiempo Ruiz Gallardón cesa al director de Telemadrid por emitir un reportaje sobre Euskadi donde, entre otros, se entrevista a Arnaldo Otegi, dirigente de EH. La distribuidora de publicaciones en euskera Zabaltzen es rodeada por la policía y registrada. UPN-PP retira las subvenciones al euskera y las señalizaciones bilingües en Navarra, mientras Carlos Iturgaiz, presidente del PP en el País Vasco, se declara partidario de encarcelar a Arzalluz por sus recientes declaraciones contra el gobierno del PP. Pero no todos son perseguidos por el Gobierno de Aznar: por estas fechas el Gobierno del PP concede la Gran Cruz del Mérito Civil al torturador y colaborador de la Gestapo Melitón Manzanas.

El 30 de octubre del 2001 explota en Madrid un nuevo coche bomba colocado por ETA. Mueren en el acto un magistrado militar, un escolta afiliado al SUP, un conductor miembro de UGT y el conductor de un autobús que inicialmente resultó gravemente herido por la explosión. La política represiva del PP hace aguas por todos los lados. Lejos de acabar con los atentados de ETA y mermar su base social consigue todo lo contrario, como se ve en la manifestación celebrada dos días antes en San Sebastián, donde 40.000 personas participaron contra las detenciones de jóvenes de EKIN. Son muy significativas las palabras del juez instructor de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco: "Con las leyes que hay y ejecutando sentencias no se está corrigiendo nada (...) ¿Cumplimiento íntegro, endurecimiento? No lo sé. Quien tenga una solución razonable, que la ponga en práctica. Algo hay que hacer. Esta locura tiene que acabar" (*El País*, 5/11/2000).

Los atentados de ETA contra concejales son un buen granero de votos para el

PP, no sólo en la CAV y Navarra, también en el resto del Estado. Durante este período el PP ha jugado a la estrategia del desgaste del PNV insistiendo en el adelanto de las elecciones vascas. Del “váyase, señor González” pasan al “márchese, señor Ibarretxe”, pensando que de esta manera tendrán nuevos réditos electorales. El PP ha utilizado sus posiciones de mayoría en el gobierno de Navarra, el ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava para desgastar al PNV y dividir y fragmentar aún más las distintas provincias vascas, como demuestra el hecho de que un destacado dirigente del PP en Álava anunciara que, en el hipotético caso de que se ejerciese el derecho de autodeterminación, el PP exigiría la salida de Álava del País Vasco.

El frente “españolista” cuenta además con un poderoso apoyo mediático e ideológico, tanto en medios de comunicación escritos, como en radio, televisión o en servicios prestados por “intelectuales” del tipo Savater, Mikel Azurmendi o Jon Juaristi, que como nuevos embajadores de la burguesía centralista en el terreno cultural, no se cansan de escribir contra el euskera, la “escuela borroka” y la marginación del castellano un día sí y otro también. También los colectivos “pacifistas” y de víctimas del terrorismo están siendo utilizados en una campaña sistemática contra los nacionalistas vascos, dando cobertura política a todos los prejuicios del españolismo. Se trata de una ofensiva global perfectamente planificada para justificar la política represiva del PP. Ya no es suficiente condenar el terrorismo: hay que estigmatizar la defensa de los derechos democráticos para Euskal Herria, especialmente el derecho de autodeterminación. Es una táctica que se resume sencillamente: “O con el PP, o con ETA”.

Esta situación de extrema polarización en el terreno nacional se explica fundamentalmente por la política de los partidos obreros. Tanto el PSOE como IU han sido incapaces de dar una alternativa de clase al problema de las nacionalidades, enganchándose al carro de la burguesía españolista y de la burguesía nacionalista.

En el caso del PSOE, su política en este terreno no es nueva; lo que sí es nuevo es su identificación completa con las posiciones del PP en un intento vano de aparecer con sentido de la responsabilidad en las cuestiones de “Estado”. En la práctica esta posición supone arrojar agua al molino del PP, que es el único beneficiado.

Con la elección de Zapatero como secretario general del PSOE esta postura entreguista no mermó. Igual que en las cuestiones de clase, Zapatero reforzó la política del PP respecto a Euskal Herria acordando los cambios de la legislación penal para endurecer la represión, respaldando la moción de censura que el PP presentó en el parlamento vasco y finalmente firmando con éste el pacto antiterrorista.

La manifestación multitudinaria en Barcelona en respuesta al atentado de ETA que costaría la vida al dirigente socialista Ernest Lluch, y que representaba dentro del Partido Socialista al sector proclive a tener una actitud más abierta respecto a la cuestión nacional, marcó un punto de inflexión. Parecía un hecho que el sector dominante en esos momentos en ETA estaba alejando a la organización de cualquier posible mesa de negociación pero era igualmente evidente que la

actitud provocadora del Partido Popular respondía a los mismos criterios. En la manifestación de Barcelona los dirigentes del PP escucharon, por primera vez, los pitidos de los manifestantes exigiéndoles un cambio en su política para solucionar la cuestión nacional.

A pesar de estos incidentes significativos, la continuidad de los atentados y la actividad armada de ETA fortalece dentro del aparato del PSOE a los sectores que quieren cerrar filas con el PP en la cuestión vasca. En enero del 2001 se firma el “Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo”. El pacto, suscrito por el PP y el PSOE, muestra la decisión de ambos partidos de reforzar “su unidad”, lo que de hecho significa apoyar acriticamente la política del entonces ministro de interior Mayor Oreja. El articulado del acuerdo antiterrorista es bastante claro:

Punto 1.- “El terrorismo es un problema de Estado”.

Hay que aclamar, por tanto, la política del Gobierno de Aznar. No caben críticas ni oposición al respecto, como las que hicieron más de cien mil personas en Barcelona.

Punto 2.- “El único déficit democrático que existe en la sociedad vasca es (...) la violencia terrorista”.

Esto implica negar la existencia de un problema político sin resolver en Euskal Herria como es el no reconocimiento del derecho de autodeterminación y el recorte de los derechos democráticos de libre asociación, de manifestación, la libertad de expresión, además de la guerra sucia y la tortura que se han llevado a cabo por parte del Estado.

Punto 3.- “La defensa de los derechos humanos y de las libertades públicas corresponde en primer lugar al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (...) de su capacidad y eficacia depende que se erradique en el País Vasco y en el resto de España la violencia”.

Queda claro que una vez más se apuesta por cerrar filas tras la vía policial. A estas alturas, tras más de cuarenta años de existencia de ETA y tras la dispersión de los presos, el endurecimiento de las penas, la progresiva ilegalización de la izquierda abertzale y la reforma del Código Penal y de la Ley del Menor, la burguesía española piensa que puede resolver el problema con más represión.

El acuerdo supone una receta acabada para perpetuar la situación de estancamiento, además de una trampa para el PSOE, algo que los dirigentes del PP saben perfectamente: Mayor Oreja declara sin ambigüedad que el pacto es un instrumento para combatir el nacionalismo, lo que provoca la patética intervención de los dirigentes del PSE-EE quitando hierro al asunto y calificando las declaraciones de Oreja de *lapsus linguae*.

LOS ATENTADOS DEL 11-S EN EE.UU.

Que vivimos en una época de enorme inestabilidad en la situación internacional,

una época muy proclive a cambios bruscos, quedó demostrado tras el 11-S, cuando dos aviones de pasajeros secuestrados por partidarios de Al Qaeda se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, derribándolas y provocando miles de víctimas en el corazón del distrito financiero de Nueva York. Las imágenes, transmitidas en directo por todas las cadenas de TV, sacudieron al mundo entero. De la noche a la mañana el Estado militarmente más poderoso del mundo se vio impotente frente al terrorismo individual.

Diez años antes, al caer la Unión Soviética, el presidente Bush padre prometió un nuevo orden mundial. El capitalismo tenía las manos libres para aplicar su política en todo el planeta. ¿Con qué resultados? El saqueo por parte de las 300 grandes corporaciones que controlan casi el 90% del comercio mundial ha creado enormes bolsas de miseria, guerra y caos que ahora han impactado en el corazón del imperialismo mundial. El terrorismo que representa el hambre mundial, la enfermedad, la miseria, la explotación y la opresión que atormenta a millones de hombres, mujeres y niños durante todos los días de sus vidas es la verdadera causa de la agitación e inestabilidad que recorre el planeta a principio del siglo XXI. En ninguna parte esto es tan obvio como en Palestina, donde la población de Gaza y Cisjordania sufre a diario los ataques sangrientos del imperialismo israelí, y en Iraq, donde diez años de embargo aprobado por la ONU y una intervención imperialista atroz han ocasionado la muerte a un millón de niños y decenas de miles de adultos. ¿Sorprende que exista odio hacia el imperialismo norteamericano que apoya a Israel o invade un país como Iraq destruyendo todas sus infraestructuras y asesinando a decenas de miles de hombres y mujeres inocentes?

Sin embargo, tal y como los marxistas señalamos, lo único que logró demostrar el ataque de Al Qaeda es que el terrorismo individual ayuda a la reacción. Las consecuencias de este ataque han sido profundamente reaccionarias. Las guerras imperialistas de Afganistán e Iraq y una ola de recortes de los derechos democráticos y de fortalecimiento del militarismo y el aparato policial en todo el mundo son los únicos resultados de esta masacre que en nada ayuda a la liberación de las naciones y pueblos oprimidos del planeta.

El imperialismo pudo utilizar los atentados del 11-S como una cortina de humo para tapar los efectos de la crisis económica desatada en EE.UU. en marzo de ese año, que provocó cientos de miles de despidos. Igualmente lograron desviar la atención de los escándalos financieros que sacudieron a grandes compañías, como la bancarrota de Enron, la mayor en la historia estadounidense.

El 26 de octubre, George W. Bush promulgó una nueva ley antiterrorista que es una patente de corso para las fuerzas policiales. Cualquier extranjero con un visado caducado puede ser encarcelado durante siete días hasta que se inicie el proceso de deportación. Además, la ley permite que “la sospecha de vinculación te-

49. Val del Olmo, A., *op. cit.*, págs. 251-52.

50. *Ibid.*, pág. 253.

rorrista” sea suficiente para encarcelar a cualquier inmigrante durante ese período; la policía adquiere plenos derechos sobre la vida de millones de inmigrantes. También contempla que un único permiso judicial sea válido para pinchar todos aquellos teléfonos “sospechosos” de ser utilizados en actividades terroristas; crea un fondo económico especial para financiar el seguimiento de las actividades de los 600.000 estudiantes extranjeros en las universidades de EE.UU.; acaba con el secreto de las comunicaciones entre detenido y abogado defensor, permitiendo que la policía grabe las conversaciones si hay sospecha de que el detenido forme parte del “entramado terrorista”; pone en marcha un programa racista que propone asignar a los inmigrantes extranjeros un código de barras para seguir sus movimientos e implanta una estrecha vigilancia sobre las comunicaciones por Internet, obligando a los servidores de la red a entregar el registro de actividades y los correos electrónicos de un “sospechoso” y de sus interlocutores.

El presupuesto militar de EE.UU. creció a partir de ese momento de manera desbordante, mientras se recortaban las partidas destinadas al desempleo, a los planes de asistencia social, becas, etc. Esta legislación de excepción se extendió a todos los países “democráticos y respetuosos con las libertades”. En Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania o el Estado español se endurecen las leyes con el mismo fin de restringir la libertad de expresión, organización y movimientos de la población. La excusa ya no es ETA sino el terrorismo islamista internacional cuyos dirigentes, reaccionarios como Bin Laden, fueron seleccionados y armados por la CIA para luchar en Afganistán contra la URSS.

En el punto álgido de esta campaña se llega a equiparar los movimientos antiglobalización con el terrorismo sanguinario del reaccionario Bin Laden. Un periódico tan “liberal” y tan “respetuoso” con las libertades civiles como *El País*, publicó el 16 de septiembre del 2001 un artículo de M. A. Bastenier titulado *La antiglobalización de los asesinos*: “La lucha contra la globalización, finalmente, congrega a extraños compañeros de cama. De un lado, los educados colectivos de Seattle y Génova, que más que el fin del mundo lo que piden es un lugar en el mismo, y de otro, la barbarie terrorista. Pero aunque no haya acuerdo posible entre ambas, las dos coinciden en la elección del enemigo. Por ello, aunque nadie quiera la alianza, lo cierto es que la antiglobalización posee ya un brazo armado y criminal”.

LA CRISIS DE LA IZQUIERDA

El 21 de octubre de 2001 se celebran elecciones autonómicas en Galicia. El desgaste del PP —baja del 51,9% de los votos al 50,9%— no es suficiente para lograr una mayoría de la izquierda, que aunque gana en seis de las siete grandes ciuda-

51. EMK-MCE: Euskadiko Mugimendi Komunista - Movimiento Comunista de Euskadi.

52. León Trotsky, *Der Kampf*.

des gallegas (Vigo, Coruña, Ferrol, Ourense, Lugo y Pontevedra) y sólo pierde en Santiago, apenas sube del 44,9% de los votos en las autonómicas de 1997 al 45,1% en éstas.

La razón de esta incapacidad hay que buscarla en la política de privatización de los servicios públicos impulsada por el PSOE y el BNG en toda una serie de ayuntamientos que controlan, y en el giro a la derecha de la dirección del BNG, que transforma el perfil inequívocamente combativo de la organización —que transmitía que el apoyo al Bloque, tanto electoral como en militancia, era sinónimo de lucha por cambiar la sociedad— en otro centrado en la actividad institucional y con aspiraciones de convertirse en una formación nacionalista respetable, al estilo de CiU o el PNV.

El ambiente crítico con los dirigentes de las organizaciones de izquierdas es generalizado. El PSE-PSOE entra en crisis en Euskadi con la dimisión de Nicolás Redondo Terreros y la formación de una Gestora presidida por Ramón Jáuregui. La mayoría del Partido en Guipúzcoa, una parte considerable en Vizcaya y, en menor medida, en Álava, se expresaban a favor de romper con la subordinación frente al Partido Popular.

El fin de semana del 23 y 24 de marzo de 2001 se celebró el Congreso extraordinario del PSE-PSOE en Donosti. El sábado Patxi López, candidato propuesto por las ejecutivas vizcaína y guipuzcoana del partido, es elegido como secretario general con 308 votos de respaldo (57%) frente a los 200 (37%) obtenidos por Carlos Totorika, representante del llamado sector *redondista*, y a los escasos 19 sufragios logrados por Genma Zabaleta, de la corriente denominada “nuevo socialismo vasco”. Patxi López promete construir un proyecto propio autónomo frente al PNV y PP que conecta con el sentir dominante entre los afiliados; sin embargo, tanto la ponencia política pactada con los redondistas y aprobada casi por unanimidad, como las posiciones defendidas por López en sus intervenciones, se limitan a fijar un relativo distanciamiento del pacto mantenido en el último período con el PP y a insinuar el acercamiento, que ya se ha venido produciendo en acuerdos parciales, con el PNV. En lo fundamental, es decir, en lo que se refiere a los derechos democráticos y a la defensa de una política de clase y socialista que realmente signifique una salida a los problemas de los trabajadores y la juventud en Euskal Herria, lejos de variar el rumbo, se insiste en mantener la misma política. Coincidiendo con el congreso, Zapatero negociaba con el PP el borrador de un proyecto de reforma de la Ley de Partidos encaminado inicialmente a la ilegalización de Batasuna.

La crisis del PSE coincidió en el tiempo con la crispación creciente entre el PP y el PNV, que llevó al fracaso de la negociación del Cupo y a un enfrentamiento abierto entre los dos partidos en las instituciones vascas. La bronca se hizo mayor al coincidir la presidencia española en la Unión Europea y la decisión del Gobierno de Aznar de enterrar cualquier forma de representación de las comunidades autónomas en los Consejos de Ministros de la Unión Europea.

Por lo que se refiere a Izquierda Unida, la federación vasca Ezker Batua decide

en 2001 entrar a formar parte del Gobierno vasco con el 40% del Consejo Político en contra, tras haberse negado a la realización de un referéndum entre la base. Este referéndum sí se realizó en Álava, donde el 92% de los militantes se pronuncian en contra de la participación de IU-EB en un Gobierno de derechas.

La estrategia del PNV a la hora de integrar a IU-EB en su gobierno era todo menos inocente. La burguesía vasca trataba de cubrir su flanco izquierdo y dar un barniz progresista a su política antiobrera y, al igual que ocurriera anteriormente con la izquierda abertzale, el pacto de gobierno suscrito por IU-EB les ataba de pies y manos al PNV. En este sentido, el articulado del acuerdo es transparente: 1.- "IU se adhiere a los principios y normas de funcionamiento de los acuerdos anteriormente suscritos por el PNV-EA". 2.- "La defensa de los principios y valores que integren la ideología de cada formación se desarrollará sin comprometer, cuestionar o menoscabar directamente o a través de polémicas o debates públicos el marco fijado en el Acuerdo de Coalición y en el presente Acuerdo, la acción política del Gobierno, la de cualquiera de sus miembros o los acuerdos parlamentarios". Si algo le faltaba al acuerdo no era claridad precisamente.

La dirección de Izquierda Unida y del Partido Comunista han disfrutado durante mucho tiempo de una ocasión de oro para ofrecer una alternativa de clase a la cuestión nacional. Sin embargo, toda su aportación ha consistido en jugar el papel de bota izquierda de la burguesía vasca en Euskadi, mientras que en el resto del Estado español se han plegado constantemente a las presiones de la burguesía española. Su entrada en Lizarra y más tarde en el Gobierno Vasco, en lugar de fortalecer su perfil de organización de clase, les convirtió en meros apéndices del nacionalismo burgués.

El ascenso electoral de IU-EB coincidió con el período de mayor desgaste del PSOE por su enfrentamiento con el movimiento obrero y en el que los métodos del terrorismo individual provocaron más cansancio y desmoralización en las filas y la periferia de la izquierda abertzale. IU-EB tuvo una enorme oportunidad para convertirse en un referente para la clase trabajadora frente al reformismo del PSOE y los métodos de ETA. Sin embargo, esta oportunidad fue de nuevo malograda por la falta de una política auténticamente socialista.

Hoy, la actitud de IU ante el problema nacional se refleja en su proyecto federal para el Estado español, que es una mala copia de las formulas federalistas liberales de principios del siglo XX. La estructura federal del Estado, mientras no afectase a su carácter capitalista, no resolvería el problema nacional, que hunde sus raíces en la explotación de clase. Una federación capitalista de nacionalidades y regiones no impediría los desequilibrios económicos regionales, ni el enfrentamiento entre las burguesías de Catalunya y Euskal Herria con la burguesía centralista. Una federación de ese tipo, a merced de las crisis económicas del capitalismo y del desarrollo desigual de los territorios del Estado, sería una fuente inagotable de conflictos que fomentaría todas las tendencias centrífugas. Otra cosa muy diferente sería una federación socialista.

La dirección de IU está fomentando artificialmente los prejuicios nacionalistas entre sus filas y en sectores de la juventud y de los trabajadores entre los que tiene un cierto eco. La estructura federal, tanto del PCE como de IU, es una puerta abierta a la disgregación de la organización en líneas nacionales y a la división de los trabajadores. Hace mucho tiempo, Lenin y otros teóricos marxistas explicaron por qué la estructura interna del partido revolucionario tiene que ser centralizada (centralismo democrático), manteniendo la unidad sagrada de los trabajadores por encima de sus orígenes nacionales. Una estructura unida del partido es el reflejo de la necesidad de la acción común del proletariado contra un enemigo que también actúa unido, la burguesía, y que dispone de instrumentos de dominación que ha ido perfeccionando a lo largo de los siglos, empezando por la maquinaria del Estado. La política reformista de los dirigentes del PSOE y del PCE ha contribuido a desarrollar auténticos reinos de taifas gobernados por los llamados "barones" que se han fortalecido con esta estructura federal, que aparenta mucha democracia pero que en la práctica refuerza el control burocrático de la organización.

Por otra parte, en el caso del PCE-IU, la defensa en abstracto del derecho de autodeterminación se ha transformado en la defensa de este derecho para todas las regiones del Estado, lo que es una auténtica aberración. La tarea del movimiento obrero y de sus organizaciones no es estimular, ni crear, allí donde no existe, el sentimiento nacional; por el contrario: de lo que se trata es de impedir que el nacionalismo burgués, enemigo declarado de la clase obrera, pueda contagiar al proletariado. La defensa del derecho de autodeterminación para Asturias, Andalucía, País Valenciano o Aragón, que no constituyen nacionalidades históricas ni naciones y donde el problema nacional no es sentido por la clase trabajadora, es una forma de extender los prejuicios nacionalistas entre los trabajadores, desviar su conciencia y poner obstáculos a la lucha por el socialismo.

A pesar de todas las equivocaciones de las direcciones de IU y del PCE, entre las bases de ambas organizaciones existe un sentimiento honesto de buscar una salida revolucionaria al problema de las nacionalidades y retomar el programa de Marx y de Lenin. Este sentimiento se ira abriendo paso como parte de una lucha más amplia para retomar el programa del genuino marxismo revolucionario.

LA LEY DE PARTIDOS

El 6 de febrero del 2002 el juez Baltasar Garzón ordenó la ilegalización de la organización juvenil Segi y de Askatasuna por ser parte de ETA. Con el mismo argumento se ilegalizaron las organizaciones juveniles Jarrai y Haika, y se detuvo a dirigentes de Ekin. La progresiva ilegalización de la izquierda abertzale seguía un curso bien planificado. Como pantalla de fondo para imponer estas medidas, el PP se encargó de ir criminalizando todo lo vasco, como en la dictadura.

El 12 de febrero el delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, arre-

mete contra la escuela pública vasca: “Los jóvenes salen de la educación a la guerra callejera que quema y destruye y de ésta al coche bomba o el tiro en la nuca”. El 13 de febrero, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Defensa del Senado, Agustín Díaz de Mera, en una opinión “más que personal” defiende utilizar el ejército para luchar contra ETA: “No hay que tener ningún complejo en referirse a la utilidad innegable de las Fuerzas Armadas en la represión del terrorismo interno (...) ¿Por qué no podemos ir donde todo el mundo quiere ir y casi nadie se atreve a pregonar, que es la colaboración efectiva... entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las Fuerzas Armadas?”. El 19 de febrero el Gobierno lanza abiertamente media docena de medidas para ilegalizar Batasuna después de haber fracasado en su intento de que la ilegalizase la Unión Europea.

¿Podían realmente estas medidas ayudar a llevar la tranquilidad a las calles de Euskal Herria y del resto del Estado? Nada más lejos de la realidad. El 28 de febrero *El País* publicó los datos de un estudio realizado por el Centro de Investigación de Expectativas Sociales. Según dicho estudio, 18.000 jóvenes (el 3,7% del total) participaban o estaban dispuestos a participar en la kale borroka para lograr la independencia de Euskal Herria. De los 1.200 jóvenes vascos entrevistados, un 2,9% declaraban su apoyo personal a ETA. Sólo este dato demuestra la incapacidad del sistema para resolver el problema de una sociedad enferma donde la juventud ve el futuro con frustración. La carestía de la vivienda, la precariedad en el empleo, los bajos salarios, la droga, la represión... conforman el cuadro que provoca tales resultados. La respuesta del PP a estos problemas es la represión y la cárcel.

Mientras tanto, ETA continúa con la actividad armada: atenta contra el dirigente de las Juventudes Socialistas Eduardo Madina y coloca una bomba contra un concejal socialista que revienta en el barrio obrero de Sestao ¿En qué podían ayudar estos atentados a la causa de Euskal Herria por los derechos democráticos?

Finalmente, con el apoyo del PSOE, Coalición Canaria y CiU, el Gobierno presentó la Ley de Partidos, una ley hecha expresamente para ilegalizar definitivamente a la izquierda abertzale. El 4 de junio fue aprobada en el Congreso y el 26 del mismo mes entró en vigor. La nueva ley, en sus Principios Generales, declara: “Los partidos políticos deberán respetar en sus actividades los principios democráticos y los valores constitucionales (...). Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad no se ajuste, de forma reiterada y grave a lo dispuesto en el apartado anterior”. La Constitución declara la defensa del principio de propiedad privada, esto es, el capitalismo. Es evidente que los que estamos contra el capitalismo no nos sentimos representados en esta Constitución burguesa. La Constitución es monárqui-

53. El FRAP, surgido a mediados de los setenta, fue una organización vinculada al PCEmI que se lanza a la “lucha armada” en el verano de 1975, para contribuir al derrumbamiento de la dictadura atentando contra policías y guardias civiles.

54. Todos los datos sobre los fusilamientos están tomados de Grimaldos, A., *La sombra de Franco en la Transición*, Madrid, Ed. Oberon, 2004.

ca, por tanto, la defensa de la República, ¿podrá ser considerada como una “actividad contra los valores constitucionales”? La ley es además explícita definiendo los “supuestos de ilegalidad”: “Fomentar el odio, la violencia y la confrontación social como método para la consecución de objetivos políticos o perseguir la imposición de pretensiones políticas procurando la desaparición de las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, el pluralismo y de las libertades políticas y la creación de un clima degradado de enfrentamiento y exclusión”. Según este texto, defender la lucha de clases, la huelga general, la insurrección de la clase obrera contra el capitalismo, la expropiación revolucionaria de la burguesía... coloca a cualquier organización auténticamente de izquierdas a merced de dicha Ley.

Otro apartado de la misma ley señala “las conductas concretas que provocan la ilegalización”: “Dar apoyo expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas (...) o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta”. El marxismo está contra el terrorismo individual pero explica que su existencia es un síntoma y no la causa de una sociedad enferma, el capitalismo. ¿Acaso no puede interpretarse que esta postura política “exculpa y minimiza su significado”?

La Ley prevé acabar con cualquier partido político “que apoye desde las entidades que gobierna a agrupaciones alternativas a las instituciones constitucionalmente establecidas”. Hasta Ezker Batua, que apoya a Udabiltza, podría ser ilegalizada.

En el apartado acerca de cómo se ilegalizará un partido que actúe en esos supuestos, la Ley dice: “La disolución judicial de un partido o en su caso, su suspensión será acordada (...) cuando no respete en sus actividades los principios democráticos y los valores constitucionales, de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior. Están legitimados para instar la declaración de ilegalidad: El Gobierno, cincuenta diputados, cincuenta senadores o el Ministerio Fiscal”. Además será la Sala Especial del Tribunal Supremo la que tenga todo el poder en sus manos para dejar fuera de la Ley a un partido. Los efectos de la disolución serán “el cese inmediato de toda actividad (...) la liquidación patrimonial y la incapacidad de volver a presentarse a ninguna elección”.

La Ley de Partidos no afecta sólo a la izquierda abertzale, ni su principal objetivo es acabar con la táctica del terrorismo individual que practica ETA. La política de Aznar con relación a esta cuestión era absolutamente calcada a la del presidente de EE.UU.: “El que no está conmigo está contra mí”. En el debate sobre la norma se apunta amenazadoramente con el dedo a todo aquel que “pretenda ligar su futuro al de los violentos”, como si no se supiese claramente que en ese campo cabe todo el que se oponga a la violencia que ejerce la burguesía contra la clase trabajadora y las naciones oprimidas.

La excusa de dicha ley fue la lucha contra el terrorismo pero, ¿se puede creer que ilegalizando a un partido que ha obtenido hasta 240.000 votos y que moviliza per-

55. Grimaldos, A., *op. cit.*, pág. 50.

manentemente a decenas de miles de personas se va a terminar con la autodenominada “lucha armada”? Esta ley supone echar gasolina al fuego. De todas formas, las auténticas intenciones del PP en materia de libertades quedaron bien claras con el hecho de que mientras se discutía esta ley, el Gobierno de Aznar apoyaba un golpe de Estado en Venezuela contra el presidente Hugo Chávez, un golpe urdido por la oligarquía venezolana y el imperialismo norteamericano que, de haber triunfado, habría supuesto el asesinato de miles de activistas de la izquierda. He ahí el amor a la legalidad democrática y al derecho a la vida que practican los dirigentes del PP.

HACIA LA HUELGA GENERAL

La actitud prepotente del PP en la cuestión nacional se reflejaba también en su consideración hacia el movimiento obrero. El gobierno de Aznar aprobaría un decreto-ley impulsando una contrarreforma laboral salvaje un día después de ser convocada la huelga general contra dicha medida.

La clase obrera llevaba perdiendo derechos y conquistas desde hace años. Este proceso se agudizó tras la caída del muro de Berlín y el colapso del estalinismo, dando paso a una ofensiva brutal de la burguesía contra los salarios y los derechos de los trabajadores. En las fábricas se vivió una auténtica contrarrevolución que continúa en la actualidad. Después de años de concesiones y desmovilización, la paciencia de los trabajadores había llegado a un límite: el 20 de junio de 2002 más de diez millones de trabajadores secundaron activamente la huelga general y más de cuatro millones participaron ese mismo día en multitudinarias manifestaciones. Desde primera hora de la mañana los datos sobre consumo de energía eléctrica muestran la gran repercusión de la huelga, lo que llevó al gobierno a prohibir, bajo amenaza de despido, a que se hicieran públicos esos datos reveladores. Pero el PP tiene un plan muy acabado para intentar minimizar los efectos de la huelga: utilizando la maquinaria de TVE manipula y miente de forma tan descarada que provoca la indignación general de los trabajadores. Es una estrategia que repiten de forma similar en las jornadas del 12 y 13 de marzo de 2004, tras los atentados integristas de Madrid.

Sorprendentemente en estas circunstancias, la dirección de ELA y LAB niegan su apoyo a la huelga del día 20 y en su lugar convocan una huelga general en Euskal Herria un día antes, con el lema “Sobran razones”. La convocatoria, lejos de ser una “preparación” para la huelga del 20, produce una división en cada fábrica, centro o taller sobre qué convocatoria apoyar. Los trabajadores que apoyen el 20 serán los esquirols el día 19 y los huelguistas del 19 serán los esquirols el 20. Los piquetes están divididos y los indecisos justifican no apoyar ni la una ni la otra. ¿Quién saldrá beneficiado de esta estrategia sino el gobierno de Aznar

56. Para más información ver Val del Olmo, A., *op. cit.*

al que dicen combatir? Muchos trabajadores vascos se preguntan, ¿por qué no dieron continuidad a la huelga general del 21 de mayo de 1999 a favor de las 35 horas y contra la política antisocial del PNV en lugar de dividir ahora? Si ELA y LAB querían desmarcarse por la izquierda, ¿por qué no lo hicieron ofreciendo un calendario de movilizaciones para después del 20, dando continuidad a la huelga general?

A pesar de la división, el seguimiento importante de ambas convocatorias demostró que en Euskal Herria había un doble descontento con la política del Partido Popular; por el machaque a los derechos democráticos nacionales y por los ataques a la clase trabajadora.

ILEGALIZACIÓN DE BATASUNA

El PP trató de tapar los ecos de la huelga general, nuevamente, con el llamado “problema vasco”. El lunes 26 de agosto el Pleno del Congreso es convocado en sesión extraordinaria para promover la ilegalización de Batasuna, contando con los votos a favor de 295 diputados del PP, PSOE, Coalición Canaria y Partido Andalucista. Diez diputados votarían en contra —los del PNV, ERC, EA e Iniciativa per Catalunya— y los 29 pertenecientes a Izquierda Unida, BNG, CiU y Chunta Aragonesista, se abstendrían.

El PP no dudó en utilizar el insulto y la coacción contra sus oponentes, llegando a afirmar que el día 26 se vería quién es un demócrata (los que votasen a favor), quién está con los terroristas (los votos en contra) y quiénes son los cobardes (la abstención). IU preguntó en el debate en función de qué trayectoria histórica o personal se basaban los dirigentes del PP para considerarse autorizados para medir la “voluntad democrática” de las demás organizaciones. Sin embargo, lo que constituía una buena pregunta quedó reducido a retórica. A la hora de la verdad la dirección de IU, en lugar de oponerse a la ilegalización de Batasuna, se abstuvo. Su argumento de que era preferible que la ilegalización la impulsase el juez Garzón en lugar del Parlamento, era una excusa patética. En el fondo del razonamiento de la dirección de IU pesaba más el cálculo oportunista de los votos que una posición de clase que permitiese movilizar a los trabajadores en defensa de los derechos democráticos. Una vez más la dirección de IU se plegaba vergonzosamente a las presiones de la opinión pública de la burguesía.

El mismo día de la votación, el juez Baltasar Garzón suspendió durante tres años, prorrogables a cinco, las actividades de Batasuna, lo que implicaba “la clausura de sedes, locales, establecimientos y cualquiera otros centros de los que dispusiere o utilizare directa o indirectamente y con independencia del lugar donde

57. Rey, D., *La Transición, un análisis marxista*, en *Marxismo Hoy* nº 9, Madrid Fundación Federico Engels, 2001, pág. 6.

se hallen (...) la suspensión de todas las actividades orgánicas, públicas, privadas, institucionales de todos y cada uno de los ámbitos y organismos públicos, registros, bancos, fundaciones, asociaciones, sociedades, etc.”.

Pocas horas después de aprobarse dicha resolución judicial, lo que hace una década hubiese parecido imposible en Euskal Herria comienza a aplicarse. En Navarra la Guardia Civil y la Policía Nacional proceden al desalojo de numerosas sedes de la izquierda abertzale, al igual que la policía vasca en la Comunidad Autónoma. En cuatro días se clausuran 25 locales —entre ellos sedes de asociaciones culturales, bares, restaurantes y sedes de Batasuna— a pesar de la resistencia de centenares de militantes abertzales que las ocupan. La Ertzaintza se emplea a fondo con abundante material antidisturbios, llegando al ridículo de rodear la sociedad Intxaurre Kultur Elkartea de Durango para prohibir una asamblea que resultó ser de una asociación cultural. A partir de ese momento los derechos democráticos quedan recortados drásticamente, como se comprueba en la manifestación del día 7 de septiembre, prohibida por el Departamento de Interior del Gobierno Vasco. Al amparo de esta ofensiva se decreta la prohibición de cualquier manifestación que se oponga a la ilegalización de Batasuna; el ambiente recuerda a los estados de excepción decretados bajo el franquismo.

Arnaldo Otegi, portavoz de la plataforma ilegalizada, afirmó en aquel momento que la ilegalización de Batasuna representaba un ataque a Euskal Herria. Pero esta afirmación ocultaba una realidad sangrante. En Euskal Herria hay clases sociales y la burguesía vasca, a través de su instrumento político, el PNV, sólo pensaba en sacar ventajas electorales y políticas de la ilegalización de la izquierda abertzale. Por eso no dudó en cerrar las sedes de Batasuna con la contundencia que hiciera falta, para ello había creado una policía a la medida de sus intereses de clase.

El 15 de septiembre una manifestación en Bilbao con más de 40.000 personas es brutalmente agredida por la Ertzaintza, que carga indiscriminadamente provocando numerosos heridos, uno de los cuales pierde un ojo. La imagen de los manifestantes manteniendo prietas las filas, aguantando la carga policial y con el puño en alto se convertirá en un símbolo de denuncia contra la hipocresía de la burguesía vasca, que dice una cosa y hace la contraria. Las críticas arrecian dentro y fuera del PNV. Ante esta situación el aparato del PNV, que teme los efectos de éstas puedan tener en las próximas elecciones municipales, las primeras que se celebrarán sin la izquierda abertzale, cree que ha llegado el momento de tomar una iniciativa audaz. El 27 de septiembre, el lehendakari Ibarretxe presenta en el Parlamento vasco su “Plan” para “solucionar” la cuestión nacional vasca a través de la negociación de un nuevo pacto político con el Estado que contempla la “soberanía compartida” y el “reconocimiento de Euskal Herria a decidir su propio futuro”.

EL ‘PLAN IBARRETXE’

El PNV lanzó el *Plan Ibarretxe* con la intención de evitar que la ilegalización de Batasuna, que ellos se encargaron de llevar a cabo concienzudamente, fuese el epicentro de la vida política en Euskal Herria.

El momento y la forma en que se presentó dicha propuesta sugerían que el objetivo de la misma nunca fue lograr la autodeterminación para Euskal Herria. De lo que se trataba era de retomar la dirección del escenario mientras el Gobierno del Estado, Garzón y la Ertzaintza se afanaban por ultimar la progresiva ilegalización de la izquierda abertzale.

La mera presentación de este plan permutaba al PNV de verdugo —que reprime manifestaciones y cierra sedes abertzales— en víctima de la derecha, del centralismo, de los jueces, del Tribunal Constitucional.

Una tortura denunciada frecuentemente por los presos es la aplicación de una sencilla bolsa de plástico sobre la cabeza del torturado, sometiéndole a una situación de ahogo y asfixia. La política respecto a la izquierda abertzale diseñada por el PP con el apoyo de la dirección del PSOE y aplicada por el PNV “muy a su pesar” —faltaría más!— implica, en política, algo similar. Les arrebataron las siglas, el dinero, medios de comunicación como *Egin*, *Egin Irratia*, *Ardi Beltza*, las sedes... No sólo eso: todo lo que pudiese estar o aparecer siquiera cercano como AEK, *Egun-karia*, los *gaztetxes*⁷⁴, las herriko tabernas, incluso distribuidoras o productoras de material en euskera. Todo, absolutamente todo, fue sometido a ataque, dejando en la indefensión además a centenares de trabajadores afectados. Por si todo ello no fuese suficiente, con el Plan Ibarretxe el PNV logró quitarles hasta el protagonismo y aparecer como los principales sujetos de la represión. Solo faltaban los votos y la militancia.

Ya no se hablaba de la ilegalizada Batasuna ni del recorte de los derechos democráticos de manifestación, de expresión, etc. Se hablaba del Plan Ibarretxe, y pretendían que esto durase años.

Por otra parte, mientras el Plan Ibarretxe concentraba la atención de los medios de comunicación, la burguesía vasca podía continuar aplicando su política de recortes sociales y privatización del sector público, como el decreto de 0 a 3 años en la Educación pública y los recortes dramáticos en la sanidad como denunció ELA y, lo más importante, intentar fragmentar a la izquierda abertzale para conquistar a parte de su base social y atraer sus votos en las nuevas citas electorales. No está mal conseguir todo esto con un solo plan.

A partir de ese momento el PP movilizará todas las baterías mediáticas con que cuenta la reacción y el Estado contra este supuesto plan independentista. La polarización en líneas nacionales, lejos de retroceder, aumentaría hasta un límite desconocido. El ruido y el estruendo siempre ha sido un elemento utilizado en todas las guerras, y algunas veces ha servido para ganar batallas desiguales.

UNA CAMPAÑA PARA CRIMINALIZAR TODO LO VASCO

No es nada novedoso que la burguesía de cualquier país, cuando está en dificultades, busque enemigos externos a los que responsabilizar de los problemas. Lo ha hecho EE.UU. en la Guerra contra Afganistán e Iraq, pretendiendo ocultar los problemas de su economía que provocó dos millones y medio de obreros despedidos. ¿Por qué no lo iban a hacer Aznar, Rajoy, Oreja y compañía?

Tras la ilegalización de Batasuna el juez Baltasar Garzón descubrió que, durante décadas, dicha formación política había aplicado en Euskal Herria una “limpieza étnica de baja intensidad” para ganar una futura consulta sobre la autodeterminación. Probablemente algunos se hayan ido como consecuencia del sectarismo y el temor a sufrir atentados pero el grueso de las cerca de 200.000 personas que han abandonado Euskadi en las últimas décadas son trabajadores que perdieron sus empleos por la reconversión industrial. Los sondeos revelan que casi 45.000 familias sufren extrema pobreza entre la CAV y Navarra, es decir, cerca de cien mil personas excluidas socialmente, y si se considerase la imposibilidad económica para llegar a un mínimo de comodidades que se corresponden con una sociedad desarrollada, las cifras se elevarían a 220.000 hogares y 500.000 personas afectadas. En el año 1996 el 3,4% de la población se consideraba pobre y en el 2000, el porcentaje había subido hasta el 4,1%.

Durante años los medios de comunicación extendieron la idea de que Euskal Herria, como nación, era una pura invención de los violentos. Mientras tanto, el Gobierno del PP se lanzó literalmente a la conquista de las calles de Euskal Herria enarbolando banderas de España “contra el nacionalismo obligatorio”. Es evidente, incluso para el que no se considere nacionalista, que el único nacionalismo obligatorio es, en todo caso, el español: en Vitoria-Gasteiz se conmemora el Estatuto de Gernika al son del himno nacional; se acusa a cualquier representante de Batasuna de ser miembro de comandos de ETA en plena televisión y se apunta a cualquiera que discrepe como “colaborador de ETA”. Los recortes democráticos se extienden fuera del País Vasco. Cuando el día 5 de octubre, UGT y CC.OO. organizan una marcha estatal a Madrid contra el decretazo, el delegado del gobierno en la capital les prohíbe el recorrido de tres manifestaciones.

Resultaba auténticamente grotesco ver al Partido Popular, heredero directo de la derecha franquista, repartir certificados de demócratas y premios a los Savaater, Nicolás Redondo y otros que no tuvieron empacho en hacer el papel de marionetillas de la reacción. Lo repartieron ellos precisamente, los autodenominados nacionalistas que diezmaron y asesinaron en masa a miles de trabajadores en la Guerra Civil.

En la actualidad, como en los años treinta, el nacionalismo más perverso, violento y venenoso es el nacionalismo opresor de la clase dominante española, que destila tufillos imperiales de potencia venida a menos.

Durante años el PP ofreció espectáculos nauseabundos, pero no desprovistos de humor casposo, como la fastuosa descripción por parte de Federico Trillo, ex mi-

nistro de Defensa, de la “modélica” reconquista de la aquí conocida como isla de Perejil, poblada por un modesto ejército de cabras. En un delirio de patrioterismo, el ex ministro llegó a afirmar que la conquista tenía “que haber sido ocho años antes para que pudiésemos disfrutar de la pesca en los caladeros marroquíes”. ¡Qué chovinismo apestoso! Pero el de Perejil no fue el único ejemplo de estos aires patrióticos. La instalación de una enorme bandera española en el centro de Madrid, a la que se pretendía que todos rindiésemos honores, fue un buen ejemplo de este delirio. Y qué decir de las visitas patrias del ejército a las escuelas públicas para promover el amor a la rojigualda y, de paso, reclutar efectivos para la tropa.

Estas expresiones de amor patrio complementaban la actitud sumisa y servil, auténticamente lacayuna, de la derecha española ante el imperialismo norteamericano. Qué gráfico ver a Aznar en las Azores correteando a las espaldas de Bush para colocarse a su derecha y sacarse una foto “entre los grandes”. ¡Cómo tuvo que disfrutar la rancia oligarquía española con esa foto! Los tres grandes del planeta: EE.UU., la superpotencia actual, la Gran Bretaña, que dominó el mundo, y la más grande aún España, donde no se ponía el sol. Nos los podemos imaginar añorantes del pasado imperial mientras masacraban al pueblo iraquí y despreciaban las movilizaciones de masas más grandes de Europa, que no por casualidad se dieron en el Estado español.

En esta ola de chovinismo españolista reaccionario los ministros del PP llegan a negar la existencia misma del pueblo vasco, al que se refieren como “ese supuesto pueblo vasco”. En nombre de la soberanía del pueblo español que proclama la Constitución, niegan igualmente la capacidad de decisión del pueblo vasco sobre su propio futuro.

Si en primer lugar las baterías legales y mediáticas se dirigieron contra la izquierda abertzale asimilando a ETA hasta las herriko tabernas (su supuesta fuente de financiación), más tarde todo el que osó levantar su voz contra el creciente totalitarismo reaccionario del Partido Popular entró en su punto de mira: la izquierda que se movilizaba contra el desastre del *Prestige* o contra la guerra; los trabajadores de Sintel; los sindicatos de clase, a los que se recortó el derecho de manifestación y se reprimió violentamente (recuérdense las cargas contra la sede madrileña de UGT durante huelga general del 20 de junio); el Sindicato de Estudiantes, tildado de “los amigos de HB” por el diario *Abc*; los trabajadores de Puertollano o del sector naval han sido víctimas de este carnaval de insultos y represión.

Tampoco se libraron de esos ataques el PSOE e IU, soportando también el dedo acusador del PP en las manifestaciones contra la guerra o en la constitución del Tripartito en Catalunya, cuando desde el gobierno de Aznar se advirtió a Maragall que “él también podría ir a la cárcel” si intentase celebrar consultas en Catalunya.

Las amenazas del Partido Popular alcanzaron, como no podía ser de otra manera, al PNV. La misma burguesía vasca que aplaudió la llegada del primer gobierno del Partido Popular, que apoyó la investidura de Aznar y descubrió su talante dialogante y democrático, fue objeto de la más sañuda de las campañas contra el

llamado Plan Ibarretxe. El Gobierno del PP no ahorró medios: desde las maniobras militares en Euskal Herria, desarrolladas al mismo tiempo que el gobierno vasco presentaba su plan, a las amenazas, cada vez más viscerales, de “utilizar todos los medios a su alcance sin excluir ninguno” para garantizar la unidad de la nación española. Todo formaba parte de una campaña en la que intervinieron los medios de comunicación, las asociaciones empresariales, los banqueros, la cúpula eclesial, el aparato judicial en su más alta instancia, etc.

Las amenazas contra el lehendakari, aprobando una ley específica para enviarlo a la cárcel si sometía su plan a referéndum, o la persecución de la mesa del Parlamento vasco por tratar de ejercer una soberanía proveniente de la voluntad de la ciudadanía vasca, mostraban a las claras que la derecha estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias.

LA LUCHA DE MASAS SE EXTIENDE

Tras la huelga general del 20-J se sucedieron movilizaciones cada vez más masivas. Una de ellas ocupó un lugar de honor por su extensión y significado: la movilización ciudadana contra el desastre del *Prestige* en Galicia, un auténtico terremoto social que desenmascaró la prepotencia y el desprecio del gobierno de la derecha hacia las condiciones de vida de miles de familias trabajadoras de Galicia⁷⁵.

No era la primera vez que las costas gallegas se teñían de negro llevando la ruina para los hombres y mujeres de la mar. En esa tierra de emigración, los grandes desastres ecológicos han sido la norma: *Urquiola*, *Mar Egeo*, *Casón*... Llovía sobre mojado. En los últimos treinta años, de los once desastres marítimos más importantes ocurridos en Europa, siete fueron frente a las costas gallegas. Los derrames suman 300.000 toneladas de crudo pero no hay remolcadores ni buques anticontaminantes en todo el Estado y sigue sin hacerse nada.

Como en otras muchas citas dramáticas con la historia, la población no pudo esperar de sus gobernantes más que la consabida prepotencia, el insulto y la más supina parálisis y estupidez. La derecha respondía de forma caciquil⁷⁶ a una catástrofe causada por la ineptitud, la imprevisión y la falta escandalosa de medios materiales y humanos.

El desastre del *Prestige* fue también el desastre del Estado burgués. Abandonados a su suerte, los marineros y las mariscadoras hicieron frente por sí mismos a la marea negra. La ría de Arousa simboliza esa lucha de los trabajadores del mar y dentro de ella, fue en O Grove donde la organización y la lucha alcanzaron su nivel más elevado. En esta localidad se formó un Comité de Emergencia con seis comisiones de trabajo: Almacén y distribución, Alimentación y hospedaje, Vigilancia en el mar, Actuaciones en las playas, Recursos humanos y Fauna. Organizaron incluso un servicio de masajes para los miles de voluntarios que se desplazaron a retirar el chapapote. Las primeras tareas del comité consistieron en

conseguir material para la limpieza (desde prendas personales hasta bidones y camiones para el transporte) y gestionar la comida y las habitaciones, todo al margen, e incluso en contra, del Ayuntamiento. De hecho, el primer material institucional llegó después de varios días con miles de personas trabajando.

Este comité se transformó en el centro real del poder en O Grove: creó diversos grupos de diez hombres para salir todos los días al mar en los barcos bateiros y organizó en la lonja un comedor para los voluntarios (llegaron a darse 500 comidas y cenas diarias), atendido por las mariscadoras, que también se encargaban de la limpieza de los capachos, botas, ropas de agua... Su autoridad como centro de respuesta a la catástrofe, frente a la estupidez de la Xunta y del Gobierno del PP, fue tan evidente que Protección Civil, la Policía Municipal y hasta la Guardia Civil seguían las indicaciones del comité. El teléfono 900 para el voluntariado estaba conectado con el comité y, cuando a los diez días aparecieron las primeras fuerzas del ejército, éstas se pusieron a sus órdenes y le ofrecieron vehículos militares con conductor para transportarles adonde quisieran.

Sin la acción decidida de las masas, que sin esperar a nadie acotaron y redujeron la marea de forma valiente y decidida cogiendo el chapapote hasta con las manos, y sin su espontánea organización, que con su ejemplo movilizó a miles de voluntarios de todo el Estado e incluso del extranjero para las labores de limpieza, los daños hubiesen sido irreparables. La gente se dio cuenta de hasta dónde podía llegar el PP con su inoperancia y de hasta dónde podían llegar ellos con su acción, exprimiéndose los sesos para buscar soluciones. Las transformaciones de los aparejos que se utilizaron para coger el fuel vertido eran inmediatas. Fue un proceso de ingenio y creatividad impresionante.

Pasados los momentos más graves, el PP, apoyándose en los intereses privados para convertir la limpieza de la costa en un negocio, iría sustituyendo este poder paralelo por el poder establecido pero las lecciones quedaron en la memoria colectiva de la clase trabajadora. La Plataforma Nunca Más movilizó a centenares de miles de personas, organizando una marcha a Madrid el 23 de febrero de 2003 que reunió a cerca de un millón de manifestantes. Nunca Más también fue acusada de estar dirigida por amigos de etarras y de malversación de fondos. Incluso Fraga, recurriendo al mensaje habitual de la derecha, acusó a los voluntarios vascos de llevar la kale borroka a Galicia, tratando de esta manera de desacreditar al movimiento solidario que estaba salvando las costas y la economía gallega.

En un intento de desviar la atención del desgaste del *Prestige*, o pensando en que con tanto ruido se notaría menos, el 3 de enero de 2003 el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley sobre cumplimiento íntegro de las penas,

58. ANV: Acción Nacionalista Vasca. LAIA: Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia. ESB: Euskal Sozialisten Biltzarrea. HASI: Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea. Partido Socialista Revolucionario Popular.

norma que eleva de 30 a 40 años el período máximo de cárcel por terrorismo y delitos muy graves, limita los beneficios penitenciarios y exige la delación para quienes deseen reinsertarse a la vida civil. Distintos constitucionalistas y penalistas burgueses caracterizaron dichas medidas como una regresión democrática. “Las penas privativas de libertad están orientadas hacia la reeducación y reinsertión social”, señalaba en *El País* (31/12/ 2002) el catedrático y penalista Gonzalo Quintero Olivares, para quien este incremento de la duración máxima de la pena “sólo puede ser fruto de la ignorancia en materia de política criminal (...) Cuarenta años de condena sin beneficios penitenciarios equivale materialmente a la reclusión perpetua”, esto sin considerar las horribles condiciones de las cárceles: cerca de un 50% de reclusos con sida, malos tratos, masificación, etc.

El recurso de desviar la atención de la población con el “problema vasco” no podía ocultar la creciente y masiva contestación social a la política del gobierno. La movilización de masas alcanzaría su punto más álgido durante la guerra imperialista contra Iraq que, como cabía suponer, recibió el respaldo entusiasta de Aznar y su partido.

Durante dos meses millones de personas se movilizaron por todo el Estado español, coreando en las manifestaciones toda clase de consignas contra el gobierno. Como siempre, la juventud se colocó a la vanguardia de la lucha y fue la primera en salir a la calle. El Sindicato de Estudiantes, que llevaba dos años convocando a cientos de miles de jóvenes contra los ataques de la derecha a la educación pública, convoca una huelga general de estudiantes el 13 de febrero para preparar las movilizaciones convocadas por las plataformas en distintos países para el día 15. Más de cien mil estudiantes salen a las calles en 50 manifestaciones por todo el Estado. La jornada del día 15 situará al Estado español en la punta de lanza de la lucha contra la guerra imperialista a escala internacional, logrando la participación de más de seis millones de personas en las manifestaciones más grandes y numerosas de los últimos veinticinco años. Todo el malestar acumulado en años, toda la frustración, rabia y resentimiento contra la derecha se expresó con furia. Mientras, el gobierno del PP, atrincherado en su mayoría absoluta en el parlamento, trataba de ignorar las marchas que inundaban cada avenida de cada ciudad y pueblo en todo el Estado.

El 15 de febrero de 2003 se sucedieron en todo el mundo manifestaciones multitudinarias contra la guerra imperialista en Iraq. Según la CNN, 200 millones de personas se manifestaron en 600 ciudades de cien países diferentes y en los cinco continentes. Fue la primera manifestación global de la historia. Las más numerosas tuvieron lugar en aquellos países cuyos gobiernos se alinearon sin reservas junto a EE.UU. En Melbourne (Australia) se manifestaron 200.000 personas y en Sydney medio millón; en Gran Bretaña dos millones de personas desfilaron por las calles de Londres; en Roma salieron a la calle tres millones de personas y el sindicato de transporte anunció el boicot al transporte de material bélico; en Ale-

mania un millón y medio de personas se manifestó en diferentes ciudades, 500.000 de ellas en Berlín; en Bruselas participaron 100.000; en Copenhague, 40.000; en Portugal, 100.000; en París, 200.000; en Atenas, 150.000; en Dublín, 200.000; en Belfast, 10.000. También en EE.UU., a pesar de la prohibición, participaron 500.000 manifestantes en Nueva York, 100.000 en los Ángeles y así un largo etcétera. Asimismo hubo manifestaciones en las principales ciudades de América Latina, en Tokio... En Damasco (Siria) fueron 200.000, cifra que se repetiría diez días después en Rabat (Marruecos). ¡Y todo esto para evitar el estallido de la guerra!

EL GOBIERNO ACUSA EL DESGASTE

El Gobierno del PP utilizó habitualmente con éxito la cuestión nacional vasca para aglutinar apoyos a su alrededor. Así que, ante las grandes manifestaciones contra la guerra, Aznar manda redoblar los esfuerzos. El 20 de febrero, por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, más de 300 guardias civiles toman las sedes de *Egunkaria*, el único diario en euskera que circula en Euskal Herria. Detienen a diez directivos y suspenden la publicación del periódico. *El País*, que ha estado animando la política represiva del PP, se distancia tímidamente de este nuevo recorte a la libertad de expresión. El día 22 se produce una manifestación multitudinaria en San Sebastián con cerca de 200.000 personas. El PNV y EA apoyaron la manifestación, así que esta vez no hubo helicópteros ni *beltzas* como en la huelga general o el 15 de septiembre, cuando el PNV reprimió violentamente la manifestación de Bilbao. También acudieron algunos dirigentes del PSOE como Genma Zabaleta mientras Rojo y Rubalcaba apoyaban el cierre de *Egunkaria* y proclamaban respeto a la “independencia” judicial. Estos hechos se producían en el mismo momento en que los artistas, intelectuales o los dirigentes del PSOE que participaban en las manifestaciones contra la guerra en Iraq, estaban siendo atacados duramente por el PP.

Los ataques a los derechos democráticos y a la libertad de expresión eran tan exagerados que el 20 de febrero, a iniciativa del Comité de Empresa de RTVE, se constituye un Comité Contra la Manipulación Informativa, que cuenta con un amplio respaldo de trabajadores y profesionales. El aspecto considerado más grave por dicho Comité en su primer informe es la criminalización de los manifestantes contra la guerra: “En varios informativos, el asalto al supermercado de unos grandes almacenes o el boicot de un acto de campaña de un candidato del PP y la agresión al mismo, ocupan mayor espacio y énfasis (en la presentación y titulares con los que se acompaña) que hechos tan graves como el bombardeo de un mercado en Bagdad con quince muertos”. En el Telediario de *La Primera* del sábado 22 de

marzo de 2003, al informar de las manifestaciones contra la guerra en Madrid, se utiliza el término “violentos” en lugar de “manifestantes”; además, en la crónica se habla de “diez heridos” por la brutal actuación policial cuando el propio servicio de emergencias y las agencias del día dan la cifra de “cincuenta heridos”. La realidad fue aún muy superior, ya que hubo 178 heridos atendidos por los servicios médicos, muchos de los cuales necesitaron atención hospitalaria; también hubo siete detenidos. Respecto al Telediario de *La 2* del día 26 de marzo, el informe denuncia que la presentación dedica la mitad del tiempo a detallar el “clima de violencia que se ha instalado en torno a las protestas”, concluyendo con la siguiente frase: “Lo que ocurre en Iraq y los métodos del terrorismo callejero han cerrado esta tarde el debate en el Congreso”.

LOS EFECTOS ELECTORALES DE LA ILEGALIZACIÓN

Uno de los objetivos inmediatos que persigue el PP con la ilegalización es impedir la representación de la izquierda abertzale en el Parlamento y los ayuntamientos. Ante las elecciones municipales del 25 de mayo de 2003, la izquierda abertzale intenta sortear la ilegalización con la presentación de la plataforma electoral AuB (Autodeterminaziorako Bilgunea). AuB logró en apenas una semana 80.421 firmas ante notario, lo que da una idea del nivel de oposición y de compromiso que hay en Euskal Herria contra la ilegalización de la izquierda abertzale. En las anteriores elecciones municipales de 1999, en plena tregua de ETA, las candidaturas de EH obtuvieron en la CAV; 228.147 votos y 679 concejales y 44.066 votos y 211 concejales en Navarra. De esta manera, EH se convirtió en la segunda fuerza política municipal en la CAV y la tercera en Navarra.

El PP y la dirección del PSOE caracterizaron las elecciones municipales de 2003 como una “fiesta de la democracia”, cuando en realidad fueron las elecciones más antidemocráticas desde la caída de la dictadura franquista. Miles de personas en Euskal Herria se vieron privadas del derecho a elegir alcaldes y concejales para sus respectivos pueblos. La burguesía vasca, que se comprometió a “contar los votos” a la candidatura ilegalizada, no permitió que en la noche electoral las cadenas vascas ETB1 y ETB2 informasen del desarrollo de ese voto nulo. Ese detalle sirve para comprender que las auténticas intenciones del PNV pasaban por extirpar a la izquierda abertzale como si de un cáncer se tratara. En plena campaña electoral, la Ertzaintza daba cuenta puntualmente al juez de los actos previstos por AuB u otros susceptibles de ser ilegalizados. Poco después, la misma Ertzaintza se presentaba en dichos actos para prohibirlos “por orden del juzgado”. El PNV se limitaba así a “cumplir la legalidad” porque era consciente de que sería el principal beneficiario de la ausencia electoral de la izquierda

60. Bruni, L., *op. cit.*, págs. 270-71.

abertzale: el PNV pasó de 1.176 ediles a 1.669, superando a los socialistas en la margen izquierda de Bilbao. A pesar de la ilegalización de las candidaturas de AuB y de 245 listas electorales locales, los votos nulos sumaron un total de 153.105 en las elecciones a Juntas y al Parlamento Foral Navarro y 145.850 en las elecciones municipales.

En el resto del Estado español, la derrota previsible de la derecha no alcanza las proporciones esperadas. PP más UPN obtuvieron en el conjunto del Estado 7.872.874 votos, frente a los 7.972.995 que saca el PSOE y 1.736.465 de IU. En Galicia, la izquierda avanza con fuerza a pesar de que la campaña mediática de la derecha diga lo contrario. Si en las elecciones municipales de 1999 el PP aventajó a la izquierda por 10.562 votos, en éstas es la izquierda (PSOE, BNG, IU) la que aventaja al PP por 102.057. En Catalunya se produce igualmente un giro a la izquierda, lo que no evita un voto crítico al PSC, que pierde un 4,15% a favor de ICV-EuiA y ERC, que crecen un 2,56% y un 5,02% respectivamente. ERC pasó de 190.000 votos a 410.000, capitalizando la defensa del derecho de autodeterminación abandonada por los dirigentes del PSC y de ICV-EuiA y la criminalización de la que es objeto por parte del PP⁷⁷.

A pesar de que el PP sigue manteniendo una parte sustancial de su base social y de que los dirigentes de la izquierda tradicional no son capaces de conectar de forma decidida con las aspiraciones de la población, rompiendo la tendencia abstencionista que se da en los barrios obreros, el descontento y la oposición a la política de la derecha se extiende con fuerza. De una forma constante desde las municipales de 2003, el PP va sumando pérdidas crecientes de votos, pierde fuelle y su impulso se agota.

En las elecciones autonómicas catalanas del 16 de noviembre, la izquierda (PSC, ICV-EuiA, ERC) logró el 55% del voto (en 1999 tuvo el 50%), mientras la derecha (CiU, PP) retrocedió hasta el 43% (en 1999 obtuvieron el 47%). En el caso del PP, sus resultados son miserables, quedando reducido a la cuarta fuerza electoral por detrás de ERC. Los resultados en las urnas abrirían las puertas para desalojar a la derecha nacionalista de la Generalitat después de 23 años de gobierno. Las movilizaciones sociales, que en Catalunya tuvieron especial intensidad en los últimos años, tenían su correspondencia electoral.

ERC registró un avance espectacular, pasando de 16 a 23 escaños y alzándose con más de medio millón de votos. La razón fundamental fue la cuestión nacional. El recorte de los derechos democráticos de la derecha española y sus continuos ataques a los independentistas garantizó a estos últimos un amplio espacio político. Los dirigentes de ERC plantaron cara al Plan Hidrológico, a la Ley de Partidos y a la ilegalización de Batasuna, lo que les proporcionó una imagen más radical, principalmente ante la juventud. Pero a pesar de todo, la dirección de ERC y Carod-Rovira no dejaron de mostrarse en la campaña electoral a favor de la colaboración con CiU y con la patronal. De hecho, la actuación del tripartito de izquierdas —integrado por el PSC, ERC e ICV-EuiA— en estos años de gobierno, ha

mostrado los límites de una gestión basada en la aceptación de las reglas del juego del capitalismo. El debate sobre la reforma del Estatut ha ocultado la insuficiencia clamorosa de inversiones en la sanidad y la enseñanza pública, en las infraestructuras de los barrios obreros y en la vivienda pública; al mismo tiempo, el tripartito ha mantenido una actitud absolutamente pasiva ante el cierre de empresas y deslocalizaciones, que han provocado el despido de miles de trabajadores. Sus manifestaciones a favor de que se recoja en la Constitución española el derecho de secesión sin modificar el carácter burgués del Estado tienen el mismo valor que las que hacen el PNV-EA: Pura retórica para la prensa y moneda de cambio para las mesas de negociación.

61. KAS nace en agosto de 1975 como coordinadora de las fuerzas independentistas vascas, para articular las movilizaciones populares frente al fusilamiento de Txiki y Otaegi.

VIII. La ruptura PP-PNV

EL PLAN IBARRETXE: NI SOBERANISTA NI INDEPENDENTISTA

Si ha habido alguna iniciativa política en los últimos años que haya suscitado más comentarios iracundos y descalificaciones en los medios de comunicación del Estado español, éste ha sido sin duda el Plan Ibarretxe⁷⁸. No había peor insulto en los mentideros públicos que ser acusado de apoyar este plan. Un plan que ha sido presentado como la quintaesencia del separatismo y la destrucción de la unidad sagrada de España.

Como siempre ocurre en política burguesa, las apariencias son muy diferentes de la esencia. Dicho esto, es necesario caracterizar el Plan Ibarretxe desde el punto de vista de los vínculos y antagonismos entre la burguesía española y vasca y no por lo que han dicho de él sus críticos desde las posiciones del nacionalismo español. ¿Cuáles eran las intenciones reales del PNV al presentar este plan? ¿Era efectivamente un programa a favor de la Independencia?

El conocido como Plan Ibarretxe, “*Propuesta de estatuto político de la Comunidad de Euskadi*”, fue presentado en Ajuria-Enea el 25 de octubre de 2003.

Consta de un Preámbulo que dice así: “En virtud del respeto y actualización de nuestros derechos históricos recogidos en el Estatuto de Gernika y en la Constitución española, manifestamos nuestra voluntad de formalizar un nuevo pacto político para la convivencia”. Este pacto se materializaría en “un nuevo modelo de relación con el Estado español basado en la libre asociación y compatible con las posibilidades de desarrollo de un Estado compuesto, plurinacional y asimétrico”. En otras palabras, ya desde el preámbulo quedaba claro que el objeto de dicho plan no es el ejercicio de la soberanía o la independencia, como afirma el PP.

El citado Estatuto político continúa con un Título Preliminar de 11 artículos donde define la Comunidad de Euskadi como los tres territorios de la actual Comunidad Autónoma: Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. El artículo primero menciona el derecho a decidir libre y democráticamente su propio marco de organización; sin em-

62 Zuzen, nº 50, enero 1990, citado en Giacomuzzi, G., pág. 45.

bargo, en el artículo segundo, que habla del ámbito territorial de la Comunidad de Euskadi, se señala que podría ampliarse siempre y cuando lo aprueben el Parlamento Vasco y las *Cortes Generales del Estado*. Subrayamos esto último para resaltar que el Plan aparece sujeto, ya desde el principio, a la voluntad de los poderes políticos dominantes en el Estado español.

Los artículos siguientes hablan de los símbolos, la ciudadanía, la diáspora vasca y las relaciones con la Comunidad Foral de Navarra y establece que habrán de ser de mutuo acuerdo. Obsérvese que esto exigiría cambios notables en Navarra, donde la mayoría parlamentaria actualmente la ostentan UPN-PP y el PSOE, opuestos radicalmente a esta política. En este punto se reclama, como algo importante, que el Estado respete la celebración de convenios y acuerdos de cooperación entre ambas comunidades. El artículo referido a la relación con los territorios vascos de Iparralde (la parte norte de Euskal Herria, en territorio francés), establece igualmente la firma de acuerdos para utilizar “la normativa actual o futura de cooperación transfronteriza”. En los artículos que preceden a éste, se hacen declaraciones generales sobre el euskera, los valores del autogobierno vasco, los derechos humanos, las libertades y los derechos y deberes de la ciudadanía vasca.

La dirección de la izquierda abertzale apoyaría este preámbulo fundamentalmente por dos motivos: Porque plantea el derecho a decidir de los vascos y porque hace referencia a la unidad territorial de Euskal Herria al contemplar las relaciones de la CAV con Navarra e Iparralde.

Superado el articulado de este Preámbulo, comienza el del Título I, que trata “*Del régimen de relación política con el Estado español y sus garantías*”. El capítulo primero del título se refiere al *Estatus de Libre Asociación*, que va del artículo 12, del régimen de libre asociación, al artículo 13, sobre el ejercicio democrático del derecho a decidir, en el que se defiende la potestad para regular y gestionar la realización de consultas democráticas a la ciudadanía vasca por vía de referéndum. Éste es uno de los artículos considerados más agresivos por parte de la burguesía española y por el que amenazaron con meter a la cárcel a Ibarretxe en el caso de que llevase a cabo tal consulta. Sin embargo, este artículo finaliza con una auténtica cláusula de salvaguarda para el Gobierno central al concluir que, sea cual sea la decisión que se adopte en el referéndum, su resultado implica que supuestamente “las Instituciones vascas y las del Estado se entenderán comprometidas a garantizar un proceso de negociación para establecer las nuevas condiciones políticas que permitan materializar *de común acuerdo*, la voluntad democrática de la sociedad vasca” (El énfasis es nuestro).

¿Cuáles son las razones que pueden hacer creer que, por la vía del común acuerdo, se puedan llevar a cabo las aspiraciones de autodeterminación y el respeto a los derechos democráticos de Euskal Herria que durante más de un siglo se han negado por parte de la burguesía y del ejército español?

El capítulo segundo, *De las garantías del autogobierno*, incluye el artículo 14,

sobre principios de relación política con el Estado; el 15 sobre la comisión bilateral Euskadi-Estado y el 16 sobre el Tribunal de conflictos Euskadi-Estado. Como en el apartado anterior, se entiende que estas propuestas sólo pueden prosperar “de común acuerdo”.

El capítulo tercero sólo tiene un artículo, el 17, sobre el procedimiento de modificación y actualización. Un artículo que definía el procedimiento para el debate y la aprobación de este Plan por la mayoría absoluta del Parlamento Vasco.

Los títulos II, III, IV y V, que componen la mayor parte del Plan Ibarretxe, suman 46 artículos de un total de 69 y describen los Poderes, el Régimen de Relación Política e Institucional, el Ejercicio del Poder Público y de la Economía, Hacienda y Patrimonio en la Comunidad de Euskadi. En definitiva: el modelo de poder y relación institucional que el PNV llevaría a cabo si amablemente el Estado español, la Corona y el ejército diesen su permiso, aunque dichos apartados bien podrían servir como plataforma de cara a una renegociación del Estatuto con el Gobierno central.

El último título, el VI, trata del Régimen de Relación Política en el ámbito Europeo e Internacional. La burguesía vasca trata de hacerse un hueco en Europa y tener voz propia: “La Comunidad de Euskadi dispondrá de representación directa en los órganos de la Unión Europea. A tal efecto, *el Gobierno español* habilitará los cauces precisos para posibilitar la participación...”.

En definitiva, todo lo que el Partido Popular ha dicho del Plan Ibarretxe es falso de principio a fin. La burguesía vasca no quería, ni quiere, una ruptura violenta con la burguesía española; lo ha demostrado sobradamente en el pasado y lo expresa en dicho plan.

Miguel Herrero de Miñón, uno de los comentaristas burgueses más destacados, advierte en un artículo titulado “Lo crudo y lo cocido”, publicado en *El País* el 13 de noviembre, que es falso tachar de inconstitucional el Plan Ibarretxe por tratarse, simplemente, de una propuesta que “cabía perfectamente en el marco constitucional y porque aquellos aspectos que suponían una reforma de la Constitución lo hacía legitimado por esa misma Constitución según prevé expresamente su articulado y además porque ni siquiera tienen mayoría absoluta en la Cámara vasca”.

LA INICIATIVA DE BERGARA Y LA TÁCTICA DE LA IZQUIERDA ABERTZALE

La izquierda abertzale, antes de acabar prestando tres votos que fueron decisivos para la aprobación por el Parlamento de Vitoria del Plan Ibarretxe, le había ofrecido, de hecho, un apoyo crítico al presentar la denominada “Iniciativa de Bergara”, lanzada para formar una lista conjunta con el PNV-EA y otros que reclamase la autodeterminación en Madrid y en Bruselas. Apoyando dicha iniciativa, ETA expresó “estar dispuesta a tomar todas las medidas necesarias” refiriéndose implícitamente al ofrecimiento de una tregua.

¿Cómo es posible que los mismos dirigentes de la izquierda abertzale que se

revolvían en el suelo de la calle Autonomía en Bilbao aquel 15 de septiembre, levantando el puño bajo los golpes y los chorros de agua de una Ertzaintza que actuaba bajo las ordenes del PNV-EA, apenas unos meses después propusiesen candidaturas unitarias al mismo PNV-EA?

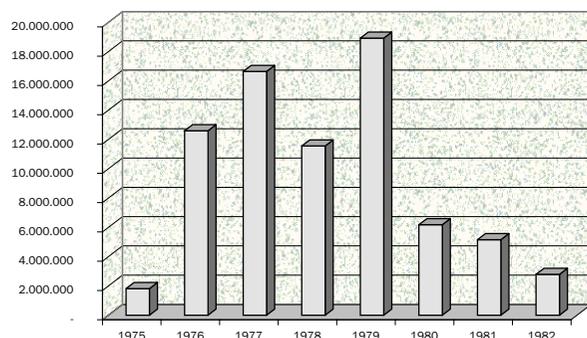
¿Acaso por los cambios que se dieron en el Partido Nacionalista Vasco tras la sucesión de Arzalluz? Es evidente que no. La elección de Josu Ion Imaz en lugar de Egibar representaba la victoria de los sectores de la burguesía vasca que se quejaban del deterioro de las relaciones con el Estado y las consecuencias negativas que para las inversiones, los mercados y los beneficios tenían. Éstos son los sectores más proclives a lograr una mayoría absoluta en la cámara vasca acercándose al Partido Socialista, los que creen que se ha girado excesivamente hacia las posiciones de la izquierda abertzale y que conviene centrarse más.

La dirección de la izquierda abertzale parece sentirse más cercana de Egibar y Arzalluz que de los *michelinos*⁷⁹, que dirigen el PNV tras la crisis, cuando lo cierto es que mientras Arzalluz y Egibar tuvieron el control del partido se aplicó concienzudamente la política mencionada de palo y zanahoria y la izquierda abertzale sufrió igualmente la ofensiva represiva del Estado.

Los giros en la táctica de la izquierda abertzale no están condicionados por los cambios operados en el seno del PNV. ¿No es más cierto que la dirección de la izquierda abertzale es la que se ha orientado hacia el nacionalismo burgués abandonando la lucha por el socialismo y el discurso de la izquierda?

Un argumento esgrimido por la dirección de la izquierda abertzale es que están aplicando una táctica flexible con el PNV para ganar a su base. Lo que debían explicar es por qué la izquierda abertzale ha obtenido cada vez peores resultados con esta táctica. La represión no es la explicación. En el pasado fue uno de los

Jornadas perdidas por huelgas · 1975-1982



63. Zutik n° 69, febrero de 1978.

principales nutrientes que garantizó su crecimiento. ¿Por qué ahora, que es más salvaje que nunca, no ocurre lo mismo?

La izquierda abertzale lleva años exigiendo al PNV que rompa con el Estado y que desarrollen de forma unilateral órganos e instituciones nacionales propias. Eso está muy bien sobre el papel: crear un derecho propio. Pero para que una institución como Udalbiltza tenga poder ha de tener medios económicos suficientes, no pequeñas dádivas de las actuales instituciones que apenas sirven para sacar folletos y hacer alguna conferencia sino capacidad recaudatoria auténtica, poder legislativo y ejecutivo, y para ello es preciso detentar el poder económico y tener un aparato coercitivo: ejército propio, policía, jueces, cárceles. Eso, y no otra cosa, es el Estado nacional burgués.

Desde luego no es policía y cuerpos represivos lo que falta en Euskal Herria, todo lo contrario, ya que concentra la mayor densidad policial-militar de toda Europa. En Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, La Guardia Civil tiene 6.500 efectivos, la policía española 3.000, el ejército 4.000 soldados y la Ertzaintza cuenta con 7.500 agentes. A ello hay que añadir los 2.500 policías y militares franceses que hay en Iparralde y los de Nafarroa. Pero estas fuerzas, incluida la Ertzaintza, como hemos podido comprobar, están al servicio del Estado español y francés y no precisamente para defender los derechos democráticos de Euskal Herria.

“A la razón de la fuerza se le vence con la fuerza de la razón”. Es una bella frase, muy utilizada y cierta en un sentido, ya que cuando una idea o razón responde a un determinado desarrollo histórico y se apodera de la mente de las masas tiene las de ganar. Pero no es algo automático, como ha quedado claro a lo largo de la historia: grandes razones han sido aplastadas una y otra vez.

La dirección de la izquierda abertzale obtiene su apoyo probablemente más por ser sujeto de la represión que sufre por parte del Estado que por su actual programa ya que en realidad propone luchar por un cascarón institucional vacío bajo el capitalismo. En la Padania, el norte de Italia, un movimiento independentista reaccionario burgués como la Liga Norte llegó a sacar pasaporte, moneda y se reunieron un día para declarar la independencia. La declararon, después se fueron a sus casas y las cosas siguieron igual.

El derecho no sirve de nada sin la fuerza para imponerlo y ejercerlo, en este caso frente a los Estados español y francés, sin hablar de la profunda división territorial que la derecha española ha logrado establecer dentro de la propia Euskal Herria, en Nafarroa y Araba.

La pregunta obligada frente a los requerimientos de la izquierda abertzale al PNV es, ¿qué fuerza podrían ejercer frente al Estado español “las instituciones propias” que propone crear la izquierda abertzale? Es evidente a estas alturas que es imposible ganar cualquier confrontación institucional por la vía jurídica o económica: la judicatura y el ejército están férreamente controlados por la oligarquía española.

64. Ponencia KAS bloque dirigente, 1979, citado en Giacomuzzi, G., pág. 49.

¿HASTA DÓNDE PUEDEN LLEGAR LAS TENSIONES ENTRE EL ESTADO Y EL PNV?

La burguesía vasca necesita el mercado español para sus productos. La relación comercial con el resto del Estado es aún más intensa y sólida que con Europa y su participación en el mercado mundial es muy limitada. Aunque la fuerte presencia de multinacionales sobre todo en el sector del automóvil en Euskal Herria ha modificado parcialmente esa relación, la burguesía vasca sabe que dichas multinacionales pueden irse como vinieron. Pero el tema central no son tanto las aspiraciones de la burguesía vasca como el hecho de que la burguesía española jamás se permitiría perder el mercado vasco para sus productos sin oponer la más férrea resistencia y mucho menos en la época actual, que se caracteriza por una crisis de sobreproducción que atenaza la economía mundial, una época de lucha imperialista feroz por reconquistar cualquier porción del mercado mundial por pequeño que sea. ¿De qué manera podría resolverse esta cuestión?

En última instancia las cosas serias se deciden por la fuerza pero la burguesía vasca carece de la fuerza necesaria y de la voluntad para liberar a Euskal Herria. Queda otra opción: tratar de caer en manos de alguna potencia imperialista enfrentada con el Estado español y ser su lacayo a cambio de recibir su ayuda. Esta política fue la que utilizó la clase dominante de los pueblos balcánicos con unos resultados espantosos. Más recientemente hemos visto el papel reaccionario de la burguesía kurda, poniéndose a las órdenes del imperialismo americano en su intervención imperialista en Iraq.

Pero si somos serios, estas cosas ni siquiera se le pasan por la cabeza a la burguesía vasca. ¿Estamos locos o qué? Contestarían inmediatamente. Dentro del actual marco, la burguesía vasca hace grandes negocios y si algo rechaza es precisamente la crispación, el enfrentamiento actual, la inseguridad que aleja inversiones y beneficios y ofrece malos augurios a la cuenta de resultados. No es ninguna casualidad la crisis vivida por el PNV tras el relevo de Arzalluz. El mensaje es claro, necesitamos volver a una situación de normalidad. ¡Este enfrentamiento con el Estado es intolerable, no aguantamos más!

La burguesía vasca jamás llevará las cosas a ese límite. La elección de Imaz lo evidencia. Por tanto, el enfrentamiento con el Estado no va más allá de lo puramente dialéctico, es pura propaganda para mantener o incrementar su base electoral. Una tensión dialéctica donde la burguesía española y la vasca acaban haciendo un reparto de papeles entre el policía malo, el PP, que ha machacado y aprobado leyes reaccionarias como la Ley de Partidos, y el PNV, que las aplica escrupulosamente mientras mira hacia otro lado.

La burguesía vasca sabía que el Plan Ibarretxe no tenía ninguna posibilidad de

65. Todos los datos sobre Lemóniz están tomados de *Lemóniz apurtu*, 1982/87, Ed. Eguzki.

prosperar pero eso era en realidad una ventaja, ya que al igual que hace una bomba de humo, mantuvo la atención social en torno al mismo, ocultando la política represiva y los recortes de los gastos sociales.

La burguesía vasca sabía perfectamente esto, su independentismo es ornamental, se saca a pasear en épocas electorales y sólo lo utilizaría en serio para dividir el cuerpo vivo del proletariado, en el caso de una revolución socialista en Euskal Herria y en el Estado español, con el fin de defender sus intereses de clase.

En realidad, uno de los objetivos estratégicos de este plan era la división de la izquierda abertzale para mermar su apoyo social y quedarse con buena parte de sus votantes. Imaz lo destacó ante los empresarios en Madrid: "La lucha contra ETA requiere mermar su base social, sin ella quedarían reducidos a un grupo residual fácilmente eliminable".

Ése era el auténtico objetivo de Lizarra y del Plan Ibarretxe. El PNV no trata de despiezar la piel de toro del Estado como describían algunas viñetas publicadas en el diario *Gara* que mostraban el Estado dividido como un ternero. No hay que engañarse en esto. Tanto los poderes fácticos del Estado como el PNV han buscado desgarrar y trocear el cuerpo vivo de la izquierda, la abertzale en primer lugar.

Así pues, cualquier intento de la izquierda abertzale de buscar acuerdos en líneas soberanistas con el PNV está condenado al más rotundo de los fracasos. La burguesía vasca no puede pasar de las palabras a los hechos y, por tanto, no puede solucionar la cuestión nacional como no puede solucionar la existencia de crisis cíclicas bajo el capitalismo y no puede evitar la lucha de clases.

La unidad de la clase trabajadora por encima de fronteras nacionales es un objetivo estratégico fundamental para triunfar. Sólo la clase trabajadora puede vencer la resistencia de la clase dominante pero necesita un partido revolucionario que le inspire confianza en sus propias fuerzas y pasar de ser una clase en sí a ser una clase para sí. Las organizaciones de izquierda que quieran jugar un papel revolucionario, y no dudamos que una gran mayoría de militantes de Batasuna e incluso algunos en su dirección así lo desean, deben defender una política de independencia de clase. Hay que combatir conscientemente cualquier confianza en la burguesía vasca en lugar de proponerles candidaturas únicas, hablar de avances y de falsos "momentos históricos". El momento histórico se dará cuando el ascenso de la lucha de clases cree situaciones revolucionarias en el conjunto del Estado. Ése es el momento histórico y no las falacias, mentiras y bravuconadas del PNV y de EA. Por tanto, la primera tarea de los revolucionarios en Euskal Herria, y la más importante, es ganar el apoyo y la confianza de la clase trabajadora de todo el Estado, sin cuyo concurso será imposible arrancar el derecho de autodeterminación y resolver los acuciantes problemas de la clase trabajadora y la juventud vasca.

LA DERECHA PROMUEVE LA POLARIZACIÓN EN TORNO A LA CUESTIÓN NACIONAL

Durante años se ha trasladado la imagen al conjunto de la población del Estado español de que en Euskal Herria se estaba librando una lucha entre los defensores de la “democracia y las libertades”, de un lado, y una banda de independentistas que querían romper la unidad de la nación española a cualquier precio, del otro. Esta “lucha” tenía su propia simbología y terminología: el “bloque constitucionalista”, en el que se integraban PP y PSOE, frente al “bloque nacionalista”, liderado por el PNV pero del que también formaban parte “los violentos”. Sobre la base de este esquema todos los matices y diferencias ideológicas, incluso intereses de clase contrapuestos, quedaban desdibujados.

Los marxistas siempre señalamos el carácter tramposo de esta estrategia de polarización política en líneas nacionales porque ocultaba lo más importante: el carácter de clase de la política, tanto del PP como del PNV. Al mismo tiempo explicábamos que en ningún momento se puede poner al mismo nivel las ansias de una nación oprimida por su liberación, como son Euskal Herria, Catalunya y Galicia, y la violencia que ejerce el Estado, que es el máximo responsable al ejecutar dicha opresión.

En el Estado español el Partido Popular se ha llenado la boca de democracia para recortarla, habla de lucha contra el terrorismo individual mientras lo alimenta al defender el más feroz de los terrorismos, el terrorismo de Estado; no pueden hablar del derecho a la vida sin que suene a hipocresía cuando apoyan la guerra en Iraq, enviando tropas invasoras a un país soberano en contra de la mayoría de la población. Hablan del respeto a las víctimas del terrorismo pero no tienen nada que decir de los más de 1.500 trabajadores que mueren víctimas de la explotación capitalista cada año: una media de cinco obreros muertos cada día, un mes tras otro, un año tras otro, más de 10.000 trabajadores muertos mientras ha gobernado el Partido Popular, la mayoría jóvenes con contratos precarios. A esta matanza legal hay que sumar los cerca de 130.000 accidentes laborales graves producidos en ese mismo período y que han dejado una legión de obreros con horribles mutilaciones y minusvalías sacrificados en el altar del beneficio privado.

El PP habla un día sí y otro también del respeto a las víctimas pero ¿por qué no se hace un homenaje a las víctimas del capitalismo? ¿Por qué el PP se negó a reconocer a las víctimas del levantamiento fascista contra el Gobierno republicano elegido en las urnas? ¿Por qué niega el pan y la sal a las víctimas del 3 de marzo en Vitoria y a los 100 obreros asesinados por la policía y las bandas fascistas durante la Transición? Basta profundizar un poco para destapar la demagogia, el cinismo y la hipocresía de la derecha española, que es la principal responsable de las lacras que dice combatir.

El Partido Popular no podría haber recortado tantos derechos democráticos fundamentales si la dirección del PSOE hubiera mantenido una oposición activa. Lejos de esto, la dirección socialdemócrata ha contribuido formidablemente a una ofensiva que, como se está demostrando, no se detiene en la izquierda abertzale sino que amenaza a cualquier organización o militante de izquierdas que preten-

da luchar consecuentemente contra la opresión capitalista.

La política de seguidismo hacia el PP ha provocado que dirigentes destacados del partido socialista se escoren tanto a la derecha que se confunden con éste. Una muestra representativa de este tipo de dirigentes es Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura, que en las fechas previas a las elecciones generales de marzo de 2004 llegó a rogar a Aznar que “no se marche en esta hora trascendental en que peligran la integridad de España”. En el País Vasco la situación llegó a niveles de esperpento. Dirigentes socialistas como Nicolás Redondo Terreros y Rosa Díez se han fundido literalmente con el PP. ¿Qué hubiese ocurrido en Euskadi si el PSOE hubiese concurrido en candidaturas únicas el 14-M con el PP, como pretendían algunos de estos dirigentes? Algunos de sus compañeros de partido les han pedido que se vayan de una vez al PP, y es que su política y sus consejos representan una amenaza para la propia existencia del Partido Socialista de Euskadi.

LA MOVILIZACIÓN DE LAS MASAS DERROTA AL PP

Los acontecimientos que siguieron a los atentados de Madrid del 11 de Marzo, con el trágico balance final de 196 muertos y casi 2.000 heridos, todos ellos miembros de familias trabajadoras, inmigrantes y estudiantes, aceleraron la derrota del PP en las elecciones del 14 de marzo. Pero este resultado marca una diferencia fundamental con otros: abre un nuevo período caracterizado por la intervención activa de las masas de la clase trabajadora y la juventud que han puesto su sello decisivo en los acontecimientos.

Este atentado salvaje sacudió de arriba a abajo la conciencia de millones de personas que abarrotaron las calles de todo el Estado para mostrar no sólo su repulsa por esta carnicería criminal, también para repudiar al gobierno de la derecha por su responsabilidad en la intervención imperialista contra el pueblo de Iraq. Se calcula que unos catorce millones de personas abarrotaron todas y cada una de las capitales del Estado. Manifestaciones que rompieron el silencio que se les quería imponer y que exigieron conocer la verdad frente a las mentiras y la manipulación gubernamental.

De la noche a la mañana, el debate político polarizó la sociedad. Paralelamente, la caterva de tertulianos y creadores de opinión esperaba consignas claras del gobierno de Madrid. Y pronto las tuvieron: la maquinaria mediática, con la TVE de Urdaci a la cabeza, se lanzó a una desenfundada campaña de propaganda cuyo eje fundamental era endosar a ETA la autoría de la masacre. Como en ocasiones siempre difíciles, el problema vasco podría ser utilizado en auxilio de la derecha y, de paso, obtener una buena tajada electoral que garantizase de nuevo la mayoría parlamentaria.

La burguesía vasca fue la primera en aludir a ETA como la principal responsa-

ble de la catástrofe. Por la noche rectificaron, aludiendo que les habían engañado los servicios de inteligencia españoles. Es cierto que desde el principio Rajoy, Aznar y compañía, escondieron y manipularon la información, pero el PNV, al igual que el PP, había hecho ya sus cálculos electorales. A ambos les interesaba por distintos motivos que los electores creyésemos que la autoría era de ETA. Que el lehendakari Ibarretxe saliese a los medios de forma tan rápida y contundente no fue producto de la precipitación del momento. Por el contrario, el PNV debería haber sido más cauto que nadie por las terribles implicaciones que suponía su aval apuntando a ETA. El dedo acusador del PNV sólo podía estar motivado por el duro y frío interés electoral. Si ETA había provocado esa masacre la izquierda abertzale saltaría en pedazos y tras haberles apuntado a ellos como el “aliado natural” los votos lloverían a sus candidaturas.

Poco le importó al PNV que millones de corazones en Euskal Herria estuviesen encogidos por la posibilidad de que la autoría de ETA provocase una oleada de represión y ataques a los derechos democráticos. Gente con matrículas de Euskadi se lo pensaba dos veces antes de viajar a Madrid; muchos abertzales estaban temerosos de salir a las calles. El asesinato brutal de un panadero de Pamplona por parte de un policía nacional que le descerrajó cuatro tiros por negarse a colocar un cartel contra ETA, fue una consecuencia directa del ambiente de odio creado por el PP. El panadero asesinado, Ángel Berrueta, era miembro de Gurasoak (asociación de padres de jóvenes detenidos por actos de kale borroka). Las policías española y vasca reprimieron con tremenda dureza las manifestaciones de protesta que se llevaron a cabo y en algunas cárceles hubo palizas a presos de ETA.

El Gobierno del PP apuntó a ETA y disparó con saña, tratando de manipular la información. La opinión pública no se lo tragó. El PNV, comprendiendo que la mentira no resistiría, se desdijo a tiempo. Era evidente que las consecuencias políticas eran muy diferentes dependiendo de la autoría de los atentados. La confirmación de que dicha masacre era una consecuencia de la política de Aznar y de la implicación del Estado español en la guerra en Iraq, a pesar de las gigantescas movilizaciones que el Gobierno ignoró, provocó la indignación de las masas, que salieron masivamente a la calle el día 12. Millones de personas en todas las ciudades se vieron obligadas a marchar bajo las pancartas y consignas del mismo Gobierno del PP que, con su política de apoyo incondicional a la intervención imperialista en Iraq, había dado la cobertura política necesaria para dichas atrocidades.

Ni los dirigentes del PSOE ni los de IU protestaron cuando el gobierno de la derecha convocó las manifestaciones con la consigna de “defensa de la constitución y contra el terrorismo”. Incluso la dirección federal de IU, en distintos comunicados públicos, reclamó el cierre de filas de todos los “demócratas” sin cuestionar en ningún momento la política del PP. Esto ocurría cuando había transcurrido tiempo más que suficiente y ya eran perceptibles las incoherencias del gobierno.

La ausencia de una política de independencia de clase arrastró a los dirigentes reformistas de la izquierda, en las primeras 24 horas, al arroyo de la derecha. En

aquellas jornadas pesó mucho más el instinto y la conciencia de la clase trabajadora y de la juventud —que habían pasado por la escuela de las movilizaciones contra la guerra— que la orientación o las consignas de las direcciones del PSOE o de IU, que en realidad nunca llegaron. La actitud de la población exigiendo la verdad se pudo constatar en las manifestaciones del día 12, especialmente en Madrid y Barcelona, donde los responsables del PP, en algunos casos en compañía de la familia real, fueron abucheados por los manifestantes.

Cabe destacar en aquellas jornadas la actitud decidida del Sindicato de Estudiantes, que llamó a la huelga general en los centros de estudio de todo el Estado, movilizando en la jornada del 12 de marzo por la mañana a decenas de miles de jóvenes en las calles con una denuncia clara del gobierno del PP y de su responsabilidad en esta atrocidad. Los activistas del SE tuvieron que enfrentarse con pequeños grupos de fascistas —alentados en algunos casos por veteranos militantes del PP— que intentaron aprovecharse de las manifestaciones agitando contra los derechos democráticos de Euskal Herria y gritando consignas racistas y fascistas. La actitud decidida y firme del SE y de los estudiantes en Madrid aisló por completo a estos elementos, convirtiendo la Puerta del Sol en una gigantesca demostración contra las manipulaciones del PP.

La mentira sobre la autoría del atentado se derrumbó definitivamente cuando miles de personas, de forma espontánea, se lanzaron el sábado día 13 a las calles de todo el Estado frente a las sedes del PP. Cientos de miles de jóvenes y de trabajadores gritaron su ira en las calles de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Bilbao, de todo el Estado. Nada ni nadie les paró en aquel momento. Todos los iconos de la democracia burguesa, incluido el día de reflexión, fueron apartados de un manotazo por la acción decidida de la población. Muchos de los que no salieron a la calle simpatizaban abiertamente con aquellos que lo hacían. Los gritos contra el PP, en memoria de los muertos, tanto en Madrid como en la guerra de Iraq; el desafío a la policía por parte de decenas de miles de manifestantes que recorrieron con firmeza las calles y se plantaron ante el Parlamento español, en la Puerta del Sol de Madrid o en la Plaza de Catalunya en Barcelona, fueron la mejor demostración de la fuerza colosal de las masas cuando se ponen en marcha. La acción directa de cientos de miles de personas tuvo un efecto electrificante. Los patéticos pataleos de Mariano Rajoy denunciando por “ilegales” las concentraciones y manifestaciones del día 13 fueron contestados con rotundidad por los manifestantes: “La voz del pueblo no es ilegal”. La conciencia de millones de trabajadores y jóvenes de todo el país avanzó con botas de siete leguas. Toda la superchería de la independencia de las instituciones y los medios de comunicación, toda la espuma sobre la seriedad y la honestidad de los políticos profesionales de la burguesía quedó completamente al descubierto.

‘ZAPATERO, NO NOS FALLES’

La victoria del PSOE al día siguiente, en las elecciones del 14-M, no fue una victoria más de la izquierda, ni tampoco la consecuencia directa del apoyo a las ideas reformistas: fue la expresión del profundo malestar entre las masas, que no estaban dispuestas a tolerar ni un día más al Gobierno del PP; fue la victoria de los millones de personas que salieron a la calle durante meses y meses, y particularmente los días 12 y 13.

Los efectos de las elecciones del 14-M fueron particularmente evidentes en las nacionalidades históricas. Las masas castigaron al PP de todas las formas posibles. Si ERC estaba en el punto de mira de la derecha, el efecto fue una subida espectacular de sus votos y diputados en el Parlamento español, consiguiendo un apoyo que no tenía desde la época de la República. Por su parte, en Euskal Herria, mostraron un auténtico hundimiento del Partido Popular, que perdió más de 90.000 votos en la CAV y 30.000 en Navarra en relación a las anteriores elecciones generales. Fue una caída más pronunciada incluso que en el resto del Estado, confirmando la misma tendencia en Catalunya y Galicia. Con una participación del 75,9%, superior a las generales de 2000, en Euskadi votaron un 63,84% de los electores, lo cual implica una subida de participación de un 12% frente a un incremento del 8,5% en todo el Estado. El Partido Popular pasó de ser la segunda fuerza en Euskadi, con 7 diputados, a ser la tercera con sólo 4.

La caída del PP en la CAV es proporcional a la subida del Partido Socialista. Las razones de este incremento del voto del PSE no reflejan, como dice la prensa burguesa interesadamente, el mantenimiento del voto “constitucionalista” frente al “nacionalista”. En Euskal Herria, como en el resto del Estado, se dio el mismo fenómeno de incorporación masiva de los jóvenes y de nuevos votantes para quienes la prioridad era echar al Partido Popular. De esa manera, el PSE fue utilizado también como un vehículo con el que lograr tal objetivo, a pesar de su desastrosa política respecto a la cuestión nacional. Este último aspecto permitió que IU-EB, a diferencia del resto del Estado, viera incrementar su apoyo en la CAV en tres puntos, superando los 100.000 votos.

Los datos electorales en la CAV y Navarra, lógicamente, están afectados por la ilegalización de la izquierda abertzale agrupada en estas elecciones en torno a la llamada “Iniciativa de Bergara” y al voto nulo por la autodeterminación. A pesar de la campaña de acoso por parte de los medios de comunicación y de los efectos derivados de la ilegalización se contabilizaron 120.000 papeletas nulas, lo que representa una fuerza considerable. No obstante, se volvió a comprobar que la estrategia de alianzas con la burguesía vasca favoreció un trasvase de votos hacia el PNV, que obtuvo 70.000 más que en las generales de 2000.

En Navarra UPN sufre un tremendo desgaste, pasando de casi el 50% de los votos en las generales de 2000 al 37,47%. Esta caída, sin embargo, no fue rentabilizada por el PSOE como en otras zonas, ya que sube menos de cinco puntos, ni por IU, que pierde casi dos puntos. La fuerza ascendente fue Nafarroa Bai, la coa-

lición PNV-EA-Aralar, que agrupó el voto opositor al PP-UPN hasta alcanzar un 18,02% y lograr un escaño. Este ascenso fue una respuesta a los ataques al euskera y a las señas de identidad vascas, así como a la incapacidad de los dirigentes del PSOE de despegarse de los faldones de UPN. Por su parte, IU ha carecido por completo de una alternativa de clase.

En general, las elecciones fueron condicionadas por la intervención de las masas en la calle. La clase trabajadora y la juventud, principal afectada por los sucesos del 11-M, pusieron punto y final a la pesadilla reaccionaria de ocho años de gobierno del PP. La inmediata retirada de las tropas españolas de Iraq y el denominado “nuevo talante” de Zapatero está directamente relacionado con estos hechos. La dirección del PSOE corría muchos riesgos si defraudaba una aspiración profunda de cientos de miles de familias trabajadoras que habían actuado como motor decisivo de la victoria de Zapatero. De hecho, el lema coreado la noche electoral ante la sede madrileña del PSOE —el famoso “no nos falles” a Zapatero— reflejaba el ambiente de fuerza y la experiencia acumulada de la clase trabajadora con los otros gobiernos del partido socialista. El hecho de que la victoria electoral se consiguiera gracias a la movilización de masas cambia todo el panorama político, a pesar de que desde la dirección del PSOE se intente volver una y otra vez a las mansas aguas de la política institucional.

Este ambiente afloró en las luchas que en pleno mes de agosto iniciaron los trabajadores del sector naval contra los planes de segregación y privatización de la SEPI. El gobierno socialista llevó a cabo los planes diseñados por el gobierno de Aznar pero provocó una respuesta airada de los trabajadores en la calle que cogió por sorpresa a los dirigentes sindicales. Finalmente, la falta de una alternativa que unificase la lucha de los astilleros en todo el Estado y que, basándose en la fuerza de los trabajadores, continuase con las movilizaciones hasta el final con el objetivo de garantizar carga efectiva de trabajo y la defensa de todos los empleos, hizo posible que las cúpulas de CC.OO. y UGT firmasen un acuerdo con el gobierno.

La lucha permitió que toda una serie de factorías permaneciesen bajo titularidad pública y que los despidos se enmascarasen bajo la forma de prejubilaciones pero no evitaron que miles de empleos estén afectados, especialmente los de las subcontratas, y que comarcas enteras se vean arrastradas aún más por la pendiente de la depresión y la marginalidad económica.

En cualquier caso, la lucha de los astilleros supuso una seria advertencia para el gobierno de Zapatero. La actitud de la clase obrera es clara al respecto: no quiere ni oír hablar del PP, que en este año ha dado muestras sobradas de su carácter ultrareaccionario, movilizándolo a lo más retrogrado de la sociedad contra las medidas que el gobierno ha tomado en defensa de los derechos de los homosexuales o contra cualquier intento de negociación con ETA. Los trabajadores no aceptarán fácilmente, sin lucha, nuevos ataques a sus salarios, nuevos recortes en sus derechos o más precariedad laboral. El ministro de Economía Solbes puede estar seguro de que el fantasma de las huelgas generales al que se tuvo que enfrentar Felipe González

planeará sobre su cabeza si pretende llevar a cabo las exigencias de la patronal.

POR UNA POLÍTICA DE INDEPENDENCIA DE CLASE

Después de la derrota del PP en marzo de 2004, el escenario político de Euskadi experimentará profundas modificaciones, aunque en un principio parezca que todo continúa igual. El PNV, ante las elecciones autonómicas de la primavera de 2005, se marca el objetivo de alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara vasca. El Plan Ibarretxe es el pasaporte con el que lo piensa lograr, atrayendo los votos de la ilegalizada Batasuna. Con tal fin se aceleran los debates para que el citado Plan sea sometido a su aprobación en el parlamento autonómico antes de acabar el año. La táctica del PNV es transparente: si la izquierda abertzale se niega a aprobar el plan del lehendakari, la burguesía vasca utilizará todos los medios a su alcance para culpabilizarla ante la opinión pública vasca como la responsable de perder una “oportunidad” histórica y evitar la consulta al pueblo vasco recogida en el plan.

Por su parte la izquierda abertzale, consciente de lo que se le viene encima, mueve ficha. En la presentación de la llamada propuesta de Anoeta, con un velódromo lleno a rebosar de gentes de la izquierda abertzale, los dirigentes de Batasuna defendieron la aceptación de la vía “democrática” para resolver el problema vasco a través de la apertura de dos mesas de negociación. En una de ellas, ETA y el gobierno dialogarían sobre armas y presos; en la otra, todos los partidos políticos sin excepción establecerían el marco político para la resolución del conflicto, incluyendo el derecho de autodeterminación y la unidad territorial de Euskal Herria. La posibilidad de que esta táctica garantizase los objetivos de autodeterminación y unificación del territorio causó una reacción gélida entre los miles de militantes que en el Velódromo de Anoeta escucharon la propuesta de los labios de Otegi. El escepticismo y la incredulidad eran evidentes. A pesar de sus esfuerzos por calentar el ambiente, sólo la mención a los presos y exiliados, a los que se desea ver cuanto antes en las calles de Euskal Herria, logró arrancar calurosos aplausos.

La propuesta no tuvo el eco esperado al no ir acompañada de un cese de la actividad armada, considerándose insuficiente que ETA apoyase en comunicados públicos dicha propuesta, que representaba un cambio sustancial respecto a otras anteriores. El debate sobre el Plan Ibarretxe, con sus partidarios y detractores, ocupaba el centro del escenario político. El PNV mantenía con éxito la iniciativa. La táctica de la burguesía vasca funcionó a la perfección: finalmente el Plan fue aprobado con el apoyo de las formaciones del tripartito (PNV, EA y EB-IU) y de los de tres diputados de Sozialista Abertzaleak (SA) y pudo presentarse en el Parlamento estatal con el apoyo mayoritario del Parlamento Vasco.

Los tres votos que necesitaba el PNV de SA para aprobar el Plan Ibarretxe en el Parlamento Vasco llegaron en la última reunión de éste en diciembre de 2004. Fue una sorpresa para todos, incluso para las propias gentes de la izquierda abertzale,

le, como demuestra que mientras los representantes de SA unían sus votos a los de la derecha vasca en el Parlamento, miles de jóvenes manifestantes de la izquierda abertzale que protestaban contra el Plan en la calle eran reprimidos con dureza por la policía vasca.

Lo que ocurrió posteriormente era previsible. Las fuerzas combinadas de la reacción españolista contraatacaron por tierra, mar y aire. El PP y toda la prensa reaccionaria elevaron el tono de su cólera llegando a utilizar los adjetivos más gruesos posibles. Sus declamaciones contra el nacionalismo vasco sólo encuentran precedente en los discursos de Gil Robles como dirigente de la CEDA contra Largo Caballero. Todas las viejas soflamas de los años treinta alertando del separatismo y explotando el nacionalismo español de la peor estofa, fueron resucitadas.

Se acusó al PNV de destruir la democracia, se amenazó con el uso del ejército, con la suspensión de la autonomía vasca o con el encarcelamiento del lehendakari entre otras salvajadas por el estilo. La actitud del PP de llevar la polarización hasta el extremo no contó esta vez con el apoyo de Zapatero ni del aparato del PSOE. Escaldados por las experiencias electorales anteriores, la dirección del PSOE optó por marcar distancias respecto al PP y llevar el debate al Parlamento estatal lo antes posible.

El 1 de febrero de 2005 el Parlamento Español rechazaría el *Estatuto político de la Comunidad de Euskadi*, más conocido como Plan Ibarretxe. La postura de Rajoy en el debate sobre el Plan Ibarretxe en el Congreso de los Diputados suponía simplemente negar una realidad: la existencia de un conflicto no resuelto durante más de un siglo con las nacionalidades históricas. Pero lo más significativo fue la actitud de Zapatero y del portavoz parlamentario del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba: ambos tendieron la mano al PNV para negociar una reforma del Estatuto de Gernika, al mismo tiempo que polemizaban con dureza contra los planteamientos del PP. Una nueva orientación se estaba imponiendo en la cúpula del PSOE.

La respuesta del Ejecutivo vasco no se hizo esperar: Ibarretxe convocó elecciones autonómicas para el día 17 de abril, adelantando unas semanas la fecha prevista. El PNV pretendía alzarse con la mayoría absoluta en el Parlamento utilizando la bandera de la consulta a los ciudadanos sobre el Plan y arrancando una buena tajada de votos a una izquierda abertzale ilegalizada y con pocas posibilidades de presentar candidatura.

A pesar de la insistencia de Ibarretxe a favor de que la izquierda abertzale pudiese presentar candidatos a dichos comicios, la realidad era que anticipar la fecha de las elecciones era una dificultad añadida para ellos. Como afirmó el diario *Gara* en su editorial del 3 de febrero, “tratan de limitar la posibilidad de que en el tiempo que queda hasta los comicios puedan producirse movimientos políticos que releguen la propuesta del Parlamento a un segundo plano”.

Los “movimientos políticos” a los que se refiere el diario *Gara* es la posibilidad de que el PSOE y la izquierda abertzale puedan llegar a establecer algún tipo de negociación, posibilidad que se abre tras la carta remitida por la dirección de Batasuna a Zapatero y la receptividad mostrada por éste. Una salida de este tipo po-

dría excluir a la burguesía vasca, que vería mermar su ansiado rédito electoral. Para el PNV abortar esta iniciativa se convirtió en una prioridad.

La carta abierta que Batasuna remitió a Zapatero antes de las elecciones autonómicas era una continuación de la lógica abierta con la propuesta de Anoeta. El texto revelaba con toda crudeza los parámetros en los que se mueve la dirección de la izquierda abertzale bajo la influencia del ala más reformista de la organización: “Si el señor Zapatero decide convertirse en el Tony Blair español, que resuelva definitivamente el conflicto político y armado que tiene el Estado español con Euskal Herria, debe saber que la actitud de Batasuna y de toda la izquierda abertzale le acompañará en todo momento para que ese escenario fructifique y se abra paso un escenario de paz justa, estable y duradera en nuestro país”. ¿Cómo puede la dirección de Batasuna citar a Tony Blair como un modelo para Zapatero? Tony Blair, amigo personal de Aznar y Bush, lleva a cabo una política desastrosa desde el punto de vista de la izquierda, como demuestra el hecho de que, además de apoyar la legislación antisindical aprobada por Margaret Thatcher, haya privatizado los ferrocarriles y la sanidad, haya impuesto una contrarreforma laboral que ha convertido a Gran Bretaña en un paraíso para la patronal y haya legislado recortes de los derechos democráticos que son la envidia de la derecha europea. Blair sigue siendo, además, el mejor aliado del imperialismo americano en las guerras de Afganistán e Iraq. Su amistad y su relación tan estrecha con Aznar y Bush no es ninguna casualidad; al contrario: responde al modelo del imperialismo decadente británico del que Tony Blair ha sido un fiel seguidor. Pensar que Tony Blair no ha actuado como un leal servidor de su majestad en el problema irlandés es negarse a aceptar la realidad. Tony Blair no es el amigo de los irlandeses ni del movimiento republicano, es un hábil representante de la burguesía imperialista de Londres que ha conseguido arrastrar al IRA y al Sinn Fein al terreno que le es más propicio: el institucional.

La carta de Batasuna continúa: “Queremos mostrarle nuestra preocupación por la deriva que está tomando su actuación política cimentada en el Pacto Antiterrorista, la Ley de Partidos, la proliferación de medidas judiciales y represivas que agravan la situación del conflicto. Entendemos que no es ése el camino; es pues momento para los hombres y mujeres de Estado; es momento para elegir entre el pacto con los sectores más reaccionarios o elegir el camino de la democracia”. ¿Hombres y mujeres de Estado? ¿Qué tipo de lenguaje es éste? ¿Acaso cree la dirección de la izquierda abertzale que por utilizar las formas educadas del parlamentarismo burgués va a conmovir el corazón de la burguesía española, o de los jefes del Estado Mayor, o de los banqueros? Vivimos en un Estado burgués con una constitución que propugna la unidad de la nación española sobre la base del ejército. ¿Por qué no se menciona ni una sola vez en la carta la palabra socialismo? Se nos contestará que eso no es práctico ni conveniente en estos momentos. Muy bien, que cada cual saque las conclusiones que quiera. Pero lo cierto es que la izquierda abertzale ha sido ilegalizada por razones “de Estado”. No serán los “hombres de Estado” los que conseguirán el derecho de autodeterminación para Eus-

kal Herria; esa tarea está reservada a la clase obrera y la juventud vasca y a sus hermanos de clase de los Estados español y francés, con una política de independencia de clase y genuinamente socialista.

AUTONÓMICAS DE 2005: LOS PLANES DEL PNV SALTAN EN PEDAZOS

Las elecciones autonómicas del 17 de abril de 2005 estuvieron protagonizadas por los intentos de impedir a la izquierda abertzale presentar candidatos. El escándalo subió de tono al ser ilegalizadas las candidaturas de Aukera Guztiak (AG, Todas las Opciones), haciendo de la legalidad burguesa algo pastoso que se puede deformar a gusto y sin miramientos, según las conveniencias políticas del momento.

Dichas candidaturas, que contaban con el aval de más de 30.000 firmas, fueron insistentemente vinculadas a ETA por parte del fiscal del Tribunal Supremo, Conde-Pumpido, que utilizó los argumentos más increíbles: desde que AG compartía correos electrónicos con Batasuna, hasta que en sus filas había promotores de antiguas listas electorales de la izquierda abertzale. La candidata del PP, María San Gil, llegó a comentar que “incumplía la cuota femenina”. Para lograr sus objetivos antidemocráticos utilizaron todo tipo de “pruebas” obtenidas ilegalmente, llegando a cotejar policialmente las 30.000 firmas para acusar a la candidatura de contar con el apoyo de sindicalistas de LAB o accionistas de Gara, o de que algunos de ellos habían participado en charlas de HB, incluso que había firmado Jon Idígoras, que en ese momento estaba hospitalizado. El catedrático de derecho en la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, que se opuso firmemente a la ilegalización de Batasuna basándose en los propios preceptos de la Constitución, escribió no pocos artículos denunciando el estado de excepción jurídica que la ilegalización de Aukera Guztiak representaba.

Todo parecía atado y bien atado pero un factor desestabilizó todas las estrategias, especialmente la del PNV. Tras ser ilegalizada Aukera Guztiak, una modesta candidatura hasta entonces desconocida que se presentó a las elecciones con las siglas de EHAK (Partido Comunista de las Tierras Vascas) ofreció sus listas a la izquierda abertzale para que ésta pudiera estar representada en el Parlamento Vasco. Con el ahínco y la arbitrariedad con que el Estado cercena los derechos democráticos más elementales, la derecha se apresuró a exigir la ilegalización de las candidaturas de EHAK en plena campaña electoral, a pesar de haber pasado todos los filtros. De hecho, fue el propio ministerio del Interior, a cuyo frente en aquel entonces estaba el mismísimo Ángel Acebes, quien legalizó a EHAK.

Como en ocasiones anteriores, el PP volvió a utilizar la demagogia española para intentar sacar ventajas electorales. Pero en esta ocasión sus ataques se volvieron en su contrario. La ferocidad con que la derecha española atacó las candidaturas de EHAK trastocó toda la campaña electoral. Durante la mayor parte del tiempo, los medios de comunicación no se centraron en las propuestas del Plan

Ibarretxe, como tenía planeado el PNV-EA —y también el PP—, sino en si la nueva candidatura sería ilegalizada o no.

Curiosamente, los dirigentes de EA, PNV, EB y Aralar, que decían apoyar todas las opciones y afirmaban que era muy positivo que la izquierda abertzale pudiese presentarse, en la práctica parecían estar dando continuos argumentos al PP, a los sectores más derechistas del PSOE y a los jueces más reaccionarios para que la ilegalizasen. Para dejar clara su posición, el PNV-EA utilizó a la Ertzaintza para disolver con contundencia los actos electorales de la izquierda abertzale. En cualquier caso, la saña desatada por el PP provocó un efecto muy diferente al que pretendía, logrando que EHAK atrajese hacia sí el voto de quienes desde la izquierda están en contra de los abusos que se están cometiendo con la Ley de Partidos, las ilegalizaciones y las acusaciones de pertenecer a ETA a todo el que se mueve y defiende los derechos democráticos.

Finalmente, el resultado de las elecciones supuso un auténtico terremoto político. EHAK, para sorpresa de propios y extraños, logró nueve escaños. Además del rechazo a los ataques viscerales a los derechos democráticos, los resultados reflejaban el giro a la izquierda en el péndulo social, dato que la prensa burguesa ocultó tras la división entre los votos nacionalistas y constitucionalistas. La suma de los votos obtenidos por las candidaturas con una base social de izquierdas (PSE-EE, EHAK, EB-IU y Aralar) experimentó un claro avance: 40.353 votos más que en las autonómicas anteriores. Por el contrario, la derecha vasca y española (PNV-EA y PP) sufrió un fuerte retroceso: 268.487 votos y nueve diputados menos que en 2001. Este avance en votos es más significativo aún si se tiene en cuenta que había 50.000 electores menos en el censo y que se registraron diez puntos más de abstención al caer la participación del 78,97% al 68,96%.

Los resultados de las elecciones fueron un auténtico varapalo para el PNV-EA que, lejos de avanzar como pretendían, retrocedieron ostensiblemente al perder cerca de 150.000 votos y cuatro diputados. No pasó desapercibida la política social de la derecha vasca ni sus ataques en la última legislatura contra la clase trabajadora, la sanidad, la educación pública y contra los propios funcionarios del Gobierno Vasco, donde impera la precariedad laboral. Los electores castigaron además la estrategia maniquea del PNV-EA de intentar arrebatar a la izquierda abertzale su base electoral; en esta ocasión perdieron incluso más votos que los que recibieron prestados de la izquierda abertzale en las anteriores elecciones. Los resultados confirmaron el fracaso de la estrategia del PNV, más si se tiene en cuenta que Ibarretxe había comprometido a los resultados electorales la celebración de una consulta al pueblo vasco sobre su Plan, aunque nunca definió los términos en los que ésta se iba a realizar.

La subida más importante la acusará el PSOE, que obtiene 272.429 votos, un incremento de 5 escaños y 19.234 votos, arrebatando la segunda plaza al Partido Popular, que se hunde miserablemente con su política represiva al perder cuatro escaños y 118.000 votos.

Pero sin duda la gran protagonista de la jornada electoral fue EHAK, que logró mejorar incluso los resultados obtenidos por EH en las anteriores elecciones autonómicas. Es indudable que toda la militancia activa de la izquierda abertzale se volcó en la campaña electoral con EHAK, hecho que se podía comprobar en la abrumadora presencia de los símbolos y carteles de EHAK en las ciudades y pueblos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Pero este apoyo también tenía otros significados: reflejaba que la enseña roja, la estrella y el nombre del comunismo, lejos de asustar, eran capaces de generar ilusión. En el diario *Gara* se publicaron artículos de gente de izquierdas orgullosos y felices de unir la lucha por la liberación de Euskal Herria a un voto comunista. El voto a EHAK movilizó a los sectores de la izquierda abertzale (particularmente los sectores obreros, militantes de LAB) críticos con los giros a la derecha de su dirección, que lleva años detrás del PNV-EA reclamándoles lo que la burguesía vasca jamás querrá dar.

La subida de EHAK respecto a los resultados obtenidos por EH en 2001 demostró además que el voto mayoritario de la izquierda abertzale es fundamentalmente un voto de izquierdas y revolucionario. Incluso en lo visual, el color rojo fue el predominante en las calles y pueblos de Euskal Herria. El nacionalismo de izquierdas de un pueblo oprimido, como decía Trotsky, esconde en no pocas ocasiones un bolchevismo inmaduro y eso quedó demostrado en estas elecciones con los 150.188 votos logrados por el Partido Comunista de las Tierras Vascas.

A su vez estos resultados han sido una lección para los dirigentes del Partido Comunista de Euskadi (EPK-PCE) y de IU-EB y su política de colaboración con la burguesía vasca. En este avance de la izquierda, Ezker Batua ha sido la excepción al perder casi 14.000 votos. Madrazo ha pagado su participación dentro de un Gobierno de derechas con el PNV-EA, donde ha sido incapaz de resolver el problema de la vivienda con políticas reformistas, convirtiéndose en el saco de las críticas de la propia izquierda.

Los resultados electorales impidieron a la burguesía vasca alcanzar la holgada mayoría parlamentaria con la que pensaban pasar a la ofensiva. De hecho, la formación del nuevo gobierno PNV, EA y Ezker Batua sólo ha sido posible tras recibir dos votos de EHAK, condenando al gobierno vasco a una penosa travesía de pactos y acuerdos para garantizar la legislatura.

La naturaleza de clase del nuevo gobierno no tardó mucho en aflorar; inmediatamente abandonó cualquier referencia a promover en el sector privado la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, al tiempo que concedían a la Universidad Privada de Mondragón y Deusto cuatro millones de euros, mientras que a la Universidad Pública UPV-EHU, en la que estudia el 80% de los universitarios vascos, se le asignaban 10.095.595 euros como denunció José Ramón Díaz de Durana en *El Correo* el 7 de julio del 2005.

¿Por qué EHAK apoyó al nuevo ejecutivo de derechas de Ibarretxe? No hubo ni una sola concesión, ni un solo gesto práctico por parte de la burguesía vasca. Las palabras, una vez más, contradicen a los hechos: en lugar de reclamar soberanía,

el Gobierno Vasco demanda transferencias a Madrid; en lugar de trabajar en torno al Acuerdo Democrático de Base logrado por cincuenta organizaciones en el Foro de Debate Nacional, surgido de la propuesta de la izquierda abertzale en Anoeta, Ibarretxe propone un Consejo Político en el seno de su Gobierno con el objeto de utilizar cualquier proceso que se pueda dar en su propio beneficio, tendiendo puentes con el PSOE, probablemente para acabar firmando un nuevo Estatuto y modestas reformas constitucionales. Una vez más, el doble lenguaje del PNV no es producto de la casualidad. Alguno de sus dirigentes llega a hablar de una orquesta de Jazz perfectamente conjuntada refiriéndose a los distintos discursos de Egibar, su portavoz, y de Josu Jon Imaz, su presidente. Efectivamente, las disonancias son calculadas. Estos son los frutos de la colaboración de clases y el “realismo” que practican las direcciones de la izquierda en Euskal Herria.

El cambio de escenario político, no obstante, ha sido de gran calado. La estrategia del PP ha recibido un duro varapalo en Catalunya, en las elecciones generales, y en Euskadi pero todavía estaba lo mejor por llegar: la pérdida de las elecciones autonómicas en Galicia suponen una derrota histórica en su feudo tradicional.

Todos estos factores han provocado que la política de confrontación con el nacionalismo vasco y la política de bloques, que tan buenos resultados dio a la derecha española, hayan hecho aguas. El PP se ha encontrado con un cambio en la postura del PSOE, que después de confirmar su ascenso en las elecciones vascas, pretende volver a tender puentes con el PNV sin renunciar siquiera a reeditar los gobiernos conjuntos con el nacionalismo vasco. Obviamente un escenario así no se puede preparar de la noche a la mañana, necesita de tiempo y de gestos. Pero toda apunta en esa dirección.

CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

El PSOE se escuda en el Partido Popular para no hacer grandes cambios, ni en la Constitución, ni en los Estatutos de autonomía y reclama el acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas. Su objetivo es realizar modestas modificaciones como convertir el Senado en cámara autonómica, que la Constitución recoja la sucesión femenina al trono y poco más, y lo mismo con relación a los Estatutos de autonomía. Sin embargo una vez abierta la caja de Pandora es difícil volverse atrás, como demuestran las dificultades de Maragall para conseguir apoyos a su reforma descafeinada del Estatut, tanto en Catalunya como en Madrid.

En Euskal Herria, el hecho de que el gobierno socialista haya planteado una modificación de la Constitución y de los Estatutos de autonomía ha contribuido a crear ilusiones en un escenario “histórico”, en una “segunda transición”, donde algunos creen que pueda hacerse ahora lo que no se hizo entonces, esto es, reconocer el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas. Para ello haría falta una intervención decidida de la clase trabajadora, que hizo posible el

debate y los cambios que hubo entonces. Es muy probable que este debate “autonómico”, que presumiblemente será largo, sea utilizado para desviar la atención de los ataques que la derecha y la patronal lanzan contra el movimiento obrero a favor de desregulación de la negociación colectiva, de una vuelta de tuerca en la privatización de la sanidad y educación pública, de mayores recortes en los gastos sociales, incluyendo mayor precarización del empleo...

Esto no quiere decir que a la clase trabajadora no nos interese un debate y una lucha sería para lograr ampliar los derechos democráticos, como el derecho de autodeterminación para las nacionalidades históricas, y exigir la derogación de la Ley de Partidos y de todas las leyes regresivas implantadas por la derecha la última década. La burguesía, como hemos visto, puede luchar y lucha por menos democracia y las organizaciones de izquierda tienen la obligación de profundizarla.

El Gobierno del PSOE ha marcado diferencias con el PP en algunos puntos pero, como la experiencia demuestra, eso no es suficiente. Debe romper definitivamente cualquier lazo que le amarre a la política reaccionaria del PP. Cualquier concesión que trate de hacer el Gobierno de Zapatero a la derecha no hará sino envilentonarles aún más y animarles a elevar el listón de sus exigencias reaccionarias.

Los dirigentes reformistas del PSOE, hicieron de la defensa de la Constitución española la excusa para justificar su frente único con la derecha ante el problema nacional en Euskal Herria. La Constitución, junto con la monarquía y otras instituciones de la democracia burguesa, se han convertido gracias a la política de los dirigentes del PSOE en iconos sagrados intocables. Existe una especial dedicación a presentar estos órganos políticos de la burguesía como la quintaesencia de la democracia, considerando además la democracia como algo absoluto, deshojándola de su contenido de clase.

Para los marxistas no existe una democracia en abstracto: existen relaciones sociales de producción que determinan formas políticas de gobierno específicas. En una sociedad basada en la explotación del hombre por el hombre, en la propiedad privada de los medios de producción y en el trabajo asalariado, la clase dominante, propietaria de esos medios, ejerce su poder en el resto de las esferas de la sociedad; en lo político, lo ideológico, lo cultural. Ese poder es el que le permite modelar las instituciones políticas de tal manera que garanticen la perpetuación de su poder económico y sus privilegios, aunque esas instituciones aparezcan con un barniz de supuesta democracia.

En las “democracias parlamentarias”, la población tiene derecho a votar cada cuatro años. Pero el poder real no reside en el parlamento, sino en los consejos de administración de las grandes empresas, en los grandes bancos, en las corporaciones y multinacionales, en los Estados mayores del ejército. El gobierno, en cualquier régimen parlamentario capitalista, tal como Marx señaló hace más de 150 años, no es más que el comité ejecutivo que vela por la salvaguarda de los intereses de la clase dominante; y cuando un gobierno actúa en contradicción con los intereses del capital, aunque haya sido elegido democráticamente en las urnas,

será sometido al boicot permanente de la clase dominante, que no parará hasta lograr su caída. Si la clase trabajadora, los explotados en general, osan desafiar el dominio de la burguesía, esta última, como la experiencia histórica ha atestiguado sobradamente, se desprenderá de las formas democráticas sin ningún remordimiento para adoptar los métodos del bonapartismo, la guerra civil, la represión o la dictadura militar si de esta manera defiende su posición en la sociedad.

Basándonos en un análisis de clase, y no en las ilusiones ni en la propaganda de la burguesía, no podremos dejar de afirmar que la Constitución española es una constitución burguesa y eminentemente centralista que supedita el interés colectivo al respeto de la propiedad privada capitalista y sus leyes de mercado y coloca al ejército, herencia del franquismo que no ha sido depurado, como garante de la unidad patria frente a las aspiraciones democráticas de las nacionalidades históricas. La Constitución española refleja la correlación de fuerzas entre las clases en el momento en que se redactó pero el hecho de que, producto del auge de las luchas obreras, tuviera que reconocer el derecho a una vivienda digna, al trabajo o a la educación de calidad, no obliga a la burguesía a cumplir con estos compromisos.

En la práctica, después de que el movimiento de la clase obrera en los años setenta fuese desviado del camino de la revolución hacia las sendas tranquilas del parlamentarismo burgués, la clase dominante ha utilizado la Constitución como una herramienta política a su servicio. ¿Acaso no ha estado de hecho en constante cambio y transformación por la vía ejecutiva y legislativa? ¿Acaso el Partido Popular, con sus leyes regresivas contra los derechos democráticos, no los mermó cada día más? La burguesía utiliza la Constitución para lo que le interesa y nada más. Es su Constitución a la que exigen acatamiento cuando ellos mismos la interpretan en función de sus intereses de clase.

En estas circunstancias, la clase trabajadora debe redoblar sus exigencias de profundización de las libertades democráticas, que siempre van de la mano de los mayores avances sociales. Esto no es ninguna casualidad: cuando la clase obrera avanza en derechos sociales, en educación, vivienda, salarios..., exige igualmente avances en derechos democráticos de asociación, reunión y manifestación. Ésa es la expresión de un movimiento en alza, de un giro a la izquierda en el péndulo social. Por el contrario, un recorte de los derechos democráticos va de la mano de una ofensiva de la clase dominante también en el terreno social, como vemos en las actuales condiciones de semiesclavitud a las que se intenta someter a la clase trabajadora.

Los marxistas reivindicamos más democracia, mucha más, y por eso es necesario que el PSOE derogue inmediatamente la Ley de Partidos y todas las leyes regresivas aprobadas por el PP.

El modelo de las organizaciones de izquierda no puede ser una Constitución burguesa, sino una Constitución socialista. Los derechos democráticos de los que

disponemos aún y que el PP recortó, no nos pertenecen por estar en un papel impresos, sino porque los hemos defendido y estamos dispuestos a defenderlos en la calle, como se demostró tras el golpe de Estado del 23-F y tras los atentados de Madrid del 11-M de 2004.

IX. Preparando la negociación

La posibilidad de abrir una mesa de negociación para resolver el contencioso de Euskal Herria ha despertado esperanzas en muchos ámbitos pero, sobre todo, en el seno de la izquierda abertzale. Sin embargo, hay que decir con sobriedad que no es creíble que por sentarse en una mesa de negociación se pueda lograr el derecho de autodeterminación o la unidad territorial de Euskal Herria. Sería atribuirle a dicha mesa características místicas.

No obstante, la propuesta de Anoeta de abrir mesas de diálogo, al estilo de lo ocurrido en Irlanda, crea nuevas expectativas en la búsqueda de una solución, lo que ha llevado al sector que domina el aparato del PSOE a hacer una apuesta estratégica en este sentido. Además, hay un obvio interés por parte de sectores clave del capital español y de la burguesía vasca de acabar, de una vez por todas, con la actividad armada después de años de confrontación. Es evidente que una negociación que cristalizase en el abandono de las armas por parte de ETA contaría con el respaldo mayoritario de la población, como han puesto de manifiesto diversas encuestas que sitúan hasta en un 65% el apoyo de la opinión pública a la pacificación.

En cualquier caso el camino emprendido estará lleno de dificultades y contradicciones, como los hechos están demostrando. El 11 de mayo de 2005 en el debate del Estado de la Nación la derecha lanzó una cascada de ataques y descalificaciones contra las pretensiones negociadoras del gobierno Zapatero que alcanzaron el tono de la histeria. Para Rajoy, Acebes y Zaplana la política del PSOE en este ámbito, reforzada tras los resultados de las elecciones vascas, ha supuesto la ruptura del pacto antiterrorista y una “traición a la memoria de los muertos”. El martes 17 de mayo el Parlamento aprobó por mayoría una moción en la que se instaba a ETA a abandonar la violencia como condición para poder abrir un diálogo “del que se excluyen contrapartidas políticas”. Todos los partidos parlamentarios, a excepción del PP, respaldaron la propuesta del Gobierno. En esas mismas fechas dirigentes de Batasuna, como Arnaldo Otegi y Permach, insistían en la necesidad de abrir un proceso similar al de Irlanda, que concluyera en un acuerdo de pacificación, en el que “todas las partes estaban obligadas a realizar concesiones”.

El miércoles 25 de mayo ETA hacía estallar una bomba en una zona obrera de Madrid cercana al barrio de San Blas, al tiempo que Arnaldo Otegi era enviado a prisión por su supuesta vinculación con la financiación de ETA a través de las herriko tabernas. ¿Se trata de toma de posiciones para negociar? ¿O es que tanto en un sector de ETA como —y sobre todo— en ciertos sectores del aparato del Estado existe un interés claro en dinamitar cualquier salida negociada que implique la mínima concesión? Ambas preguntas probablemente puedan contestarse afirmativamente al mismo tiempo.

El 21 de junio la Sala cuarta de la audiencia nacional hizo públicas las condenas a 24 dirigentes de las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi por pertenencia a una “asociación ilícita”. Las penas fueron de 3 años y 6 meses de prisión para los dirigentes y de 2 años y 6 meses para los simples militantes, además del pago de 3.000 euros de multa y de inhabilitación especial para cargos públicos durante 10 años. En total las penas suman 76 años de prisión, frente a los 654 años que reclamaba el fiscal. Los marxistas reclamamos la absolución de los jóvenes encausados y el sobreesimiento de ese monstruoso sumario 18/98 que ha provocado el cierre de cuatro medios de comunicación como *Egin*, *Egin Irratia*, *Egunakaria* y *Ardi Beltza*, la ilegalización de Batasuna y la detención y el encarcelamiento o juicio de más de 200 personas por un delito de opinión que nos afecta a todos.

La acusación de que todo el entorno de la izquierda abertzale formaba parte de ETA—lo que se ha dado en llamar el sumario 18-98— era tan grave, que la Sala cuarta ha roto esta tesis, diseñada en su día por Garzón con el apoyo de la policía y la Guardia Civil. La sentencia, no obstante, ha sido calificada de blanda por el PP y de una burla por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que solicitaba, junto con el fiscal, penas de más de seis siglos en total para estos jóvenes.

Como hemos señalado anteriormente, hay obstáculos poderosos que pueden dar al traste con esta posible negociación. El aparato del Estado, en manos de elementos extremadamente reaccionarios, va a hacer todo lo posible por sabotear cualquier solución negociada. Quieren la derrota incondicional de ETA, como han señalado reiteradamente Aznar y sus amigos. En esto conectan plenamente con los intereses del aparato político del PP, que ve en la existencia de ETA una garantía para su crecimiento electoral. Conectan también con las tradiciones reaccionarias de la burguesía española, que emergen con fuerza en estos momentos de gran polarización social.

La manifestación del 4 de junio, convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y respaldada activamente por el PP, fue una demostración de fuerza de la reacción. La asistencia, en torno a 200.000 personas, queda, sin embargo, muy lejos de las manifestaciones contra la guerra imperialista, el desastre del *Prestige* o la huelga general del 20-J y otras convocadas para manifestar el rechazo a la actividad armada de ETA o contra los atentados del 11-M. No han conseguido movilizar a los trabajadores y jóvenes de los barrios obreros de la capital y es muy significativo que ésta haya sido la primera manifestación contra el

“terrorismo” no apoyada por la izquierda, demostrando la necesidad de desenmascarar la postura reaccionaria del PP en este asunto.

También dentro del PSOE hay sectores que no quieren una solución negociada y que siempre se han identificado con las posturas más reaccionarias de la burguesía españolista. Estos sectores, hoy por hoy, están en minoría pero no dejarán de actuar en el caso de que la situación se complique. Al mismo tiempo, la pretensión de ETA de fortalecer su posición en una eventual negociación mostrando su capacidad operativa con nuevos atentados, pone de manifiesto su incapacidad para entender la situación real. Con eso sólo alimentan la reacción del Estado —como ha quedado demostrado con la detención y encarcelamiento de Otegi— y fortalecen la posición de los sectores contrarios a cualquier contacto o negociación.

Esta presión sobre el gobierno del PSOE existe y se incrementará. De hecho, ya se ha manifestado con la detención de Arnaldo Otegi y la petición fiscal de 14 años de prisión por su supuesta pertenencia a ETA. ¿Cómo se entiende que Otegi sea el interlocutor político del PSOE y el Gobierno en una posible negociación y se le mande a la cárcel, con argumentos traídos por los pelos, si no es por esta actitud manifiestamente represiva que todavía persiste en amplios sectores del aparato del Estado?

Es realmente increíble que el ministro de Justicia, López Aguilar, considere la detención de Otegi como “un paso más en la determinación de todas las instituciones de acabar con ETA”. De estas palabras se podría interpretar que una forma de alimentar la vía negociadora y favorecer a aquellos que, dentro de la izquierda abertzale, propugnan el abandono de la actividad armada es encarcelando a toda la dirección de Batasuna. Pero cualquiera entiende que esto sólo echará gasolina al conflicto y lo pudrirá.

La burguesía española, en las actuales circunstancias, no está dispuesta a realizar concesiones y no lo está, tanto por motivos políticos como económicos. En el pasado, ETA se sentó con el PSOE en Argel y con el PP sin lograr más oferta que la libertad de presos a cambio del abandono de la lucha armada. ¿Qué puede hacer creer que ahora será diferente? ¿Acaso la fortaleza que pueden exhibir frente al Gobierno una organización ilegalizada, 700 presos en las cárceles y las grandes movilizaciones en contra de los atentados de ETA? ¿No es preferible ser honestos y decir la verdad?

La idea de vender una victoria donde no la hay es un profundo error que acabará volviéndose contra aquellos dirigentes que han llevado al movimiento a un callejón sin salida. Por supuesto que los marxistas estamos a favor de que ETA abandone la lucha armada por la lucha política. Este único hecho eliminaría la excusa del Estado burgués para reprimir nuestros derechos democráticos y alentar la demagogia españolista contra las nacionalidades. Pero lo más importante es que permitiría situar los problemas de clase en un primer término, colocando en su sitio a la burguesía vasca, enemiga declarada de los trabajadores y de los jóvenes de Euskal Herria.

También estamos a favor de una solución para los presos y sus familias, que en este momento son víctimas de la política de dispersión, que incumple lo que estipula el código penal respecto a las excarcelaciones por penas cumplidas, acercamiento a los lugares de residencia de los presos y sus familias y régimen de visitas. Los presos políticos vascos podrían jugar un importante papel en las fábricas, universidades, barrios y pueblos de Euskal Herria organizando a la juventud y los trabajadores con el programa del socialismo revolucionario, aprovechando toda la experiencia acumulada de su lucha.

Pero incluso en el caso de que una negociación pudiese resolver estas cuestiones, que no queremos minusvalorar, el problema de la explotación de cientos de miles de trabajadores y jóvenes vascos continuaría en el marco del capitalismo. También continuaría sin resolverse el problema nacional y el derecho de autodeterminación, y éste se vería alimentado inevitablemente por la frustración de las jóvenes generaciones en una perspectiva de profundización de la crisis del sistema capitalista.

La izquierda abertzale se encuentra en una disyuntiva crítica. Si mantiene su apoyo a los métodos del sectarismo y a su política de alianzas con la burguesía vasca su debilitamiento sería inevitable. Si por el contrario adopta un programa auténticamente marxista e internacionalista podría formar a centenares y miles de cuadros en las ideas de la revolución socialista, cuadros que podrían unir a la clase trabajadora por encima de fronteras nacionales en la lucha por la transformación socialista de la sociedad.

Epílogo

La cuestión nacional ha demostrado ser un problema irresoluble para la burguesía, tanto española como de las nacionalidades históricas, pero para la clase trabajadora y sus organizaciones puede ser un potente motor de cambio si toda la energía que la cuestión nacional es capaz de desplegar se orienta, desde un punto de vista de clase, en la lucha por la transformación socialista de la sociedad. Para ello, la principal tarea de los revolucionarios en Euskal Herria, Galicia y Catalunya ha de ser arrancar dicha bandera a la burguesía nacionalista, que demagógicamente la utiliza para defender sus intereses de clase.

La liberación de la opresión centralista de las nacionalidades históricas se logrará uniendo las reivindicaciones democrático-nacionales a la lucha de la clase trabajadora de todo el Estado por la transformación socialista de la sociedad y para ello es vital la unión orgánica del proletariado por encima de cualquier consideración de nacionalidad, lengua, raza o religión. Quienes atentan contra esta unión hacen un flaco favor al movimiento obrero y a la propia causa de liberación nacional.

Desde el punto de vista del marxismo, no hay ninguna contradicción en defender el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas, incluido el derecho a la independencia si así lo decidiesen democráticamente la mayoría de los catalanes, vascos o gallegos, y defender al mismo tiempo la unidad orgánica de la clase trabajadora por encima de fronteras nacionales.

Como marxistas, defendemos la más amplia autonomía de las nacionalidades históricas en el marco de una Federación Socialista de las Nacionalidades Ibéricas como un primer paso hacia una Federación Socialista de Europa y una Federación Socialista Mundial. De esta manera se podrá establecer las bases materiales para una auténtica fraternidad entre los pueblos y nacionalidades, liberados de la opresión capitalista.

Hoy como ayer, lo que necesita la clase trabajadora es una dirección revolucionaria que luche por el socialismo, por la nacionalización de la banca, de la tierra y de los grandes monopolios bajo control obrero y sin indemnización, salvo en casos de comprobada necesidad, para establecer una planificación democrática de la economía que permita acabar con las lacras del capitalismo.

En manos de la clase obrera, de todos aquellos militantes jóvenes, trabajadores y trabajadoras con conciencia de clase dispuestos a formarse políticamente, a participar, a organizarse, está decidir como será nuestro futuro y el de las generaciones venideras. Ésa es la tarea más importante, la que debería centrar todos nuestros esfuerzos: crear una dirección del proletariado a escala nacional e internacional capaz de acabar con la lacra que representa el capitalismo. Hoy como ayer, la crisis de la humanidad, como decía León Trotsky, se puede resumir en última instancia en la falta de dirección revolucionaria. Ésa es la tarea fundamental de nuestra época.

Una revolución socialista en el Estado español tendría un efecto inmediato en los países vecinos, haciendo temblar el dominio del gran capital. La revolución socialista es contagiosa, la clase obrera francesa cumpliría con sus tareas aboliendo el capitalismo y la extendería por el resto de Europa. De esta manera se crearían las bases para la solución del problema nacional en el viejo continente: en Euskal Herria, en Irlanda, en los Balcanes... Dentro del marco de una Federación Socialista a escala mundial la explotación y la opresión nacional serán pesadillas del pasado. Cada pueblo, cada nacionalidad, experimentará un auténtico renacimiento nacional, una revolución cultural con el surgimiento de todo el genio literario, científico y artístico que posee en su seno. Veremos nuevas generaciones de escritores, filósofos, poetas, novelistas... Sobre la base de las nuevas tecnologías la enseñanza de las lenguas hoy minoritarias podrían generalizarse, apoyándose en los logros de una planificación armónica de la producción y la plena integración de la economía europea y mundial.

Como Alan Woods y Ted Grant señalan en *Razón y revolución*: “Una sociedad socialista democrática aboliría la diferencia entre trabajo manual e intelectual a través de un incremento general del nivel cultural de la sociedad, Esto está estrechamente vinculado a la reducción de la jornada laboral como consecuencia de una planificación racional de la producción. La educación se transformaría, combinando el aprendizaje con la actividad creativa y el juego. El desarrollo de todo tipo de nuevas técnicas será utilizado por completo. Los dispositivos de realidad virtual, que hoy en día son poco más que novedades, tienen un enorme potencial no sólo para la producción y el diseño, sino también para la educación. Esto hará que las lecciones cobren vida, estimulando la imaginación y la creatividad de los niños no sólo para experimentar la historia y la geografía, sino también para aprender ingeniería mecánica o cómo pintar o tocar instrumentos musicales. La liberación de la humillante lucha por las necesidades de la vida, el acceso a la cultura y el tiempo para desarrollarse uno mismo como ser humano, son las bases sobre las que la sociedad humana puede realizar todo

67. Giacopuzzi, G., *op. cit.*, pág. 286.

68. “Herri Batasuna, Hausnartzen, Caracterización y organización”, citado en Giacopuzzi, G., págs. 285-86.

su potencial”⁶⁹.

El destino de los pueblos vasco, catalán y gallego y el de los demás pueblos será decidido por el resultado de la batalla del proletariado contra la oligarquía. Un régimen de democracia obrera sería un régimen de transición hacia una sociedad sin clases, hasta conquistar plenamente el socialismo, garantizando un desarrollo sin precedentes de las fuerzas productivas. En ella los ejércitos, la policía, las fuerzas armadas no tendrían ninguna razón de existir y la mera utilización de los recursos económicos, científicos y humanos que hoy se consumen en el militarismo y la guerra posibilitará combatir la miseria a escala mundial y elevar sin precedentes el bienestar de la humanidad, al mismo tiempo que se frenarán los desequilibrios ecológicos que ha introducido el desarrollo desigual y anárquico del capitalismo acelerando catástrofes naturales y poniendo en peligro la existencia humana en el planeta.

El fin del socialismo no es la creación de nuevas fronteras sino la destrucción de las viejas, la liquidación de todo tipo de opresión nacional y, por tanto, la creación de un mundo unido con la integración de todos los pueblos y las razas en una sociedad en la cual ya no habrá explotados y explotadores, opresores y oprimidos, sino simplemente hombres y mujeres libres. La humanidad en su conjunto tendrá entonces ocasión de dar un gran salto histórico, de la necesidad de luchar por la supervivencia en una sociedad perpetuamente dividida en clases, a la libertad para todo el género humano basada en un desarrollo exponencial de las fuerzas productivas, de la ciencia y la técnica que, utilizadas de forma armónica, salvarán al planeta y a la propia especie humana de su actual devastación, abriendo caminos nuevos y maravillosos para la creatividad y el conocimiento humano, la conquista del arte y las ciencias, asegurando el futuro de la especie humana en el universo.

69. El entonces lehendakari, José Antonio Ardanza, en una entrevista publicada por *Berria* en febrero de 2005, declaró: “En las cárceles había muchos problemas entre los miembros de ETA: no hablaban entre ellos, se amenazaban (...) A nosotros nos llegó una petición de separarlos por parte de presos, porque estando todos juntos algunos imponían sus opiniones. Entonces hici-

El apartado 9 del programa de los marxistas de Rusia, que trata del derecho de las naciones a la autodeterminación, ha provocado estos últimos tiempos (como ya hemos indicado en *Prosveschenie*) toda una campaña de los oportunistas. Tanto el liquidacionista ruso Semkovski, en el periódico petersburgués de los liquidadores, como el bundista Libman y el socialnacionalista ucraniano Yurkévich, en sus órganos de prensa, han arremetido contra dicho apartado, tratándolo en un tono de máximo desprecio. No cabe duda de que esta “invasión de las doce tribus” del oportunismo, dirigida contra nuestro programa marxista, guarda estrecha relación con las actuales vacilaciones nacionalistas en general. Por ello nos parece oportuno examinar detenidamente esta cuestión. Observemos tan sólo que ninguno de los oportunistas arriba citados ha aducido ni un solo argumento propio: todos se han limitado a repetir lo dicho por Rosa Luxemburgo en su largo artículo polaco de 1908-1909: *La cuestión nacional y la autonomía*. Los originales argumentos de esta autora serán los que tendremos presentes con más frecuencia en nuestra exposición.

I. ¿QUÉ ES LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES?

Es natural que esta cuestión se plantee ante todo cuando se intenta examinar de un modo marxista la llamada autodeterminación. ¿Qué debe entenderse por ella? ¿Deberemos buscar la respuesta en definiciones jurídicas, deducidas de toda cla-

mos esa petición al Gobierno de España y él dijo que le suponía un gran problema, porque en caso de dispersarlos era más difícil aplicar el control y las medidas de seguridad. Madrid no tenía demasiadas ganas de dispersarlos. No fue una decisión cómoda y la tomaron porque se pidió desde dentro”. Declaró Ardanza. (*Gara*, 23/5/2005, pág. 20). Lo cierto es que la dispersión ha sido un arma más en manos del Estado para castigar a los presos convertidos en rehenes y para romper la moral y la resistencia de sus familiares, obligados a echarse a las carreteras durante miles de kilómetros para poder visitarles apenas unos minutos y a veces ni eso.

70. *Gara*, 23/5/2005, pág.20.

se de “conceptos generales” de derecho? ¿O bien hay que buscar la respuesta en el estudio histórico-económico de los movimientos nacionales?

No es de extrañar que a los señores Semkovski, Libman y Yurkévich no se les haya pasado siquiera por las mientes plantear esta cuestión, saliendo del paso con simples risitas burlonas a costa de la “falta de claridad” del programa marxista y tal vez no sabiendo siquiera, en su simpleza, que de la autodeterminación de las naciones habla no sólo el programa ruso de 1903, sino también la decisión del Congreso Internacional de Londres de 1896 (ya hablaremos con detenimiento de ello en su lugar). Mucho más extraño es que Rosa Luxemburgo, quien tantas declamaciones hace sobre el supuesto carácter abstracto y metafísico de dicho apartado, haya incurrido ella misma precisamente en este pecado de lo abstracto y metafísico. Precisamente Rosa Luxemburgo es quien viene a caer a cada paso en disquisiciones generales sobre la autodeterminación (hasta llegar incluso a una elucubración del todo divertida sobre el modo de conocer la voluntad de una nación), sin plantear en parte alguna de un modo claro y preciso si el quid de la cuestión está en las definiciones jurídicas o en la experiencia de los movimientos nacionales del mundo entero.

El plantear con exactitud esta cuestión, inevitable para un marxista, hubiera deshecho en el acto las nueve décimas partes de los argumentos de Rosa Luxemburgo. Ni es la primera vez que surgen movimientos nacionales en Rusia ni le son inherentes a ella sola. La época del triunfo definitivo del capitalismo sobre el feudalismo estuvo ligada en todo el mundo a movimientos nacionales. La base económica de estos movimientos estriba en que, para la victoria completa de la producción mercantil, es necesario que la burguesía conquiste el mercado interior, es necesario que territorios con población de un solo idioma adquieran cohesión estatal, eliminándose cuantos obstáculos se opongan al desarrollo de ese idioma y a su consolidación en la literatura. El idioma es el medio principal de comunicación entre los hombres; la unidad de idioma y el libre desarrollo del mismo es una de las condiciones más importantes de una circulación mercantil realmente libre y amplia, correspondiente al capitalismo moderno, de una agrupación libre y amplia de la población en cada una de las diversas clases; es, por último, la condición de un estrecho nexo del mercado con todo propietario, grande o pequeño, con todo vendedor y comprador.

Por ello, la tendencia de todo movimiento nacional es formar *Estados nacionales*, que son los que mejor cumplen estas exigencias del capitalismo contemporáneo. Impulsan a ello factores económicos de lo más profundos, y para toda la Europa Occidental, es más, para todo el mundo civilizado, el Estado nacional es por ello *lo típico*, lo normal en el período capitalista.

Por consiguiente, si queremos entender lo que significa la autodeterminación de las naciones, sin jugar a definiciones jurídicas ni *inventar* definiciones abstractas, sino examinando las condiciones históricas y económicas de los movimientos nacionales, llegaremos inevitablemente a la conclusión siguiente: por autodetermi-

nación de las naciones se entiende su separación estatal de las colectividades de otra nación, se entiende la formación de un Estado nacional independiente.

Más abajo veremos aún otras razones por las que sería erróneo entender por derecho a la autodeterminación todo lo que no sea el derecho a una existencia estatal independiente. Pero ahora debemos detenernos a analizar cómo ha intentado Rosa Luxemburgo *deshacerse* de la inevitable conclusión sobre las profundas bases económicas en que descansan las tendencias a la formación de Estados nacionales.

Rosa Luxemburgo conoce perfectamente el folleto de Kautsky *Nacionalidad e internacionalidad* (suplemento de *Neue Zeit*, nº 1, 1907-1908; traducido al ruso en la revista *Naúchnaya Mysl*, Riga, 1908). Sabe que Kautsky¹, después de examinar detalladamente en el apartado 4 del folleto *El problema del Estado nacional*, llegó a la conclusión de que Otto Bauer “*subestima* la fuerza de la tendencia a la creación de un Estado nacional” (pág. 23 del folleto citado). La propia Rosa Luxemburgo cita las palabras de Kautsky: “El Estado nacional es la forma de Estado que *mejor corresponde* a las condiciones modernas” (es decir, a las condiciones capitalistas civilizadas, progresivas en el aspecto económico, a diferencia de las condiciones medievales, precapitalistas, etc.), “es la forma en que el Estado puede cumplir con mayor facilidad sus tareas” (es decir, las tareas de un desarrollo más libre, más amplio y más rápido del capitalismo). A esto hay que añadir, además, la observación final de Kautsky, más exacta aún: los Estados de composición nacional heterogénea (los llamados Estados multinacionales a diferencia de los Estados nacionales) son “siempre Estados cuya estructura interna es, por tales o cuales razones, anormal o subdesarrollada” (atrasada). De suyo se entiende que Kautsky habla de anormalidad exclusivamente en el sentido de no corresponder a lo que está más adecuado a las exigencias del capitalismo en desarrollo.

Cabe preguntar ahora cuál ha sido la actitud de Rosa Luxemburgo ante estas conclusiones históricas y económicas de Kautsky. ¿Son atinadas o erróneas? ¿Quién tiene razón: Kautsky, con su teoría histórico-económica, o Bauer, cuya teoría es, en el fondo, psicológica? ¿Qué relación guarda el indudable “oportunismo nacional” de Bauer, su defensa de una autonomía nacional-cultural, sus apasionamientos nacionalistas (“la acentuación del factor nacional en ciertos puntos”, como ha dicho Kautsky), su “enorme exageración del factor nacional y su completo olvido del factor internacional” (Kautsky), con su subestimación de la fuerza que entraña la tendencia a crear un Estado nacional?

Rosa Luxemburgo no ha planteado siquiera este problema. No ha notado esta relación. No ha reflexionado sobre el *conjunto* de las concepciones teóricas de Bauer. Ni siquiera ha opuesto en el problema nacional la teoría histórico-económica a la psicológica. Se ha limitado a las siguientes observaciones contra Kautsky:

“Ese Estado nacional ‘más perfecto’ no es sino una abstracción, fácilmente susceptible de ser desarrollada y defendida teóricamente, pero que no correspon-

de a la realidad” (*Przegląd Socialdemokratyczny*, 1908, nº 6, pág. 499).

Y para confirmar esta declaración categórica, sigue razonando: el desarrollo de las grandes potencias capitalistas y el imperialismo hacen ilusorio el “derecho a la autodeterminación” de los pequeños pueblos. “¿Puede acaso hablarse en serio —exclama Rosa Luxemburgo— de la ‘autodeterminación’ de los montenegrinos, búlgaros, rumanos, serbios, griegos, y, en parte, incluso de los suizos, pueblos todos que gozan de independencia formal, producto ésta de la lucha política y del juego diplomático del ‘concierto europeo’?” (!) (pág. 500). Lo que mejor responde a las condiciones “no es el Estado nacional, como supone Kautsky, sino el Estado de rapiña”. Inserta unas cuantas decenas de cifras sobre las proporciones de las colonias que pertenecen a Gran Bretaña, a Francia, etc.

¡Leyendo semejantes razonamientos no puede uno menos de asombrarse de la capacidad de la autora para no distinguir *las cosas*! Enseñar a Kautsky, dándose importancia, que los Estados pequeños dependen de los grandes en lo económico, que los Estados burgueses luchan entre sí por el sometimiento rapaz de otras naciones, que existen el imperialismo y las colonias: todo esto son lucubraciones ridículas, infantiles, porque no tiene nada que ver con el asunto. No sólo los pequeños Estados, sino también Rusia, por ejemplo, dependen por entero, en el aspecto económico, del poderío del capital financiero imperialista de los países burgueses “ricos”. No sólo los Estados balcánicos, Estados en miniatura, sino también la América del siglo XIX ha sido, en el aspecto económico, una colonia de Europa, según dejó ya dicho MARX en *El Capital*. Todo esto lo sabe de sobra Kautsky, como cualquier marxista, pero nada de ello viene a cuento con relación a los movimientos nacionales y al Estado nacional.

Rosa Luxemburgo sustituye el problema de la autodeterminación política de las naciones en la sociedad burguesa, de su independencia estatal, con el de su autodeterminación e independencia económicas. Esto es tan inteligente como exponer una persona, al tratar de la reivindicación programática que exige la supremacía del parlamento, es decir, de la asamblea de representantes populares, en el Estado burgués, su convicción, plenamente justa, de que, en un país burgués, el gran capital tiene la supremacía bajo cualquier régimen.

No cabe duda de que la mayor parte de Asia, el continente más poblado del mundo, se halla en la situación de colonias de las “grandes potencias” o de Estados dependientes en grado sumo y oprimidos en el sentido nacional. Pero ¿acaso esta circunstancia de todos conocida altera en lo más mínimo el hecho indiscutible de que, en la misma Asia, sólo en Japón, es decir, sólo en un Estado nacional independiente, se han creado condiciones para el desarrollo más completo de la producción mercantil, para el crecimiento más libre, amplio y rápido del capitalismo? Este Estado es burgués y, por ello, ha empezado a oprimir él mismo

¹¹ Para más información leer el libro de Ted Grant, *Rusia, de la revolución a la contrarrevolución*, Fundación Federico Engels, Madrid, 1997.

a otras naciones y sojuzgar a colonias; no sabemos si, antes de la bancarrota del capitalismo, Asia tendrá tiempo de estructurarse en un sistema de Estados nacionales independientes, a semejanza de Europa. Pero queda como un hecho indiscutible que el capitalismo, tras despertar a Asia, ha provocado también allí, en todas partes, movimientos nacionales, que estos movimientos tienden a crear en Asia Estados nacionales y que precisamente tales Estados son los que aseguran las condiciones más favorables para el desarrollo del capitalismo. El ejemplo de Asia habla a favor de Kautsky, contra Rosa Luxemburgo.

El ejemplo de los Estados balcánicos habla también contra ella, porque cualquiera puede ver ahora que precisamente a medida que se crean en esa península Estados nacionales independientes se van dando las condiciones más favorables para el desarrollo del capitalismo en ella.

Por consiguiente, el ejemplo de toda la humanidad civilizada de vanguardia, el ejemplo de los Balcanes y el ejemplo de Asia demuestran, a pesar de Rosa Luxemburgo, la absoluta justedad de la tesis de Kautsky: el Estado nacional es regla y "norma" del capitalismo, el Estado de composición nacional heterogénea es atraso o excepción. Desde el punto de vista de las relaciones nacionales, el Estado nacional es el que ofrece, sin duda alguna, las condiciones más favorables para el desarrollo del capitalismo. Lo cual no quiere decir, naturalmente, que semejante Estado, erigido sobre las relaciones burguesas, pueda excluir la explotación y la opresión de las naciones. Quiere decir tan sólo que los marxistas no pueden perder de vista los poderosos factores *económicos* que originan las tendencias a crear Estados nacionales. Quiere decir que "la autodeterminación de las naciones", en el programa de los marxistas, *no puede tener*, desde el punto de vista histórico-económico, otra significación que la autodeterminación política, la independencia estatal, la formación de un Estado nacional.

Más abajo hablaremos detalladamente de las condiciones que se exigen, desde el punto de vista marxista, es decir, desde el punto de vista proletario de clase, para apoyar la reivindicación democrática burguesa del "Estado nacional". Ahora nos limitamos a definir el concepto de "autodeterminación", y sólo debemos señalar que Rosa Luxemburgo *conoce* el contenido de este concepto ("Estado nacional"), mientras que sus partidarios oportunistas, los Libman, los Semkovski, los Yurkevich, *jno saben ni eso!*

II. PLANTEAMIENTO HISTÓRICO CONCRETO DE LA CUESTIÓN

La teoría marxista exige de un modo absoluto que, para analizar cualquier problema social, se le encuadre en un marco histórico *determinado*, y después, si se trata de un solo país (por ejemplo, de un programa nacional para un país determinado), que se tengan en cuenta las particularidades concretas que distinguen a este país de los otros en una misma época histórica.

¿Qué implica este requisito absoluto del marxismo aplicado a nuestro problema?

Ante todo, que es necesario distinguir estrictamente dos épocas del capitalismo diferentes por completo desde el punto de vista de los movimientos nacionales. Por una parte, la época de la bancarrota del feudalismo y del absolutismo, la época en que se constituyen la sociedad democrática burguesa y su Estado, la época en que los movimientos nacionales adquieren por vez primera el carácter de movimientos de masas, incorporando de uno u otro modo a *todas* las clases de la población a la política por medio de la prensa, de su participación en instituciones representativas, etc. Por otra parte, presenciamos una época en que los Estados capitalistas tienen ya su estructura acabada, un régimen constitucional hace mucho tiempo establecido y un antagonismo muy desarrollado entre el proletariado y la burguesía; presenciamos una época que puede llamarse la víspera del hundimiento del capitalismo.

Lo típico de la primera época es el despertar de los movimientos nacionales y la incorporación a ellos de los campesinos, que son el sector de la población más numeroso y más "difícil de mover" para la lucha por la libertad política en general y por los derechos de la nación en particular. Lo típico de la segunda es la ausencia de movimientos democráticos burgueses de masas, cuando el capitalismo desarrollado, al aproximar y amalgamar cada día más las naciones, ya plenamente incorporadas al intercambio comercial, pone en primer plano el antagonismo entre el capital fundido a escala internacional y el movimiento obrero internacional.

Claro que ni la una ni la otra época están separadas entre sí por una muralla, sino ligadas por numerosos eslabones de transición; además, los diversos países se distinguen por la rapidez del desarrollo nacional, por la composición nacional de su población, por su distribución, etc., etc. No puede ni hablarse de que los marxistas de un país determinado procedan a elaborar el programa nacional sin tener en cuenta todas las condiciones históricas generales y estatales concretas.

Aquí es justamente donde tropezamos con el punto más débil de los razonamientos de Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo engalana con brío extraordinario su artículo de una retahíla de palabrejas "fuertes" contra el apartado 9 de nuestro programa, declarándolo "demasiado general", "cliché", "frase metafísica", etc., etc. Era natural esperar que una autora que condena de manera tan excelente la metafísica (en sentido marxista, es decir, la antidualéctica) y las abstracciones vacías, nos diera ejemplo de un análisis concreto del problema encuadrado en la historia. Se trata del programa nacional de los marxistas de un país determinado, Rusia, en una época determinada, a comienzos del siglo XX. Era de suponer que Rosa Luxemburgo hablase de la época *histórica* por la que atraviesa Rusia, de *cuáles* son las particularidades *concretas* del problema nacional y de los movimientos nacionales del país *dado* y en la época *dada*.

¡Absolutamente nada dice sobre ello Rosa Luxemburgo! ¡No se encontrará en ella ni sombra de análisis de cómo se plantea el problema nacional en Rusia en la época histórica presente, de cuáles son las particularidades de Rusia en ese

sentido!

Se nos dice que el problema nacional se plantea en los Balcanes de un modo distinto que en Irlanda; que Marx conceptuaba así y asá los movimientos nacionales polaco y checo en las condiciones concretas de 1848 (una página de citas de Marx); que Engels emitía tal y cual juicio sobre la lucha de los cantones forestales de Suiza contra Austria y la batalla de Morgarten, que se disputó en 1315 (una página de citas de Engels con el correspondiente comentario de Kautsky); que Lassalle consideraba reaccionaria la guerra campesina del siglo XVI en Alemania, etc.

No puede afirmarse que estas observaciones y estas citas brillen por su novedad, pero, en todo caso, al lector le resulta interesante volver a recordar una y otra vez cómo precisamente abordaban Marx, Engels y Lassalle el análisis de problemas históricos concretos de diversos países. Y, al releer las instructivas citas de Marx y de Engels, se ve con singular evidencia la ridícula situación en que se ha colocado a sí misma Rosa Luxemburgo. Predica con gravedad y elocuencia que es necesario hacer un análisis concreto del problema nacional encuadrado en la historia de épocas diferentes de distintos países, y ella misma no hace el *mínimo* intento de determinar *cuál* es la fase histórica de desarrollo del capitalismo por la que atraviesa *Rusia* en los comienzos del siglo XX, cuáles son las *peculiaridades* del problema nacional en este país. Rosa Luxemburgo aduce ejemplos de cómo otros han analizado al modo marxista el problema, como subrayando así deliberadamente cuán a menudo está el camino del infierno empedrado de buenas intenciones y se encubre con buenos consejos el no querer o no saber utilizarlos en la práctica.

He aquí una de las instructivas confrontaciones. Alzándose contra la consigna de independencia de Polonia, Rosa Luxemburgo se refiere a un trabajo suyo de 1898 que demostraba el rápido “desarrollo industrial de Polonia” con la salida de los productos manufacturados a Rusia. Ni que decir tiene que de esto no se deduce absolutamente nada sobre el problema del *derecho* a la autodeterminación, que esto sólo demuestra que ha desaparecido la vieja Polonia señorial, etc. Pero Rosa Luxemburgo pasa de manera imperceptible y sin cesar a la conclusión de que, entre los factores que ligan a Rusia con Polonia, predominan ya en la actualidad los factores económicos escuetos de las relaciones capitalistas modernas.

Pero he aquí que nuestra Rosa pasa al problema de la autonomía y —aunque su artículo se titula *El problema nacional y la autonomía*, en general— comienza por demostrar que el reino de Polonia tiene un derecho *exclusivo* a la autonomía (véase sobre este punto *Prosveschenie*, 1913, n° 12). Para corroborar el derecho de Polonia a la autonomía, Rosa Luxemburgo caracteriza el régimen estatal de Rusia por indicios evidentemente económicos, políticos, etnológicos y sociológicos, por un conjunto de rasgos que, en suma, dan el concepto de “despotismo asiático” (n° 12 de *Przegłqd*, pág. 137).

De todos es sabido que semejante régimen estatal tiene una solidez muy grande cuando, en la economía del país de que se trate, predominan rasgos absoluta-

mente patriarcales, precapitalistas, y hay un desarrollo insignificante de la economía mercantil y de la disociación de las clases. Pero si en un país, cuyo régimen estatal se distingue por presentar un carácter acusadamente *precapitalista*, existe una región nacional delimitada que tiene un *rápido* desarrollo del capitalismo, resulta que cuanto más rápido sea ese desarrollo capitalista tanto más fuerte será la contradicción entre este desarrollo y el régimen estatal *precapitalista*, tanto más probable será que la región avanzada se separe del resto del país, al que no le ligan los lazos del “capitalismo moderno”, sino los de un “despotismo asiático”.

Así pues, Rosa Luxemburgo no ha atado en absoluto cabos, ni siquiera en lo que se refiere a la estructura social del poder en Rusia con relación a la Polonia burguesa; y en cuanto a las peculiaridades históricas concretas de los movimientos nacionales en Rusia ni siquiera las plantea.

En eso es en lo que debemos detenernos.

III. LAS PECULIARIDADES CONCRETAS DEL PROBLEMA NACIONAL EN RUSIA Y LA TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA BURGUESA DE ÉSTA

“A pesar de lo elástico que es el principio del ‘derecho de las naciones a la autodeterminación’, que es el más puro de los lugares comunes, ya que, evidentemente, se puede aplicar por igual no sólo a los pueblos que habitan en Rusia, sino también a las naciones que viven en Alemania y en Austria, en Suiza y en Suecia, en América y en Australia, no lo encontramos ni en un solo programa de los partidos socialistas contemporáneos” (n° 6 de *Przegłqd*, pág. 483).

Así escribe Rosa Luxemburgo en el comienzo de su cruzada contra el apartado 9 del programa marxista. Atribuyéndonos a nosotros la interpretación de que este apartado del programa es “el más puro de los lugares comunes”, Rosa Luxemburgo misma incurre precisamente en este pecado, al declarar con divertida osadía que “evidentemente, [este principio] se puede aplicar por igual” a Rusia, Alemania, etc.

Lo evidente —contestaremos nosotros— es que Rosa Luxemburgo ha decidido ofrecer en su artículo una colección de errores lógicos que servirían como ejercicios para los estudiantes de bachillerato. Porque la parrafada de Rosa Luxemburgo es un completo absurdo y una mofa del planteamiento histórico concreto de la cuestión.

Si el programa marxista no se interpreta de manera pueril, sino marxista, no cuesta ningún trabajo percatarse de que se refiere a los movimientos nacionales democráticos burgueses. Siendo así —y así es, sin duda alguna—, se deduce “evidentemente” que ese programa concierne “en general”, como “lugar común”, etc., a todos los casos de movimientos nacionales democráticos burgueses. No menos evidente sería también para Rosa Luxemburgo, de haberlo pensado lo más mínimo, la conclusión de que nuestro programa se refiere *tan sólo* a los casos en que existe tal movimiento.

Si Rosa Luxemburgo hubiera reflexionado sobre estas consideraciones evidentes, habría visto sin esfuerzos particulares qué absurdo ha dicho. Al acusarnos a nosotros de haber propuesto un “lugar común”, aduce *contra nosotros* el argumento de que no se habla de autodeterminación de las naciones en el programa de los países donde *no hay* movimientos nacionales democráticos burgueses. ¡Un argumento muy inteligente!

La comparación del desarrollo político y económico de distintos países, así como de sus programas marxistas, tiene inmensa importancia desde el punto de vista del marxismo, pues son indudables tanto la naturaleza común capitalista de los Estados contemporáneos como la ley general de su desarrollo. Pero hay que saber hacer semejante comparación. La condición elemental para ello es poner en claro si son *comparables* las épocas históricas del desarrollo de los países de que se trate. Por ejemplo, sólo perfectos ignorantes (como el príncipe E. Trubetskói en *Rússkaya Mysl*) pueden *comparar* el programa agrario de los marxistas de Rusia con los de Europa Occidental, pues nuestro programa da una solución al problema de la transformación agraria *democrática burguesa*, de la cual ni siquiera se habla en los países de Occidente.

Lo mismo puede afirmarse del problema nacional. En la mayoría de los países occidentales hace ya mucho tiempo que está resuelto. Es ridículo buscar en los programas de Occidente solución a problemas que no existen. Rosa Luxemburgo ha perdido de vista aquí precisamente lo que tiene más importancia: la diferencia entre los países que hace tiempo han terminado las transformaciones democráticas burguesas y los países que no las han terminado.

Todo el quid está en esa diferencia. La desestimación completa de esa diferencia es lo que convierte el larguísimo artículo de Rosa Luxemburgo en un fárrago de lugares comunes vacíos que no dicen nada.

En la Europa continental de Occidente, la época de las revoluciones democráticas burguesas abarca un lapso bastante determinado, aproximadamente de 1789 a 1871. Esta fue precisamente la época de los movimientos nacionales y de la creación de los Estados nacionales. Terminada esta época, Europa Occidental había cristalizado en un sistema de Estados burgueses que, además, eran, como norma, Estados unidos en el aspecto nacional. Por eso, buscar ahora el derecho a la autodeterminación en los programas de los socialistas de Europa Occidental significa no comprender el abecé del marxismo.

En Europa Oriental y en Asia, la época de las revoluciones democráticas burguesas no comenzó hasta 1905. Las revoluciones de Rusia, Persia, Turquía y China, las guerras en los Balcanes: tal es la cadena de los acontecimientos mundiales ocurridos en *nuestra* época en nuestro “Oriente”. Y en esta cadena de acontecimientos sólo un ciego puede no ver el despertar de *toda una serie* de movimientos nacionales democráticos burgueses, de tendencias a crear Estados independientes y unidos en el aspecto nacional. Precisa y exclusivamente porque Rusia y los países vecinos suyos atraviesan por esa época necesitamos nosotros en

nuestro programa un apartado sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación.

Pero veamos unos cuantos renglones más del pasaje antes citado del artículo de Rosa Luxemburgo:

“En particular —dice—, el programa de un partido que actúa en un Estado de composición nacional extraordinariamente heterogénea y para el que el problema nacional desempeña un papel de primer orden —el programa de la socialdemocracia austriaca— no contiene el principio del derecho de las naciones a la autodeterminación” .

De modo que se quiere persuadir al lector “en particular” con el ejemplo de Austria. Veamos, desde el punto de vista histórico concreto, si hay mucho de razonable en este ejemplo.

Primero, hacemos la pregunta fundamental de si se ha llevado a término la revolución democrática burguesa. En Austria empezó en 1848 y terminó en 1867. Desde entonces hace casi medio siglo que rige allí una Constitución, en suma, burguesa, que permite actuar en la legalidad a un partido obrero legal.

Por eso, en las condiciones interiores del desarrollo de Austria (es decir, desde el punto de vista del desarrollo del capitalismo en Austria, en general, y en sus diversas naciones, en particular) *no hay* factores que den lugar a saltos, uno de cuyos efectos concomitantes puede ser la formación de Estados nacionales independientes. Al suponer con su comparación que Rusia se encuentra, sobre este punto, en condiciones análogas, Rosa Luxemburgo no sólo admite una hipótesis falsa por completo, antihistórica, sino que se desliza sin querer hacia el liquidacionismo.

Segundo, tiene una importancia de singular magnitud la proporción entre las naciones, totalmente diferente en Austria y en Rusia respecto al problema que nos ocupa. No sólo ha sido Austria, durante largo tiempo, un Estado en que predominaban los alemanes, sino que los alemanes de Austria pretendían la hegemonía en la nación alemana en general. Esta “pretensión”, como quizá tenga a bien recordar Rosa Luxemburgo (que tanta aversión parece sentir contra los lugares comunes, los clichés, las abstracciones...), la deshizo la guerra de 1866. La nación dominante en Austria, la alemana, quedó *fuera de los confines* del Estado alemán independiente, definitivamente formado hacia 1871. De otro lado, el intento de los húngaros de crear un Estado nacional independiente había fracasado ya en 1849 bajo los golpes del ejército feudal ruso.

Así pues, se ha creado una situación peculiar en grado sumo: ¡los húngaros, y tras ellos los checos, no tienden a separarse de Austria, sino a mantener la integridad de Austria, precisamente en beneficio de la independencia nacional, que podría ser aplastada del todo por vecinos más rapaces y más fuertes! En virtud de esa situación peculiar, Austria ha tomado la estructura de Estado bicéntrico (dual) y ahora se está convirtiendo en tricéntrico (tríplice: alemanes, húngaros y eslavos).

¿Sucede en Rusia algo parecido? ¿Aspiran en Rusia los alógenos a unirse con los rusos bajo la amenaza de una opresión nacional *peor*?

Basta hacer esta pregunta para ver cuán absurda, rutinaria y propia de ignorantes resulta la comparación entre Rusia y Austria en cuanto a la autodeterminación de las naciones.

Las condiciones peculiares de Rusia, en lo que toca a la cuestión nacional, son precisamente lo contrario de lo que hemos visto en Austria. Rusia es un Estado con un centro nacional único, ruso. Los rusos ocupan un gigantesco territorio compacto, y su número asciende aproximadamente a setenta millones. La peculiaridad de este Estado nacional reside, primero, en que los alógenos (que en conjunto constituyen la mayoría de la población, el 57%) pueblan precisamente la periferia; segundo, en el hecho de que la opresión de estos alógenos es mucho más fuerte que en los países vecinos (incluso no sólo en los europeos); tercero, en que hay toda una serie de casos en que los pueblos oprimidos que viven en la periferia tienen compatriotas al otro lado de la frontera, y estos últimos gozan de mayor independencia nacional (basta recordar, aunque sólo sea en las fronteras occidental y meridional del Estado, a finlandeses, suecos, polacos, ucranianos y rumanos); cuarto, en que el desarrollo del capitalismo y el nivel general de cultura son con frecuencia más altos en la periferia alógena que en el centro del Estado. Por último, precisamente en los Estados asiáticos vecinos presenciamos el comienzo de un período de revoluciones burguesas y de movimientos nacionales que comprenden en parte a los pueblos afines dentro de las fronteras de Rusia.

Así pues, son precisamente las peculiaridades históricas concretas del problema nacional en Rusia las que hacen entre nosotros urgente en especial el reconocimiento del derecho de las naciones a la autodeterminación en la época que atravesamos.

Por lo demás, incluso vista en el sentido del hecho escueto, es errónea la afirmación de Rosa Luxemburgo de que en el programa de los socialdemócratas austriacos no figura el reconocimiento del derecho de las naciones a la autodeterminación. Basta abrir las actas del Congreso de Brünn, en el que se aprobó el programa nacional, para ver allí las declaraciones del socialdemócrata ruteno Gankévich, en nombre de toda la delegación ucraniana (rutena) (pág. 85 de las actas), y del socialdemócrata polaco Reger, en nombre de toda la delegación polaca (pág. 108), diciendo que los socialdemócratas austriacos de las dos naciones indicadas incluían entre sus aspiraciones la de la unificación nacional, la de la libertad e independencia de sus pueblos. Por consiguiente, la socialdemocracia austriaca, sin propugnar directamente en su programa el derecho de las naciones a la autodeterminación, transige plenamente, al mismo tiempo, con que ciertos sectores del partido presenten reivindicaciones de independencia nacional. ¡De hecho, esto significa justamente, como es natural, reconocer el derecho de las naciones a la autodeterminación! De modo que la apelación de Rosa Luxemburgo a Austria habla en *todos* los sentidos *contra* ella.

IV. EL 'PRACTICISMO' EN EL PROBLEMA NACIONAL

Los oportunistas han hecho suyo con celo singular el argumento de Rosa Luxemburgo de que el apartado 9 de nuestro programa no contiene nada "práctico". Rosa Luxemburgo está tan entusiasmada con este argumento que encontramos en algunas ocasiones ocho veces repetida esa "consigna" en una misma página de su artículo.

El apartado 9 "no da —dice ella— ninguna indicación práctica para la política cotidiana del proletariado, ninguna solución práctica de los problemas nacionales".

Analicemos este argumento, que también se formula de manera que el apartado 9 o no expresa absolutamente nada u obliga a apoyar todas las aspiraciones nacionales.

¿Qué significa la reivindicación de "practicismo" en el problema nacional? O un apoyo a todas las aspiraciones nacionales, o el "sí o no" a la disyuntiva de separación de cada nación o, en general, la "posibilidad de satisfacción" inmediata de las reivindicaciones nacionales.

Examinemos estas tres interpretaciones posibles de la reivindicación de "practicismo".

La burguesía, que actúa, como es natural, en los comienzos de todo movimiento nacional como fuerza hegemónica (dirigente) del mismo, llama labor práctica al apoyo a todas las aspiraciones nacionales. Pero la política del proletariado en el problema nacional (como en los demás problemas) sólo apoya a la burguesía en una dirección determinada, pero nunca coincide con su política. La clase obrera sólo apoya a la burguesía en aras de la paz nacional (que la burguesía no puede dar plenamente y es viable sólo si hay una *completa* democratización), en beneficio de la igualdad de derechos, en beneficio de la situación más favorable posible para la lucha de clases. Por eso, precisamente *contra el practicismo* de la burguesía, los proletarios propugnan una política de *principios* en el problema nacional, prestando a la burguesía siempre un apoyo *sólo condicional*. En el problema nacional, toda burguesía desea o privilegios para su nación o ventajas exclusivas para ésta; precisamente eso es lo que se llama "práctico". El proletariado está en contra de toda clase de privilegios, en contra de todo exclusivismo. Exigirle "practicismo" significa ir a remolque de la burguesía, caer en el oportunismo.

¿Contestar "sí o no" en lo que se refiere a la separación de cada nación? Parece una reivindicación sumamente "práctica". Pero, en realidad, es absurda, metafísica en teoría y conducente a subordinar el proletariado a la política de la burguesía en la práctica. La burguesía plantea siempre en primer plano sus reivindicaciones nacionales. Y las plantea de un modo incondicional. El proletariado las subordina a los intereses de la lucha de clases. Teóricamente no puede garantizarse de antemano que la separación de una nación determinada o su igualdad de derechos con otra nación ponga término a la revolución democrática burguesa. Al proletariado le importa, *en ambos* casos, garantizar el desarrollo de su clase; a la burguesía le importa dificultar este desarrollo, supeditando las tareas de

dicho desarrollo a las tareas de su nación. Por eso el proletariado se limita a la reivindicación negativa, por así decir, de reconocer el *derecho* a la autodeterminación, sin garantizar nada a ninguna nación ni comprometerse a dar *nada a expensas* de otra nación.

Eso no será “práctico”, pero es de hecho lo que garantiza con mayor seguridad la más democrática de las soluciones posibles; el proletariado necesita *tan sólo* estas garantías, mientras que la burguesía de cada nación necesita garantías de sus ventajas, sin tener en cuenta la situación (las posibles desventajas) de otras naciones.

Lo que más interesa a la burguesía es la “posibilidad de satisfacción” de la reivindicación dada; de aquí la eterna política de transacciones con la burguesía de otras naciones en detrimento del proletariado. En cambio, al proletariado le importa fortalecer su clase contra la burguesía, educar a las masas en el espíritu de la democracia consecuente y del socialismo.

Eso no será “práctico” para los oportunistas, pero es la única garantía real, la garantía de la máxima igualdad y paz nacionales, a despecho tanto de los feudales como de la burguesía *nacionalista*.

Toda la misión de los proletarios en la cuestión nacional “no es práctica”, desde el punto de vista de la burguesía *nacionalista* de cada nación, pues los proletarios, enemigos de todo nacionalismo, exigen la igualdad “abstracta”, la ausencia del mínimo privilegio en principio. Al no comprenderlo y ensalzar de un modo poco razonable el practicismo, Rosa Luxemburgo ha abierto las puertas de par en par precisamente a los oportunistas, en particular a las concesiones del oportunismo al nacionalismo ruso.

¿Por qué al ruso? Porque los rusos son en Rusia la nación opresora, y en el aspecto nacional, naturalmente, el oportunismo tendrá una expresión entre las naciones oprimidas y otra, distinta, entre las opresoras.

En aras del “practicismo” de sus reivindicaciones la burguesía de las naciones oprimidas llamará al proletariado a apoyar incondicionalmente sus aspiraciones. ¡Lo más práctico es decir un “sí” categórico a la separación de *tal o cual* nación, y no al *derecho* de todas las naciones, cualesquiera que sean, a la separación!

El proletariado se opone a semejante practicismo: al reconocer la igualdad de derechos y el derecho igual a formar un Estado nacional, aprecia y coloca por encima de todo la unión de los proletarios de todas las naciones, evalúa toda reivindicación nacional y toda separación nacional *con la mira puesta* en la lucha de clase de los obreros. La consigna de practicismo no es, en realidad, sino la de adoptar sin crítica las aspiraciones burguesas.

Se nos dice: apoyando el derecho a la separación, apoyáis el nacionalismo burgués de las naciones oprimidas. ¡Esto es lo que dice Rosa Luxemburgo y lo que tras ella repite el oportunista Semkovski, único representante, por cierto, de las ideas de los liquidadores sobre este problema en el periódico de los liquidadores!

Nosotros contestamos: no, precisamente a la burguesía es a quien le importa

aquí una solución “práctica”, mientras que a los obreros les importa la separación *en principio* de dos tendencias. *Por cuanto* la burguesía de una nación oprimida lucha contra la opresora, nosotros estamos siempre, en todos los casos y con más decisión que nadie, *a favor*, ya que somos los enemigos más intrépidos y consecuentes de la opresión. Por cuanto la burguesía de la nación oprimida está a favor de su nacionalismo burgués, nosotros estamos en contra. Lucha contra los privilegios y violencias de la nación opresora y ninguna tolerancia con el afán de privilegios de la nación oprimida.

Si no lanzamos ni propugnamos en la agitación la consigna del *derecho* a la separación, favoreceremos no sólo a la burguesía, sino a los feudales y el absolutismo de la nación *opresora*. Hace tiempo que Kautsky empleó este argumento contra Rosa Luxemburgo, y el argumento es irrefutable. En su temor de “ayudar” a la burguesía nacionalista de Polonia, Rosa Luxemburgo niega el *derecho* a la separación en el programa de los marxistas *de Rusia*, y a quien ayuda, *en realidad*, es a los rusos ultrarreaccionarios. Ayuda, en realidad, al conformismo oportunista con los privilegios (y con cosas peores que los privilegios) de los rusos.

Llevada de la lucha contra el nacionalismo en Polonia, Rosa Luxemburgo ha olvidado el nacionalismo de los rusos, aunque precisamente este nacionalismo es ahora el más temible; es precisamente un nacionalismo menos burgués, pero más feudal; es precisamente el mayor freno para la democracia y la lucha proletaria. En *todo* nacionalismo burgués de una nación oprimida hay un contenido democrático general *contra* la opresión, y a este contenido le prestamos un apoyo *incondicional*, apartando rigurosamente la tendencia al exclusivismo nacional, luchando contra la tendencia del burgués polaco a oprimir al hebreo, etc., etc.

Esto “no es práctico”, desde el punto de vista del burgués y del filisteo. Pero es la única política práctica y adicta a los principios en el problema nacional, la única que ayuda de verdad a la democracia, a la libertad y a la unión proletaria.

Reconocer el derecho a la separación para todos; apreciar cada cuestión concreta sobre la separación desde un punto de vista que elimine toda desigualdad de derechos, todo privilegio, todo exclusivismo.

Tomemos la posición de la nación opresora. ¿Puede acaso ser libre un pueblo que oprime a otros pueblos? No. Los intereses de la libertad de la población² rusa exigen que se luche contra tal opresión. La larga historia, la secular historia de represión de los movimientos de las naciones oprimidas, la propaganda sistemática de esta represión por parte de las “altas” clases han creado enormes obstáculos a la causa de la libertad del mismo pueblo ruso en sus prejuicios, etc.

Los ultrarreaccionarios rusos apoyan conscientemente estos prejuicios y los atizan. La burguesía rusa transige con ellos o se amolda a ellos. El proletariado ruso no puede alcanzar sus fines, no puede desbrozar para sí el camino hacia la libertad sin luchar sistemáticamente contra estos prejuicios.

Formar un Estado nacional autónomo e independiente sigue siendo por ahora, en Rusia, tan sólo privilegio de la nación rusa. Nosotros, los proletarios rusos, no

defendemos privilegios de ningún género y tampoco defendemos este privilegio. Luchamos sobre el terreno de un Estado determinado, unificamos a los obreros de todas las naciones de este Estado, no podemos garantizar tal o cual vía de desarrollo nacional, vamos a nuestro objetivo de clase por *todas* las vías posibles.

Pero no se puede ir hacia este objetivo sin luchar contra todos los nacionalismos y sin propugnar la igualdad de todas las naciones. Así, por ejemplo, depende de mil factores, desconocidos de antemano, si a Ucrania le cabrá en suerte formar un Estado independiente. Y, como no queremos *hacer* “conjeturas” vanas, estamos firmemente por lo que es indudable: el derecho de Ucrania a semejante Estado. Respetamos este derecho, no apoyamos los privilegios del ruso sobre los ucranianos, *educamos* a las masas en el espíritu del reconocimiento de este derecho, en el espíritu de la negación de los privilegios *estatales* de cualquier nación.

En los saltos que han atravesado todos los países en la época de las revoluciones burguesas son posibles y probables los choques y la lucha por el derecho a un Estado nacional. Nosotros, proletarios, nos declaramos de antemano *adversarios* de los privilegios de los rusos, y en esta dirección desarrollamos toda nuestra propaganda y nuestra agitación.

En el afán de “practicismo”, Rosa Luxemburgo ha perdido de vista la tarea práctica *principal*, tanto del proletariado ruso como del proletariado de toda nación: la tarea de la agitación y propaganda cotidianas contra toda clase de privilegios nacionales de tipo estatal, por el derecho, derecho igual de todas las naciones, a tener su Estado nacional; esta tarea es (ahora) nuestra principal tarea en el problema nacional, porque sólo así defendemos los intereses de la democracia y de la unión, basada en la igualdad de derechos, de todos los proletarios de todas las naciones.

Poco importa que esta propaganda “no sea práctica” tanto desde el punto de vista de los opresores rusos como desde el punto de vista de la burguesía de las naciones oprimidas (unos y otros exigen un sí o no *determinado*, acusando a los socialdemócratas de “vaguedad”); en la práctica, precisamente esta propaganda, y sólo ella, asegura una educación de las masas verdaderamente democrática y verdaderamente socialista. Sólo una propaganda tal garantiza también las mayores probabilidades de paz nacional en Rusia, si sigue siendo un Estado de composición nacional heterogénea, y la división más pacífica (e inocua para la lucha de clase proletaria) en diversos Estados nacionales, si se plantea el problema de semejante división.

Para explicar de un modo más concreto esta política, la única proletaria en el problema nacional, analicemos la actitud del liberalismo ruso ante la “autodeterminación de las naciones” y el ejemplo de la separación de Noruega de Suecia.

V. LA BURGUESÍA LIBERAL Y LOS OPORTUNISTAS SOCIALISTAS EN EL PROBLEMA NACIONAL

Hemos visto que Rosa Luxemburgo tiene por uno de sus principales “triumfos”, en la lucha contra el programa de los marxistas de Rusia, el argumento siguiente: recono-

cer el derecho a la autodeterminación equivale a apoyar el nacionalismo burgués de las naciones oprimidas. Por otra parte, dice Rosa Luxemburgo, si por tal derecho se entiende únicamente la lucha contra cualquier violencia en lo que se refiere a las naciones, no hace falta un punto especial en el programa, porque la socialdemocracia en general se opone a toda violencia nacional y a toda desigualdad de derechos nacionales.

El primer argumento, según demostró de un modo irrefutable Kautsky hace ya casi veinte años, hace pagar la culpa del nacionalismo a justos por pecadores porque resulta que, temiendo el nacionalismo de la burguesía de las naciones oprimidas, Rosa Luxemburgo favorece, *en realidad*, el nacionalismo ultrarreaccionario de los rusos! El segundo argumento es, en el fondo, un temeroso esquivar el problema: reconocer la igualdad nacional, ¿supone o no reconocer el derecho a la separación? Si lo supone, Rosa Luxemburgo admite que es justo por principio el apartado 9 de nuestro programa. Si no lo supone, no reconoce la igualdad nacional. ¡Nada puede hacerse en este caso con subterfugios y evasivas!

Pero la mejor manera de comprobar los argumentos arriba indicados, así como todos los argumentos de esta índole, consiste en estudiar la actitud de las *diferentes* clases de la sociedad ante el problema. Para un marxista, semejante comprobación es obligatoria. Hay que partir de lo objetivo, hay que tomar las relaciones recíprocas de las diversas clases en el punto de que se trata. Al no hacerlo, Rosa Luxemburgo incurre precisamente en el pecado de lo metafísico, de lo abstracto, del lugar común, de las generalidades, etc., del que en vano trata de acusar a sus adversarios.

Se trata del programa de los marxistas *de Rusia*, es decir, de los marxistas de todas las naciones de Rusia. ¿No convendría echar una ojeada a la posición de las clases *dominantes* de Rusia?

Es conocida de todos la posición de la “burocracia” (perdónesenos este término inexacto) y de los terratenientes feudales del tipo de la nobleza unificada. Negación absoluta tanto de la igualdad de derechos de las naciones como del derecho a la autodeterminación. La vieja consigna, tomada de los tiempos del régimen de servidumbre: autocracia, religión ortodoxa, nación, con la particularidad de que por esta última tan sólo se entiende la nación rusa. Incluso los ucranianos son declarados “alógenos”, incluso su lengua materna es perseguida.

Veamos a la burguesía de Rusia, *llamada* a tornar parte —una parte muy modesta, es verdad, pero, al fin y al cabo, parte— en el poder, en el sistema legislativo y administrativo del “3 de junio”. No se necesitan muchas palabras para demostrar que en este problema los octubristas siguen, en realidad, a las derechas. Es de lamentar que algunos marxistas concedan mucha menos atención a la posición de la burguesía liberal rusa, de los progresistas y demócratas constitucionales. Y, sin embargo, quien no estudie esta posición y no reflexione sobre ella incurrirá inevitablemente en el pecado de lo abstracto y de lo vacío al analizar el derecho de las naciones a la autodeterminación.

El año pasado, la polémica entre *Pravda* y *Riech* obligó a este órgano principal

del Partido Demócrata Constitucionalista, tan hábil en la evasiva diplomática ante la contestación franca a preguntas “desagradables”, a hacer, sin embargo, algunas confesiones valiosas. Se armó el barullo en torno al Congreso Estudiantil de toda Ucrania, celebrado en Lvov en el verano de 1913. El jurado “perito en cuestiones de Ucrania” o colaborador ucraniano de *Riech*, señor Moguilianski, publicó un artículo en el que cubría de las más selectas injurias (“delirio”, “aventurerismo”, etc.) la idea de la separación de Ucrania, idea propugnada por el socialnacionalista Dontsov y aprobada por el mencionado congreso.

El periódico *Rabóchaya Pravda*, sin solidarizarse para nada con el señor Dontsov e indicando claramente que este señor era un socialnacionalista y que muchos marxistas ucranianos discrepaban de él, declaró, sin embargo, que el *tono* de *Riech*, o mejor dicho: *el planteamiento en principio de la cuestión por Riech* es absolutamente indecoroso, inadmisibles en un demócrata ruso o en una persona que quiere pasar por demócrata. Que *Riech* refute directamente a los señores Dontsov, pero, *en principio*, es inadmisibles que el órgano ruso de una pretendida democracia olvide la *libertad* de separación, el *derecho* a la separación.

Unos meses más tarde publicó el señor Moguilianski, en el número 331 de *Riech*, unas “explicaciones”, enterado, por el periódico ucraniano *Shliafi*, de Lvov, de las objeciones del señor Dontsov, quien, por cierto, observó que “sólo la prensa socialdemócrata rusa había manchado (¿estigmatizado?) en forma debida la diatriba patrioterica de *Riech*”. Las “explicaciones” del señor Moguilianski consistieron en repetir por tres veces: “la crítica de las recetas del señor Dontsov (...) no tiene nada de común con la negación del derecho de las naciones a la autodeterminación”.

“Hay que decir —escribía el señor Moguilianski— que tampoco ‘el derecho de las naciones a la autodeterminación’ es una especie de fetiche (¡¡escuchen!!) que no admite ninguna crítica: condiciones de vida malsanas en una nación pueden engendrar tendencias malsanas en la autodeterminación nacional, y poner al descubierto estas últimas no significa aún negar el derecho de las naciones a la autodeterminación”.

Como ven, las frases de un liberal sobre lo del “fetiche” estaban plenamente a tono con las frases de Rosa Luxemburgo. Era evidente que el señor Moguilianski deseaba rehuir el dar una respuesta directa a la pregunta: ¿reconoce o no el derecho a la autodeterminación política, es decir, a la separación?

Y *Proletárskaya Pravda* (nº 4 del 11 de diciembre de 1913) hizo a *bocajarro* esta pregunta tanto al señor Moguilianski como al Partido Demócrata Constitucionalista.

El periódico *Riech* publicó entonces (nº 340) una declaración sin firma, es decir, una declaración oficial de la Redacción, que daba una respuesta a esa pregunta. Esta contestación se resume en tres puntos:

1) En el apartado 11 del programa del Partido Demócrata Constitucionalista se habla en forma directa, clara y precisa del “derecho” de las naciones a una “libre

autodeterminación *cultural*”.

2) *Proletárskaya Pravda*, según la afirmación de *Riech*, “confunde irreparablemente” la autodeterminación con el separatismo, con la separación de esta o la otra nación.

3) “*En efecto, los demócratas constitucionalistas no han pensado nunca en defender el derecho de ‘separación de las naciones’ del Estado ruso*” (véase el artículo *El nacional-liberalismo y el derecho de las naciones a la autodeterminación*, en *Proletárskaya Pravda*, nº 12, del 20 de diciembre de 1913).

Fijémonos ante todo en el segundo punto de la declaración de *Riech*. ¡Cuán claramente demuestra a los señores Semkovski, Libman, Yurkévich y demás oportunistas que sus gritos y habladurías sobre una pretendida “falta de claridad” o “vaguedad” en cuanto a la “autodeterminación” no son *en la práctica*, es decir, en la correlación objetiva de las clases y de la lucha de las clases en Rusia, sino una *simple repetición* de los discursos de la burguesía monárquica liberal!

Cuando *Proletárskaya Pravda* hizo a los instruidos señores “demócratas constitucionalistas” de *Riech* tres preguntas: 1) Si negaban que en toda la historia de la democracia internacional, y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se entiende por autodeterminación de las naciones precisamente la autodeterminación política, el derecho a constituir un Estado nacional independiente; 2) si negaban que el mismo sentido tenía la conocida decisión del Congreso Socialista Internacional celebrado en Londres en 1896, y 3) que Plejánov, el cual escribía ya en 1902 sobre la autodeterminación, entendía por tal precisamente la autodeterminación política; cuando *Proletárskaya Pravda* hizo estas tres preguntas, ¡¡los señores demócratas constitucionalistas guardaron silencio!!

No contestaron ni una palabra, porque nada tenían que contestar. Tuvieron que reconocer en silencio que *Proletárskaya Pravda* tenía sin duda razón.

Los gritos de los liberales a propósito de la falta de claridad del concepto de “autodeterminación”, de su “irreparable confusión” con el separatismo entre los socialdemócratas, no son sino una tendencia a *embrollar* la cuestión, rehuir el reconocimiento de un principio general de la democracia. Si los señores Semkovski, Libman y Yurkevich no fueran tan ignorantes, les hubiera dado vergüenza hablar ante los obreros en tono *liberal*.

Pero sigamos, *Proletárskaya Pravda* obligó a *Riech* a reconocer que las palabras sobre la autodeterminación “cultural” tienen en el programa demócrata constitucionalista precisamente el sentido de una *negación* de la autodeterminación *política*.

“En efecto, los demócratas constitucionalistas no han pensado nunca en defender el derecho de ‘separación de las naciones’ del Estado ruso”: éstas son las palabras de *Riech* que no en vano recomendó *Proletárskaya Pravda* a *Novoie Vremia* y *Zémschina* como muestra de la “lealtad” de nuestros demócratas constitucionalistas. Sin dejar, naturalmente, de aprovechar la ocasión para mencionar a los “semitas” y decir toda clase de mordacidades a los demócratas constituciona-

listas, *Novoie Vremia* declaraba, sin embargo, en su número 13.563:

“Lo que constituye para los socialdemócratas un axioma de sabiduría política” (es decir, el reconocimiento del derecho de las naciones a la autodeterminación, a la separación) “empieza en nuestros días a provocar divergencias incluso entre los demócratas constitucionalistas”.

Los demócratas constitucionalistas adoptaron una posición de principios absolutamente idéntica a la de *Novoie Vremia*, declarando que “no habían pensado nunca en defender el derecho de separación de las naciones del Estado ruso”. En esto consiste una de las bases del *nacional-liberalismo* de los demócratas constitucionalistas, de su afinidad con los Purishkevich, de su dependencia de estos últimos en el terreno político-ideológico y político-práctico. “Los señores demócratas constitucionalistas han estudiado historia —decía *Proletárskaya Pravda*—, y saben muy bien a qué actos “pogromoides”, expresándonos con suavidad, ha llevado muchas veces en la práctica la aplicación del tradicional derecho de los Purishkevich a “agarrar y no dejar escapar”. Sabiendo perfectamente que la omnipotencia de los Purishkevich tiene origen y carácter feudal, los demócratas constitucionalistas se colocan, sin embargo, por entero en el terreno de las relaciones y fronteras establecidas precisamente por esta clase. Sabiendo perfectamente cuántos elementos no europeos, antieuropeos (asiáticos, diríamos nosotros, si esta palabra no pudiera sonar a inmerecido desprecio para japoneses y chinos), hay en las relaciones y fronteras creadas o fijadas por esa clase, los señores demócratas constitucionalistas los consideran límite del que no se puede pasar.

Esto es precisamente adaptación a los Purishkevich, servilismo ante ellos, miedo de hacer vacilar su posición, esto es defenderles contra el movimiento popular, contra la democracia. “Esto significa en la práctica —decía *Proletárskaya Pravda*— adaptarse a los intereses de los feudales y a los peores prejuicios nacionalistas de la nación dominante en vez de luchar constantemente contra esos prejuicios”.

Como personas conocedoras de la historia y con pretensiones de democracia, los demócratas constitucionalistas ni siquiera intentan afirmar que el movimiento democrático, que en nuestros días es típico tanto de Europa Oriental como de Asia y que tiende a transformar una y otra, de acuerdo con el modelo de los países civilizados, capitalistas, que este movimiento deba indefectiblemente dejar intactas las fronteras fijadas en la época feudal, en la época de omnipotencia de los Purishkevich y de la falta de derechos de extensos sectores de la burguesía y de la pequeña burguesía.

La última conferencia del Partido Demócrata Constitucionalista, celebrada del 23 al 25 de marzo de 1914, ha demostrado, por cierto, que el problema planteado por la polémica de *Proletárskaya Pravda* con *Riech* no era, en modo alguno, tan sólo un problema literario, sino que revestía la mayor actualidad política. En la reseña oficial de *Riech* (nº 83, del 26 de marzo de 1914) sobre esta conferencia leemos:

72. Declaración de Lizarra, “Factores propiciadores del acuerdo de paz en Irlanda” (punto 6).

“Se trataron también en forma especialmente animada los problemas nacionales. Los diputados de Kiev, a los que se unieron N. V. Negrásov y A. M. Koliubakin, indicaron que el problema nacional es un factor importante que está madurando y que es imprescindible afrontar con más energía que hasta ahora. F. F. Kokoshkin indicó, sin embargo” (éste es el “sin embargo” que corresponde al “pero” de Schedrín: “de puntillas no se es más alto, no, no se es más alto”), “que tanto el programa como la anterior experiencia política exigen que se proceda con la mayor prudencia en lo que se refiere a las ‘fórmulas elásticas’ de la autodeterminación política de las naciones”.

Este razonamiento de la conferencia demócrata constitucionalista, de todo punto notable, merece la mayor atención de todos los marxistas y de todos los demócratas (hagamos notar entre paréntesis que *Kievskaya Mysl*, periódico, por lo visto, enteradísimo y, sin duda, fiel transmisor de los pensamientos del señor Kokoshkin, añadía que este señor, claro que como advertencia a sus contrincantes, aducía de un modo especial el argumento del peligro de la “disgregación” del Estado).

La reseña oficial de *Riech* está redactada con maestría diplomática, para levantar lo menos posible el telón y disimular lo más posible. Pero, de todos modos, queda claro, en sus rasgos fundamentales, lo que ocurrió en la conferencia de los demócratas constitucionalistas. Los delegados burgueses liberales, que conocían la situación en Ucrania, y los demócratas constitucionalistas “de izquierda” plantearon precisamente la cuestión de la autodeterminación política de las naciones. De lo contrario, el señor Kokoshkin no habría tenido por qué aconsejar que se procediera “con prudencia” en lo que se refiere a esta “fórmula”.

En el programa de los demócratas constitucionalistas, que, naturalmente, conocían los delegados de la conferencia demócrata constitucionalista, figura precisamente la autodeterminación “cultural”, y no la autodeterminación política. Por tanto, el señor Kokoshkin defendía el programa contra los delegados de Ucrania, contra los demócratas constitucionalistas de izquierda, defendía la autodeterminación “cultural” contra la “política”. Es de todo punto evidente que, al alzarse contra la autodeterminación “política”, al esgrimir la amenaza de la “disgregación del Estado”, diciendo que la fórmula de la “autodeterminación política” es “elástica” (¡completamente a tono con Rosa Luxemburgo!), el señor Kokoshkin defendía el nacional-liberalismo ruso contra elementos más “izquierdistas” o más democráticos del Partido Demócrata Constitucionalista y contra la burguesía ucraniana.

El señor Kokoshkin venció en la conferencia demócrata constitucionalista, como puede verse por la traidora palabreja “sin embargo” en la reseña de *Riech*. El nacional-liberalismo ruso triunfó entre los demócratas constitucionalistas. ¿No contribuirá esta victoria a que se aclaren las mentes de los elementos poco razonables que entre los marxistas de Rusia han comenzado también a temer, tras los demócratas constitucionalistas, “las fórmulas elásticas de la autodeterminación política de las naciones”?

Veamos, “sin embargo”, cuál es, en el fondo, el curso que siguen los pensa-

mientos del señor Kokoshkin. Invocando la “anterior experiencia política” (es decir, evidentemente, la experiencia de 1905, en que la burguesía rusa se asustó, temiendo por sus privilegios nacionales, y contagió su miedo al Partido Demócrata Constitucionalista), hablando de la amenaza de “disgregación del Estado”, el señor Kokoshkin ha demostrado comprender perfectamente que la autodeterminación política no puede significar otra cosa que el derecho a la separación y a la formación de un Estado nacional independiente. Se pregunta: ¿cómo hay que conceptualizar estos temores del señor Kokoshkin, desde el punto de vista de la democracia en general, así como desde el punto de vista de la lucha de clase proletaria en particular?

El señor Kokoshkin quiere convencernos de que el reconocimiento del derecho a la separación aumenta el peligro de “disgregación del Estado”. Este es el punto de vista del *polizone* Mymretsov con su lema de “agarrar y no dejar escapar”. Desde el punto de vista de la democracia en general, es precisamente al contrario: el reconocimiento del derecho a la separación *reduce* el peligro de “disgregación del Estado”.

El señor Kokoshkin razona absolutamente en el espíritu de los nacionalistas. En su último congreso atacaron furiosamente a los ucranianos *mazepistas*. El movimiento ucraniano —exclamaban el señor Sávenko y compañía— amenaza con debilitar los lazos que unen a Ucrania con Rusia, ¡¡porque Austria, con la ucraniofilia, estrecha los lazos de los ucranianos con Austria!! Lo que no se comprendía era por qué no puede Rusia intentar “estrechar” los lazos de los ucranianos con Rusia por *el mismo método* que los señores Sávenko echan en cara a Austria, es decir, concediendo a los ucranianos el libre uso de su lengua materna, la autodeterminación administrativa, una Dieta autónoma, etc.

Los razonamientos de los señores Sávenko y de los señores Kokoshkin son absolutamente del mismo género e igualmente ridículos y absurdos, desde un punto de vista puramente lógico. ¿No está claro que, cuanto mayor sea la libertad de que goce la nación ucraniana en uno u otro país, tanto más estrecha será la ligazón de esa nación con el país de que se trate? Parece que no se puede discutir contra esta verdad elemental de no romper resueltamente con todos los postulados de la democracia. ¿Y puede haber, para una nación como tal, mayor libertad que la de separación, la libertad de formar un Estado nacional independiente?

Para que esta cuestión, embrollada por los liberales (y por quienes, sin comprender, les hacen coro), quede más clara aún, pondremos el más sencillo de los ejemplos. Tomemos el divorcio. Rosa Luxemburgo dice en su artículo que un Estado democrático centralizado, al transigir por completo con la autonomía de diversas de sus partes, debe dejar a la jurisdicción del Parlamento central todas las esferas legislativas de mayor importancia, y, entre ellas, la del divorcio. Es perfectamente comprensible esta preocupación por que el poder central del Estado democrático asegure la libertad de divorcio. Los reaccionarios están en contra de la libertad de divorcio, aconsejan que se proceda “con prudencia” en lo relativo a di-

cha libertad y gritan que eso significa la “disgregación de la familia”. Pero la democracia considera que los reaccionarios son unos hipócritas, pues, en realidad, defienden la omnipotencia de la policía y de la burocracia, los privilegios de un sexo y la peor opresión de la mujer; considera que, en realidad, la libertad de divorcio no significa la “disgregación” de los vínculos familiares, sino, por el contrario, su fortalecimiento sobre los únicos cimientos democráticos que son posibles y estables en una sociedad civilizada.

Acusar a los partidarios de la libertad de autodeterminación, es decir, de la libertad de separación, de que fomentan el separatismo, es tan necio e hipócrita como acusar a los partidarios de la libertad de divorcio de que fomentan el desmoronamiento de los vínculos familiares. Del mismo modo que en la sociedad burguesa impugnan la libertad de divorcio los defensores de los privilegios y de la venalidad, en los que se funda el matrimonio burgués, negar en el Estado capitalista la libertad de autodeterminación, es decir, de separación de las naciones, no significa otra cosa que defender los privilegios de la nación dominante y los procedimientos policíacos de administración en detrimento de los democráticos.

No cabe duda de que la politiquería engendrada por *todas* las relaciones de la sociedad capitalista da a veces lugar a charlatanería en extremo frívola y hasta sencillamente absurda de parlamentarios o publicistas sobre la separación de tal o cual nación. Pero sólo los reaccionarios pueden dejarse asustar (o fingir que se asustan) por semejante charlatanería. Quien sustente el punto de vista de la democracia, es decir, de la solución de los problemas estatales por la masa de la población, sabe perfectamente que hay “un gran trecho” entre la charlatanería de los politicastos y la decisión de las masas. Las masas de la población saben perfectamente, por la experiencia cotidiana, lo que significan los lazos geográficos y económicos, las ventajas de un gran mercado y de un gran Estado y sólo se decidirán a la separación cuando la opresión nacional y los roces nacionales hagan la vida en común absolutamente insoportable, frenando las relaciones económicas de todo género. Y en este caso, los intereses del desarrollo capitalista y de la libertad de lucha de clase estarán precisamente del lado de quienes se separen.

Así pues, se aborden los razonamientos del señor Kokoshkin del lado que se quiera, resultan el colmo del absurdo y del escarnio a los principios de la democracia. Pero en estos razonamientos hay cierta lógica: la lógica de los intereses de clase de la burguesía rusa. El señor Kokoshkin, como la mayoría del Partido Demócrata Constitucionalista, es lacayo de la bolsa de oro de esa burguesía. Defiende sus privilegios en general, sus privilegios *estatales* en particular, los defiende con Purishkevich, al lado de éste, con la única diferencia de que Purishkevich tiene más fe en el garrote feudal, mientras que Kokoshkin y compañía ven que el garrote resultó muy quebrantado en el año 1905 y confían más en los procedimientos burgueses de embaucamiento de las masas, por ejemplo, en asustar a los pequeños burgueses y a los campesinos con el fantasma de la “disgregación del Estado”, de engañarles con frases sobre la unión de “la libertad popular” con los pilares históricos, etc.

La significación real de clase de la hostilidad liberal al principio de autodeterminación política de las naciones es una, y sólo una: nacional-liberalismo, salvaguardia de los privilegios estatales de la burguesía rusa. Y todos estos oportunistas que hay entre los marxistas de Rusia, que precisamente ahora, en la época del sistema del 3 de junio, han arremetido contra el derecho de las naciones a la autodeterminación (el liquidador Semkovski, el bundista Libman, el pequeñoburgués ucraniano Yurkevich), en realidad van sencillamente a la zaga del nacional-liberalismo, corrompen a la clase obrera con las ideas nacional-liberales.

Los intereses de la clase obrera y de su lucha contra el capitalismo exigen una completa solidaridad y la más estrecha unión de los obreros de todas las naciones, exigen que se rechace la política nacionalista de la burguesía de cualquier nación. Por ello sería apartarse de las tareas de la política proletaria y someter a los obreros a la política de la burguesía, tanto el que los socialdemócratas se pusieran a negar el derecho a la autodeterminación, es decir, el derecho de las naciones oprimidas a separarse, como el que se pusieran a apoyar todas las reivindicaciones nacionales de la burguesía de las naciones oprimidas. Al obrero asalariado tanto le da que su principal explotador sea la burguesía rusa más que la alógena, como la burguesía polaca más que la hebrea, etc. Al obrero asalariado que haya adquirido conciencia de los intereses de su clase le son indiferentes tanto los privilegios estatales de los capitalistas rusos como las promesas de los capitalistas polacos o ucranianos de instaurar el paraíso en la tierra cuando ellos gocen de privilegios estatales. El desarrollo del capitalismo prosigue y proseguirá, de uno u otro modo, tanto en un Estado heterogéneo unido como en Estados nacionales separados.

En todo caso, el obrero asalariado seguirá siendo objeto de explotación, y para luchar con éxito contra ella se exige que el proletariado sea independiente del nacionalismo, que los proletarios mantengan una posición de completa neutralidad, por así decir, en la lucha de la burguesía de las diversas naciones por la supremacía. En cuanto el proletariado de una nación cualquiera apoye en lo más mínimo los privilegios de su burguesía nacional, este apoyo provocará inevitablemente la desconfianza del proletariado de la otra nación, debilitará la solidaridad internacional de clase de los obreros, los desunirá para regocijo de la burguesía. Y el negar el derecho a la autodeterminación, o a la separación, significa indefectiblemente, en la práctica, apoyar los privilegios de la nación dominante.

Nos convenceremos de ello con mayor evidencia aún si tomamos el ejemplo concreto de la separación de Noruega de Suecia.

VI. LA SEPARACIÓN DE NORUEGA DE SUECIA

Rosa Luxemburgo toma precisamente este ejemplo y razona sobre él del modo siguiente:

“El último acontecimiento que se ha producido en la historia de las relaciones

federativas, la separación de Noruega de Suecia —que en su tiempo se apresuró a comentar la prensa socialpatriota polaca (véase *Naprzód* de Cracovia) como una reconfortante manifestación de la fuerza y del carácter progresivo de las aspiraciones a la separación estatal—, se ha convertido inmediatamente en prueba fulminante de que el federalismo y la separación estatal que de él resulta en modo alguno son expresión de progreso ni democracia. Después de la llamada ‘revolución’ noruega, que consistió en destronar y hacer salir de Noruega al rey de Suecia, los noruegos eligieron tranquilamente otro rey, después de haber rechazado formalmente por plebiscito popular el proyecto de instauración de la República. Lo que los adoradores superficiales de toda clase de movimientos nacionales y de todo lo que se asemeja a independencia proclamaron como ‘revolución’ era una simple manifestación del particularismo campesino y pequeñoburgués, un deseo de tener por su dinero un rey ‘propio’, en lugar del rey impuesto por la aristocracia sueca; era, por tanto, un movimiento que no tenía absolutamente nada de común con el espíritu revolucionario. Al mismo tiempo, esta historia de la ruptura de la unión sueco-noruega ha vuelto a demostrar hasta qué punto, también en este caso, la federación que había existido hasta aquel momento no era sino la expresión de intereses puramente dinásticos y, por tanto, una forma de monarquismo y de reacción” (*Przegłqd*).

¡¡Esto es literalmente todo lo que dice Rosa Luxemburgo sobre este punto!! Y preciso es reconocer que será difícil poner de manifiesto la impotencia de su posición con más relieve con que lo ha hecho Rosa Luxemburgo en el ejemplo aducido.

La cuestión consistía y consiste en si la socialdemocracia necesita, en un Esta-

73. El PNV tenía experiencia, sabía dónde se metía. La Asamblea de Municipios Vascos fue utilizada en 1931 por la burguesía vasca para defenderse de la revolución en el Estado español aprovechando la cobertura de la autonomía. El 14 de junio de aquel año se aprobó en Estella, con representantes de 480 municipios vascos —incluidos los navarros— de un total de 520, el “Estatuto General del Estado Vasco” (el PNV iba en alianza con los carlistas navarros con los que se presentó a las elecciones a Cortes el 28 de junio de aquel mismo año). En junio de 1932, se presentó un nuevo proyecto de Estatuto Vasco con el apoyo del PSOE. Esta vez fueron los carlistas quienes utilizaron la asamblea de municipios de Navarra para rechazarlo por 123 municipios frente a 104. El 5 de noviembre de 1933 se aprobó el Estatuto de autonomía con una elevada participación. Nuevamente se utilizó la asamblea de municipios, en Álava esta vez, para rechazarlo por 57 gobiernos municipales de los 77 existentes. Finalmente, fue de la mano de una situación revolucionaria en 1936 cuando el País Vasco refrendó su primera autonomía, igualmente a través de una Asamblea de Municipios. El 1 de octubre de 1936 las Cortes aprobaron el Estatuto de Autonomía del País Vasco, por el que se concedía un grado de autonomía a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, determinando que en el transcurso de la guerra regiría el País Vasco un gobierno provisional y delegando la elección del presidente de dicho Gobierno a los concejales que pudiesen emitir libremente su voto. El gobierno del Frente Popular entregaba la presidencia al PNV, que controlaba una amplia mayoría de los 1.009 concejales —la mayoría de Vizcaya—, que votaron el 7 de octubre a José Antonio Aguirre como presidente del Gobierno Vasco. Esto implicaba poner fin al poder revolucionario de las masas de la clase trabajadora, que había frenado con su iniciativa, organizando batallones armados, el levantamiento del 18 de julio en Vizcaya y en Guipúzcoa, donde el PNV se inhibió mientras en Álava y Navarra apoyaba el alzamiento.

do de composición nacional heterogénea, un programa que reconozca el derecho a la autodeterminación o a la separación.

¿Qué nos dice sobre esto el ejemplo de Noruega, escogido por la misma Rosa Luxemburgo?

Nuestra autora da rodeos y hace esguinces, ironiza y clama contra *Naprzód*, ¡pero no responde a la cuestión!! Rosa Luxemburgo habla de lo que se quiera, ¡con tal de *no decir ni una palabra* del fondo de la cuestión!!

Es indudable que los pequeños burgueses de Noruega, que han querido tener rey propio por su dinero y han hecho fracasar en plebiscito popular el proyecto de instauración de la República, han puesto de manifiesto cualidades pequeñoburguesas bastante malas. Es indudable que si *Naprzód* no lo ha notado, ha mostrado cualidades igualmente malas e igualmente pequeñoburguesas.

Pero ¿¿a qué viene todo esto??

¡Porque de lo que se trataba era del derecho de las naciones a la autodeterminación y de la actitud del proletariado socialista ante ese derecho! ¿Por qué, pues, Rosa Luxemburgo no responde a la cuestión, sino que da vueltas y más vueltas en torno a ella?

Dicen que para el ratón no hay fiera más temible que el gato. Para Rosa Luxemburgo, por la visto, no hay fiera más temible que los *fraquistas*. Fraquista es el nombre que se da en lenguaje popular al Partido Socialista Polaco, a la llamada fracción revolucionaria, y el periodiquillo de Cracovia *Naprzód* comparte las ideas de esta “fracción”. La lucha de Rosa Luxemburgo contra el nacionalismo de esa “fracción” ha cegado hasta tal punto a nuestra autora, que todo desaparece de su horizonte a excepción de *Naprzód*.

Si *Naprzód* dice “sí”, Rosa Luxemburgo se considera en el sagrado deber de proclamar inmediatamente “no”, sin pensar en lo más mínimo que, con semejante procedimiento, lo que demuestra no es su independencia de *Naprzód*, sino precisamente todo lo contrario, su divertida dependencia de los fraquistas, su incapacidad de ver las cosas desde un punto de vista algo más amplio y profundo que el del hormiguero de Cracovia. *Naprzód*, desde luego, es un órgano muy malo y no es en absoluto un órgano marxista, pero eso no debe impedirnos analizar a fondo el ejemplo de Noruega, toda vez que lo hemos aducido.

Para analizar este ejemplo a lo marxista, no debemos pararnos en las malas cualidades de los muy temibles fraquistas, sino, primero, en las particularidades históricas concretas de la separación de Noruega de Suecia, y, segundo, ver cuáles fueron las tareas del *proletariado* de ambos países durante esta separación.

Noruega está ligada a Suecia por lazos geográficos, económicos y lingüísticos no menos estrechos que los lazos que unen a muchas naciones eslavas no rusas a los rusos. Pero la unión de Noruega a Suecia no era voluntaria, de modo que Rosa Luxemburgo habla de “federación” completamente en vano, sencillamente porque no sabe qué decir. Noruega fue *entregada* a Suecia por los monarcas durante las guerras napoleónicas, contra la voluntad de los noruegos, y los suecos hu-

bieron de llevar a Noruega tropas para someterla.

Después de eso hubo durante largos decenios, a pesar de la autonomía de extraordinaria amplitud de que gozaba Noruega (Dieta propia, etc.), constantes roces entre Noruega y Suecia, y los noruegos procuraron con todas las fuerzas sacudirse el yugo de la aristocracia sueca. En agosto de 1905 se lo sacudieron por fin: la Dieta noruega decidió que el rey de Suecia dejara de ser rey de Noruega, y el referéndum del pueblo noruego, celebrado más tarde, dio una aplastante mayoría de votos (cerca de doscientos mil, contra algunos centenares) a favor de la completa separación de Suecia. Los suecos, después de algunas vacilaciones, se resignaron con la separación.

Este ejemplo nos muestra en qué terreno son posibles y se producen casos de separación de naciones, manteniéndose las relaciones económicas y políticas contemporáneas, y qué *forma* toma a veces la separación en un ambiente de libertad política y democracia.

Ni un solo socialdemócrata, si no se decide a declarar que le son indiferentes la libertad política y la democracia (y en tal caso, naturalmente, dejaría de ser socialdemócrata), podrá negar que este ejemplo demuestra *de hecho* que los obreros conscientes *tienen la obligación* de desarrollar una labor constante de propaganda y preparación a fin de que los posibles choques motivados por la separación de naciones se ventilen *sólo como* se ventilaban en 1905 entre Noruega y Suecia y no “al modo ruso”. Esto es precisamente lo que expresa la reivindicación programática de reconocer el derecho de las naciones a la autodeterminación. Y Rosa Luxemburgo, ante un hecho desagradable para su teoría, ha tenido que escudarse con temibles invectivas en la mentalidad de los pequeños burgueses noruegos y en *Naprzód* de Cracovia, porque comprendía perfectamente hasta qué punto *desmiente de un modo irrevocable* ese hecho histórico sus frases, según las cuales el derecho a la autodeterminación de las naciones es una “utopía”, equiva-le al derecho “a comer en plato de oro”, etc. Semejantes frases sólo expresan una fe oportunista de lamentable presunción en la inmutabilidad de la correlación de fuerzas dada entre las naciones de Europa Oriental.

Prosigamos. En el problema de la autodeterminación de las naciones, lo mismo que en cualquier otro, nos interesa, ante todo y sobre todo, la autodeterminación del proletariado en el seno de las naciones. Rosa Luxemburgo ha dejado modestamente a un lado también este problema, comprendiendo cuán desagradable resulta para su “teoría” examinarlo en el aducido ejemplo de Noruega.

¿Cuál fue y debió ser la posición del proletariado noruego y sueco en el conflicto motivado por la separación? Los obreros conscientes de Noruega, desde luego, hubieran votado *después* de la separación por la República³, y si hubo socialistas que votaron de otro modo, eso no demuestra sino que hay a veces mucho oportunismo obtuso, pequeñoburgués, en el socialismo europeo. Sobre esto no puede haber dos criterios, y sólo nos referimos a este punto porque Rosa Luxemburgo intenta velar el fondo de la cuestión con disquisiciones *que no vienen al caso*. No sa-

bemos si, en lo que se refiere a la separación, el programa socialista noruego obligaba a los socialdemócratas noruegos a atenerse a un criterio determinado. Supongamos que no, que los socialistas noruegos dejaron en suspenso la cuestión de hasta qué punto era suficiente para la libre lucha de clase la autonomía de Noruega y hasta qué punto frenaban la libertad de su vida económica los eternos roces y conflictos con la aristocracia sueca. Pero es indiscutible que el proletariado noruego debía haber ido contra esa aristocracia, por una democracia campesina noruega (aun con toda la estrechez de miras pequeñoburguesas de esta última).

¿Y el proletariado sueco? Sabido es que los terratenientes suecos, apoyados por el clero sueco, predicaban la guerra contra Noruega; y como Noruega es mucho más débil que Suecia, como ya había sufrido una invasión sueca, como la aristocracia sueca tiene un peso muy considerable en su país, esta prédica era una amenaza muy seria. Puede asegurarse que los Kokoshkin suecos corrompieron larga y empeñadamente a las masas suecas, exhortándolas a “proceder con prudencia” en lo referente a las “fórmulas elásticas de la autodeterminación política de las naciones”, pintándoles los peligros de “disgregación del Estado” y asegurándoles que la “libertad popular” es compatible con los principios de la aristocracia sueca. No cabe la menor duda de que la socialdemocracia sueca habría hecho traición a la causa del socialismo y a la causa de la democracia si no hubiera luchado con todas sus fuerzas contra la ideología y contra la política tanto de los terratenientes como de los Kokoshkin, si no hubiera propugnado, además de la igualdad de las naciones en general (igualdad que también reconocen los Kokoshkin), el derecho de las naciones a la autodeterminación, la libertad de separación de Noruega.

La estrecha unión de los obreros noruegos y suecos y su plena solidaridad de camaradas de clase *ganaban*, al reconocer de este modo los obreros suecos el derecho de los noruegos a la separación. Porque los obreros noruegos se convencían de que los obreros suecos no estaban contagiados de nacionalismo sueco, de que la fraternidad con los proletarios noruegos estaba, para ellos, por encima de los privilegios de la burguesía y de la aristocracia suecas. La ruptura de los lazos impuestos a Noruega por los monarcas europeos y los aristócratas suecos fortaleció los lazos entre los obreros noruegos y suecos. Los obreros suecos han demostrado que, a través de todas las vicisitudes de la política burguesa —¡bajo las relaciones burguesas es perfectamente posible que renazca la sumisión de los noruegos a los suecos por la fuerza!—, sabrán mantener y defender la completa igualdad de derechos y la solidaridad de clase de los obreros de ambas naciones en la lucha tanto contra la burguesía sueca como contra la noruega.

De ahí se infiere, entre otras cosas, cuán infundadas e incluso sencillamente poco serias son las tentativas que a veces hacen los frauquistas de *aprovechar* nuestras divergencias con Rosa Luxemburgo en contra de la socialdemocracia polaca. Los frauquistas no constituyen un partido proletario, socialista, sino un partido nacionalista pequeñoburgués, una especie de socialrevolucionarios polacos. Nunca se ha hablado ni pudo hablarse de ninguna unidad de los socialdemócrata-

tas de Rusia con este partido. En cambio, ni un solo socialdemócrata de Rusia “se ha arrepentido” nunca de acercarse y unirse a los socialdemócratas polacos. A la socialdemocracia polaca le corresponde el gran mérito histórico de haber creado por primera vez en Polonia un partido marxista de verdad, proletario de verdad, en una Polonia impregnada hasta la médula de aspiraciones y apasionamientos nacionalistas. Pero este mérito de los socialdemócratas polacos es un gran mérito no porque Rosa Luxemburgo haya dicho toda clase de absurdos contra el apartado 9 del programa marxista de Rusia, sino a pesar de esa lamentable circunstancia.

Para los socialdemócratas polacos, naturalmente, el “derecho a la autodeterminación” no tiene una importancia tan grande como para los rusos. Es perfectamente comprensible que la lucha contra la pequeña burguesía de Polonia, cegada por el nacionalismo, haya obligado a los socialdemócratas polacos a “forzar la nota” con particular empeño (a veces quizá un poco exagerado). Ni un solo marxista de Rusia ha pensado nunca en acusar a los socialdemócratas polacos de estar en contra de la separación de Polonia. Estos socialdemócratas se equivocan sólo cuando, a semejanza de Rosa Luxemburgo, intentan negar la necesidad de que en el programa de los marxistas *de Rusia* se reconozca el derecho a la autodeterminación.

En el fondo, eso significa trasladar relaciones, comprensibles desde el punto de vista del horizonte de Cracovia, a la escala de todos los pueblos y naciones de Rusia, incluidos los rusos. Eso significa ser “nacionalistas polacos al revés”, y no socialdemócratas de Rusia, internacionalistas.

Porque la socialdemocracia internacional está precisamente en pro de reconocer el derecho de las naciones a la autodeterminación. De lo cual pasamos a ocuparnos.

VII. EL ACUERDO DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE LONDRES CELEBRADO EN 1896

El acuerdo dice: “El congreso declara que está a favor del derecho completo a la autodeterminación (*selbstbestimmungsrecht*) de todas las naciones y expresa sus simpatías a los obreros de todo país que sufra actualmente bajo el yugo de un absolutismo militar, nacional o de otro género; el congreso exhorta a los obreros de todos estos países a ingresar en las filas de los obreros conscientes (*klassenbewusste*= de los que tienen conciencia de los intereses de su clase) de todo el mundo, a fin de luchar al lado de ellos para vencer al capitalismo internacional y alcanzar los objetivos de la socialdemocracia internacional”⁴.

Como ya hemos señalado, nuestros oportunistas, los señores Semkovski, Libman y Yurkévich, desconocen sencillamente este acuerdo. Pero Rosa Luxemburgo lo conoce y cita su texto íntegro, en el que figura la misma expresión que en nuestro programa: “autodeterminación”.

Cabe preguntar: ¿cómo elimina Rosa Luxemburgo este obstáculo del camino de su “original” teoría?

¡Oh, muy sencillo!... El centro de gravedad está aquí en la segunda parte de la resolución... su carácter declarativo... ¡¡sólo por confusión puede apelarse a ella!!

El desamparo y la desorientación de nuestra autora son sencillamente asombrosos. Por lo general, los oportunistas son los únicos que aluden al carácter declarativo de los puntos consecuentemente democráticos y socialistas en los programas, rehuyendo cobardemente la polémica franca contra ellos. A lo que se ve, no sin motivo se ha encontrado esta vez Rosa Luxemburgo en la triste compañía de los señores Semkovski, Libman y Yurkevich. Rosa Luxemburgo no se atreve a confesar con sinceridad si estima certera o errónea la citada resolución. Se zafa y se esconde, como si esperase tener a un lector tan poco atento y tan ignorante que olvide la primera parte de la resolución al llegar a la segunda o que nunca haya oído hablar de los debates que hubo en la prensa socialista *antes* del Congreso de Londres.

Pero Rosa Luxemburgo está muy equivocada si se imagina que logrará pisotear con tanta facilidad ante los obreros conscientes de Rusia una resolución de la Internacional sobre una importante cuestión de principios, sin haberse dignado siquiera analizarla con criterio crítico.

En los debates que precedieron al Congreso de Londres —principalmente en las columnas de la revista de los marxistas alemanes *Die Neue Zeit*— se expresó el punto de vista de Rosa Luxemburgo, y *ese punto de vista, en el fondo, sufrió una derrota ante la Internacional!* Este es el fondo del asunto, y debe tenerlo en cuenta sobre todo el lector ruso.

Los debates giraron en torno a la cuestión de la independencia de Polonia. Se expresaron tres puntos de vista:

1) El punto de vista de los *fraquistas*, en cuyo nombre habló Haecker. Querían que la Internacional reconociera en su programa la reivindicación de la independencia de Polonia. La propuesta no fue aceptada. Este punto de vista sufrió una derrota ante la Internacional.

2) El punto de vista de Rosa Luxemburgo: los socialistas polacos no deben exigir la independencia de Polonia. Desde este punto de vista, ni hablar se podía de proclamar el derecho de las naciones a la autodeterminación. Este criterio fue también derrotado ante la Internacional.

3) El punto de vista que entonces desarrolló del modo más minucioso Kautsky, al tomar la palabra contra Rosa Luxemburgo y demostrar la extrema “unilateralidad” del materialismo de ella. Desde este punto de vista, la Internacional no puede incluir hoy en su programa la independencia de Polonia, pero los socialistas polacos —dijo Kautsky— pueden plenamente propugnar semejante reivindicación. Desde el punto de vista de los socialistas es absolutamente erróneo desentenderse de las tareas de la liberación nacional en un ambiente de opresión nacional.

La resolución de la Internacional reproduce precisamente las tesis más esenciales, fundamentales de este punto de vista: por una parte, se reconoce, sin el menor rodeo ni dejar lugar a tergiversación alguna, el pleno derecho de todas las naciones a la autodeterminación; por otra parte, se exhorta de forma no menos ex-

plícita a los obreros a concertar la unidad *internacional* de su lucha de clase.

Nosotros estimamos que esta resolución es acertada por completo y que, para los países de Europa Oriental y de Asia de comienzos del siglo XX, es precisamente ella y justamente en la conexión indisoluble de sus dos partes lo que constituye la única directriz acertada de política proletaria de clase en el problema nacional.

Explayémonos con algún detenimiento mayor en los tres puntos de vista mencionados.

Sabido es que Marx y Engels consideraban que toda la democracia de Europa Occidental, y más aún la socialdemocracia, estaban absolutamente obligadas a apoyar con energía la reivindicación de independencia de Polonia. Para los años cuarenta y sesenta del siglo pasado, época de revolución burguesa en Austria y Alemania, época de “reforma campesina” en Rusia, este punto de vista era cierto por completo y el único consecuentemente democrático y proletario. Mientras las masas populares de Rusia y de la mayoría de los países eslavos estaban aún sumidas en profundo sueño, mientras *no había* en estos países movimientos democráticos independientes, de masas, el movimiento liberador *aristocrático* en Polonia adquiría un valor primordial, gigantesco, desde el punto de vista no sólo de la democracia de toda Rusia, no sólo de la democracia de todos los países eslavos, sino de la democracia de toda Europa⁵.

Pero si este punto de vista de Marx era acertado por completo para el segundo tercio o para el tercer cuarto del siglo XIX, ha dejado de serlo para el siglo XX. En la mayoría de los países eslavos, e incluso en uno de los países eslavos más atrasados, en Rusia, han surgido movimientos democráticos independientes e incluso un movimiento proletario independiente. Ha desaparecido la Polonia aristocrática, dando paso a la Polonia capitalista. En tales circunstancias, Polonia no podía menos que perder su *excepcional* trascendencia revolucionaria.

Cuando el PSP (Partido Socialista Polaco, los *fraquistas* actuales) intentó en 1896 “perpetuar” el punto de vista de Marx *de otra época*, eso significaba ya utilizar la *letra* del marxismo contra el *espíritu* del marxismo. De ahí que tuvieran completa razón los socialdemócratas polacos cuando se declararon en contra de los entusiasmos nacionalistas de la pequeña burguesía polaca, cuando indicaron que el problema nacional tenía una importancia secundaria para los obreros polacos, cuando crearon por primera vez en Polonia un partido puramente proletario, cuando proclamaron el principio de la unión más estrecha entre el obrero polaco y el ruso en su lucha de clase, principio de inmensa importancia.

Pero ¿significaba esto, sin embargo, que, a comienzos del siglo XX, la Internacional podía considerar superfluo para Europa Oriental y Asia el principio de autodeterminación política de las naciones, su derecho a la separación? Esto sería el mayor de los absurdos y equivaldría (teóricamente) a considerar terminada la transformación democrática burguesa de los Estados de Turquía, Rusia y China; sería (prácticamente) oportunismo respecto al absolutismo.

No. Para Europa Oriental y para Asia, en una época en que se han iniciado re-

voluciones democráticas burguesas, en una época en que han surgido y se han exacerbado movimientos nacionales, en una época en que han aparecido partidos proletarios independientes, la tarea de estos partidos en política nacional debe ser una tarea doble: reconocer el derecho de todas las naciones a la autodeterminación, porque aún no está terminada la transformación democrática burguesa, porque la democracia obrera propugna con seriedad, franqueza y consecuencia, no al modo liberal, no al modo de los Kokoshkin, la igualdad de derechos de las naciones y la alianza más estrecha, indisoluble, de la lucha de clase de los proletarios de todas las naciones de un Estado determinado, para toda índole de peripecias de su historia, con todo género de modificaciones que la burguesía introduzca en las fronteras de los diversos Estados.

Esta doble tarea del proletariado es precisamente la que formula la resolución de la Internacional en 1896. Idéntica precisamente es, por los principios en que se basa, la resolución adoptada por los marxistas de Rusia en su Conferencia del Verano de 1913. Hay gentes a quienes les parece “contradictorio” que esta resolución, al reconocer en su punto cuarto el derecho a la autodeterminación, a la separación, parezca “conceder” el máximo al nacionalismo (en realidad, en el reconocimiento del *derecho* a la autodeterminación de *todas* las naciones hay un máximo de *democracia* y un mínimo de nacionalismo), y en el punto quinto previene a los obreros contra las consignas nacionalistas de cualquier burguesía y exige la unidad y la fusión de los obreros de todas las naciones en organizaciones proletarias internacionales únicas. Pero sólo inteligencias absolutamente obtusas pueden ver aquí una “contradicción”, pues son incapaces de comprender, por ejemplo, por qué *han ganado* la unidad y la solidaridad de clase del proletariado sueco y noruego, cuando los obreros suecos han defendido para Noruega la libertad de separarse y constituir un Estado independiente.

VIII. CARLOS MARX, EL UTOPISTA, Y ROSA LUXEMBURGO, LA PRÁCTICA

Declarando “utopía” la independencia de Polonia y repitiéndolo hasta dar náuseas, Rosa Luxemburgo exclama con ironía: ¿por qué no exigir la independencia de Irlanda?

Evidentemente, la “práctica” Rosa Luxemburgo desconoce la actitud de Marx ante la independencia de Irlanda. Vale la pena detenerse en este punto para dar un ejemplo analítico de una reivindicación *concreta* de independencia nacional desde el punto de vista verdaderamente marxista, y no oportunista.

Marx tenía la costumbre de “tantear”, como él decía, a los socialistas que él conocía, comprobando su conciencia y la firmeza de su convicción. Cuando conoció a Lopatin, Marx escribió a Engels el 5 de julio de 1870 un juicio muy encomiástico sobre el joven socialista ruso, pero añadía:

“El punto débil: *Polonia*. Sobre este punto Lopatin dice exactamente lo mismo

que un inglés —por ejemplo, un cartista inglés de la vieja escuela— sobre Irlanda”.

Marx interroga a un socialista que pertenece a una nación opresora lo que piensa de una nación oprimida y descubre en el acto el defecto *común* de los socialistas de las naciones dominantes (inglesa y rusa): la incomprensión de su deber socialista para con las naciones oprimidas, el rumiar prejuicios tomados de la burguesía de la “nación grande”.

Antes de pasar a las declaraciones positivas de Marx sobre Irlanda, hay que hacer la salvedad de que Marx y Engels guardaban en general una actitud rigurosamente crítica frente al problema nacional, apreciando su valor histórico relativo. Así, Engels escribe a Marx el 23 de mayo de 1851 que el estudio de la historia le lleva a conclusiones pesimistas respecto a Polonia, que la importancia de Polonia es temporal, sólo hasta la revolución agraria en Rusia. El papel de los polacos en la historia es el de “tonterías atrevidas”. “Ni por un momento puede suponerse que Polonia, incluso comparada con Rusia solamente, represente con éxito el progreso o tenga cierto valor histórico”. En Rusia hay más elementos de civilización, de instrucción, de industria, de burguesía que en la “aletargada Polonia de los terratenientes nobles (...) ¡Qué significan Varsovia y Cracovia comparadas con San Petersburgo, Moscú y Odessa!”. Engels no cree en el éxito de las insurrecciones de la nobleza polaca.

Pero todas estas ideas, que tanto tienen de perspicacia genial, en modo alguno impidieron a Marx y Engels doce años más tarde, cuando Rusia seguía aún aletargada, y Polonia, en cambio, hervía, adoptar la actitud de la más cálida y profunda simpatía por el movimiento polaco.

En 1864, al redactar el mensaje de la Internacional, Marx escribe a Engels (4 de noviembre de 1864) que es preciso luchar contra el nacionalismo de Mazzini. “Cuando en el mensaje se habla de política internacional, me refiero a países, no a naciones, y denuncié a Rusia, y no a Estados de menor importancia”, escribe Marx. Para Marx no ofrece dudas la subordinación del problema nacional a la “cuestión obrera”. Pero su teoría está tan lejos del propósito de pasar por alto los movimientos nacionales como el cielo de la tierra.

Llega el año 1866. Marx escribe a Engels sobre la “camarilla proudhoniana” de París, que “declara que las naciones son un absurdo y ataca a Bismarck y a Garibaldi. Como polémica contra el chovinismo, su táctica es útil y explicable. Pero cuando quienes creen en Proudhon (y entre ellos figuran dos buenos amigos míos de aquí, Lafargue y Longuet) piensan que toda Europa puede y debe permanecer quieta, sentada tranquilamente a sus anchas hasta que los señores acaben con la miseria y la ignorancia en Francia... resultan ridículos” (carta del 7 de junio de 1866).

“Ayer”, escribe Marx el 20 de junio de 1866, “hubo en el Consejo de la Internacional un debate sobre la guerra actual (...) Como era de esperar, la discusión giró en torno al problema de las ‘naciones’ y a nuestra actitud ante él ... Los representantes de la Joven Francia (*no obreros*) defendieron el punto de vista de que todo grupo étnico y la misma nación son prejuicios anticuados. Stirnerianismo prou-

dhoniano (...). Todo el mundo debe esperar a que los franceses maduren para la revolución social (...). Los ingleses se rieron mucho cuando yo comencé mi discurso diciendo que nuestro amigo Lafargue y otros, que han suprimido las naciones, nos hablaban en francés, es decir, en una lengua incomprensible para las nueve décimas partes de la reunión. Luego di a entender que Lafargue, sin darse él mismo cuenta de ello, entendía por negación de las naciones, al parecer, su absorción por la ejemplar nación francesa”.

La deducción que resulta de todas estas observaciones críticas de Marx es clara: la clase obrera es la que menos puede hacer un fetiche del problema nacional, porque el desarrollo del capitalismo no despierta necesariamente a todas las naciones a una vida independiente. Pero, una vez surgidos los movimientos nacionales de masas, desentenderse de ellos, negarse a apoyar lo que en ellos hay de progresivo, significa caer, en realidad, bajo la influencia de prejuicios *nacionalistas*, es decir: considerar a su propia nación como “nación ejemplar” (o, añadiremos nosotros, como nación dotada del privilegio exclusivo de organizarse en Estado)⁶.

Pero volvamos al problema de Irlanda.

La posición de Marx en este problema la expresan, con especial claridad, los siguientes fragmentos de sus cartas:

“He tratado por todos los medios de promover en los obreros ingleses una manifestación de simpatía por la lucha de los fenianos (...). Antes creía imposible la separación de Irlanda de Inglaterra. Ahora la creo inevitable, aunque después de la separación se pueda llegar a una federación”. Esto es lo que decía Marx a Engels en la carta del 2 de noviembre de 1867.

Y en otra carta, del 30 de noviembre del mismo año, añadía:

“¿Qué consejo debemos dar nosotros a los obreros *ingleses*? A juicio mío, deben hacer de la *repeal* (ruptura) de la Unión [de Irlanda con Inglaterra, es decir, de la separación de Irlanda de Inglaterra] un punto de su declaración, en pocas palabras, el asunto de 1783, pero democratizado y adaptado a las condiciones del momento. Esta es la única forma legal y, por consiguiente, la única posible de emancipación de los irlandeses que puede entrar en el programa de un partido *inglés*. La experiencia habrá de mostrar más tarde si la simple unión personal puede seguir existiendo entre los dos países (...).

“Lo que necesitan los irlandeses es:

- “1) Autonomía e independencia con respecto a Inglaterra.
- “2) Una revolución agraria”.

Como Marx concedía inmensa importancia al problema de Irlanda, daba conferencias de hora y media sobre este tema en la Unión Obrera alemana (carta del 17 de diciembre de 1867).

En una carta del 20 de noviembre de 1868, Engels señala “el odio que existe entre los obreros ingleses a los irlandeses”, y al cabo de un año, poco más o menos (24 de octubre de 1869), volviendo a este tema, escribe:

“De Irlanda a Rusia *il n’y a qu’un pas* (no hay más que un paso) (...) Por el ejem-

plo de la historia irlandesa puede verse qué desgracia es para un pueblo haber sojuzgado a otro. Todas las infamias inglesas tienen su origen en la esfera irlandesa. Todavía tengo que estudiar la época de Cromwell, pero, de todos modos, no me cabe la menor duda de que, también en Inglaterra, las cosas habrían tomado otro cariz si no hubiera sido necesario dominar por las armas a Irlanda y crear una nueva aristocracia”.

Señalemos de paso la carta de Marx a Engels del 18 de agosto de 1869:

“En Posnania, los obreros polacos han tenido una huelga victoriosa gracias a la ayuda de sus camaradas de Berlín. Esta lucha contra ‘el señor capital’ —incluso en su forma inferior, en forma de huelgas— terminará con los prejuicios nacionales de un modo más serio que las declamaciones sobre la paz en boca de los señores burgueses”.

Por lo que sigue, puede verse la política que Marx aplicaba en la Internacional respecto al problema irlandés.

El 18 de noviembre de 1869 Marx escribe a Engels que ha pronunciado en el Consejo de la Internacional un discurso de hora y cuarto sobre la actitud del gobierno británico ante la amnistía irlandesa y que ha propuesto la resolución siguiente:

“Se acuerda:

“Que, en su respuesta a la exigencia irlandesa de poner en libertad a los patriotas irlandeses, el señor Gladstone ultraja deliberadamente a la nación irlandesa;

“que Gladstone liga la amnistía política a condiciones igualmente humillantes, tanto para las víctimas del mal gobierno como para el pueblo representado por ese gobierno;

“que Gladstone, si bien obligado por su situación oficial, ha aplaudido pública y solemnemente la revuelta de los esclavistas norteamericanos y ahora se pone a predicar al pueblo irlandés la doctrina de la sumisión pasiva;

“que, en lo tocante a la amnistía irlandesa, toda su política es una auténtica manifestación de la *política de conquista* que desenmascaró el señor Gladstone, derribando de este modo el ministerio de sus adversarios, los *tories*;

“que el Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores expresa su admiración ante la valentía, la firmeza y la elevación de espíritu con que el pueblo irlandés despliega su campaña por la amnistía;

“que esta resolución deberá ser comunicada a todas las secciones de la Asociación Internacional de los Trabajadores y a todas las organizaciones obreras de Europa y América que estén relacionadas con ella”.

El 10 de diciembre de 1869 Marx escribe que su informe sobre el problema irlandés en el Consejo de la Internacional tendrá la estructura siguiente:

“Independientemente de toda frase ‘internacionalista’ y ‘humanitaria’ sobre ‘justicia para Irlanda’ —porque esto se sobreentiende en el Consejo de la Internacional—, *el interés absoluto y directo de la clase obrera inglesa exige la ruptura de su actual unión con Irlanda*. Estoy profundamente convencido de ello, y las

razones no las puedo revelar, en parte, a los propios obreros ingleses. He creído durante mucho tiempo que la ascendencia de la clase obrera inglesa permitiría derrocar el régimen irlandés. He defendido siempre esta opinión en el *New York Daily Tribune* [periódico norteamericano en el que Marx colaboró mucho tiempo]. Un estudio más profundo me ha persuadido de lo contrario. La clase obrera inglesa *no hará nada* mientras no se desembarace de Irlanda (...). La reacción inglesa, en Inglaterra, tiene sus raíces en el sojuzgamiento de Irlanda” (subrayado por Marx).

Ahora tendrá el lector bien claro cuál era la política de Marx en el problema irlandés.

El “utopista” Marx era tan “poco práctico” que estaba en pro de la separación de Irlanda, separación que, medio siglo más tarde, no se ha realizado aún.

¿A qué se debe esta política de Marx? ¿No fue, acaso, un error?

Al principio, Marx creía que el movimiento que liberaría a Irlanda era el movimiento obrero de la nación opresora y no el nacional de la nación oprimida. Marx, sabedor de que sólo la victoria de la clase obrera podrá traer la liberación completa de todas las naciones, no hace de los movimientos nacionales algo absoluto. Es imposible tener en cuenta de antemano todas las correlaciones que puedan establecerse entre los movimientos burgueses de liberación en las naciones oprimidas y el movimiento proletario de liberación en la nación opresora (precisamente esto es lo que hace tan difícil el problema nacional en la Rusia contemporánea).

Pero las cosas han ocurrido de manera que la clase obrera inglesa ha caído por un período bastante largo bajo la influencia de los liberales, yendo a la zaga de los mismos, decapitándose ella misma con una política obrera liberal. El movimiento burgués de liberación en Irlanda se ha acentuado y ha adquirido formas revolucionarias. Marx revisa su opinión y la corrige. “Qué desgracia es para un pueblo el haber sojuzgado a otro”. La clase obrera de Inglaterra no podrá liberarse, mientras Irlanda no se libere del yugo inglés. La esclavización de Irlanda fortalece y nutre a la reacción en Inglaterra (¡igual que nutre a la reacción en Rusia el sojuzgamiento de una serie de naciones!).

Y Marx, al hacer aprobar en la Internacional una resolución de simpatía por “la nación irlandesa”, por “el pueblo irlandés” (¡el inteligente L. VI. haría, seguramente, trizas al pobre Marx por haber olvidado la lucha de clase!), propugna la *separación* de Irlanda de Inglaterra, “aunque después de la separación se pueda llegar a una federación”.

¿Cuáles son las premisas teóricas de esta conclusión de Marx? En Inglaterra hace ya mucho tiempo que, en general, quedó terminada la revolución burguesa. Pero no así en Irlanda, donde la están terminando ahora, medio siglo después, las reformas de los liberales ingleses. Si el capitalismo hubiese sido derribado en Inglaterra con la rapidez que esperaba Marx al principio, no habría lugar en Irlanda para un movimiento democrático burgués del conjunto de la nación. Pero puesto que ha surgido, Marx aconseja a los obreros ingleses que lo apoyen, que le impriman un impulso revolucionario, que lo lleven a término en bien de su propia libertad.

En la década del sesenta del siglo pasado, las relaciones económicas entre Irlanda e Inglaterra eran, desde luego, más estrechas aún que las relaciones entre Rusia y Polonia, Ucrania, etc. Saltaba a la vista que la separación de Irlanda era “poco práctica”, “irrealizable” (aunque sólo fuera por su situación geográfica y por el inmenso poderío colonial de Inglaterra). Siendo en principio enemigo del federalismo, Marx admite, en este caso, incluso la federación⁷ *con tal de que* la liberación de Irlanda no se haga por vía reformista, sino revolucionaria, por el movimiento de las masas del pueblo en Irlanda, apoyado por la clase obrera de Inglaterra. No puede haber ninguna duda de que sólo una solución semejante de este problema histórico habría sido la más beneficiosa para el proletariado y un rápido desarrollo social.

Pero las cosas sucedieron de otro modo. Tanto el pueblo irlandés como el proletariado inglés han resultado ser débiles. Sólo ahora, por míseras componendas entre los liberales ingleses y la burguesía irlandesa, se *resuelve* (el ejemplo del Ulster demuestra con cuánta dificultad) el problema irlandés con una reforma agraria (con rescate) y la autonomía (sin establecer aún). ¿Y qué? ¿Se debe acaso deducir de esto que Marx y Engels eran “utopistas”, que presentaban reivindicaciones nacionales “irrealizables”, que cedían a la influencia de los nacionalistas irlandeses, pequeños burgueses (es indudable el carácter pequeñoburgués del movimiento de los fenianos), etc.?

No. Marx y Engels propugnaron, también en la cuestión irlandesa, una política consecuentemente proletaria, una política que educara de verdad a las masas en el espíritu de la democracia y del socialismo. Sólo esta política podía salvar, tanto a Irlanda como a Inglaterra, de diferir por medio siglo las transformaciones necesarias y de que los liberales las desfigurasen para complacencia de la reacción.

La política de Marx y Engels en el problema irlandés constituye un magnífico ejemplo de la actitud que debe mantener el proletariado de las naciones opresoras ante los movimientos nacionales, y este ejemplo ha conservado, hasta hoy día, un valor *práctico* enorme: esta política es una advertencia contra la “precipitación lacayuna” con que los pequeños burgueses de todos los países, lenguas y colores se apresuran a declarar “utópica” la modificación de las fronteras de los Estados creados por las violencias y los privilegios de los terratenientes y de la burguesía de una nación.

Si el proletariado de Irlanda y el de Inglaterra no hubieran adoptado la política de Marx, si no hubieran hecho suya la consigna de separación de Irlanda, ello habría sido el peor de los oportunismos por su parte, habría significado un olvido de las misiones de un demócrata y de un socialista, una concesión a la reacción y a la burguesía *inglesas*.

IX. EL PROGRAMA DE 1903 Y SUS LIQUIDADORES

Las actas del Congreso de 1903, que aprobó el programa de los marxistas de Rusia, se ha hecho un texto muy difícil de encontrar, y la inmensa mayoría de los ac-

tuales militantes del movimiento obrero no conocen los motivos de los diversos puntos del programa (con tanta mayor razón que no todas las publicaciones, ni mucho menos, que con ellos se relacionan, gozan del beneficio de la legalidad...). De ahí que sea necesario detenerse en el examen que se hizo en el Congreso de 1903 de la cuestión que nos interesa.

Hagamos notar, ante todo, que, por pobre que sea la bibliografía socialdemócrata rusa en lo concerniente al “derecho de las naciones a la autodeterminación”, resulta de ella, sin embargo, con toda claridad que este derecho se ha interpretado siempre en el sentido de derecho a la separación. Los Semkovski, los Libman y los Yurkevich, todos estos señores que lo ponen en duda, que declaran que el apartado 9 es “poco claro”, etc., sólo hablan de “falta de claridad” por ignorancia supina o por despreocupación. Ya en 1902, Plejánov⁸, defendiendo en *Zariá* “el derecho a la autodeterminación” en el proyecto de programa, escribía que esta reivindicación, que no es obligatoria para los demócratas burgueses, “es obligatoria para los socialdemócratas”. “Si nos olvidáramos de ella o si no nos decidiéramos a propugnarla”, escribía Plejánov, “temiendo herir los prejuicios nacionales de nuestros compatriotas rusos, se convertiría en nuestros labios en mentira odiosa (...) el grito de combate (...): ¡Proletarios de todos los países, uníos!”.

Estas palabras caracterizan con mucho acierto el argumento fundamental a favor del punto analizado, con tanto acierto que no sin motivo las han pasado y las pasan temerosamente por alto los críticos de nuestro programa que se olvidan de su parentesco. Renunciar a este punto, sean cuales fueren los motivos que se aduzcan, significa *de hecho* una concesión “vergonzosa” al nacionalismo *ruso*. ¿Por qué ruso, cuando se habla del derecho de *todas* las naciones a la autodeterminación? Porque se trata de *separarse* de los rusos. El interés de *la unión de los proletarios*, el interés de su solidaridad de clase, exige que se reconozca el *derecho de las naciones a la separación*: eso es lo que hace doce años reconoció Plejánov en las palabras citadas; de reflexionar sobre ello, nuestros oportunistas no hubieran dicho, probablemente, tantos absurdos sobre la autodeterminación.

En el Congreso de 1903, donde se aprobó este proyecto de programa defendido por Plejánov, el trabajo principal estaba concentrado en *la comisión del programa*. Es de lamentar que en ella no se levantaran actas. Precisamente sobre el punto de que tratamos presentarían especial interés, porque *sólo* en la comisión los representantes de los socialdemócratas polacos, Warszawski y Hanecki, intentaron defender sus puntos de vista e impugnar el “reconocimiento del derecho a la autodeterminación”. El lector que hubiera deseado comparar sus argumentos (expuestos en el discurso de Warszawski y en la declaración del mismo y de Hanecki, págs. 134-136 y 388-390 de las actas) con los argumentos de Rosa Luxemburgo en el artículo polaco que hemos analizado, vería la completa identidad de estos argumentos.

Pero ¿cuál fue ante estos argumentos la actitud de la comisión del programa del II Congreso, donde quien más habló contra los marxistas polacos fue Plejánov?

¡Estos argumentos fueron ridiculizados con mordacidad! El absurdo de proponer a los marxistas de Rusia que excluyeran el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de las naciones quedó demostrado de manera tan clara y patente que los marxistas polacos *¡¡no se atrevieron ni a repetir sus argumentos en la sesión plenaria del Congreso!!* Abandonaron el congreso, convencidos de lo desesperado de su posición ante la asamblea suprema de los marxistas tanto rusos como hebreos, georgianos y armenios.

Este episodio histórico tiene, de suyo se comprende, suma importancia para todo el que se interese en serio por su programa. El fracaso completo de los argumentos expuestos por los marxistas polacos en la comisión de programa del congreso, así como su renuncia al intento de defender sus opiniones ante la sesión del congreso, son hechos muy significativos. No en vano ha pasado Rosa Luxemburgo “modestamente” en silencio por este hecho en su artículo de 1908: ¡el recuerdo del congreso le resultaba, por lo visto, demasiado desagradable! Tampoco ha dicho nada de la propuesta, desafortunada hasta lo ridículo, de “corregir” el apartado 9 del programa, propuesta que Warszawski y Hanecki hicieron en 1903 en nombre de todos los marxistas polacos y que no se han decidido (ni se decidirán) a repetir ni Rosa Luxemburgo ni otros socialdemócratas polacos.

Pero si Rosa Luxemburgo, ocultando su derrota de 1903, ha guardado silencio sobre estos hechos, las personas que se interesan por la historia de su partido se preocuparán de conocerlos y de meditar sobre su significación.

“Nosotros proponemos”, escribían en 1903 al congreso los amigos de Rosa Luxemburgo, al retirarse del mismo, “dar la siguiente redacción del apartado 7 (ahora 9) del proyecto de programa: ‘7) *Instituciones que garanticen la completa libertad de desarrollo cultural a todas las naciones que integran el Estado* (pág. 390 de las actas).

Así pues, los marxistas polacos formulaban entonces, en lo que se refiere a la cuestión nacional, opiniones tan poco definidas que, *en lugar* de autodeterminación, proponían, en el fondo, ¡nada menos que un seudónimo de la famosa “autonomía nacional-cultural”!

Esto parece casi inverosímil, pero, desgraciadamente, es un hecho. En el mismo congreso, aunque en él había cinco bundistas, con cinco votos y tres caucasiños, con seis votos, sin contar la voz sin voto de Kostrov, no hubo *ni uno solo* que votara a favor de la *supresión* del punto referente a la autodeterminación. Se emitieron tres votos a favor de añadir a este punto “la autonomía nacional-cultural” (por la fórmula de Goldblat: “creación de instituciones que garanticen a las naciones la completa libertad de desarrollo cultural”) y cuatro a favor de la fórmula de Líber (“derecho a su [de las naciones] libertad de desarrollo cultural”).

Ahora, cuando ha surgido un partido liberal ruso, el Partido Demócrata Constitucionalista, sabemos que la autodeterminación política de las naciones ha sido sustituida en su programa por la “autodeterminación cultural”. Por consiguiente, los amigos polacos de Rosa Luxemburgo, “*al luchar*” contra el nacionalismo del

PSP, ¡lo hacían tan bien que proponían sustituir el programa marxista por un programa *liberal!* Y al hacerlo acusaban, por añadidura, de oportunismo a nuestro programa. ¡No es de extrañar, pues, que en la comisión del programa del II Congreso esta acusación fuera acogida sólo con risas!

¿En qué sentido entendían la “autodeterminación” los delegados al II Congreso, de los cuales, según hemos visto, no hubo *ni uno solo* que estuviera en contra de la “autodeterminación de las naciones”?

Lo atestiguan los tres pasajes siguientes de las actas:

“*Martynov* considera que no hay que dar a la palabra “autodeterminación” una interpretación amplia; sólo significa el derecho de una nación a separarse para formar una entidad política aparte, pero de ningún modo la autonomía regional” (pág. 171). *Martynov* era miembro de la comisión del programa, en la que fueron refutados y ridiculizados los argumentos de los amigos de Rosa Luxemburgo. Por sus concepciones, *Martynov* era entonces “economista”, adversario furibundo de *Iskra*, y si hubiese expresado una opinión que no compartiera la mayoría de la comisión del programa, habría sido, desde luego, refutado.

Goldblat, bundista, fue el primero en tomar la palabra cuando, después del trabajo de la comisión, se discutió en el congreso el apartado 8 (ahora 9) del programa.

“Contra el ‘derecho a la autodeterminación’, dijo Goldblat, “no puede objetarse nada. Cuando alguna nación lucha por su independencia, no podemos oponernos a ello. Si Polonia no quiere contraer matrimonio legal con Rusia, hay que dejarla en paz, según ha dicho el camarada Plejánov. Estoy de acuerdo con semejante opinión dentro de estos límites” (págs. 175-176).

Plejánov no habló en absoluto sobre este punto en la sesión plenaria del congreso. Goldblat se refiere a unas palabras que dijo Plejánov en la comisión del programa, donde el “derecho a la autodeterminación” se explicó de forma detallada y popular en el sentido de derecho a la separación. Líber, que habló después de Goldblat, observó:

“Claro está que si alguna nación no puede vivir dentro de los confines de Rusia, el partido no ha de crearle obstáculo alguno” (pág. 476).

Como puede ver el lector, en el II Congreso del partido, que aprobó el programa, no hubo dos opiniones en cuanto a que la autodeterminación significaba “tan sólo” el derecho a la separación. Incluso los bundistas asimilaron entonces esta verdad, y sólo en nuestros tristes tiempos de contrarrevolución consecutiva y de toda clase de “abjuraciones” ha habido gentes que, por ignorancia, se han atrevido a declarar que el programa es “poco claro”. Pero antes de dedicar tiempo a estos tristes “socialdemócratas” de pacotilla, terminemos de hablar de la actitud de los polacos ante el programa.

Los polacos vinieron al II Congreso (1903), declarando que era imprescindible y urgente la unificación. Pero lo abandonaron tras sufrir “reveses” en la comisión del programa, y su *última palabra* fue una declaración escrita, en la que se hacía la citada propuesta de *sustituir* la autodeterminación por la autonomía nacional-cultural, tal y como figura en las actas del congreso.

En 1906, los marxistas polacos ingresaron en el partido, pero ¡¡ni al ingresar en él ni después (ni en el Congreso de 1907, ni en las conferencias de 1907 y 1908, ni en el pleno de 1910) *presentaron nunca* propuesta alguna de modificar el apartado 9 del programa ruso!!

Esto es un hecho.

Y este hecho demuestra con evidencia, a pesar de todas las frases y aseveraciones, que los amigos de Rosa Luxemburgo consideraron concluidos los debates de la comisión del programa del II Congreso y definitiva la resolución del mismo, que reconocieron tácitamente su error, y que lo corrigieron cuando, después de retirarse del congreso en 1903, ingresaron en 1906 en el partido sin intentar ni una sola vez plantear por vía de *partido* la revisión del apartado 9.

El artículo de Rosa Luxemburgo fue publicado con su firma en 1908 —desde luego, a nadie se le ocurrió jamás negar a las plumas del partido el derecho a criticar el programa—, y *después* de este artículo tampoco hubo ni un solo organismo oficial de los marxistas polacos que plantease la revisión del apartado 9.

Por esta razón, Trotsky presta en verdad un flaco servicio a ciertos admiradores de Rosa Luxemburgo cuando, en nombre de la redacción de *Borba*, escribe en el número 2 (marzo de 1914): “Los marxistas polacos consideran que el ‘derecho a la autodeterminación nacional’ carece en absoluto de contenido político y debe ser suprimido del programa” (pág. 25).

¡Trotsky obsequioso, enemigo peligroso! En ninguna parte, si no es en “conversaciones particulares” (es decir, sencillamente en chismes, de los que siempre vive Trotsky), *ha podido* encontrar pruebas para incluir a los “marxistas polacos” en general entre los partidarios de cada artículo de Rosa Luxemburgo. Trotsky ha presentado a los “marxistas polacos” como gentes sin honor y sin vergüenza, que no saben siquiera respetar sus convicciones ni el programa de su partido. ¡Trotsky obsequioso!

Cuando los representantes de los marxistas polacos se retiraron en 1903 del II Congreso a *causa* del derecho a la autodeterminación, Trotsky pudo haber dicho, *entonces*, que ellos consideraban de poco contenido este derecho y que debía ser suprimido del programa.

Pero, después de eso, los marxistas polacos *ingresaron* en el partido que tenía tal programa y ni una sola vez propusieron revisarlo⁹.

¿Por qué ha silenciado Trotsky estos hechos a los lectores de su revista? Sólo porque le conviene especular, instigando las divergencias entre adversarios polacos y rusos del liquidacionismo, y engañar a los obreros rusos respecto al programa.

Trotsky jamás ha tenido una opinión firme en un solo problema serio del marxismo, siempre “se ha metido por la rendija” de tales o cuales divergencias, pasándose de un bando a otro. En estos momentos se halla en la compañía de bundistas y liquidadores. Y estos señores no tienen muchos miramientos con el partido. Vean lo que escribe el bundista Libman.

“Cuando la socialdemocracia de Rusia”, escribe este caballero, “incluyó hace quince años en su programa el punto sobre el derecho de cada nación a la “auto-

determinación”, todo el mundo [!!] se preguntaba: ¿qué quiere decir, hablando con propiedad, esta locución en boga? [!!] No hubo respuesta a esta pregunta [!!]. El sentido de esta palabra quedó [!!] envuelto en bruma. En realidad, entonces era difícil disipar esta bruma. Todavía no ha llegado el momento en que pueda concretarse este punto, se decía entonces; que siga por ahora envuelto en bruma [!!], y la misma vida dirá qué contenido debe dársele”.

¿Verdad que es magnífico este “niño en cueros” que se burla del programa del partido?

¿Y por qué se burla?

Sólo porque es un ignorante supino que no ha estudiado nada, que ni siquiera ha leído algo de historia del partido, sino que ha caído sencillamente en medio de los liquidadores, donde “es costumbre” andar en cueros en el problema del partido y del partidismo.

En una obra de Pomialovski, un seminarista se vanagloria de “haber escupido en una tina con col”. Los señores bundistas han ido más lejos. Hacen salir a los Libman para que estos caballeros escupan públicamente en su propia tina. ¿Que ha habido una resolución del congreso internacional, que en el congreso de su propio partido dos representantes de su propio Bund han revelado (¡con lo “severos” críticos y enemigos decididos de *Iskra* que eran!) su completa capacidad para comprender el sentido de la “autodeterminación” e incluso se mostraron conformes con ella? ¿Qué importa todo esto a los señores Libman? ¿No será más fácil liquidar el partido si los “publicistas del partido” (¡bromas aparte!) tratan a lo seminarista la historia y el programa del partido?

He aquí al segundo “niño en cueros”, al señor Yurkevich, de *Dzvin*, quien ha tenido, probablemente, en sus manos las actas del II Congreso, ya que cita las palabras de Plejánov, reproducidas por Goldblat, y demuestra saber que la autodeterminación no puede significar sino derecho a la separación. Pero esto no le impide difundir entre la pequeña burguesía ucraniana, contra los marxistas rusos, la calumnia de que éstos están por la “integridad estatal” de Rusia (1913, n° 7-8, pág. 83 y otras). Naturalmente, no podían los señores Yurkevich inventar medio mejor que esta calumnia para alejar a la democracia ucraniana de la democracia rusa. ¡Y un alejamiento tal está conforme con toda la política del grupo de autores de *Dzvin* ¡que preconiza la *separación* de los obreros ucranianos en una *organización nacional aparte!*¹⁰

Al grupo de pequeños burgueses nacionalistas que escinden al proletariado —precisamente éste es el papel objetivo de *Dzvin*— le viene que ni pintado, como es natural, propagar el más impúdico embrollo sobre el problema nacional. De suyo se comprende que los señores Yurkevich y los señores Libman —que se ofenden “terriblemente” cuando se dice de ellos que “están situados a un lado del partido”— no han dicho nada, ni una sola palabra, de cómo hubieran querido resolver ellos en el programa la cuestión del derecho a la separación.

He aquí al tercero y principal “niño en cueros”, al señor Semkovski, que, en las páginas del periódico de los liquidadores, denigra ante el público ruso el apartado

9 del programa y declara a la vez que, ¡¡“por ciertas consideraciones, no compare la propuesta” de excluir este apartado!!

Es inverosímil, pero es un hecho.

En agosto de 1912, la conferencia de los liquidadores plantea oficialmente el problema nacional. En año y medio no hubo ni un solo artículo, a excepción del artículo del señor Semkovski, sobre el apartado 9. ¡¡Y en este artículo el autor *refuta* el programa, “no compartiendo, por *ciertas razones*” (¿una enfermedad secreta, o qué?), la propuesta de corregirlo!! Puede darse garantía de que no se encontrará con facilidad en todo el mundo ejemplos de semejante oportunismo, y aún peor que oportunismo, de abjuración del partido, de liquidación del mismo.

Un ejemplo bastará para mostrar cuáles son los argumentos de Semkovski.

“Cómo debe procederse”, escribe, “si el proletariado polaco quiere luchar al lado de todo el proletariado de Rusia dentro de un solo Estado, mientras que las clases reaccionarias de la sociedad polaca quieren, por el contrario, separar a Polonia de Rusia y obtienen mayoría de votos a favor ello en un referéndum (consulta popular): ¿nosotros, socialdemócratas rusos, habríamos de votar en el parlamento central con nuestros camaradas polacos *contra* la separación o *a favor* de ella para no violar ‘el derecho a la autodeterminación’?” (*Nóvaya Rabóchaya Gazeta*, nº 71).

¡Por donde puede verse que el señor Semkovski no comprende siquiera *de qué se trata*! No ha pensado que el derecho a la separación supone que el problema *no* lo resuelve precisamente el Parlamento central, sino únicamente el Parlamento (Dieta, referéndum, etc.) de la *región que se separa*.

¡Con la pueril perplejidad del “cómo debe procederse” si en una democracia la mayoría está por la reacción, se vela un problema de política real, verdadera, viva, cuando *tanto* los Purishkevich *como* los Kokoshkin consideran que hasta la idea de la separación es un crimen! ¡¡Probablemente, los proletarios de *toda* Rusia no deben luchar hoy contra los Purishkévich y los Kokoshkin, sino prescindiendo de ellos, contra las clases reaccionarias de Polonia!!

Y semejantes absurdos inconcebibles se escriben en el órgano de los liquidadores, uno de cuyos dirigentes ideológicos es el señor L. Márto. Aquel mismo L. Márto que redactó el proyecto de programa y lo defendió en 1903 y que incluso más tarde escribió en defensa de la libertad de separación. Por lo visto, L. Márto razona ahora según la regla:

*Allí no hace falta un inteligente;
manden ustedes a Read
y yo veré¹¹.*

¡Él manda a Read-Semkovski y permite que en un diario se tergiversen y embrolle sin fin nuestro programa ante nuevos grupos de lectores que no lo conocen!

Sí, sí, el liquidacionismo ha ido lejos: entre muchísimos de los ex socialdemócratas, e incluso entre los destacados, no ha quedado ni vestigio de partidismo.

Claro está que no se puede comparar a Rosa Luxemburgo con los Libman, Yurkevich y Semkovski, pero el hecho de que precisamente tales gentes se hayan aferra-

do a su error demuestra con singular evidencia en qué oportunismo ha caído ella.

X. CONCLUSIÓN

Hagamos el balance.

Desde el punto de vista de la teoría del marxismo en general, el problema del derecho a la autodeterminación no presenta dificultades. En serio no se puede ni hablar de poner en duda el acuerdo de Londres de 1896, ni que por autodeterminación se entiende únicamente el derecho a la separación, ni que la formación de Estados nacionales independientes es una tendencia de todas las revoluciones democráticas burguesas.

Hasta cierto punto, crea la dificultad el hecho de que en Rusia luchan y deben luchar juntos el proletariado de las naciones oprimidas y el proletariado de la nación opresora. La tarea consiste en salvaguardar la unidad de la lucha de clase del proletariado por el socialismo, repeler todas las influencias burguesas y ultrarreactionarias del nacionalismo. Entre las naciones oprimidas, la separación del proletariado en un partido independiente conduce a veces a una lucha tan encarnizada contra el nacionalismo de la nación de que se trata que se deforma la perspectiva y se olvida el nacionalismo de la nación opresora.

Pero esta deformación de la perspectiva es posible tan sólo durante corto tiempo. La experiencia de la lucha conjunta de los proletarios de naciones diferentes prueba con demasiada claridad que nosotros debemos plantear los problemas políticos desde el punto de vista de toda Rusia, y no desde el “de Cracovia”. Mientras tanto, en la política de toda Rusia dominan los Purishkevich y los Kokoshkin. Predominan sus ideas, y la persecución de los habitantes alogenos por “separatismo”, *por pensar* en la separación, es predicada y llevada a la práctica en la Duma, en las escuelas, en las iglesias, en los cuarteles, en centenares y miles de periódicos. Todo el clima político de Rusia entera está emponzoñado del veneno de este nacionalismo ruso. La desgracia del pueblo consiste en que, al esclavizar a otros pueblos, afianza la reacción en toda Rusia. Los recuerdos de 1849 y 1863 constituyen una tradición política viva que, si no se producen tempestades de proporciones muy grandes, amenazará durante largos decenios con dificultar todo movimiento democrático y, *sobre todo*, socialdemócrata.

No puede haber duda de que, por natural que parezca a veces el punto de vista de algunos marxistas de las naciones oprimidas (cuya *desgracia* consiste a veces en que las masas de la población quedan deslumbradas por la idea de su liberación nacional), *en la práctica*, teniendo en cuenta la correlación objetiva de las fuerzas de las clases en Rusia, la renuncia a defender el derecho a la autodeterminación equivale al peor oportunismo, a contagiar al proletariado las ideas de los Kokoshkin. Y estas ideas son, en el fondo, las ideas y la política de los Purishkevich.

Por eso, si el punto de vista de Rosa Luxemburgo podía justificarse al principio co-

mo estrechez específica polaca, “de Cracovia”¹², ahora, cuando en todas partes se ha acentuado el nacionalismo y, sobre todo, el nacionalismo gubernamental, ruso, cuando es este *nacionalismo* el que dirige la política, semejante estrechez es ya imperdonable. En la práctica se aferran a ella los oportunistas de todas las naciones (temerosos ante la idea de “tempestades” y de “saltos”), que consideran terminada la revolución democrática burguesa y van detrás del liberalismo de los Kokoshkin.

El nacionalismo ruso, como todo nacionalismo, atravesará distintas fases, según predominen en el país burgués unas u otras clases. Hasta 1905, casi no conocimos más que a nacional-reaccionarios. Después de la revolución han surgido en nuestro país *nacional-liberales*.

Ésta es la posición que ocupan de hecho en nuestro país tanto los octubristas como los demócratas constitucionalistas (Kokoshkin), es decir, toda la burguesía contemporánea.

En lo sucesivo es *inevitable* que surjan nacional-demócratas rusos. Uno de los fundadores del Partido “Socialista Popular”, el señor Peshejónov, ha expresado ya este punto de vista cuando exhortaba (en el fascículo de agosto de 1906 de *Rússkoie Bogatstvo*) a proceder con prudencia respecto a los prejuicios nacionalistas del *mujik* [campesino ruso]. Por mucho que se nos calumnie a nosotros, los bolcheviques, pretendiendo que “idealizamos” al *mujik*, nosotros siempre hemos distinguido y distinguiremos rigurosamente entre el juicio del *mujik* y el prejuicio del *mujik*, entre el espíritu democrático del *mujik* contra Purishkevich y la tendencia del *mujik* a transigir con el pope y el terrateniente.

La democracia proletaria debe tener en cuenta el nacionalismo de los campesinos rusos (no en el sentido de concesiones, sino en el sentido de lucha) ya ahora, y lo tendrá en cuenta, probablemente, durante un período bastante prolongado¹³. El despertar del nacionalismo en las naciones oprimidas, que se ha mostrado con tanta fuerza después de 1905 (recordemos aunque sólo sea el grupo de “autonomistas-federalistas” de la I Duma, el ascenso del movimiento ucraniano, el del movimiento musulmán, etc.), provocará inevitablemente un recrudescimiento del nacionalismo de la pequeña burguesía rusa en la ciudad y en el campo. Cuanto más lenta sea la transformación democrática de Rusia, tanto más empeñados, rudos y encarnizados serán el hostigamiento nacional y las discordias entre la burguesía de las diversas naciones. El singular espíritu reaccionario de los Purishkevich rusos engendrará (e intensificará) a la vez tendencias “separatistas” en unas u otras naciones oprimidas, que a veces gozan de una libertad mucho mayor en los Estados vecinos.

Semejante estado de cosas plantea al proletariado de Rusia una tarea doble, o mejor dicho, bilateral: luchar contra todo nacionalismo y, en primer término, contra el nacionalismo ruso; reconocer no sólo la completa igualdad de derechos de todas las naciones en general, sino también la igualdad de derechos respecto a la edificación estatal, es decir, el derecho de las naciones a la autodeterminación, a la separación; y, al mismo tiempo y precisamente en interés del éxito en la lucha contra

toda clase de nacionalismos de todas las naciones, propugnar la unidad de la lucha proletaria y de las organizaciones proletarias, su más íntima fusión en una comunidad internacional, a despecho de las tendencias burguesas al aislamiento nacional.

Completa igualdad de derechos de las naciones; derecho de autodeterminación de las naciones; fusión de los obreros de todas las naciones; tal es el programa nacional que enseña a los obreros el marxismo, que enseña la experiencia del mundo entero y la experiencia de Rusia.

El presente artículo estaba ya en caja cuando recibí el número 3 de *Nasha Rabóchaya Gazeta*, donde el señor V. Kosovski escribe sobre el reconocimiento del derecho a la autodeterminación para todas las naciones:

“Mecánicamente trasladado de la resolución del I Congreso del partido (1898), que, a su vez, lo tomó de los acuerdos de los congresos socialistas internacionales, este derecho, según puede verse por los debates, era interpretado por el Congreso de 1903 en el mismo sentido que le daba la Internacional Socialista: en el sentido de la autodeterminación política, es decir, de la autodeterminación de la nación hacia la independencia política. De este modo, la fórmula de autodeterminación nacional, que significa el derecho a la separación territorial, no atañe para nada al problema de cómo regular las relaciones nacionales dentro de un organismo estatal determinado para las naciones que no puedan o no quieran salir del Estado existente”.

Por donde puede verse que el señor V. Kosovski ha tenido en las manos las actas del II Congreso de 1903 y conoce perfectamente el verdadero (y único) sentido del concepto de autodeterminación. ¡¡Comparen con esto el hecho de que la redacción del periódico bundista *Zait* suelte al señor Libman para que se mofe del programa y le impute falta de claridad!! Extraños hábitos “de partido” tienen los señores bundistas... Sólo “Alá sabe” por qué Kosovski declara que el aceptar el congreso la autodeterminación es un traslado *mecánico*. Hay gentes que “quieren hacer objeciones”, pero no ven el fondo del asunto, no saben cuáles, ni cómo, ni por qué, ni para qué hacerlas.

Escrito entre febrero y mayo de 1914.

75. El petrolero *Prestige* navega cargado con 77.000 toneladas de fuel de mala calidad. Cuando se halla a unas 28 millas del cabo Fisterra sufre una importante vía de agua que se produce al desprenderse alguna plancha del casco por la fatiga del material, consecuencia del mal estado de conservación de la nave. El mar inunda el tanque de lastre, que estaba vacío y situado en el lateral del petrolero, lo que provoca una fuerte escora. Esto da lugar al vertido que origina la primera mancha de fuel. Las autoridades deniegan al petrolero el permiso de atraque en ningún puerto español. Según se aleja hacia aguas de Portugal, una marea negra es arrastrada por las corrientes desde las costas gallegas hasta el Golfo de Vizcaya.

76. El señor Fraga, presidente de la Xunta de Galicia, estuvo de caza durante el primer fin de semana de la tragedia y el pueblo gallego, enganchado a las noticias que se dan desde Portugal y que informan de la magnitud de la tragedia que se prepara, tiene que escuchar a Mariano Rajoy declarar que *no hay marea negra*. Uno a uno, los responsables del PP cierran filas negando lo evidente: "Probablemente el fuel no toque la costa gallega" (Arsenio Fernández de Mesa, delegado del Gobierno, 14 de noviembre); "Ya ha pasado el peligro más grave" (Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia, 15 de noviembre); "Afortunadamente, la rápida intervención de las autoridades españolas alejando el barco de las costas, hace que no temamos una catástrofe ecológica, como ha sucedido en otras ocasiones, ni prevemos grandes problemas en las aguas españolas ni para los recursos pesqueros" (Arias Cañete, ministro de Agricultura y Pesca, 16 de noviembre).

77. Los furibundos ataques del PP contra ERC cuando los servicios secretos españoles informaron de una entrevista de Carod-Rovira con la dirección de ETA, donde ésta ofreció al líder independentista una tregua en Catalunya, provocaron que el apoyo a ERC subiese aún más.

78. Las maniobras militares en Euskadi, desarrolladas al mismo tiempo que el gobierno vasco presenta en el Parlamento de Vitoria el Plan Ibarretxe, junto a las amenazas cada vez más viscerales por parte de los miembros del gobierno central de "utilizar todos los medios" a su alcance "sin excluir ninguno" en una campaña orquestada meticulosamente por los medios de comunicación, las asociaciones empresariales, los banqueros, la cúpula eclesial, el aparato judicial... Todos los grandes batallones mediáticos del Estado se pusieron en marcha para desprestigiar el supuesto "plan secesionista". Incluso los dirigentes sindicales Fidalgo y Méndez completaron el abanico. ¿Qué pintaban en esa orquesta de reacción los dirigentes de CC.OO. y UGT? Lógicamente esto, lejos de debilitar, ha fortalecido al PNV y a las tendencias secesionistas latentes en Euskal Herria. Si al llegar el PP al Gobierno español apoyaba la independencia de Euskadi un 30%, años de barbaridades del PP lograron que subiese al 45,6%, según una encuesta publicada por *El Correo* (30/11/2003), y eso antes de que el Consejo de Ministros aprobase una reforma del Código Penal para meter en la cárcel al presidente vasco si se le ocurría convocar un referéndum.

79. El sector que apoya a Josu Jon Imaz.

80. Alan Woods y Ted Grant, *Razón y Revolución*, 2ª edición, Madrid, Fundación Federico Engels, 2002, pág. 453.

Apéndice

**El derecho de las naciones
a la autodeterminación**

V. I. Lenin

1. Al preparar en 1916 la reedición del artículo, Lenin puso en este lugar la siguiente nota: "Rogamos a los lectores que no olviden que Kautsky fue hasta 1909, cuando publicó su magnífico folleto *El camino al poder*, enemigo del oportunismo, defensor del cual se hizo en 1910-1911, y, con la mayor decisión, en 1914-1916". (NE)

2. A cierto L. VI. de París, le parece que esta palabra no es marxista. Este L. VI. es un divertido *superklug* (lo que puede traducirse por *superinteligente*). El *superinteligente* L. VI. se propone, por lo visto, escribir un estudio sobre la eliminación de nuestro programa mínimo (¡desde el punto de vista de la lucha de clases!) de las palabras “población”, “pueblo”, etc.

3. Si la mayoría de la nación noruega estaba por la monarquía, y el proletariado por la república, al proletariado noruego, hablando en general, se le abrían dos caminos: o la revolución, si estaban maduras las condiciones para ella, o la sumisión a la mayoría y una larga labor de propaganda y agitación.

4. Véase el informe oficial alemán sobre el Congreso de Londres: *Verhandlungen und Beschlüsse des internationalen sozialistischen arbeiter-und Gewerkschafts-Kongresses zu London, vom 27. Juli bis 1. August 1896* (Actas y resoluciones del Congreso Internacional de los Partidos Socialistas Obreros y de los Sindicatos, celebrado en Londres, del 27 de julio al 1 de agosto de 1896, Berlín, 1896), pág. 18. Hay un folleto ruso con los acuerdos de los congresos internacionales, donde, en vez de "autodeterminación", se ha traducido erróneamente "autonomía".

5. Sería un trabajo histórico muy interesante comparar la posición de un gentilhombre polaco insurgente de 1863, que era la posición de Chernishevski, demócrata revolucionario de influencia en toda Rusia, que también (como Marx) supo apreciar la importancia del movimiento polaco, y la posición del filisteo ucraniano Dragománov, quien escribió mucho más tarde y expresó el punto de vista del campesino, todavía tan salvaje, dormido, encostrado en su montón de estiércol, que su legítimo odio a los terratenientes polacos le impidió comprender la importancia de la lucha de estos terratenientes para la democracia de toda Rusia (véase *La Polonia histórica y la democracia de Rusia*, de Dragománov). Dragománov ha merecido plenamente los entusiastas abrazos que más tarde le prodigó Struve cuando ya era nacional-liberal.

6. Compárese, además, con la carta de Marx a Engels del 3 de junio de 1867: "Por las crónicas de París del *Times* me he enterado con verdadera satisfacción de las exclamaciones polonófilas de los parisienses contra Rusia (...). El señor Proudhon y su minúscula camarilla doctrinaria no son el pueblo francés".

7. No es difícil ver, dicho sea de paso, por qué, desde el punto de vista socialdemócrata, no puede entenderse por derecho a la “autodeterminación” de las naciones *ni* la federación *ni* la autonomía (aunque, hablando en forma abstracta, la una y la otra se encuadran en el término de “autodeterminación”). El derecho a la federación es, en general, un absurdo, ya que la federación es un contrato bilateral. Ni que decir tiene que en modo alguno pueden los marxistas incluir en su programa la defensa del federalismo en general. En lo que respecta a la autonomía, los marxistas no defienden “el derecho a” la autonomía, sino la autonomía *misma*, como principio general y universal de un Estado democrático de composición nacional heterogénea, con marcadas diferencias en las condiciones geográficas y de otro tipo. Por eso, reconocer “el derecho de las naciones a la autonomía” sería tan absurdo como reconocer “el derecho de las naciones a la federación”.

8. En 1916, Lenin escribió aquí la siguiente nota: “rogamos a los lectores que no olviden que Plejánov fue en 1903 uno de los principales enemigos del oportunismo y estaba muy lejos de su tristemente célebre viraje hacia el oportunismo y, posteriormente, el chovinismo”. (NE)

9. Se nos comunica que en la conferencia celebrada por los marxistas de Rusia en el verano de 1913, los marxistas polacos participaron tan sólo con voz, pero sin voto, y que, en lo tocante al derecho a la autodeterminación (a la separación), no votaron en absoluto, manifestándose en contra de tal derecho en general. Por supuesto, tenían pleno derecho a proceder de este modo y a desplegar igual que antes su agitación en Polonia contra su separación. Pero esto no se parece mucho a lo que dice Trotsky, pues los marxistas polacos no exigían que se suprimiera del programa el apartado 9.

10. Véase, sobre todo, el prólogo del señor Yurkévich al libro del señor Levinski *Esbozo del desarrollo del movimiento obrero ucraniano en Galitzia*, Kiev, 1914. (NE)

11. Lenin cita la letra de una canción de los soldados de Sebastopol escrita por Tolstói. En ella se habla de la fracasada operación de las tropas rusas en el riachuelo Chernaya en agosto de 1855, durante la guerra de Crimea. El general Read mandaba dos divisiones en esa operación. (NE)

12. No es difícil comprender que el hecho de que los marxistas *de toda Rusia* y, en primer término, los rusos, reconozcan el *derecho* de las naciones a la separación no descarta en lo más mínimo la *agitación* contra la separación por parte de los marxistas de esta o la otra nación *oprimida*, del mismo modo que el reconocer el derecho al divorcio no descarta la *agitación* contra el divorcio en este o el otro caso. Por eso creemos que ha de aumentar inevitablemente el número de marxistas polacos que se reirán de la inexistente “contradicción” que ahora *exacerban* Semkovski y Trotsky.

13. Sería interesante seguir el proceso de modificación, por ejemplo, del nacionalismo en Polonia, pasando de nacionalismo aristocrático a nacionalismo burgués y después a nacionalismo campesino. Ludwig Bernhard, en su libro *Das polnische Gemeinwesen im preussischen Staat* (Los polacos en Prusia; hay una traducción rusa), colocándose él mismo en el punto de vista de un Kokoshkin alemán, describe un fenómeno extraordinariamente característico: la formación de una especie de “república campesina” de polacos en Alemania, en forma de estrecha agrupación de toda clase de cooperativas y demás uniones de campesinos polacos en lucha por la nación, por la religión, por la tierra “polaca”. El yugo alemán ha agrupado a los polacos, les ha hecho replegarse sobre sí mismos, despertando el nacionalismo, al principio, en la aristocracia, después en los burgueses y, por último, en la masa campesina (sobre todo después de que los alemanes iniciaron en 1873 una campaña contra el idioma polaco en las escuelas). Hacia eso mismo van las cosas en Rusia, y no sólo por lo que se refiere a Polonia.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

A

Abad, S.: 188.
 Abaitua, L.: 187, 188.
 Acebes, Á.: 315, 321.
 Agirre, I.: 219.
 Aguirre, J. A.: 141, 143, 145, 147, 150, 151, 161, 163.
 Ajuriaguerra, J. de: 142, 148, 151, 164.
 Alfonso XIII: 130, 226.
 Allende, S.: 224.
 Almirall, Valentí: 123.
 Alonso Riveiro, L.: 219.
 Alonso Vega, C.: 141.
 Álvarez, F.: 249.
 Álvarez Enparantza, J. L., *Txillardegí*: 164.
 Amedo, A.: 199, 232, 248.
 Arafat, Y.: 84, 85, 86.
 Arana, Sabino: 127.
 Araquistain, L.: 136.
 Ardanza, J. A.: 233, 239, 240, 256.
 Areilza, J. M. de: 159.
 Aresti, familia: 129.
 Arias Cañete, M.: 292.
 Arias Navarro, C.: 196.
 Armada, A.: 220, 221.
 Arregi, J.: 219, 220, 225.
 Artajo, J.: 179.
 Arteche, familia: 129.
 Arzalluz, X.: 205, 231, 233, 240, 251, 276, 302, 304.
 Atutxa, J. M.: 252.
 Austrias (dinastía): 118.
 Azaña, M.: 151, 152.
 Aznar, J. M.: 249, 250, 251, 254, 255, 256, 265, 266, 267, 276, 278, 281, 285, 286, 288, 290, 291, 294, 295, 306, 307, 308, 311, 314, 322.
 Azúa, I.: 244.
 Azurmendi, A.: 179.
 Azurmendi, M.: 277.

B

Bandrés, J. M.: 189.
 Baños, Á.: 215.
 Barandiarán, J.: 213.
 Barrionuevo, J.: 199, 232, 235, 248, 249, 265.
 Barroso, M.: 247.
 Basabilotxa, P.: 144.
 Bastenier, M. A.: 280.
 Bastera, familia: 129.

Batet, D.: 138.
 Batista, F.: 164.
 Bauer, O.: 38, 39, 40, 44, 45, 50, 53.
 Bin Laden, O.: 280.
 Benegas, Tx.: 249.
 Beñarán Ordeñana, J. M., *Argala*: 185.
 Bernstein, E.: 32, 37.
 Berrueta, A.: 308.
 Bismarck, O. von: 22, 24, 25, 27, 30, 31, 33.
 Blair, T. : 111, 313, 314.
 Blanco, M. A.: 253, 254, 258, 266.
 Blagoev, D.: 91.
 Bolívar, S.: 84.
 Bonaparte, L.: 26, 31.
 Bonaparte, N.: 22, 24, 67.
 Borbón, D. J. de: 193.
 Borbón, J. C. de: 195, 221, 226, 231.
 Borbones (dinastía): 22, 118.
 Born, hermanos: 187.
 Boyer, M.: 229.
 Brouard, S.: 231, 232.
 Broz, J., *Tito*: 89, 90, 96.
 Buesa, F.: 267.
 Bujarin, N.: 50, 63, 76.
 Bush, G.: 278.
 Bush, G. W.: 111, 279, 290, 314.
 Bustelo, P.: 203

C

Calvo, S.: 145, 148.
 Calvo Serer, R.: 193.
 Calvo Sotelo, J.: 134.
 Calvo Sotelo, L.: 218.
 Camacho, M.: 192.
 Cambó, F.: 124, 125.
 Cánovas del Castillo, A.: 123.
 Carod-Rovira, J. L.: 297.
 Carr, E. H.: 22, 32, 36, 44.
 Carrero Blanco, L.: 180, 192.
 Carrillo, S.: 178, 193, 200, 219.
 Casanova, J.: 188.
 Casas, E.: 209.
 Casinello, A.: 235.
 Castela, A. D. R.: 122.
 Castellanos, P.: 203.
 Castro, F.: 164.
 Cavour, C. B. di: 25, 26.
 Chávarri, familia: 129.
 Chávez, H.: 285.
 Cierva, R. de la: 162.

Clausewitz, K. von: 183.
Clinton, W.: 94.
Coburg (familia): 93
Company, Ll.: 124, 125, 137, 138, 151, 154.
Conde-Pumpido, C.: 315.
Connolly, J.: 36, 100, 259.
Cook, R.: 75.
Corcuera, J. L.: 199, 233, 235, 249.
Costa, J.: 132, 133.

D

Dadabhai Naoroji: 37.
David (Eduard): 37, 38.
Díaz, R.: 306.
Díaz de Durana, J. R.: 317.
Díaz de Mera, A.: 283.
Domínguez, M.: 232, 248.
Domínguez, J.: 247.
Dzerzinski, F. E.: 67, 68.

E

Echevarrieta, familia: 129.
Egibar, J.: 241, 302, 318.
Elorza, O.: 267.
Elzo, J.: 268.
Enders, T.: 231.
Engels, F.: 17, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 43, 95, 96, 101, 104, 120, 136, 138, 168, 187.
Epaiza, J. M.: 143, 144.
Esnaola, I.: 240.
Espinosa, J. M. L.: 149.
Estal, G. del: 215.
Etxebarria, T., *Etarte*: 143.
Etxebarrieta, J. A.: 164.
Etxebarrieta, Tx.: 164, 180.
Etxebeste, E., *Antxón*: 239.

F

Federico Guillermo III: 24.
Fergosi, coronel: 151.
Fernando VII: 126.
Fernández de Mesa, A.: 292.
Fernández González, X. L.: 219.
Fernández Monzón, M.: 241.
Ferracuti, F.: 232.
Fortea, general: 221.
Fraga Iribarne, M.: 196, 208, 292.
Franco, F.: 100, 115, 131, 140, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 153, 159, 161, 163, 180, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 206, 223, 230, 232, 250, 253.
Fugger (familia): 21.
Fujimori, A.: 83.

Fusi, J. P.: 150.

G

Gaintzarain: 164.
Gallastegi, Eli: 128.
Gamir, M.: 148.
Garaikoetxea, C.: 233.
García Damborenea, R.: 249.
García Sanz, R.: 194.
García Caparrós, J.: 199.
García Trevijano, A.: 193.
Garibaldi, G.: 26, 27.
Garmendia, J. A.: 194.
Garzón, B.: 268, 271, 276, 283, 287, 288, 289, 322.
Gastaminza, G.: 255.
Gil Robles, J. M.: 135, 140, 312.
Goicoechea, familia: 134.
Goicoechea, ingeniero: 148.
Gómez Llorente, L.: 203.
González, B.: 265.
González, F.: 101, 199, 203, 220, 230, 231, 232, 233, 236, 247, 249, 251, 277, 311.
Gorostidi, J.: 203.
Grant, T.: 76, 87, 326.
Guevara, E., *Che*: 164.
Gutiérrez Mellado, A.: 206.

H

Hassán II: 197.
Heilbronner, R.: 20, 21.
Hergueta, L.: 188.
Hernando, J. C.: 254.
Herrero, familia: 129.
Herrero de Miñón, M.: 301.
Hillquit: 37.
Himmler, H.: 88.
Hitler, A.: 72, 73, 88, 135, 163.
Hobsbawn, E.: 18, 19.
Horchem, H. J.: 231.
Huarte: 181, 182, 183.
Humberto Baena, J.: 194.
Hussein de Jordania: 84.

I

Ibarra, familia: 129.
Ibarretxe, J. J.: 262, 277, 288, 300, 307, 313, 316, 317.
Ibarrondo, M.: 141.
Idígoras, J.: 203, 315.
Iglesias, P.: 123, 229.
Imaz, J. I.: 302, 304, 305, 318.
Ingret: 124.
Irala, A.: 163.

Iribar, J. A.: 203.
Irujo, M. de: 142, 146.
Isabel II: 126.
Iturgaiz, C.: 276.

J

Janke, P.: 232.
Jáuregui, R.: 225, 281.
Jrushchov, N.: 69.
Juaristi, J.: 277.

K

Kámenev, L.: 69.
Karageorgevich (familia): 93.
Kautsky, C.: 18.
Kerensky, A. F.: 184.
Krutwig, F.: 166, 176.

L

Lafargue, P.: 27.
Lamas, general: 221.
Landaburu, J. de: 141, 143.
Largo Caballero, F.: 136, 312.
Larkin, J.: 36.
Lasa, J. A.: 232, 247, 250.
Lebedour, G.: 37.
Leizaola, J. M. de: 148.
Lenin, V. I.: 63, 64, 65, 78, 79, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 101, 105, 109, 111, 140, 156, 157, 166, 170, 174, 175, 183, 184, 185, 187, 238, 240, 270, 272, 282, 283.
Lequerica, J. F. de: 134.
Lerroux, A.: 137.
Letamendía, F., *Ortzi*: 203, 205, 224.
Lluch, E.: 277.
Longuet, C.: 27.
López, P.: 281.
López Adán, E., *Bel'tza*: 163.
López Aguilar, J. F.: 323.
Luxemburgo, R.: 37, 43, 50, 51.

M

Macià, F.: 125, 130, 132.
Madariaga, J.: 164.
Madina, E.: 284.
Madrazo, J.: 317.
Mandela, N.: 86, 99.
Manzanas, M.: 180, 184, 276.
Maragall, P.: 291, 318.
March, familia: 134.
Marchlewski, J., *Karski*: 37.
Martínez de Campos, comandante: 142.s
Marx, C.: 17, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 43, 49, 50, 62, 64, 96, 97,

100, 101, 104, 118, 136, 168, 181, 187, 223, 283, 319.
Martín Villa, R.: 196, 227.
Maura, A.: 124, 125.
Maurín, J.: 137.
Mayor Oreja, J.: 265, 278.
Mazzini, G.: 25, 27.
Mbeki, T.: 86, 99.
Médicis (familia): 21.
Mella, C.: 251.
Mendizábal, J. A.: 120.
Mengistu: 90.
Michelena, L.: 147.
Milán del Bosch, J.: 124.
Milans del Bosch, J.: 221, 226.
Milosevic, S.: 94, 95.
Mitxelena, P.: 163.
Mola, E.: 140, 146.
Monreal, G.: 205.
Montaud, A.: 147.
Montero, Tx.: 234.
Monzón, T.: 203.
Moreno Bergaretxe, E., *Pertur*: 183, 184, 185.
Múgica, E.: 220, 226, 235, 239.
Múgica, F.: 250.
Muguruza, J.: 232, 240.
Mussolini, B.: 133, 163.

N

Negrín, J.: 151.
Netanyahu, B.: 86.
Nin, A.: 157.

O

O'Connell, D.: 32.
Olarra, L.: 201.
Olmo, J. del: 295.
Onaindía, M.: 189, 242.
Oranich, M.: 194.
Ortega Lara, J. A.: 253.
Otaegi, Á.: 194.
Otegi, A.: 276, 287, 312, 321, 322, 323.

P

Palmes, M.: 194.
Paredes Manot, J., *Txiki*: 194, 195.
Pascual, Á.: 216.
Pérez Royo, J.: 315.
Pérez Rubalcaba, A.: 313.
Permach, J.: 321.
Pi i Margall, F.: 123.
Pilsudski, J.: 50, 63, 73.
Pleve, V. K.: 175.

Prat de la Riba, E.: 124.
Prieto, I.: 155, 163.
Primo de Rivera, J. A.: 115, 121, 130.
Proudhon, P. J.: 27, 28.
Pujol, J.: 202, 222, 233, 251.
Pyatakov, Y. L.: 50.

Q

Quintero Olivares, G.: 294.

R

Rajoy, M.: 289, 307, 309, 313, 321.
Ramos, J. I.: 135.
Rakovski, C.: 71, 91.
Rei, P.: 276.
Redondo, N.: 236.
Redondo Terreros, N.: 267, 281, 290, 306.
Renner, K., *Rudolf Springer*: 38, 39.
Rey, D.: 197.
Ridruejo, D.: 160, 193.
Riestra, G.: 161.
Robespierre, M. de: 22, 24, 32.
Robles, M.: 142.
Rodríguez, G.: 213.
Rodríguez Galindo, E.: 232, 248, 250, 267.
Rodríguez Ibarra, J. C.: 306.
Rodríguez Peña, X. H.: 251.
Rojo, J.: 295.
Rose, C.: 232.
Rubial, R.: 148, 242.
Ruiz, G.: 234.
Ruiz Gallardón, A.: 276.
Ruiz-Giménez, J.: 193.
Ruiz Polanco, G.: 276.
Ryan, J. M.: 215, 216.
Ryff, A.: 20, 21.

S

Sáenz de Santamaría, J. A.: 214, 230.
Sáenz de Ynestrillas, R.: 219.
San Agustín: 45.
San Gil, M.:
Sánchez Bravo, J. L.: 194.
Sancristóbal, J.: 248.
Sanjurjo, J.: 134, 135.
Satrustegui, J.: 192.
Savater, F.: 277, 290.
Schröder, G.: 111.
Serra, N.: 235, 249.
Sipiaguin, I. A.: 175.
Solbes, P.: 311.
Solchaga, C.: 230, 236.
Sota, R. de la: 127, 129.
Sukarno: 171.

Stalin, J. V.: 23, 39, 44, 45, 57, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 76, 77, 91, 151, 170.
Steer, G.: 146.
Suárez, A.: 193, 196, 199, 200, 201, 204, 205,
210, 218, 219, 220, 226.
Sverdlov, Y.: 68.

T

Tejero, A.: 218, 219, 221, 222, 226.
Thatcher, M.: 314.
Thompson, D.: 23.
Tierno Galván, E.: 193.
Totorika, C.: 281.
Trillo, F.: 290.
Trotsky, L.: 20, 42, 43, 45, 52, 53, 54, 61, 63, 69,
70, 72, 73, 74, 77, 78, 83, 90, 91, 92, 93, 96,
101, 103, 105, 106, 115, 119, 139, 156,
170, 182, 187, 198, 236, 317, 326.
Trung Chinh: 178.

U

Unceta Barrenechea, A.: 161.
Urdaci, A.: 307.
Urquijo, familia: 129, 134.
Ussía, familia: 129.

V

Val del Olmo, A.: 188, 198, 205.
Valencia, J.: 273.
Valgañón, R.: 146.
Van Kol: 37.
Vera, R.: 199, 248, 265.
Víctor Manuel, rey: 26.
Videla, J. R.: 187.
Villar, E.: 283.

W

Wallerstein, I.: 114.
Weitling: 103.
Wright-Mills, C.: 18.

Z

Zabala, J. I.: 232, 247, 250.
Zabala: 181.
Zabaleta, G.: 281, 295.
Zabaleta, P.: 203.
Zabalza, M.: 250.
Zapatero, J. L. R.: 113, 277, 281, 309, 311, 313,
314, 319, 321.
Zaplana, E.: 321.
Zárate, familia: 129.
Ziluaga, Tx.: 235.
Zubiria, familia: 129, 134.
Zyuganov, G.: 78.



Fundación Federico Engels

C/Hermanos del Moral 33, bajo • 28019 Madrid
Telf: 91 428 38 70 • Fax: 91 428 38 71
fundacion_federico@engels.org • www.engels.org

La Fundación de Estudios Socialistas Federico Engels fue creada en 1987 con el objetivo de defender y difundir las ideas del marxismo revolucionario. Su actividad se centra en la publicación de materiales políticos que contribuyan a arrojar luz sobre los acontecimientos contemporáneos desde la óptica del socialismo científico, en un momento en que la ofensiva ideológica desatada contra las ideas socialistas exige un esfuerzo teórico y material por parte de todos aquellos que aspiramos a un cambio radical de la sociedad.

Haciéndote socio de la Fundación contribuyes a su sostenimiento económico, y favorecerás el desarrollo de sus actividades y publicaciones. Además recibirás los folletos que publiquemos, nuestra revista de debate político **MARXISMO Hoy**, un descuento del 10% en los libros de nuestro catálogo y tendrás toda la información sobre las actividades públicas de la Fundación.

No lo dudes. Colabora con la Fundación, apoya las ideas del marxismo.

HAZTE SOCIO DE LA FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS

Nombre y apellidos

Dirección

Localidad

Provincia DP

Teléfono E-mail

Se inscribe como socio de la Fundación Federico Engels con una cuota de

q 30 euros/año q 60 euros/año q Otra cantidad _____ euros/año
(superior a 30 euros/año)

FORMA DE PAGO

q Talón nominativo a nombre q Transferencia bancaria a la
de la Fundación Federico Engels, c/c 2038 - 1197 - 19 - 6000277153
enviéndolo a nuestra dirección. de Caja Madrid.

MARXISMO HOY

Revista de debate político

- Número 1 A cien años de la muerte de Federico Engels
- Número 2 La Transición española, un análisis marxista
- Número 3 La Revolución española (1931-1939)
- Número 4 Una alternativa socialista a la Unión Europea
- Número 5 Lecciones de Chile. A 25 años del golpe militar
- Número 6 El nuevo orden mundial del imperialismo
- Número 7 Perspectivas para la economía mundial
- Número 8 León Trotsky. Su pensamiento más vigente que nunca
- Número 9 La Transición española, un análisis marxista
- Número 10 América Latina hacia la revolución
- Número 11 Antonio Gramsci y la revolución italiana
- Número 12 Portugal 1974. La Revolución de los Claveles
- Número 13 La Comuna Asturiana de 1934
- Número 14 El marxismo y la guerra

CUADERNOS DE FORMACIÓN MARXISTA

- | | |
|--|---|
| 1. Introducción al materialismo dialéctico. | talista y del movimiento obrero en Turquía. |
| 2. La república soviética húngara de 1919. La revolución olvidada. | 7. Stalin: 50 años después de la muerte del tirano. |
| 3. De noviembre a enero. La revolución alemana de 1918. | 8. Ascenso y caída de Napoleón Bonaparte. |
| 4. El marxismo y la religión. | 9. El Islam y EEUU, |
| 5. El marxismo y el arte. | ¿amigos o enemigos? / |
| 6. Breve historia del desarrollo capitalista | El resurgir del fundamentalismo |

ESCRITOS DE TED GRANT

1. • Por qué llegó Hitler al poder.
 - Ascenso y caída de la Internacional Comunista.
2. • ¿Habrà una recesión?
 - ¿Resolverá la inflación nuestros problemas?
3. • La revolución china.
 - La revolución colonial y la división chino-soviética.

COLECCIÓN CLÁSICOS DEL MARXISMO

Carlos Marx y Federico Engels

- El manifiesto comunista
- Salario, precio y ganancia / Trabajo asalariado y capital
- El 18 Brumario de Luis Bonaparte
- La guerra civil en Francia
- Crítica del programa de Gotha / Crítica del programa de Erfurt
- El manifiesto comunista (català)

V. I. Lenin

- El Estado y la revolución
- Las Tesis de Abril
- La enfermedad infantil del 'izquierdismo' en el comunismo

León Trotsky

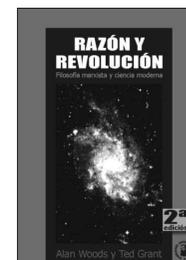
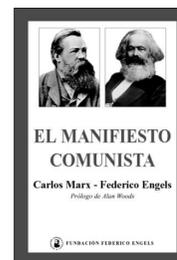
- Acerca de los sindicatos
- Qué es el marxismo / Su moral y la nuestra
- Problemas de la vida cotidiana
- La revolución permanente
- La revolución traicionada
- La lucha contra el fascismo
- 1905

Rosa Luxemburgo

- Reforma o revolución
- Huelga de masas, partido y sindicato

Evgueni Preobrazhenski

- Anarquismo y comunismo



COLECCIÓN CRÍTICA MARXISTA

Alan Woods y Ted Grant

- Razón y revolución. Filosofía marxista y ciencia moderna
- Lenin y Trotsky, qué defendieron realmente

Ted Grant

- Rusia, de la revolución a la contrarrevolución

Alan Woods

- Bolchevismo, el camino a la revolución
- La revolución bolivariana. Un análisis marxista

COLECCIÓN MEMORIA OBRERA

José Martín

- Rebelión obrera en Tejas y Ladrillos

Arturo Val del Olmo

- 3 de marzo. Una lucha inacabada

La Fundación Federico Engels publica regularmente su catálogo de libros y documentos. Si estás interesado en recibirlo, escríbenos y te lo enviaremos gratuitamente; también puedes consultarlo en www.engels.org



EL MILITANTE es un periódico mensual elaborado por y para los trabajadores que colabora habitualmente con la Fundación Federico Engels en la defensa y difusión de las ideas del marxismo revolucionario. En torno a él se agrupa la corriente que defiende un programa marxista en el seno de las organizaciones de la clase obrera.

Conócelo en www.elmilitante.org

www.elmilitante.org — el-militante@elmilitante.org